



CIES  
consorcio de investigación  
económica y social



CENTRO PERUANO DE ESTUDIOS SOCIALES

# **Los derechos de propiedad sobre la tierra en las comunidades campesinas**

**-Informe final-**

**CEPES  
Mayo 2008**

**Fernando Eguren, Laureano del Castillo,  
Zulema Burneo, Elisa Wiener**

## **Los derechos de propiedad sobre la tierra en las comunidades campesinas**

**Fernando Eguren, Laureano del Castillo, Zulema Burneo, Elisa Wiener.**

### **RESUMEN**

El objetivo general del estudio es analizar los procesos, las condiciones y los mecanismos según los cuales al interior de las comunidades campesinas se distribuyen y ejercen los derechos de propiedad sobre el recurso tierra, desde la perspectiva del pluralismo jurídico.

Dado el carácter exploratorio del estudio – no encontramos bibliografía suficiente que pudiese guiarnos con mayor seguridad sobre lo que queríamos averiguar – construimos algunas hipótesis que pudiesen guiarnos en la investigación y, para comenzar, en qué comunidades hacer la investigación. Varios criterios confluyeron: comunidades que tuviesen los distintos tipos de tierras (cultivo y pastos); diferentes niveles de integración al mercado y diferentes niveles de vinculación con instituciones del Estado. Con relación a estos criterios, las hipótesis subyacentes eran que los derechos variaban según el tipo de tierras; que cuanto más intensamente vinculada al mercado estaba una comunidad, los derechos familiares sobre la tierra serían más importantes que los de la comunidad como tal, y viceversa, a menos mercado, más control comunal sobre las tierras; asimismo, cuanto más cercana estuviese la comunidad a instituciones del Estado (u otras instituciones externas, como ONG), más importantes serían los derechos familiares sobre la tierra que los comunales, y viceversa.

El trabajo de campo se realizó en tres comunidades del departamento de Huancavelica (Huayllay Chico, en la provincia de Angaraes, Marcopata, en la provincia de Tayacaja, y Choclococha-Yanacocha-Chilcapite,<sup>1</sup> en la provincia de Acobamba) y se prolongó de tres semanas a un mes en cada una.

---

<sup>1</sup> Para simplificar, en adelante nos referiremos a esta comunidad con el nombre de uno de los pueblos que la conforman, Choclococha, entendiéndose, sin embargo, que la referencia es a la comunidad con sus tres pueblos.

## **Pluralismo jurídico**

Las aproximaciones usuales al análisis de los derechos de propiedad, basados en códigos y normas emanados de los Poderes del Estado y de aplicación teóricamente universales, no son adecuadas cuando se trata de analizar colectividades en las que rigen diferentes sistemas normativos, como son las comunidades campesinas.

En efecto, en el caso del Perú, hay una marcada inadecuación de la legislación a esa realidad tan distinta. No hay una norma que defina cuáles son los derechos de los comuneros sobre sus tierras y menos sus límites. Las regulaciones de las leyes y reglamentos o no son conocidas por las comunidades (cuestionando el conocido aforismo de que el desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento) o se aplican normas que poco tienen que ver con las normas legales pero que finalmente rigen.

Por estas razones adoptamos la perspectiva del pluralismo jurídico, que parte de la consideración que en el mundo real son múltiples las fuentes de normas sobre derechos, múltiples también las instituciones encargadas de supervisar su cumplimiento y sancionar su incumplimiento, y que estos ‘sistemas de normas’ establecen entre sí relaciones de diverso grado de intensidad, complementariedad y competencia. Esto en principio permite a los grupos humanos y colectividades, al disponer de alguna forma de un ‘menú’ de normas pertenecientes a distintos sistemas normativos, de negociar las mejores combinaciones normativas de acuerdo a sus intereses y conveniencias y, con la misma lógica, acogerse a las instituciones también más convenientes. Una ilustración de esto es la frecuente compra y venta de tierras entre familias comuneras al interior de la comunidad, y al mismo tiempo el impedimento de vender tierras a terceros (no comuneros). O el acudir a instituciones alternativas para validar el derecho sobre la tierra: autoridades comunales, juez de paz, notario, etc.

## **La diversidad de derechos**

El estudio intenta conocer más en detalle los derechos de propiedad al interior de comunidades campesinas. Parte del supuesto que los derechos de propiedad son múltiples, y que es necesario desagregar los atributos definidos por el derecho romano – uso, usufructo, disposición – para dar cuenta de la diversidad de derechos que existen en las comunidades.

El trabajo de campo nos permitió conocer cuáles eran estos derechos desagregados. En el cuadro siguiente se presenta la desagregación *de facto* encontrada:

Derechos sobre la tierra	
Acceso	Permanente
	Temporal
Uso	Uso agrícola: decisión sobre qué sembrar, cuándo y donde.
	Uso de técnicas e insumos no tradicionales
	Siembra de pastos
	Cerco de terrenos
Disfrute	Construcción de inmuebles
	Aprovechar de la cosecha, de los productos ganaderos, etc.
	Cobro por pastear a foráneos
Disposición	Herencia
	Venta
	Alquiler/Trabajo a partir
	Entrega a comuneros

### Aportes del estudio

#### - El acceso a las tierras

El estudio identificó que para definir el acceso a la tierra existen dos elementos básicos, ambos centrados en los individuos (a) el género y (b) la relación comunero-comunidad.

Con relación al género, las mujeres poseen menos derechos que los hombres para acceder a las tierras en tanto, según las normas internas, la mujer no puede recibir parcelas de la organización comunal ni acceder por la categoría de *comunero*; de esta forma, ella es usualmente dependiente de un hombre, ya sea su padre o su pareja.

En cuanto a la relación comunero-comunidad, identificamos distinciones al interior de la categoría de *comunero* (honorario, activo, residente, jubilado), en donde juegan un papel importante los años de *servicio* a la comunidad, las responsabilidades asumidas con la organización comunal e incluso el comportamiento personal de un comunero al interior y fuera de la comunidad. A lo largo de su vida, los comuneros van formándose

un *récord* frente a la organización comunal, el cual es evaluado individualmente para definir los derechos de acceso a la tierra. Adicionalmente, se encuentra el poblador de la comunidad que por voluntad propia decidió no inscribirse en el padrón comunal, y quien al igual que la mujer no posee derechos de acceso a las tierras entregadas por la comunidad.

También la relación entre comunero y comunidad se encuentra asociada a la edad del comunero, de forma tal que la tendencia será que los más jóvenes posean menos derechos en el acceso a la tierra que los adultos de la comunidad.

### **- Los derechos de las familias**

Más allá de las diferencias en el acceso a la tierra, comprobamos que la forma en la cual las familias pueden apropiarse (es decir, adquirir más derechos) de las parcelas que trabajan puede variar en función de otras condiciones que tienen que ver con los tipos de tierras que posean. Las diferencias en los grados de apropiación de la tierra están definidas esencialmente por el *origen de la parcela familiar*. Las tierras *antiguas* son consideradas por sus poseedores como propias.

El hecho de que los derechos sobre la tierra se encuentren ligados a determinados actores o tipos de tierras genera una multiplicidad de formas en las que un individuo puede relacionarse con la tierra. Podemos decir, de este modo, que los derechos sobre la tierra no son unitarios sino más bien plurales, y que conforman para cada actor *paquetes de derechos* diferenciados.

Hay normas no explícitas pero que tienen influencia en los derechos sobre la tierra. Una de ellas es que las familias con más prestigio y poder pueden tener mayores derechos que otros. Aquellas reconocidas como fundadoras, o que tuvieron un liderazgo en los años de la reforma agraria, terminan teniendo más parcelas que los demás comuneros.

### **- Los paquetes de derechos**

Diversas familias tienen distintos derechos sobre diferentes tierras. El siguiente cuadro es una ilustración de esta diversidad. Corresponde a los tipos de comuneros y los derechos que tienen sobre las tierras que la comunidad de Choclococha-Yanacocha-Chilcapite recibió de la reforma agraria.

## Paquetes de derechos familiares: Las tierras adjudicadas por RA

# Derechos s

### La influencia de los mercados en los paquetes de derechos

El estudio permitió constatar la escasa o nula vinculación de la economía comunal con los mercados de tierras y de capitales, lo que es común a muchas otras áreas campesinas andinas. Pero sí hay una vinculación con el mercado laboral. De manera indirecta esta vinculación tiene influencia en la reasignación de los derechos sobre las tierras. En efecto, los emigrantes al dejar sus tierras introducen o amplían nuevos tipos de derechos, particularmente el alquiler y la producción al partir.

En cuanto a la vinculación con el mercado de bienes, parece que éste no influye significativamente en la conformación de los paquetes de derechos sobre la tierra en las tres comunidades estudiadas, debido particularmente al hecho que este mercado no está orientado a la acumulación (d-m-d) sino a la reproducción simple (m-d-m)

### Tierras y territorio

Encontramos que el concepto de territorio es importante para explicar la más notable limitación a los amplios derechos que tienen las familias sobre sus parcelas: el que no puedan transferirlas a terceros, a no comuneros. Por más que los paquetes de derechos de las familias sean los más completos y que puedan vender sus tierras al interior de la comunidad, no pueden incorporarlas al mercado de tierras (exterior). La comunidad como institución es la que tiene el derecho último sobre todas las tierras en aras del mantenimiento del territorio comunal.

# Uso

# tradicion

# e.

### **Normatividad estatal y comunal**

El estudio también indagó sobre la influencia de la legislación estatal sobre la normatividad comunal. Encontramos que esta influencia es reducida. Aunque con variaciones en las tres comunidades, en términos generales los comuneros y las autoridades conocen muy poco la legislación estatal referida a las tierras comunales.

Las políticas de tierras de corte liberal impulsadas desde los años 90 para propiciar la parcelación de tierras comunales, el mercado de tierras y la inversión privada en el país no han producido efectos importantes sobre las relaciones de propiedad en las comunidades, con la excepción de Choclococha-Yanacocha-Chilcapite (dada la intervención directa del PETT). La relativa autonomía de las comunidades para producir normas propias y la inaplicabilidad de muchas de las normas dadas por el Estado a la realidad comunal, complicaron la puesta en marcha de los objetivos trazados por el gobierno.

## **1. PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN**

El número de comunidades campesinas en el Perú superó en los últimos meses los 6 mil, la mayor parte de las cuales se encuentra en la sierra. Se estima, sobre la base de información no actualizada, que de los 7,5 millones de pobladores rurales, alrededor de 3 millones forman parte de estas comunidades. Las tierras que ocupan representan aproximadamente el 40% de las tierras agropecuarias del país, la mayoría de ellas tierras con pastos naturales. La importancia de estas cifras nos permite afirmar que los hacedores de políticas, sobre todo de base urbana, están muy lejos de darle la importancia debida, aún ante lo que parece ser una acrecentada conciencia del problema de la marginación y pobreza en la sierra.

Promover el desarrollo de la sierra requiere, además de voluntad política y recursos, ampliar los conocimientos sobre esta región y, dentro de ellas, sobre la institución comunal. En efecto, el actual gobierno ha puesto en marcha el plan Sierra Exportadora, zona en la cual se encuentra precisamente la mayor parte de las comunidades campesinas y sobre las cuales poco se ha dicho.

Uno de los importantes vacíos de conocimiento que aún se tiene es saber cómo se distribuyen las tierras al interior de las comunidades campesinas. Las tierras que se encuentran dentro de sus límites son formalmente de su propiedad, según lo reconoce la legislación estatal. Se sabe que en la mayoría de estas instituciones existen áreas conducidas por la comunidad como tal, mientras que otras áreas son conducidas por las familias comuneras; sin embargo, se conoce bastante menos cuáles son los criterios, las condiciones y los procesos que definen, en la práctica, la distribución intracomunal de las tierras. Estos criterios, condiciones y procesos, por lo demás, no son ni permanentes ni uniformes en todas las comunidades, sino varían según diversos factores que esta investigación pretende esclarecer.

La legislación peruana y las políticas de reconocimiento y formalización de las comunidades y de los derechos sobre sus recursos, no llegan a alcanzar los procesos internos de distribución de derechos de propiedad y tenencia de la comunidad. Esta legislación nacional, sin embargo, influye sobre las dinámicas internas de distribución. Si existe esta influencia –real, pero poco analizada–, es de interés ahondar en el



conocimiento de los procesos internos de distribución de los derechos sobre los recursos en las comunidades, pues ello contribuirá a la definición de mejores políticas públicas, que promuevan formas de propiedad que sean más adecuadas al desarrollo socioeconómico de las comunidades. Por ejemplo, legislación que promueva la seguridad de los comuneros sobre sus parcelas, contrarrestando así las tendencias a la minifundización que se observan.

Los derechos de propiedad sobre los recursos, en particular de la tierra, al interior de las comunidades son cambiantes y son fuente permanente de conflictos y de procesos de negociaciones al menos por tres razones. En primer lugar, pues hay una tensión entre derechos comunales y derechos de las familias. En segundo lugar, pues siendo la comunidad una sociedad heterogénea, existe una tensión entre las familias (según su nivel de poder e influencia, y su mayor o menor patrimonio) y aún al interior de éstas (según género y edad). Estas tensiones se agudizan con el crecimiento demográfico y la consecuente presión sobre la tierra. En tercer lugar, pues reciben influencias exógenas, entre las más importantes la legislación nacional y la mayor o menor influencia del mercado y de instituciones externas.

Específicamente, se trata de dar cuenta de las interrelaciones entre diferentes normas – estatales, comunales y otras- en la determinación de los derechos sobre las tierras de cultivos y de pastos de las comunidades campesinas, bajo el enfoque del pluralismo jurídico; de analizar los procesos internos en las comunidades a través de los cuales se definen o asignan los paquetes de derechos sobre las tierras, tanto de la comunidad como tal (derechos comunales) como de las familias (derechos familiares) y los miembros de cada familia (según criterios de género y edad); finalmente, de estudiar los factores que influyen en la modificación de la composición de los paquetes de derechos que ostentan los diferentes niveles de tenedores de derechos: la comunidad como tal, las familias y los miembros de cada familia.

El proyecto debe contribuir a que las políticas públicas orientadas a las comunidades campesinas, incluyendo aquéllas de registro y titulación de tierras, así como las prácticas e instrumentos utilizados para tal fin, estén más adecuadas a la situación y dinámicas reales de las comunidades y de este modo apoyen sus procesos de desarrollo. Además, la naturaleza y grado de la intervención legal del Estado en un sistema de derechos consuetudinarios sobre la tierra debería determinarse en función de la naturaleza y

causas de la inseguridad de los derechos de propiedad y tenencia, más aún en contextos en los que esos derechos pueden estar amenazados como viene ocurriendo, entre otros fenómenos con la presencia de grandes inversiones mineras. En contraste la legislación peruana, al igual que la de otros países de la región, pone en riesgo potencial o real los derechos de las comunidades a sus recursos.

Los resultados de la investigación deben contribuir, asimismo, al diseño de propuestas para reducir las fuentes de conflictos intra e intercomunales y generar lineamientos de políticas para su tratamiento y resolución.

## **1.1 La zona de estudio**

La investigación se centra en tres comunidades campesinas del departamento de Huancavelica (Ver Mapa 1).

Las características generales de Huancavelica nos ayudan a explicar algunos de los rasgos de las tres comunidades estudiadas. Es un departamento eminentemente rural, con un número importante de comunidades campesinas. Fuente de ricas explotaciones mineras durante la colonia, hoy día se encuentra entre las regiones menos desarrolladas y más pobres del país.

Ubicado en la sierra central, es uno de los departamentos con menor población (447.054 habitantes en 2005, 1,7% del total nacional). La mayor parte es rural, 76%. El 67% de los pobladores tienen como lengua materna el quechua, con una mayor presencia en Angaraes, Acobamba y Churcampá. La tasa de crecimiento de la población es muy baja, debido a la masiva emigración (Rubina y Barreda 2000: 58).

La población se distribuye de manera muy dispersa. Huancavelica ciudad es la capital con menos habitantes del país, treinta mil. Los centros poblados son pequeños y dispersos. Este es uno de los factores que dificulta el crecimiento económico del departamento. Como afirman Rubina y Barreda, "...una población urbana exigua no llega a conformar un mercado interesante para la producción agrícola local..." (2000: 58).

La actividad agraria es la más importante del departamento. Su producción es el 23,3% del PBI departamental.

**Cuadro 1.1**  
**Huancavelica: Participación de sectores productivos**  
**en PBI departamental**  
**Porcentajes**

<b>Sector</b>	<b>1996</b>	<b>2005</b>
Agro	21,9	23,3
Manufactur a	0,2	0,2
Minería	14,5	15,2
PBI dptal.	100,0	100,0

Fuente: Webb y Fernández Baca: 2006

El 78% de la PEA es empleada en actividades extractivas, principalmente agricultura y ganadería. Según el censo agropecuario de 1994, el último realizado, los productores agrarios eran 86,7 miles. La mayor parte de las unidades agrarias son muy pequeñas. La pobreza de los recursos, las escasas inversiones en infraestructura y el atraso tecnológico confluyen para que los ingresos derivados de la actividad agraria sean insuficientes para la reproducción de las familias. Según el censo mencionado, uno de cada cinco productores declaró que combinaba la agricultura con la fabricación de artesanía, la transformación de la producción agraria y el comercio, y el 28% emigraba para buscar empleo.

El principal producto agrícola del departamento es la papa, seguida del maíz, la cebada, el trigo, las habas y la arveja. Estos seis cultivos cubren alrededor del 80% de las tierras de cultivo, y son los que también caracterizan a las comunidades estudiadas.

Como se muestra en el cuadro 1.2, la agricultura se realiza sobre unas 220 mil hectáreas, y la ganadería en 830 mil hectáreas de pastos. Dada la escasez de recursos, hay una sobre utilización de las tierras de cultivo. En efecto, el 50% del territorio no tiene ninguna aptitud para su explotación agrícola, ganadera o forestal. Sin embargo, sólo el 41% de la superficie huancavelicana es mantenido como tierras de protección, lo que contribuye a incrementar los riesgos de erosión y deterioro general del medio ambiente.

**Cuadro 1.2**  
**Huancavelica: Uso actual de la tierra**

<b>Uso actual de la tierra</b>	<b>Superficie ha</b>	<b>Superficie %</b>
Superficie agrícola	219.794	10
Pastos naturales	828.151	37
Montes y bosques	67.138	3
Otra clase de uso	190.405	9

Protección	907.656	41
Total	2.213.147	100

Fuente: OIA-Minag 1998. En Rubina y Barreda (2000: 40)

Huancavelica es el cuarto productor nacional de alpacas, con 200 mil ejemplares. Los niveles de productividad son muy bajos. La fibra se ha deteriorado (vellones manchados y fibras gruesas, de cuarta y quinta categoría). La concentración de la producción está en las provincia de Huancavelica, seguida de lejos por Castrovirreyna y Angaraes (en Lircay, en donde se ubica la comunidad de Huayllay Chico, está el 8% de las alpacas del departamento). (Rubina y Barreda 2000: 122). También es el cuarto productor de ovinos, con 900 mil animales.

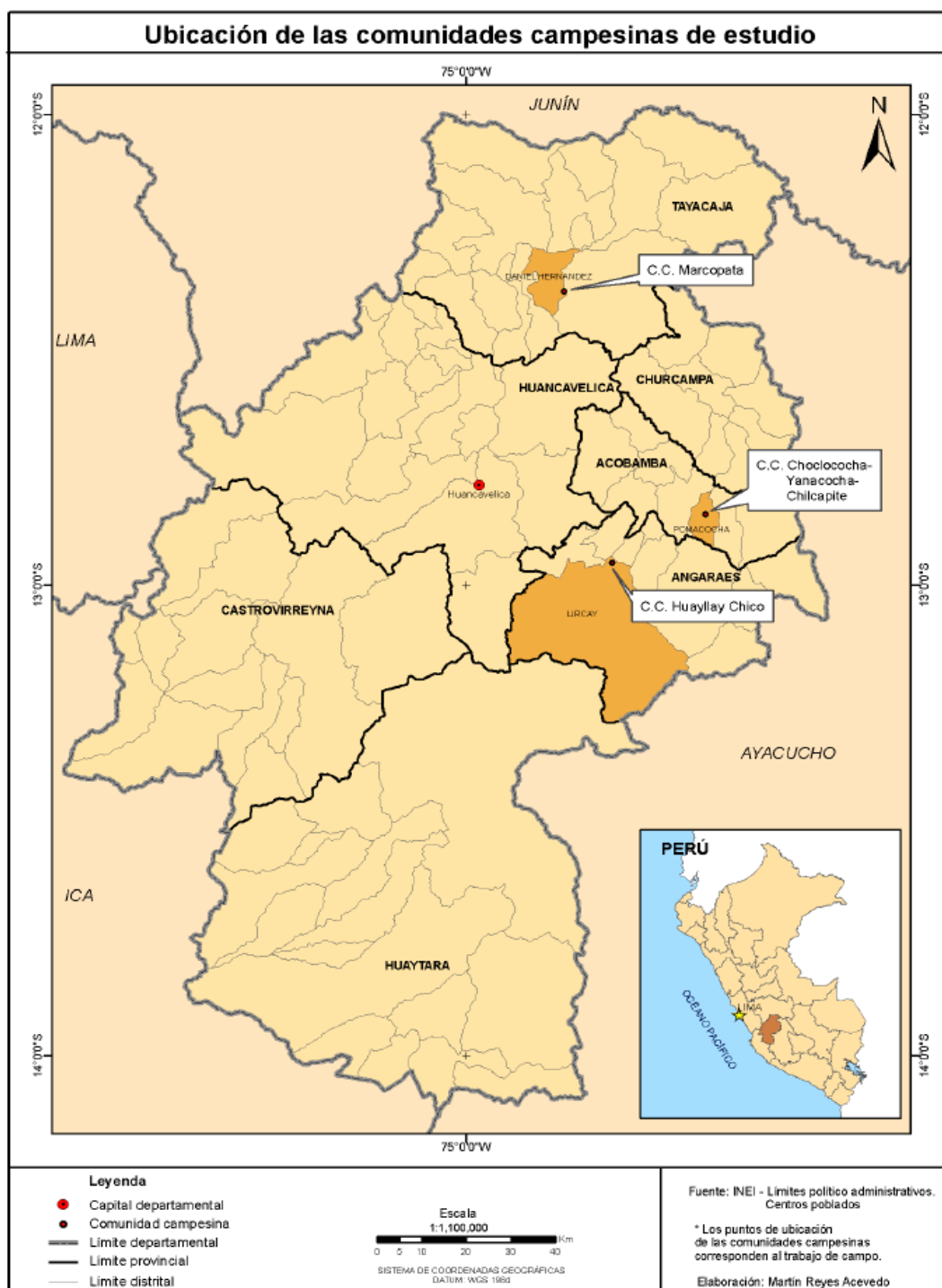
Según la información oficial, la economía departamental huancavelicana está en retroceso relativo como puede apreciarse en el cuadro 1.3.

**Cuadro 1.3**  
**Huancavelica: Participación del PBI departamental**  
**en el PBI nacional por sectores productivos**  
**Porcentajes**

Sector	1996	2005
Agro	2,3	1,8
Manufactur a	0,01	0,01
Minería	2,6	1,5
PBI	0,8	0,6

Fuente: Webb y Fernández Baca: 2006

**Mapa 1**



## Pobreza y desarrollo humano

En el año 2004 el 84,4% de la población departamental era calificada de pobre (es decir, con ingresos per cápita inferiores a los 186,5 nuevos soles), y el 59,9% de extremadamente pobre (menos de 115 soles mensuales).<sup>2</sup> Con cualquier metodología de medición de la pobreza, Huancavelica se ubica entre los que está en peor situación.

Un indicador más complejo es el índice de desarrollo humano. Este indicador es crecientemente utilizado para medir el desarrollo de una región o país. Combina a su vez indicadores económicos, de salud y de educación. Además de dar una visión de la situación de una población dada en un momento determinado, permite conjeturar sobre sus potencialidades de desarrollo económico, precisamente porque incorpora dos variables, salud y educación, sobre las que se construye el capital humano, considerado factor clave en el desarrollo socioeconómico. Podemos constatar que el departamento de Huancavelica, sus provincias y los distritos en donde se localizan las comunidades estudiadas, están claramente por debajo de los índices promedio. En el cuadro, se incluye al promedio del Perú y la información del departamento de Lima como referencias comparativas. Las diferencias son notables: las diferencias de ingresos, inferiores casi a la quinta parte de los de Lima; la diferencia de años de esperanza de vida es de alrededor de diez años entre Huancavelica y Lima; el grado de alfabetismo es muy bajo.

**Cuadro 1.4**  
**Índices de desarrollo humano.**  
**Perú, Lima y Huancavelica**

	<b>IDH</b>	<b>Esperanza de vida</b>	<b>Alfabetismo</b>	<b>Ingreso mensual per cápita</b>
Perú	0,620			
Dep. Lima	0,692	73,6	96,9	661,4
Dep. Huancavelica	0,464	64,1	72,5	135,9
Prov. Angaraes	0,416	61,1	61,0	139,4
Dist. Lircay (Huayllay Chico)	0,422	62,1	63,4	137,9
Prov. Tayacaja	0,439	64,5	72,5	132,5
Dist. D. Hernández (C. Marcopata)	0,440	67,2	76,4	127,8
Prov. Acobamba	0,441	62,8	68,9	133,9

<sup>2</sup> Fuente: INEI. Pobreza, ENAHO 2001 – 2004. En Richard Webb y Graciela Fernández Baca, Cuánto, Lima, 2006. Cuadros 14.7 y 14.8.

Dist. Pomacocha (C. Choclococha-Yanacocha-Chilcapite)	0,498	63,4	77,7	141,5
---	-------	------	------	-------

Fuente: UNDP-Perú (2005)

Una de las consideraciones interesantes del último informe sobre el tema realizado en el Perú, es el de vincular la integración, definida según varios criterios, con su nivel de desarrollo humano. Según el informe, existe una alta correlación entre la integración y el desarrollo humano, lo que sugiere que el desarrollo humano encuentra condiciones propicias cuando hay integración económica. Lo que se constata es que Huancavelica es el departamento menos integrado del país, según los criterios utilizados en el informe.

**Cuadro 1.5**  
**Integración económica regional**

<b>Tipo de integración</b>	<b>Perú</b>	<b>Lima</b>	<b>Huancavelica</b>
Laboral (% de PEA asalariada 2001)	37,32	51,9	14,1
Financiera (colocaciones/PIB)	19,6	34,2	0,0
Física (% de camino asfaltado)	13,0	24,3	5,7
Eléctrica (% de viviendas con electricidad)	74,9	98,2	50,5
Comunicaciones (% de viviendas con teléfonos fijos)	25,6	53,8	1,6
<b><i>Coefficiente de integración económica</i></b>	<b><i>0,443</i></b>	<b><i>0,658</i></b>	<b><i>0,161</i></b>
<b><i>Índice de desarrollo humano</i></b>	<b><i>0,620</i></b>	<b><i>0,744</i></b>	<b><i>0,460</i></b>

Fuente: UNDP-Perú (2005)

## **1.2 El problema de la tierra en las comunidades campesinas**

Como expresión de la poca atención que reciben de parte del Estado, no se conoce con exactitud el número de comunidades campesinas en el Perú. El Censo Nacional Agropecuario de 1994 (III Cenagro) registró 5 860 comunidades campesinas, pero su número ha seguido creciendo (Ver anexo). A fines de 2006, ellas superaban las 6 000 comunidades, conforme informaciones extraoficiales proporcionadas por el disuelto PETT (Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural).



Según el Cenagro las comunidades campesinas controlaban el 39,8% de la superficie agropecuaria nacional. La importancia de la organización comunal, en términos de uso y control de tierras agrícolas es muy significativa.

La inconsistencia de la información disponible sobre el número de comunidades reconocidas y la titulación de sus tierras es notable. El cuadro siguiente muestra una comparación entre los datos recogidos en el Cenagro de 1994 y la información registrada por el PETT hasta el año 2002. Allí se puede observar que habría habido un aumento de 2,4% en el número de comunidades campesinas, mientras que en el caso de las comunidades nativas el incremento sería de 6,1%. El pequeño aumento del número de comunidades implicaría un considerable aumento de la superficie bajo su control en ambos casos.

**Cuadro 1.6**  
**Número y superficie de comunidades campesinas**  
**según el Cenagro y PETT**

	<b>Cenagro 1994</b>		<b>PETT al 2002</b>	
	Número	Superficie (ha)	Número	Superficie (ha)
Comunidades campesinas	5.680	14.171.967,6	5.818	19.721.441,69
Comunidades nativas	1.192	5.251.873,1	1.265	6.386.788,23

Fuentes: Tercer Censo Nacional Agropecuario (1994) y PETT (2002)

Elaboración: CEPES.

Las comunidades campesinas en el año 2002 pasarían a controlar 19.721.441,69 ha, es decir, cinco millones y medio de ha más que el año 1994 (aumentando así su superficie en 39,2%), sin considerar las comunidades no tituladas. Las comunidades nativas, de igual forma, controlan ahora cerca de un millón de ha más que durante el III Cenagro (un aumento de 21,6%).

Si se estima que hay 6.000 comunidades campesinas reconocidas, no todas tienen sus derechos de propiedad debidamente saneados. Durante los primeros años de la presente década el PETT nunca señaló oficialmente el número de comunidades tituladas, por lo que sus estimados fluctuaban entre el 25 y el 30% de comunidades sin titular. Según una reciente norma legal, se calculó en 1.100 el número de comunidades campesinas que aún no tienen sus propiedades formalizadas (Resolución Ministerial 378-2007-AG).

Cuando en 1996 se formó el PTRT (Programa de Titulación y Regularización de Tierras), contando con el financiamiento del BID, la atención se centró en la titulación individual en costa y en sierra, dejándose de lado explícitamente la titulación comunal. Sin embargo, un número importante de comunidades sin sanear fueron tituladas en forma individual, lo que sin duda facilitó el cumplimiento de las metas de este Programa.

Se carece hasta ahora de cifras consolidadas sobre el total de predios saneados a nivel nacional, esto es con títulos de propiedad debidamente inscritos en los Registros Públicos. Cuando se culminó el PTRT, en su primera fase, el PETT señaló que habían superado su meta, con más de un millón de títulos inscritos, cifra no aceptada por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos –SUNARP-, también parte del PTRT.

Cuando en 2003 se anunció el inicio del PTRT2, se mencionó que se incluía dentro de sus metas la titulación e inscripción de 541 comunidades campesinas y la demarcación de nueve comunidades nativas, incluyendo de esta forma la temática del saneamiento comunal, en un proceso que debió culminar en 2006. Aún con las prórrogas del caso, no se han publicado hasta ahora los resultados del PTRT2 y se sabe que está en negociación el PTRT3.

Como parte del financiamiento del PTRT2 se consideró la realización de un estudio para determinar la percepción de los comuneros respecto de la titulación individual, pero por razones fundamentalmente burocráticas la licitación culminó recién en 2006 y tan sólo a fines de 2007 se firmó el contrato para ejecutar ese estudio. Mientras, en el PTRT3, que se viene negociando con el BID se ha contemplado como una de las metas la titulación e inscripción de 150 comunidades campesinas (de las cuales 142 estarían ubicadas en la sierra y 8 en la selva).

Estas propuestas, sin embargo, requerirán la modificación de la legislación actual, pues luego de decidirse la absorción del PETT por COFOPRI (Organismo de Formalización de la Propiedad Informal), se emitió una norma que devolvía al Ministerio de Agricultura la función de titular a las comunidades campesinas, habiéndose encargado nuevamente a COFOPRI esta función, aunque de manera transitoria.

De esta forma, pese a que en 1987 se declaró de necesidad nacional e interés social el saneamiento legal de las tierras de las comunidades campesinas, para un importante número de ellas persiste el problema de la falta de seguridad jurídica sobre sus tierras. Ello se expresa en conflictos con otras comunidades por linderos, conflictos derivados del intento de independización de sus anexos, entre otros. La falta de titulación incide también en la desventaja en la que se encuentran las comunidades envueltas en conflictos o en negociaciones con terceros, como es el caso de la presencia de empresas mineras que desean explotar minerales en tierras comunales, problemas de usurpación, etc.

El crecimiento poblacional implica también una fuerte presión de los comuneros sobre las tierras comunales, determinando la extrema parcelación de las mismas, la sobre explotación y el consecuente aumento de la migración. Como resulta natural, esa situación y la falta de respuesta de las normas y políticas oficiales alimentan los conflictos internos por tierras.

Por último, no puede pasarse por alto que en los últimos dos años se ha aprobado por el Congreso hasta tres leyes que modifican parcialmente tanto la Ley General de Comunidades Campesinas como la Ley de Deslinde y Titulación del Territorio Comunal, haciendo una muy discutible ampliación de la forma como se aplica el abandono a las tierras comunales, lo cual no tiene vinculación con la Ley de Tierras, que restringe el abandono solo a casos de tierras adjudicadas en concesión, que no es el caso de las tierras comunales ni de los pequeños agricultores. Por si fuera poco, el Poder Ejecutivo ha presentado en los últimos meses un proyecto de Ley para permitir que COFOPRI sanee la propiedad de predios rurales, incluyendo las tierras comunales, lo que es percibido con mucha preocupación por las organizaciones gremiales agrarias y las ONG vinculadas al sector agrario. Nos referimos al Proyecto de Ley 1770-2007-PE, denominado “Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales, Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas”, ingresado al Congreso el 22 de octubre de 2007. Por si fuera poco, un Decreto Legislativo publicado el 13 de marzo de 2008, promueve las inversiones sobre tierras eriazas, considerando dentro de estas a todas las tierras que no estuvieran inscritas en los registros públicos, caso de numerosas comunidades de la costa.

## **2. METODOLOGÍA Y COMUNIDADES ESTUDIADAS**

La metodología utilizada es de corte cualitativo y se basó en la elaboración de estudios de caso en tres comunidades campesinas del departamento de Huancavelica. De forma paralela se hizo una revisión de la literatura acerca de los derechos de propiedad en comunidades campesinas y de los aportes del pluralismo jurídico a la noción de propiedad.

En lo que sigue detallamos la forma en la que se organizó el trabajo de campo. Antes, sin embargo, debemos hacer una mención acerca de los criterios de selección utilizados para las tres comunidades campesinas.

### **2.1 Criterios de selección frente a la heterogeneidad comunal**

Las hipótesis de nuestro estudio nos obligaron a considerar como dos elementos centrales para la selección de comunidades el grado de articulación al mercado de la comunidad y la presencia de organizaciones –públicas y privadas- en la comunidad. De esta forma, una comunidad debía tener una fuerte articulación al mercado y alta presencia de instituciones foráneas, una segunda comunidad debía tener mediana articulación y presencia de instituciones, y una tercera debía estar escasamente articulada al mercado y más aislada en cuanto a sus relaciones con instituciones externas. Las diferencias entre las tres comunidades en función de estas dos variables contribuirían a identificar el modo en que tienen injerencia sobre la definición de derechos sobre la tierra.

No obstante, otras variables podían intervenir también en la definición de derechos y en la forma de tenencia de la tierra alterando los resultados anteriores. Así, debimos buscar cierta homogeneidad entre las comunidades de estudio, agregando algunos criterios que debían cumplirse para las tres de la misma forma. Ellos configurarían un tipo particular de comunidad y nos acercarían, además, al modelo *clásico* de comunidad andina: i. fecha de formación anterior al proceso de reforma agraria, ii. número de familias que oscile entre 100 y 500, iii. comunidades que no sean a su vez capital distrital y iv. extensiones de uso agrícola (idealmente con tierras de secano y riego) y de pastos naturales.

En la búsqueda de las comunidades de estudio resultó revelador que este tipo *clásico* de comunidad fuera tan difícil de encontrar en Huancavelica. Una constatación inicial del estudio fue, pues, que la comunidad altoandina agropastoril de orígenes antiguos y poco urbanizada había dejado de ser lo más típico en una zona de importante tradición comunera. En efecto, las comunidades antiguas (pre-reforma agraria) habían escalado con los años hasta la distritalización, acercándose hacia modelos más urbanos de organización, con familias no comuneras, dedicadas en mayor medida a actividades no agrícolas. De otro lado, el crecimiento y la distritalización de algunas comunidades ha ido produciendo la subdivisión de anexos y la conformación de nuevas comunidades de reciente organización y reconocimiento. Finalmente, el enorme número de comunidades conformadas como producto del proceso de reforma agraria, restringía en buena medida nuestras posibilidades de selección.

La propuesta inicial del estudio había planificado seleccionar comunidades del área de intervención del proyecto piloto de desarrollo territorial de CEPES, esto es, de seis distritos de la zona norte de la provincia de Huancavelica. No obstante, la dificultad para encontrar comunidades que cumpliesen con nuestros criterios de selección nos obligaron a optar por otras zonas de estudio del departamento. Así, trabajamos finalmente en comunidades de tres provincias distintas del departamento: la comunidad de Choclococha-Yanacocha-Chilcapite (CYC) en el distrito de Pomacocha de la provincia de Acobamba; la comunidad de Marcopata (MP) en el distrito de Daniel Hernández de la provincia de Tayacaja y la comunidad de Huayllay Chico (HC) en el distrito de Lircay de la provincia de Angaraes.

Observamos que la ya conocida heterogeneidad de las comunidades campesinas no ha ido atenuándose con los nuevos procesos que atraviesan, sino que éstos contribuyen a abrir aún más el abanico, situando a algunas en una mejor posición que otras para aprovechar las nuevas opciones que se presentan. De otro lado, si bien puede haber tendencias regionales, el criterio de distribución geográfica no es, de ningún modo, un factor que denote la homogenización de sus características. Una comunidad huancavelicana de escasas 300 hectáreas y débil regulación comunal puede encontrarse al lado de otra que posea más de dos mil hectáreas con fuertes liderazgos y reconocimiento de la organización comunal.

Nuestro estudio no pretende, pues, hacer generalizaciones sobre las formas de tenencia en las comunidades del país, ni tampoco de las comunidades huancavelicanas. Consideramos más bien que nuestro estudio da pistas importantes para la elaboración de tipologías y que nos acerca al conocimiento de un tipo de comunidad y a los procesos actuales que buena parte de las comunidades del país atraviesan. Se trata de un estudio de carácter exploratorio que desde una perspectiva poco abordada y discutida en nuestro país –el pluralismo jurídico- puede servir como pauta para otros estudios que contribuyan a la comprensión de los sistemas de derechos sobre la tierra y otros recursos, tales como el agua y los bosques.

En el siguiente cuadro es posible observar las diferencias entre las tres comunidades seleccionadas, en relación con los dos primeros criterios de selección.

**Cuadro 2.1**  
**Comunidades y criterios de selección/diferenciación**

	Criterios de selección	
	Articulación al mercado <sup>a</sup>	Presencia de instituciones externas
<b>CYC</b>	<b>+++</b>	<b>+++</b>
<b>MP</b>	<b>++</b>	<b>++</b>
<b>HC</b>	<b>+</b>	<b>+</b>

<sup>a</sup> Tomando en consideración los ingresos producidos por la comercialización de la producción agrícola y ganadera.

La identificación de las tres comunidades en función de los dos criterios anteriores fue posible gracias a entrevistas realizadas a los encargados de proyectos de ONG (DESCO, SEPAR, SICRA, San Javier) con presencia en distintas comunidades del departamento de Huancavelica. Cabe señalar, sin embargo, que las diferencias en el nivel de articulación con el mercado de CYC y MP son muy escasas. Como es posible ver en los informes de caso, los ingresos por la venta de producción agrícola en MP son ligeramente mayores a los de CYC. No obstante, en CYC la venta de ganado es mayor, por lo cual termina superando los ingresos totales de MP en la comercialización de productos. En cambio, en Huayllay Chico casi la totalidad de la producción agrícola es destinada al autoconsumo y, aunque la venta de ganado es mayor que en las otras dos comunidades, no logra

acercarse a sus niveles de comercialización ni de generación de ingresos monetarios.<sup>3</sup> Las diferencias acerca de la presencia de instituciones externas es mucho más evidente entre las tres comunidades: Huayllay Chico casi se encuentra aislada de instituciones públicas y privadas, en MC es posible encontrar una municipalidad de centro poblado y dos ONG con proyectos productivos, y en CYC operan cinco ONG, existe una municipalidad de centro poblado y una mayor presencia de la municipalidad distrital y de programas del Estado.

## **2.2 El trabajo de campo**

Los tres estudios de caso requirieron de trabajo de campo intensivo en el que se aplicaron entrevistas en profundidad a distintos actores: asociaciones de productores, autoridades comunales, autoridades municipales, representantes de distintas organizaciones con presencia en la comunidad (ONG, Iglesia, sectores educación y salud). La base de la información recogida se encuentra, sin embargo, en las entrevistas a las familias comuneras seleccionadas.

El trabajo de campo fue llevado a cabo por las asistentes de investigación en tres momentos distintos (uno por comunidad), pudiendo entre uno y otro periodo discutir y mejorar las herramientas de recojo de información. Cada periodo tuvo una duración aproximada de tres a cuatro semanas, periodo durante el cual se debió pernoctar en las mismas comunidades de estudio.

En el cuadro que sigue presentamos la relación de entrevistas realizadas:

---

<sup>3</sup> Para mayor información acerca de la articulación al mercado de las comunidades de estudio revisar el capítulo 7 del presente estudio.

**Cuadro 2.2**  
**Informantes y número de entrevistas realizadas**

Tipo de informantes	Nº de entrevistas			Total
	MP	HC	CYC	
Autoridades y líderes de la comunidad	6	8	8	22
Familias comuneras	17	12	17	46
Representantes de instituciones de la CC	2	1	6	9
Representantes de instituciones externas con presencia en la comunidad	5	5	9	19
Alcaldes, funcionarios municipales	2	1	2	5
Otros (dueños de fundos, casos específicos de conflicto)	2	3	0	5
<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>30</b>	<b>42</b>	<b>106</b>

Las entrevistas a familias comuneras también fueron seleccionadas en función de algunos criterios necesarios para dar respuesta a nuestras hipótesis de estudio: i. la edad del jefe de hogar, ii. su poder relativo en la comunidad (historia de liderazgo, extensión de tierras) y iii. su estado civil (procurando entrevistar a madres solteras y viudas en cada comunidad). De este modo, tuvimos al final la siguiente distribución.

**Cuadro 2.3**  
**Entrevistas familiares según criterios de selección**

Criterios de selección			Nº de entrevistas			Total
Edad	Poder	Situación familiar	MP	HC	CYC	
18 – 30	+	Casado/ conviviente	2	2	1	13
	-		4	1	3	
31 - 50	+		2	2	3	15
	-		2	2	4	
51 a más	+		3	2	3	11
	-		1	1	1	
		Madre soltera	1	-	1	2
		Viudo	1	1	1	3
		Viuda	1	1	-	2
<b>Total</b>			<b>17</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>46</b>

El registro de la información primaria se hizo esencialmente a través de la toma de notas en cuadernos de campo y en carpetas organizadas por familia. El registro auditivo fue utilizado sólo para algunas entrevistas dirigidas a recoger información general sobre la comunidad. Para la identificación de los distintos tipos de tierras y de las parcelas



familiares se utilizó papelógrafos. En ellos, los entrevistados (autoridades y familias) hacían un croquis del territorio comunal identificando todas sus parcelas. Sobre cada parcela dibujada y sobre el mismo papelógrafo se tomó nota de todas sus características. Consideramos que este mecanismo de registro de la información sobre tierras fue de gran utilidad ya que nos acercó gráficamente al territorio comunal, permitió a los entrevistados participar más activamente del recojo de información y contribuyó a retener su concentración sobre cada parcela de la cual se recogía información.

Cabe señalar que no tuvimos mayores problemas para contactar a las autoridades y a las familias comuneras ni para llevar a cabo las entrevistas. Para la presentación inicial en la comunidad fue de gran ayuda que algunas autoridades conocieran el programa radial que CEPES transmite diariamente (Tierra Fecunda), así como el tener vínculos con las ONG que trabajan en cada zona (SEPAR en Marcopata, DESCO y Sicra en Huayllay Chico, y DESCO y San Javier en CYC). Una vez establecido el contacto inicial con las autoridades, éstas nos ayudaron a identificar a las familias a ser entrevistadas.

Una excepción a lo anterior fueron las madres solteras y viudas, con quienes sí encontramos algunos problemas. En efecto, las mujeres sin pareja disponen de menos tiempo libre ya que al regresar de la chacra deben atender y cocinar para sus hijos y –en algunos casos- para sus padres. De otro lado, existe mucha dificultad entre las madres solteras y sus familiares para aceptar públicamente su condición. Las madres solteras suelen vivir con sus padres, depender económicamente de ellos y de la figura paterna para su representación frente a la organización comunal y a cualquier agente externo a la comunidad.

El quechua no fue un impedimento para la realización de entrevistas ya que en los casos en los que fue necesario – básicamente con las viudas y algunos ancianos- contamos con una traductora calificada para la traducción respectiva.

Finalmente, cabe añadir que las entrevistas realizadas fueron complementadas con la información secundaria que se obtuvo en el campo. En el siguiente cuadro mostramos el tipo de información recogida:

**Cuadro 2.4**  
**Información secundaria**

Tipo de documento	HC	MP	CYC
-------------------	----	----	-----

Resolución de reconocimiento comunal	✓	✓	✓
Memoria descriptiva comunal	✓	✓	✓
Mapa catastral de la comunidad	✓	✓	✓
Actas de colindancia de la comunidad	✓	✓	✓
Actas de asambleas comunales	✓	✓	✓
Documentos históricos	✓	✓	X
Actas de conflictos	X	✓	✓
Libro de contabilidad comunal	✓	X	X
Información estadística local	X	✓	✓
Padrón de comuneros	X	X	✓
Constancias de posesión	X	X	✓
Oficios de instituciones públicas	X	X	✓
Solicitudes de parcelas	X	X	✓
Padrón de usuarios del riego	X	✓	X

### 2.3 Las comunidades campesinas estudiadas

En el departamento de Huancavelica existen más de 500 comunidades campesinas, distribuidas en sus siete provincias.

**Cuadro 2.5**  
**Comunidades campesinas en Huancavelica**

Provincia	Número de comunidades
Acobamba	58
Angaraes	66
Castrovirreyna	30
Churcampa	68
Huancavelica	126
Huaytará	27
Tayacaja	136
Total	511

Fuente: Rubina y Barreda, (2000: 121)

Las comunidades estudiadas fueron seleccionadas de tres provincias, Acobamba, Angaraes y Tayacaja.

#### 2.3.1 Comunidad de Huayllay Chico

La Comunidad de Huayllay Chico se encuentra en la margen izquierda del río Lircay, muy cerca de su encuentro con el río Sicra, en el distrito de Lircay, capital de la provincia de Angaraes. Su territorio se extiende desde los 3.150 m.s.n.m hasta los 4.473 m.s.n.m de altitud. Limita por el norte con el río Lircay, por el sur con la comunidad campesina de Huanca Huanca, por el oeste con la comunidad campesina de San Juan de Dios de

Lircay, y por el este con la comunidad campesina de Huayllay Grande y Huanca Huanca. Al noroeste, sobre la margen izquierda del río se encuentra el Fundo de Conrado Vidalón y al otro lado del río, frente a la comunidad, se encuentra la comunidad campesina de Ocopa.

La comunidad tiene una población de aproximadamente 427 habitantes. Ha sufrido un fuerte proceso de migración principalmente a la ciudad de Lima. Los jóvenes en su mayoría optan por trasladarse a vivir a la ciudad, y otros combinan sus actividades dentro de la comunidad con una migración temporal hacia la selva para trabajar como peones en la cosecha de café, durante los meses de abril, mayo y junio.

Su principal actividad económica es la agricultura de cereales, papa y frutales, y en menor medida la ganadería de ovinos y camélidos en la parte alta. La mayor parte de la producción está dirigida al autoconsumo y una parte menor es vendida en la feria sabatina de Lircay, que es el punto de encuentro comercial más importante donde confluyen los pobladores de las comunidades y distritos aledaños.

Esta comunidad tiene una larga historia. Sus documentos más antiguos datan de 1713. La lucha por la defensa del territorio contra pueblos vecinos y haciendas fue definitiva en la historia de su formación.

La reforma agraria de 1969 produjo un cambio en la configuración del territorio, ampliándolo. En 1998 el PETT otorgó títulos individuales a los comuneros, quedando muchos insatisfechos por considerar que la distribución no fue equitativa.

### ***2.3.2 La comunidad de Marcopata***

La comunidad campesina de Marcopata se encuentra ubicada en la sierra central del país, en la cuenca del río Upamayo y en la sub-cuenca del río Checche. Su altitud va desde los 3.350 hasta los 4.200 m.s.n.m., situándose el poblado central a 3.440 m.s.n.m. Territorialmente, pertenece al distrito de Daniel Hernández, provincia de Tayacaja y departamento de Huancavelica.

Su cercanía a la ciudad de Huancayo (3 horas en transporte público), en el departamento de Junín, define un contacto permanente con esta zona, brindándole la posibilidad de integrarse al circuito comercial del centro del país. Su principal vía de acceso es la trocha

afirmada que une el distrito de Pampas (capital de la provincia de Tayacaja) con el distrito de Colcabamba, ubicándose Marcopata en el km 16 de esta ruta. Limita por el norte con tierras de propiedad de la familia Fernández, por el este con los pequeños propietarios del poblado de Rundo, con el sur con el grupo campesino de Checche y por el este con pequeños propietarios del distrito de Colcabamba.

Marcopata cuenta con una población de 480 habitantes, agrupados en aproximadamente 120 familias<sup>4</sup> y en siete barrios (La Florida, Alianza, Centro, Túpac, Los Ángeles, La Libertad y Marco). La población comunera tiene como actividad económica central la agricultura. El nivel de articulación con el mercado es importante, siendo los cultivos principales para la venta la papa, el olluco, las habas, las arverjas y el maíz. Otros cultivos destinados en mayor medida al autoconsumo son la mashua, la cebada, la oca, la avena, entre otros. La actividad ganadera es marginal debido a que las áreas de pastoreo son muy reducidas o de muy difícil acceso.

Registros escritos dan fe de la existencia de la comunidad de Marcopata al menos desde inicios del siglo XIX. En una zona escasamente poblada en la época, sus tierras fueron reclamadas por inmigrantes. También, pues, la historia de esta comunidad ha estado marcada en alguna medida por la defensa de sus tierras. Existe una identificación entre comunidad y territorio que se mantiene vigente hasta la actualidad y que se expresa cada vez que existe un peligro de intrusión por parte de externos.

Marcopata fue reconocida como comunidad campesina en 1963. Recibió tierras de la reforma agraria, determinando nuevas formas de distribución de derechos sobre la tierra a las familias de la comunidad.

### ***2.3.3 La comunidad de Choclococha Yanacocha Chilcapite***

La comunidad se ubica en el distrito de Pomacocha, provincia de Acobamba, departamento de Huancavelica. Su territorio se extiende entre los 2.700 y los 3.810 msnm. Limita por el norte con la comunidad campesina San Juan de Villarrica, por el este con la comunidad de Tinyahuarco Ccasancca, por el sur con la capital del distrito de Pomacocha y por el oeste con el río Parihuanca y con los anexos que se encuentran a sus orillas (Parihuanca y Sacha Orcco).

---

<sup>4</sup> Información obtenida de documentación del Centro Poblado Menor de Marcopata.

Por el poblado de Choclococha pasa la pista afirmada que comunica la provincia de Acobamba en Huancavelica, con la provincia de Huanta en Ayacucho. Los poblados de Yanacocha y Chilcapite se encuentran a 5 y 10 minutos en auto de Choclococha, sin embargo, no se encuentran al pie de la pista sino que es necesario tomar pequeñas desviaciones de trochas carrozables para llegar a ellas.

La población de los tres sectores se encuentra distribuida en aproximadamente 345 familias comuneras en el poblado de Choclococha, 100 en Yanacocha y 70 en Chilcapite. Cabe señalar que no todas las familias ni habitantes se encuentran registrados como comuneros (especialmente para el sector de Choclococha). Esto significa que el número total de familias de los tres poblados puede ser mayor a que la que se registra como población comunera.

La principal actividad económica de la comunidad es la agricultura, siendo sus principales cultivos el maíz, arveja, habas, papa, frejol y cebada. Comparativamente, la ganadería tiene poca importancia.

A diferencia de las dos comunidades anteriores, desde su mismo nombre, la comunidad de Choclococha Yanacocha Chilcapite nos remite a tres espacios que en algún momento estuvieron separados y que por distintas circunstancias terminaron volviéndose una sola comunidad. Las tres poblaciones estaban formadas por familias que se habían asentando a lo largo del tiempo en esos territorios y que no habían constituido en el pasado una comunidad de indios.

En los tres poblados ocurrió un proceso parecido: un reducido número de familias se hicieron de muchas tierras. Como en un momento dado no habían ya muchas tierras libres y continuaban llegando nuevos pobladores, fueron vendiéndolas y dividiendo el territorio. Aquí la propiedad siempre fue individual y los conflictos fueron entre propiedades familiares. Este origen privado y familiar será el rasgo que marcará el modo de relación entre los pobladores y la comunidad que años más tarde formarían. En los años de 1960, líderes de estos poblados optaron por convertirse en comunidad, para asegurarse de ciertos derechos y beneficios. Fue reconocida como comunidad en 1968.

Como en los casos anteriores, la comunidad recibió también tierras de la reforma agraria, expropiadas de haciendas vecinas.

**Cuadro 2.6**  
**Extensión, población y actividades económicas principales**  
**de las comunidades estudiadas**

Comunidad	Extensión	Población	Actividades económicas principales
Huayllay Chico	2.826	427	Agricultura (maíz, habas, cebada, papa, arveja, trigo) y ganadería
Marcopata	373	480	Agricultura (arveja, olluco, papa, haba, maíz, cebada)
Choclococha Yana-cocha Chilcapite	1.856	2.060	Agricultura (maíz, arveja, habas, papa, frejol, cebada)

### 3. PLANTEAMIENTO TEÓRICO

En este capítulo queremos abordar una serie de conceptos utilizados en este informe, y establecer las ideas centrales sobre las cuales se entenderá su interacción.

Para comenzar, queremos esclarecer el concepto de *comunidad campesina*, en tanto espacio territorial en el cual se desenvolverá la investigación sobre los derechos de propiedad de la tierra. Luego haremos una revisión conceptual de estos derechos. Finalmente, repasaremos los planteamientos del pluralismo jurídico, de sus ventajas y de sus limitaciones.

### 3.1 La comunidad campesina

Las comunidades campesinas albergan cerca del 40% de la población rural del Perú, un alto porcentaje de la cual es considerada pobre y muy pobre. Son, además, las únicas instituciones del campo peruano que han logrado adaptarse a los grandes cambios de la historia agraria y a los distintos modelos políticos, económicos y marcos legales por los que ha transitado el país.

Estos reacomodos, que datan del periodo en que se formaron las reducciones de indios, contribuyeron a la conformación de comunidades en extremo heterogéneas. De allí la dificultad de encontrar consenso entre los investigadores sobre lo que es la comunidad campesina. Mossbrucker observa con razón que (1990: 100) “una definición clara y única de su contenido no resulta en la actualidad posible ni tiene mayor sentido”. La mayoría de autores, sin embargo, encuentra en el trabajo de la tierra un elemento central de la definición de estas organizaciones.

Atendiendo a la diversidad y complejidad de derechos sobre la tierra al interior de las comunidades campesinas Gonzáles de Olarte (1984: 190) entiende la comunidad campesina como “un conjunto de relaciones interfamiliares de producción y trabajo, definida por la disponibilidad de recursos (tierra, ganado, pastos, agua, herramientas) que tiene cada familia y la comunidad...”. A esa definición se puede añadir la que las concibe como “conjuntos de colectivos con intereses diversos sobre los que inciden de manera particular un vínculo territorial y vínculos de parentesco y residencia que configuran ‘espacios de vida’...” (Diez 1990: 338). Si bien, como veremos, la importancia de la propiedad comunal queda reducida frente a la parcelación de la tierra, los vínculos territoriales y de residencia se mantienen, expresándose en distintas formas de organización y control comunal.

La definición legal de la comunidad campesina está contenida en el artículo 2 de la Ley General de Comunidades Campesinas de 1987:

Las Comunidades Campesinas son organizaciones de interés público, con existencia legal y personería jurídica, integradas por **familias** que habitan y controlan determinados **territorios**, ligadas **por vínculos ancestrales**, sociales, económicos y culturales, expresados en la **propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático** y el desarrollo de

actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan a la realización plena de sus miembros y del país. (El subrayado es nuestro).

Esta definición otorga a las comunidades campesinas una serie de atribuciones que no necesariamente se ajustan a la realidad. Así, puede cuestionarse la idea de vínculos ancestrales considerando que buena parte de las comunidades son de formación relativamente reciente (es el caso de la comunidad Choclococha-Yanacocha-Chilcapite de nuestro estudio); incluso varias fueron creadas artificialmente por funcionarios estatales o por los propios campesinos para beneficiarse de las tierras expropiadas por Reforma Agraria (como en el caso de Puno, en la década de 1980). Del mismo modo, en contraste con la definición legal, la mayor parte de las tierras de cultivo se encuentran divididas entre las familias comuneras, quienes las conducen con independencia. Finalmente, se puede cuestionar el que haya una permanencia generalizada de las formas de ayuda mutua y de gobierno democrático. Los rasgos atribuidos por la legislación son imágenes idealizadas de lo que es actualmente la comunidad.

### **3.2 Derechos de propiedad sobre la tierra**

Cuando hablamos de derechos sobre la tierra o sobre algún recurso, pensamos en primer término en la idea de propiedad. Según Trazegnies (1978), el concepto de propiedad dista mucho de ser estático y uniforme, tal como lo entiende la visión clásica del derecho, teniendo distintas expresiones y contenidos a lo largo de la historia. Según el derecho civil, que inspira nuestra legislación, la propiedad es “el derecho de gozar y disponer de las cosas de la manera más absoluta” (Trazegnies 1978: 80).

La presente investigación asume una postura crítica en relación con la visión clásica del derecho de propiedad, pero toma algunos de sus elementos para el análisis. Especialmente, nos referiremos a los atributos de la propiedad existentes desde el *Code Napoléon* (artículo 544): *usus*, derecho a gozar o usar la cosa; *fructus*, derecho a percibir los frutos, y *abusus*, derecho a disponer de la cosa, es decir, tener la posibilidad de transferirla a terceros. Estos tres atributos constituyen los tres elementos clásicos que deben existir sobre un bien para que desde el derecho oficial pueda hablarse de propiedad, *strictu sensu*, conforme señala Trazegnies.

Dijimos que la propiedad comunal es reconocida por el Estado y sobre ella la comunidad, en tanto propietaria, podría “disponer de la manera más absoluta”. Sin embargo, al interior



de la comunidad la tierra se encuentra dividida en un vasto y complejo número de parcelas, las que son conducidas familiarmente, tal como se puede apreciar en las tres comunidades estudiadas: Huayllay Chico, Marcopata y Choclococha-Yanacocha-Chilcapite.

Al margen de la legislación oficial, en buena parte de las comunidades campesinas (y las comunidades estudiadas no son la excepción) los comuneros se consideran propietarios de sus tierras y tienen certificados de posesión de parcelas u otros documentos (incluso testimonios notariales) que han sido adquiridos por herencia, compra-venta u otros mecanismos de transferencia, que tienen plena validez para la comunidad. El título otorgado por el Estado es, sin embargo, igualmente considerado y valorado por los comuneros. Esa convivencia de títulos es explicada por Alejandro Diez (2003b: 85):

“Para los comuneros un título es a fin de cuentas un certificado de posesión que les garantiza derechos de exclusividad de acceso – y garantía de defensa en caso de ser necesario- que consideran en última instancia refrendado por el Estado.”

En la práctica las familias comuneras poseen derechos de disfrute y de transferencia de la tierra, los cuales, conforme a la legislación nacional debieran corresponder a la organización comunal, como propietaria real de las tierras, No obstante, como numerosos estudios señalan (Valera 1997; Pinedo 2000), la comunidad suele mantener áreas de cultivo que utiliza (uso), y de las que puede obtener fondos destinados a financiar actividades de la organización comunal (disfrute), las mismas que puede poner en arriendo a las mismas familias comuneras (disposición) (Burneo 2005: 2-3). Asimismo, la comunidad puede imponer ciertas limitaciones a los derechos familiares (Diez s/f), como a las transferencias de tierras familiares –definiendo, por ejemplo, que no es posible vender tierras a personas ajenas a la comunidad- o al uso de las mismas –con la prohibición del uso de cercos.<sup>5</sup> Estas restricciones pueden variar en función de múltiples factores (procedencia de las tierras, poder relativo de la familia en la comunidad, aptitud productiva de la tierra, etc.) y no siempre se encuentran en todas las comunidades. De otro lado, las tierras de uso comunal son muy reducidas<sup>6</sup> y es probable que, en algunas comunidades,

---

<sup>5</sup> La doctrina jurídica puede explicar esto señalando que las facultades de usar y disfrutar corresponden a la comunidad campesina y en tanto ella es la propietaria, puede transferir el ejercicio de las mismas a otros, en este caso a sus comuneros, por lo que puede imponer también estas limitaciones.

<sup>6</sup> Según afirma Guillermo Valera, sólo el 1,67% del total de la propiedad comunal de la tierra de aptitud agrícola es utilizada comunalmente (Valera 1997: 18).

hayan desaparecido por completo. En efecto, en los últimos años, se viene desarrollando un proceso de debilitamiento de la comunidad frente al poder de las familias u otras organizaciones sociales, con los consecuentes efectos en la pérdida de control y regulación del uso de los espacios que tradicionalmente le corresponden (Diez 2001: 191).

La noción clásica de derecho de propiedad resulta entonces restrictiva para explicar las múltiples combinaciones de derechos sobre la tierra que poseen los individuos, las familias y la comunidad, que quizás correspondan a sistemas normativos no estatutarios.

### **3.3 Revisión del tratamiento de la legislación sobre la propiedad comunal**

El acercamiento al tema del derecho de propiedad debe hacerse a través de la revisión de las normas legales emitidas por el Estado. Veremos primero la legislación sobre la propiedad de la comunidad campesina, partiendo del abordaje constitucional, y luego la forma como son tratados los derechos de los comuneros sobre la tierra.

#### **a) El derecho de las comunidades a la tierra**

Conforme a nuestra actual Constitución (que reitera lo que las constituciones de 1920, 1933 y de 1979 señalaban) el Estado peruano garantiza el derecho de propiedad de las comunidades campesinas y de las comunidades nativas sobre la tierra. La propiedad comunal es una de las varias formas de ejercicio del derecho de propiedad que cuenta con la protección del Estado. El artículo 88 de la Constitución vigente dice que el Estado: “Garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada o **comunal** o en cualquiera otra forma asociativa” (el énfasis es nuestro).

La Constitución de 1979 reiteró las características del régimen de protección de las tierras comunales, esto es, que eran inalienables, inembargables e imprescriptibles, pero explicitó dos excepciones a la inalienabilidad (la decisión de la comunidad y la expropiación por el Estado) al señalar:

Artículo 163.- Las tierras de las Comunidades Campesinas y Nativas son inembargables e imprescriptibles. También son inalienables, salvo ley fundada en el interés de la Comunidad, y solicitada por una mayoría de los dos tercios de los miembros calificados de ésta o en caso de expropiación por necesidad y utilidad públicas. En ambos casos con pago previo en dinero.

Coincidente con las normas constitucionales entonces vigentes, el Código Civil de 1984 se ocupó de las tierras de las comunidades campesinas y nativas en su artículo 136, disponiendo que “Las tierras de las comunidades son inalienables, imprescriptibles e inembargables, salvo las excepciones establecidas por la Constitución Política del Perú”.

En 1987 un par de leyes especiales, promovidas por el presidente Alan García, desarrollaron aspectos sustantivos de la normatividad de las comunidades campesinas. La más extensa, la Ley General de Comunidades Campesinas, n° 24656, dispuso en su artículo 7, en concordancia con la Carta constitucional de 1979:

“Las tierras de las Comunidades Campesinas son las que señala la Ley de Deslinde y Titulación y son inembargables e imprescriptibles. También son inalienables. Por excepción podrán ser enajenadas, previo acuerdo de por lo menos dos tercios de los miembros calificados de la Comunidad, reunidos en Asamblea General convocada expresa y únicamente con tal finalidad. Dicho acuerdo deberá ser aprobado por ley fundada en el interés de la Comunidad, y deberá pagarse el precio en dinero por adelantado. El territorio comunal puede ser expropiado por causa de necesidad y utilidad públicas, previo pago del justiprecio en dinero. (...)”

Una ley especial dictada conjuntamente con la Ley General de Comunidades Campesinas (la Ley de Deslinde y Titulación del Territorio Comunal, n° 24657) se ocupó de definir cuáles eran las tierras comunales, distinguiendo entre las originarias (que incluyen las tierras eriazas), las adquiridas por el derecho común y el derecho agrario y las adjudicadas por Reforma Agraria. Asimismo, dicha Ley estableció un procedimiento administrativo sumamente expeditivo para la obtención de títulos por las comunidades campesinas que carecieran de los mismos o en caso que ellos tuvieran alguna discrepancia con la realidad. El proceso solo pasaba a los juzgados para la definición del área sobre la cual no pudiera establecerse con claridad el derecho de propiedad de la comunidad.

#### **b) El uso de las tierras por los comuneros**

El tratamiento de la legislación sobre las tierras comunales no se limita a su protección como conjunto. Reconociendo la propiedad sobre la tierra de la comunidad campesina, la ley reconoce el derecho de los comuneros de usar la tierra, los pastos y otros recursos. La Ley General de Comunidades Campesinas, en sus artículos 11 a 14 admite la existencia

un **régimen de uso**, comunal familiar o mixto al interior de la comunidad, y permite que en ejercicio de su autonomía puedan regular dichos usos:

Artículo 11º.- Está prohibido el acaparamiento de tierras dentro de la Comunidad. Cada Comunidad lleva un padrón de uso de tierras donde se registran las parcelas familiares y sus usuarios.

Cada Comunidad Campesina determina **el régimen de uso de sus tierras**, en forma comunal, familiar o mixta (el énfasis es nuestro).

Artículo 12º.- Las parcelas familiares deben ser trabajadas directamente por comuneros calificados, en extensiones que no superen a las fijadas por la Asamblea General de cada Comunidad Campesina, de acuerdo a su disponibilidad de tierras y dentro del plazo que señala el Reglamento.

Artículo 13º.- Cuando se trate de tierras de pastos naturales, la Asamblea General de la Comunidad determina la cantidad máxima de ganado de propiedad de cada comunero calificado que puede pastar en ellas, así como la destinada al establecimiento de unidades de producción comunal.

Artículo 14º.- La extinción de la posesión familiar será declarada con el voto favorable de los dos tercios de los miembros calificados de la Asamblea General de la Comunidad, la que tomará posesión de la parcela.

La Comunidad recupera la posesión de las parcelas abandonadas o no explotadas en forma directa por los comuneros, así como las que exceden a la extensión fijada por la Asamblea General, previo pago de las mejoras necesarias hechas en ellas.

Queda claro, entonces, que para la legislación la propietaria de la tierra es la comunidad campesina, correspondiendo a sus integrantes, los comuneros (los calificados, específicamente), el uso de las tierras comunales. Pero ¿en qué consiste, de manera más clara, el uso de las tierras comunales por parte de los comuneros?

La legislación considera como “uso” el aprovechamiento que hacen los comuneros. No define con claridad la naturaleza de esos derechos, aunque es claro que los comuneros no tienen la propiedad de las tierras que ocupan. La jurisprudencia, la doctrina y algunas normas legales consideran que los comuneros tienen respecto de sus tierras un tipo de derecho que asimilan a la copropiedad, a la posesión, al uso y que más comúnmente denominan como usufructo. Sin embargo, ninguna de esas formas jurídicas se ajusta a las peculiaridades de los derechos que ejercen los comuneros.

El Derecho Civil distingue entre los llamados “derechos reales”<sup>7</sup> a los derechos reales *sobre cosa propia*, entre los que se cuentan la propiedad, el condominio y la posesión; y los derechos reales *sobre cosa ajena*, entre los que se encuentran el usufructo, el derecho de uso, de habitación, de superficie y la servidumbre. También son derechos reales sobre cosa ajena los derechos reales de garantía, es decir, la prenda, la hipoteca y la anticresis (Maisch 1984: 12-14).

El derecho de **posesión** es definido por el Código Civil como “el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad” (artículo 896). Si el derecho de propiedad corresponde a la comunidad campesina, quedaría claro que los comuneros que usan una parcela lo harían a modo de poseedores,<sup>8</sup> compartiendo con los demás comuneros la condición de poseedores de distintas parcelas de propiedad comunal. Cada comunero sería así poseedor de una parcela de propiedad comunal. En tanto poseedores, pueden válidamente usar y disfrutar del bien (esto es, hacer suyos los frutos y provechos), en este caso de la tierra. Pero, el Código no admitiría el ejercicio de otros derechos que tienen los comuneros, como el de disponer de la tierra, dándola en herencia o incluso vendiendo la parcela, así sean comuneros calificados.

El Código Civil se refiere a la figura de la **coposesión** de la siguiente manera: “Existe coposesión cuando dos o más personas poseen un mismo bien conjuntamente”. Agrega el artículo 899 que “Cada poseedor puede ejercer sobre el bien actos posesorios, con tal que no signifiquen la exclusión de los demás”. Parte de las tierras comunales son poseídas, en efecto, en forma conjunta (caso de los pastos naturales de las comunidades de Marcopata y Huayllay Chico), configurando una coposesión. Pero sobre la mayor parte de parcelas cada comunero ejerce la posesión en forma exclusiva, sin compartirla con los otros comuneros.

La mayoría de autores que se ocupan de estos temas se refieren al derecho de los comuneros como al “uso”. El **derecho de uso** se regula en el Código Civil en referencia a otro derecho real, el usufructo. Así, cuando los artículos 1026 a 1029 del Código Civil se

---

<sup>7</sup> Los Derechos Reales son la parte del derecho civil que se ocupa de los derechos sobre las cosas (*res*, en latín), pero de manera más general de los derechos que se generan en torno a los bienes, incluso sobre bienes inmateriales. El Código Civil considera que su número está definido por éste y por la ley.

<sup>8</sup> Como veremos más adelante, es común en la literatura especializada el uso de la expresión “posesionarios”, imprecisión presente incluso en las normas legales.

refieren a los derechos de uso y de habitación regulan derechos de usar o servirse de un bien no consumible, los cuales (a diferencia del usufructo) no tienen una temporalidad definida, son intransferibles y no requieren de las formalidades escritas que sí exige el usufructo, así como tampoco permiten disponer de los frutos del bien (el *fructus*). Esta última diferencia haría que eliminemos al derecho de uso como una posibilidad de clasificación, pues los comuneros se apropian y disponen con libertad de los frutos obtenidos de las parcelas.

Examinemos, por último, la consideración del derecho de los comuneros sobre las parcelas familiares como un **usufructo**. Según Ferdinand Cuadros Villena, “el derecho de propiedad sobre las tierras se atribuye a la Comunidad como ente jurídico, mientras que el usufructo, es decir el uso y disfrute de las tierras se atribuye a los miembros de la Comunidad” (1995: 529). El mismo autor afirma sobre las tierras comunales: “Estaban sometidas a un doble régimen: el de propiedad por parte de la Comunidad Campesina y de *usufructo* personal o familiar. La *posesión* familiar podría extinguirse por declaración de la Asamblea General ...” (1995: 533). El autor citado vacila entre definirlo como usufructo o posesión.

Pero el usufructo es un derecho real sobre bien ajeno que se establece de manera formal, por escrito, determinando el plazo y la posibilidad de transferir el usufructo o no, entre otros aspectos. Así, aunque los comuneros pueden usar y aprovechar los frutos de la tierra (en eso consiste el usufructo), la ausencia de voluntad y, sobre todo, de las formalidades establecidas por la ley harían que no podamos considerarlo como un usufructo. Pero tal vez la diferencia más importante sea que los comuneros consideren que incluso pueden heredar su derecho, algo negado por el Código Civil a los usufructuarios.

Alejandro Diez, aludiendo a las dificultades para caracterizar adecuadamente los derechos de los comuneros menciona: “los derechos colectivos o familiares de acceso y usufructo dependen en gran medida de la forma específica de producción y uso de cada porción particular del territorio comunal” (2003b: 74). Diez sostiene que para los comuneros hay una dualidad en el tratamiento del derecho de propiedad y que los comuneros usan indistintamente la misma categoría jurídica para definir y defender su

derecho de propiedad sobre la parcela que ocupan, lo mismo que para afirmar que la misma hace parte de la propiedad comunal.

De esta manera, ninguna de las formas que el Código Civil nos ofrece permitiría encuadrar acertadamente a la relación que mantienen los comuneros con la tierra comunal, más aún si se considera su naturaleza de *numerus clausus*.<sup>9</sup> ¿Qué derecho tienen entonces los comuneros sobre las parcelas familiares? Para responder a esa pregunta, dado que las normas oficiales no brindan una respuesta, debemos mirar la forma como se conducen en la práctica los comuneros.

### **3.4 La aplicación de las normas**

Como se ha mencionado, la casi totalidad de las tierras de cultivo al interior de las comunidades están parceladas, aprovechándose para su uso en forma familiar, fenómeno que se observa desde inicios de siglo XX en algunos estudios de científicos sociales (como Bernardo Mishkin, citado por Henry Dobyns 1970). Desde los textos de los cronistas hispanos se sabía que parte de las tierras de los ayllus era trabajada en forma familiar. La idea generalizada de que las comunidades poseen la tierra en forma colectiva y que las parcelas se redistribuyen periódicamente entre las familias, corresponde por tanto a una idealización antes que a la realidad comunal. En todo caso, la práctica de la redistribución de parcelas opera sobre algunas tierras de la comunidad, no en todas los tipos de tierras.

Como hemos visto, al interior de las comunidades coexisten la propiedad comunal sobre la tierra y el aprovechamiento familiar de esas tierras, que muchos comuneros consideran como de su propiedad. Al mismo tiempo, sobre dichas parcelas se dan relaciones jurídicas que, de acuerdo a la legislación, no están permitidas: se las alquila, se las trabaja al partir, se las hereda y se transfieren a otros comuneros y, en no pocos casos, a

---

<sup>9</sup> Nuestro Código Civil recoge el tratamiento extendido de los derechos reales como un conjunto de ellos definido expresamente por el Código o por la ley, no pudiendo existir otros más que los reconocidos por estos medios.

no comuneros.<sup>10</sup> En muchas comunidades, los comuneros han transferido tierras haciendo uso de contratos privados e incluso de escrituras públicas ante jueces de paz.

El mercado de tierras al interior de las comunidades – o, más bien, operaciones de compra y venta que no llegan a constituir propiamente un mercado de tierras - se ha intensificado más en los últimos años, desde el cambio en la Constitución de 1993, que elimina la inalienabilidad de las tierras comunales, y sobre todo desde la aprobación de la Ley de Tierras, en 1995. Esta ley señala que las comunidades de la sierra y de la selva pueden disponer libremente de sus tierras, para lo cual se exige simplemente que la decisión sea tomada con el voto a favor de dos terceras partes de los integrantes de la comunidad.<sup>11</sup>

Pero el panorama normativo no está totalmente despejado. Las posibilidades de disponer de las tierras comunales en la sierra y selva han sido objeto del artículo 11 de la Ley de Tierras. El artículo 10 de dicha Ley, obliga a las comunidades en general a “regularizar” su situación y se centra luego en las comunidades de la costa; pero ese artículo fue sustituido en su integridad por la Ley de Titulación de las Tierras de las Comunidades Campesinas de la Costa,<sup>12</sup> la cual establece condiciones y supuestos distintos que facilitan la individualización de la tierra comunal en las comunidades costeñas.

La legislación enfila contra las posibilidades del mantenimiento de cualquier tipo de control comunal sobre las tierras en la costa. Así, la Sexta Disposición Complementaria y Final de la Ley 26845 señala que “El régimen jurídico de las tierras adjudicadas por las Comunidades Campesinas de la Costa en Asamblea o por el PETT será el de la propiedad privada establecido en el Código Civil”. Los legisladores impiden así que sobre

---

<sup>10</sup> Diez da cuenta, aunque en forma extraordinaria de este hecho: “Por lo general, las comunidades no permiten la venta libre de tierras a no comuneros, favoreciendo en cambio las transferencias internas. Hay sin embargo algunas comunidades que han relajado estas normas en tanto que otras no cuentan con la fortaleza institucional o la legitimidad necesarias para impedir las” (Diez 2003b: 74).

<sup>11</sup> El artículo 11 de la Ley 26505 se refiere a que cualquier decisión que implique la disposición sobre tierras comunales se toma con el voto favorable de las 2/3 partes de todos los comuneros, requisito establecido en la Constitución de 1979, como excepción de la inalienabilidad de las tierras comunales. Existe una iniciativa legal del Poder Ejecutivo, sin embargo, para reducir el porcentaje de comuneros necesario para aprobar la venta o disposición de tierras comunales.

<sup>12</sup> Ley n° 26845, publicada en julio de 1997.



tierras comunales entregadas en propiedad a los comuneros pudiera haber algún tipo de control por la comunidad misma.<sup>13</sup>

Podríamos considerar, entonces, que estamos frente a una inadecuación de la normativa oficial a la realidad comunal. La salida sería llevar a los comuneros desde un régimen de propiedad “imperfecto” (debido a que no “entienden” el derecho oficial) hacia otro, en teoría, probadamente eficaz. Pensamos, sin embargo, que hay más que un simple divorcio entre la ley y la realidad. Ello resulta entendible si desde el Derecho no se cuenta con una clara definición de las comunidades ni de los derechos de los comuneros.

Conforme señala Diez, habría una confusión aparente en el uso del concepto de propiedad entre los comuneros, pues si en abstracto puede quedar clara la distinción entre propiedad y usufructo, “en concreto ambas nos remiten a ciertos grados de disposición y usos de la tierra, con la diferencia de que la primera incluye la posibilidad de enajenación y transferencia, en la práctica ambas se confunden”. Ello, según Diez:

“se debe no solo a la proximidad de los conceptos sino, y sobre todo, a la capacidad real de muchos comuneros de transferir sus derechos de usufructo, tanto bajo la modalidad de ‘venta’ cuanto de herencia, por supuesto, dentro de los márgenes y los límites que le impone la colectividad. Así, si por lo general los comuneros admiten la propiedad de la comunidad, reconociéndose ellos mismos sólo como ‘poseionarios’ o ‘usufructuarios’ de la porción de tierras que trabajan, se consideran a sí mismos ‘dueños’ y ‘propietarios’ de dichas tierras. Con ello, los papeles se invierten y para ellos la comunidad es ante todo un garante que certifica la propiedad y los derechos de cada una de las familias que la integran” (2003b: 74).

Diez considera, por tanto, que más que hablar de propiedad puede resultar más adecuado referirse a diversos grados de *apropiación* del territorio, entendiendo por ello una combinación de derechos cultural, histórica y localmente determinados. La necesidad de utilizar, entonces, una concepción que vaya más allá de la lógica de las normas legales, del centralismo jurídico, nos lleva al terreno del pluralismo jurídico.

### **3.5 Pluralismo jurídico**

<sup>13</sup> Esto contradice incluso la práctica actual de algunos sectores de altos ingresos que aceptan regulaciones y limitaciones en sus condominios (figura conocida también como copropiedad), en los que estas asociaciones funcionan casi como comunidades campesinas, determinando quiénes pueden adquirir propiedades a su interior e incluso quiénes pueden arrendar las casas de los asociados-propietarios.

Guevara, citando a Ugo Mattei, afirma que “el Perú es un contexto de pluralismo jurídico”.<sup>14</sup> Agrega Guevara que en este contexto confluyen una serie de tradiciones y experiencias jurídicas que producen una superposición y conflictividad normativa extraordinaria, cuya identificación exigiría la realización de trabajos de campo minuciosos. Pero dentro del esquema del centralismo jurídico prevaleciente en el país, estas distintas formas normativas son rechazadas. Se piensa que el derecho civil nos brinda las mejores posibilidades de regular las relaciones de propiedad. Pero así como Guevara llama la atención sobre la simultaneidad de tradiciones y experiencias jurídicas, Trazegnies subraya el carácter histórico de la propiedad misma. La propiedad, afirma, es una de “las tantas formas históricas de regulación social,... un sistema de derechos y obligaciones que varía con el tiempo, que adquiere diferentes significaciones concretas”. Añade que:

“... la propiedad no es un concepto universal que sobrepasa la historia sino un concepto histórico: la propiedad es lo que los hombres quieren que sea; y los hombres quieren cosas distintas según los tiempos. En esta forma, la propiedad resulta una noción que recubre realidades muy diferentes: es una etiqueta común que se aplica sobre tipos muy dispares de organización de las conductas humanas en torno a ciertos objetos. Lo interesante, lo útil, es descubrir las características específicas de *cada* tejido de derechos y deberes al que se le da el nombre de propiedad.” (Trazegnies 1978: 77).

Sostiene este autor que el derecho de propiedad, tal como lo conocemos ahora, no es sino un “esquema de relaciones entre individuos con relación a un objeto, que fue definido y desarrollado jurídicamente por el *Code Napoléon* y por los juristas clásicos” (1978: 80), el cual resulta arbitrario por privilegiar una de las formas históricas de dichas relaciones sociales. En la misma línea interpretativa, la FAO, en un documento preparado para la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural, realizada en Porto Alegre en 2006, empieza señalando la relatividad de la noción de propiedad:

“Propiedad es una relación social. Se trata de derechos y obligaciones. Ella define lo que un individuo, una comunidad, o el Estado puede y no puede hacer con ciertos bienes, y lo que necesita para ser respetado por otros –pensar la propiedad como un ‘paquete’ de ‘mis’ derechos u ‘sus’ obligaciones.”<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ugo Mattei “The Peruvian Civil Code, Property and Plunder. Time for a Latin American Alliance to Resist the Neo Liberal Order”. En *Global Jurist Topics*, 5(1), artículo 3. <http://www.bepress.com/gj/topics/vol5/iss1/art3> [revisado 3-02-06]. Traducido al español por Aníbal Gálvez Rivas. (Citado en GUEVARA, Armando. “Las Causas Estructurales de la Pluralidad Legal en el Perú”. En *Global Jurist Frontiers*, Volume 6, Issue 1 2006, página 1).

<sup>15</sup> “Property is a social relation. It is about rights and duties. It defines what an individual, a community, or the state can and cannot do with a certain commodity, and what needs to be respected by others-think of property as a ‘bundle’ of ‘my’ rights and ‘your’ obligations”. (Van den

De este modo, si queremos desligarnos de la idea de una propiedad “metafísica o a-histórica”, como diría Trazegnies, debemos revisar en concreto, en cada sociedad, la forma en que se organizan las distintas relaciones sociales que llamamos propiedad.

Los derechos de propiedad son dinámicos, se redefinen continuamente a través de negociaciones, y son complejos, pues incorporan elementos de distintas racionalidades y de distintas instituciones. En sociedades pluriculturales como la nuestra estas negociaciones ponen en contacto una diversidad de sistemas normativos -leyes estatales, normas tradicionales o consuetudinarias, religiosas, etc.- que proveen bases para reclamar los derechos de propiedad (Meinzen-Dick y Pradhan 2005: 1-2).

Deininger (2003), uno de los más caracterizados especialistas en el tema del Banco Mundial, asume que los derechos de propiedad son convenciones sociales: la propiedad no remite sólo a los bienes o activos, sino al consenso entre las personas acerca de cómo deben tenerse, usarse e intercambiarse dichos activos. Por tal razón, los derechos de propiedad no pueden ser estáticos, sino que evolucionan en respuesta a cambios en el entorno económico y social.

De esta forma, se requerirá analizar la forma en que los derechos de propiedad se presentan en las comunidades campesinas. Ostrom (2002) reclama la necesidad de seguir abordando estudios de caso para entender las complejas interacciones que ocurren al interior de un escenario particular: “Los estudios de caso que siguen desarrollos en un periodo largo de tiempo y los que estudian esfuerzos fallidos de cambio son particularmente importantes” (2002: 68-69).

En referencia a los recursos de propiedad colectiva, el documento de FAO citado anteriormente aborda una confusión bastante extendida. Allí se señala que el nombre de propiedad común usado en la “tragedia de los comunes” está erróneamente asignado, por lo que sugiere hacer un cambio (“la tragedia del acceso abierto”).<sup>16</sup> Atendiendo a esas ideas, lo que tendríamos en las comunidades campesinas no sería una propiedad de

---

Brink, Thomas et al 2006: 3).

<sup>16</sup> “The phrase was coined by Hardin (1968), and should be rephrased as ‘the tragedy of *res nullius*’- no one’s property. The tragedy of the commons is not the tragedy of common property rights, it is the tragedy of open access, which occurs when communities are no longer able to define and enforce the property rules which apply to natural resources”.

nadie (*res nullius*) sino una propiedad común, sobre la cual se desarrollan un conjunto de relaciones, definiendo un complejo tejido de derechos individuales, familiares, de grupos y del conjunto de la comunidad.

Pero en nuestro país seguimos aferrándonos a una noción de propiedad del siglo XIX, como en la Ley 26845 sobre el establecimiento del régimen de propiedad privada. Ello explicaría, según Meinzen-Dick y Pradhan, que los hacedores de políticas busquen consolidar los derechos por medio de la ley estatutaria (la ley nacional), considerando que estarían brindando de esta forma seguridad de tenencia, pretendiendo establecer derechos de propiedad “bien definidos”. Pero advierten asimismo de dos limitaciones:

“primero, no refleja la realidad, pues ignora los diferentes grupos de derechos de propiedad existentes, y las múltiples bases para la demanda de ellos; y, segundo, aun si fuera posible que hubiera un tipo de propiedad único y no cambiante, no se adaptaría a las incertidumbres que a menudo se encuentran al tratar con recursos naturales”. (2005: 1-2).

Diez destaca la necesidad de tipologías que permitan entender mejor la diversidad de experiencias de las comunidades campesinas existentes en el país, agrupándolas en algunos tipos, tomando en cuenta las particularidades geográficas, regionales, lingüísticas y culturales.<sup>17</sup> El mejor entendimiento de la realidad comunal posibilitaría asumir la perspectiva del pluralismo jurídico en el país. Pero debe considerarse la complejidad de este análisis, pues según Boaventura de Sousa Santos:

“Vivimos en una época de legalidad porosa o de porosidad legal, de múltiples redes de órdenes legales que nos obligan a practicar transiciones y transgresiones constantes. Nuestra vida legal está constituida por la intersección de órdenes legales diferentes, esto es, por la interlegalidad. La interlegalidad es la contraparte fenomenológica del pluralismo legal”.<sup>18</sup>

Para Santos no se trata de concebir esos distintos órdenes legales “como entidades separadas que coexisten en un mismo espacio político, sino se trata de concebir esos diferentes espacios legales superpuestos, interpenetrándose y confundidos tanto en nuestras mentes como en nuestras acciones”.

### **3.6 Los paquetes de derechos y los sistemas normativos**

<sup>17</sup> Taller “Comunidades Campesinas Hoy”, realizado en Lima, en setiembre de 2007, organizado por CEPES y Secretariado Rural Bolivia-Perú.

<sup>18</sup> Boaventura de Sousa Santos. *Law: a Map of Misregarding. Toward a Postmodern Conception of Law*. En: *Journal of Law and Society*, 14(3), 1987. (Citado en Armando Guevara y Thome 1999: 296).

Un concepto particularmente útil en el enfoque del pluralismo jurídico es el de *bundle of rights*, traducido al español como *paquetes de derechos*, y que ilustra la existencia de múltiples derechos que se conjugan sobre un mismo espacio o recurso. De esta forma, cada persona o grupo puede tener distintos *paquetes de derechos*, siendo algunos más completos o dominantes que otros en las demandas o reclamos específicos sobre la tierra. En el caso del agua, por ejemplo, explica Rundolph (Rundolph, Meizen-Dick et al 2005:6):

“Todas las mujeres de la comunidad pueden tener derecho a sacar agua de un riachuelo, con la finalidad de cocinar o lavar. Los propietarios de animales pueden tener derecho a bañar a sus manadas o rebaños en ciertas áreas. Los campesinos que invirtieron en construir un sistema de irrigación pueden tener derechos a desviar agua para sus cultivos (todos los cuales son derechos de uso). Al mismo tiempo, la comunidad, la asociación de regantes o el estado puede reclamar derechos para decidir el momento en el que es posible utilizar el agua, para hacer cambios sobre el río o conceder permisos a nuevos usuarios (derechos de manejo o control del agua).” (La traducción es nuestra).

Este concepto permite pensar en los distintos derechos que puede tener cada actor de la comunidad (o la comunidad misma) sobre la tierra comunal o individual. De otro lado, nos conduce a la idea de *derechos diferenciados* según características o factores muy distintos, tales como el género, la actividad practicada, la inversión realizada, etc., lo cual se aprecia efectivamente en las tres comunidades estudiadas y que es materia de análisis en el capítulo 6 de este informe.

Por otro lado, los autores revisados hacen constante referencia al concepto de *sistemas legales o normativos*, para designar el conjunto de características de un espacio social determinado en cuanto a la producción de normas y sanciones y al ejercicio de derechos. ¿Qué características deben tener estos sistemas para ser considerados como tales? Guevara y Thome (1999: 289-299) revisan las ideas producidas sobre este particular. Así, según Pospisil, el Derecho debe contar con cuatro atributos: poseer el poder necesario para forzar a un grupo a conformarse con sus decisiones, poseer mecanismos de sanción, poseer una intención de aplicación universal y establecer relaciones obligacionales que involucren deberes y derechos recíprocos. Moore considera que esa definición solo permite hablar de *derecho* cuando se trata de normas dadas por los Estados, por lo que prefiere hablar de *reglamentación*. Griffiths, en cambio, señala que lo central en el reconocimiento de sistemas legales está en la *especialización* y en la *división*

*del trabajo*, esto es, en el grado en el cual la autorregulación de un campo social está diferenciada de las otras actividades y delegada a funcionarios especializados.

De otro modo, no cualquier espacio social de producción de normas configurará un sistema normativo. Dicho de otro modo, no todos los derechos vinculados al uso, disposición o transferencia de la tierra podrán ser incluidos como un sistema normativo. Por esta razón, resulta pertinente incluir en el análisis el enfoque de *campo de fuerzas*, desarrollado por Nuijten (2003: 240),<sup>19</sup> definido como “un espacio de poder y de lucha entre diferentes actores sociales en relación con ciertos recursos y alrededor del cual se desarrollan formas de dominación, de contención y de resistencia, así como ciertas regularidades y formas de orden” (Nuijten y Lorenzo 2006: 219). Estas formas de orden son parte de las reglas de juego pero no llegan a ser formales, de modo que no es posible hablar de acuerdos normativos, sino más bien de fuerzas que se desenvuelven en el campo.

El enfoque de campo de fuerzas pone de relieve dos elementos centrales. El primero es la perspectiva histórica y sociopolítica que incorpora al análisis de las relaciones de propiedad, las cuales son analizadas en el tiempo y considerando cambios en los contextos sociopolíticos. Esto determina, a su vez, cambios en las posiciones en que se sitúan los distintos actores para reclamar sus derechos en el campo de fuerzas (Nuijten y Lorenzo 2006: 219-220). El segundo elemento es la incorporación al análisis de las formas discursivas utilizadas por los actores para expresar sus reclamos, deberes y derechos sobre la tierra para comprender las relaciones de propiedad. Esos discursos reflejarán ideologías, develarán diferentes categorías de derechohabientes, de reglas, de prácticas e intereses (Nuijten, Lorenzo y de Vries 2006: 9-10).

### **3.7 Las limitaciones del pluralismo jurídico**

En tiempos de globalización el enfoque del pluralismo jurídico, resumido en buena medida en el estudio de Guevara y Thome, resulta un aporte sumamente importante, que permite reconocer las peculiaridades regionales, culturales y aún grupales.

---

<sup>19</sup> Hemos traducido al español como *enfoque de campo de fuerzas* lo que en inglés es llamado *force field approach* o *practice-force field approach*.

Aunque no se aspire a la construcción de un sistema de normas universal – postura rechazada por los seguidores del pluralismo jurídico (llamándolo como “recaídas en el centralismo legal”) –, se requiere, en primer lugar, desarrollar herramientas metodológicas que nos permitan movernos en medio de la diversidad. Lo contrario sería limitarse a constatar diferencias, que cada grupo u “espacio social semiautónomo”, como diría Moore, es distinto de los otros y que para entenderlo habría que conocer cada experiencia.

Con el riesgo de que se pueda criticar la idea mencionada en el párrafo anterior de ser expresión del “centralismo legal”, destacamos la necesidad de reconocer las diferencias culturales, étnicas, de género y otras, por lo que pensamos que se requiere afirmar un conjunto de derechos comunes a la humanidad, lo que pasa por reconocer la diversidad pero también la universalidad o generalidad.<sup>20</sup>

En segundo lugar, en términos operativos, llegados a una situación de conflicto generada por la intersección de órdenes legales diferentes o de interlegalidad, como diría Santos, se planteará necesariamente la discusión respecto de qué ordenamiento legal aplicar. Rechazando la aplicación mecánica del derecho nacional, por considerarlo “mejor” o “más desarrollado” o, por ser más “moderno”, la solución no pasa por afirmar simplemente “son distintos”. ¿Cuál es la norma aplicable en caso de conflicto de esos distintos ordenamientos legales? Compartimos la pregunta de Xavier Albó, recogida por Guevara y Thome (1999: 286): “¿Por qué se piensa que el derecho romano o el napoleónico están mejor adaptados a nuestra realidad que nuestra propia experiencia y tradición multacentenaria?” Pero la pregunta anterior sigue vigente ¿cuál derecho resultará aplicable, sin generar además conflicto?

En tercer lugar, la naturaleza de los derechos de las comunidades campesinas y otros grupos sociales, que se engloban dentro de la noción de derechos consuetudinarios, no deja de presentar dificultades. Atendiendo a las fuentes revisadas en las páginas anteriores, no podemos entender el pluralismo jurídico como la mera coexistencia de

---

<sup>20</sup> “Algunos autores nos previenen de idealizar el pluralismo legal. Históricamente se ha demostrado que la pluralidad legal ha sido usada políticamente. Que sea emancipadora u opresiva depende de los usos políticos que se le dé. (Moore 1986: 22, Nader y Todd 1978, Ferry 1990, Santos 1995)” (Urteaga 2006: 124).

diferentes ordenamientos legales; ellos están interrelacionados, 'intersectados' como diría Souza al hablar de 'interlegalidad', que define una legalidad porosa.

En ese sentido, no está demás reconocer que el llamado derecho consuetudinario responde a una serie de influencias recíprocas. Urteaga (2006: 129) afirma que el origen colonial de este término lo convierte en un concepto oscuro y de poca contribución y trascendencia analítica. Señala dicha autora, citando a Rappaport, que:

“Las particularidades de los órdenes jurídicos de estos grupos [se refiere a indígenas y campesinos] demuestran que se han producido préstamos o intercambios con otros grupos sociales; el mercado; y el mismo Estado, siendo estos préstamos recreaciones de su propia cultura que va adecuándose a contextos específicos 'resistiendo, capitulando y acomodándose al Estado' (Rappaport 1994:8).”

Urteaga afirma que no se puede suponer que un grupo social con una cultura diferente de la occidental tenga *a priori* normas y formas de resolver conflictos que difieran o se opongan completamente a las del resto. Estas afirmaciones nos devuelven, entonces, a la necesidad de entender que cada grupo social tiene normas que, en forma dinámica se van ajustando a la realidad peculiar de cada grupo.

En cuarto lugar, los trabajos sobre el pluralismo jurídico han mostrado la interacción de los distintos sistemas de derechos, haciendo énfasis en los derechos locales, pero también en el plano de los derechos estatales (nacionales, diríamos en el caso peruano) y hasta internacionales. Tal pluralidad exige una atención muy grande a la hora de analizar los derechos vigentes en cada grupo social, pero plantea una gran dificultad al momento de tratar de articular esos distintos niveles con los conflictos y otro tipo de relaciones del grupo con otros grupos y con el propio Estado.

Finalmente, nos queda una inquietud sobre cómo operativizar el bagaje del pluralismo jurídico. Sin pretender afirmar una primacía del centralismo jurídico, no se puede dejar de señalar que el instrumental del derecho oficial permite hacer análisis y comparaciones, quizás por tratarse del desarrollo de una noción que ha ido recogiendo el aporte de distintas influencias. Aun reconociendo que el derecho de propiedad romana se encuentra estirado al límite, algunos de sus elementos, como el derecho de gozar (el *jus utendi* y el *jus fruendi*) y el derecho de disposición (el *jus abutendi*) resultan sin duda funcionales, incluso para la antropología jurídica y, por supuesto, para el pluralismo jurídico. Se



requiere, entonces, ahondar en la formulación del instrumental que permita operativizar las afirmaciones teóricas tan útiles que ha avanzado hasta ahora el pluralismo jurídico.

## 4. UNA COMUNIDAD, MUCHAS TIERRAS

En esta parte del trabajo trataremos acerca de los diferentes tipos de tierras que los comuneros identifican al interior de la comunidad; algunos de ellos son determinantes en la definición de los derechos individuales sobre la tierra.

Antes de entrar en esta temática, queremos precisar en cuanto a los conceptos operatorios que adoptaremos para realizar el análisis. Tal como señalamos en el capítulo anterior, aunque muchas de las herramientas para el análisis sobre propiedad provienen del derecho occidental, no obstante pueden ser de gran utilidad para estudiar el derecho desde otras fuentes normativas. Es el caso de los atributos de *uso*, *disfrute* y *disposición*, los cuales incorporaremos en este y en los siguientes capítulos no para definir la propiedad o no propiedad de la tierra, tal como se utilizan en el derecho oficial, sino para clasificar los distintos derechos existentes e identificar los diversos grados de apropiación sobre la tierra que las familias comuneras tienen.

### 4.1 Zonas de producción y tipo de usufructuario

Los dos criterios usualmente abordados en los estudios sobre la propiedad comunal son las zonas de producción y los tipos de usufructo o de usufructuario.\* Como zona de producción se entiende a los espacios de creación comunal, claramente delimitados en el territorio, en los que los comuneros manejan una serie de productos a través de prácticas agrícolas determinadas. Por ejemplo, para la comunidad de Laraos, en la cuenca del río Cañete, Fonseca y Mayer (1988) encuentran -entre otras- andenes rústicos, estancias, huertos individuales, etc. La distinción más gruesa en función de las zonas de producción presenta tres tipos de situaciones: tierras bajo riego (zona baja), tierras de secano (zona intermedia) y tierras de pastos (zona alta). Aunque con variaciones según la zona de estudio, los autores consultados identifican y coinciden con esta distinción (De la Cadena 1985, Kervyn 1988, Golte 1992, Pinedo 2000, Diez 2003).

En nuestra investigación, identificamos gruesamente tierras bajo riego (zona baja), tres tipos de tierras de secano (zona baja, zona intermedia y zona alta, claramente

---

\* El uso de los términos usufructo y usufructuario en éste y los siguientes capítulos no corresponde a la definición jurídica, como se apreció en el capítulo anterior.

diferenciadas entre sí por los comuneros en razón de su aptitud agrícola y del trabajo requerido para la producción), y tierras de pastos (zona alta, en donde se distinguen la zona libre y las estancias).

El segundo criterio de clasificación, el tipo de usufructo o de usufructuario, hace referencia directa a un derecho sobre la tierra, el usufructo entendido como el derecho de usar la tierra y aprovechar los frutos que se deriven de ella. De este modo, identificamos tres grandes tipos: las tierras comunales (usadas de distintos modos pero siempre respondiendo al interés de la organización comunal), las tierras colectivas (varias familias) y las tierras familiares (o individuales). En todos los casos, la mayor parte de las tierras de uso agrícola está compuesta por las tierras familiares - 99% en el caso de CYC y 98% en el de Marcopata-, que están divididas en un elevado número de parcelas. Las parcelas familiares suelen encontrarse en las tierras bajo riego (zona baja) y en las tierras de secano (zonas baja, intermedia y alta). Sobre ellas, las familias poseedoras cuentan con una gran amplitud de derechos y con altos niveles de apropiación. No obstante existen diferencias importantes según el tipo de parcela del que se trate. Sobre este aspecto volveremos más adelante.

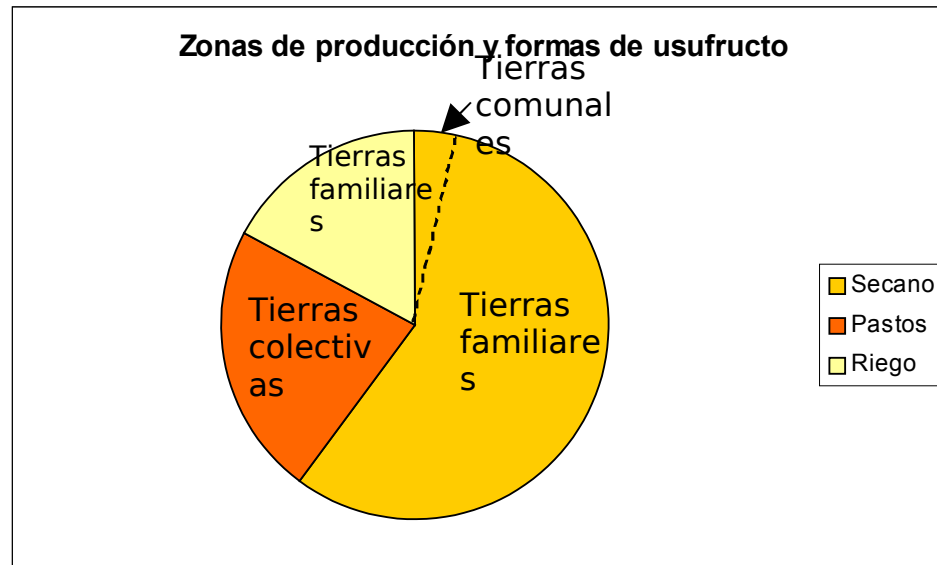
Las tierras comunales son áreas por lo general pequeñas trabajadas en faenas comunales o alquiladas a comuneros, administradas por la organización comunal. Las ganancias obtenidas de estas tierras son utilizadas exclusivamente para los gastos de la directiva comunal. Sobre estas tierras el nivel de apropiación de las familias es nulo. La relación entre ellas y los comuneros se encuentra más bien a nivel de deberes: en el caso de las faenas colectivas, los comuneros están obligados a asistir o, de lo contrario, a pagar una multa estipulada por el colectivo. A modo de ejemplo, en Marcopata las tierras comunales son dos terrenos de 5 hectáreas - ubicados en las zonas media y alta del área de secano-; y en CYC son 4,5 hectáreas de área agrícola de secano. En estas tierras suelen sembrarse todo tipo de productos (incluso especies arbóreas como tara y eucalipto). En Huayllay Chico encontramos un caso especial: allí la faena comunal en 5 ha de extensión para la siembra anual de papa tiene un significado especial ya que se realiza como parte de una tradición festiva llamada Yupanaco (*competencia*, en voz quechua) en la que las familias compiten sobre quién termina primero los duros trabajos de preparación de la tierra.

Finalmente, a las tierras colectivas corresponden los pastos naturales y las estancias. Las familias tienen derechos limitados de uso sobre los pastos que impiden el paso de un sistema colectivo a uno individual. Estas restricciones sobre el uso limitan, a la vez, sus posibilidades de disfrute. Menos aún es posible hablar de disposición (*abusus*), en tanto las tierras no pueden ser alquiladas, vendidas ni heredadas. Sobre estas tierras es la comunidad la que mantiene el control y la que toma las decisiones. Dos ejemplos de ellos son los que siguen: i. En Marcopata y Huayllay la organización comunal puede decidir la conversión de sectores de pastos en tierras de uso agrícola y ser distribuidas en parcelas para nuevos comuneros; y ii. En ambas comunidades, la organización cobra a los pobladores de la comunidad vecina por el uso de los pastos. Estas consideraciones son importantes porque algunos estudios señalan erróneamente que por el hecho de ser tierras colectivas se trata de un espacio no-regulado. Esto, como hemos visto, dista mucho de la realidad.

Sin embargo, sobre las tierras de pastos puede existir un cierto nivel de derechos de las familias comuneras, lo que llamamos un uso colectivo. Se trata de las estancias. Éstas están conformadas por algunas viviendas temporales que se utilizan para llevar a los animales a pastear por temporadas más largas. Así, por ejemplo, en Huayllay Chico encontramos 3 estancias, en donde la más grande albergaba a 15 familias. Las tierras donde se ubican las estancias fueron tomadas a inicios de la formación de la comunidad y han sido heredadas de generación en generación. No obstante, los comuneros se consideran sólo poseedores de las tierras, mientras que la comunidad es percibida como la propietaria en última instancia.

De la revisión anterior es fácil notar que los tipos de usufructo se encuentran estrechamente vinculados a las zonas de producción. Así, es posible aseverar que las tierras bajo riego y de secano se corresponden casi enteramente a las de uso familiar, a excepción de una pequeña porción comunal, y que las tierras de pastos y estancias se corresponden con el uso colectivo. Estos dos modos de clasificar las tierras de la comunidad establecen una base importante para comprender la forma de tenencia en comunidades campesinas y, lo que es más importante, dejan notar que existen derechos diferenciados en su interior en función de las zonas de producción. En el siguiente cuadro mostramos la relación entre los dos criterios, según fue identificado para la comunidad de Marcopata:

Gráfico 4.1



Este esquema, sin embargo, resulta insuficiente para explicar la complejidad del sistema de tenencia en las comunidades y para identificar los *paquetes de derechos* familiares o individuales sobre la tierra. De este modo, a los criterios anteriores es importante adicionar dos más que tienen relación con el origen de la tierra y que desarrollaremos a continuación.

#### 4.2 Tierras tomadas y tierras distribuidas

Uno de los criterios es el que divide a las tierras familiares entre aquellas que fueron tomadas por las familias y aquellas que fueron distribuidas o entregadas por la comunidad. En esta clasificación, las tierras tomadas son aquellas que los *antiguos* tomaron en posesión y, por tanto, son las que dan origen a las parcelas más antiguas de la comunidad. Los *antiguos* son los comuneros de las familias más antiguas de la comunidad y que participaron en las etapas importantes de formación de la comunidad.<sup>21</sup> En las etapas de formación de las comunidades esto era posible pues había una menor cantidad de familias y mayores extensiones de tierras libres. Actualmente, frente a la escasez de tierras libres las familias ya no pueden tomar o apropiarse de las tierras como lo hicieron los *antiguos* y, más bien, la comunidad

<sup>21</sup> También se les llama así a los comuneros más ancianos de la comunidad (por ser con frecuencia los descendientes más cercanos de los fundadores). Usualmente son los que mejor guardan su historia y suelen tener el respeto de autoridades y comuneros.

mantiene el control de los pocos espacios disponibles distribuyendo pequeñas parcelas bajo diferentes modalidades.

En las tres comunidades de estudio encontramos que esta diferenciación era fundamental para los comuneros y que establecía diferencias importantes en sus derechos sobre la tierra. Esta distinción nos conduce a revisar y a detenernos en la historia de la comunidad. Hemos señalado en el tercer capítulo que los derechos y las relaciones de propiedad son producto de relaciones sociales y de contextos sociopolíticos, en esa medida tomar en consideración la historia de formación de la comunidad así como los hitos que marcan su desarrollo resulta clave para comprender cómo se generaron los derechos sobre la tierra. De esta revisión, notamos que buena parte de la historia de la comunidad está marcada por eventos vinculados a la propiedad de la tierra, ya sea por episodios de apropiación individual, de defensa de linderos comunales o de lucha por nuevas tierras. Cada uno de estos eventos definió distintas formas de tenencia, produciendo diferencias en la conformación de los paquetes de derechos familiares.<sup>22</sup>

Ahora bien, las tierras distribuidas generan un sistema particular de tenencia con normas que regulan la utilización de las parcelas por parte de las familias comuneras. En el siguiente cuadro hacemos un breve resumen de algunas de las normas producidas para regular este sistema y que dan pistas acerca de los niveles de apropiación que tienen las familias sobre las parcelas distribuidas. Más adelante volveremos sobre este tipo de tierras pero para observar los derechos de acceso a las parcelas.

**Cuadro 4.1**  
**Derechos de apropiación familiar en las tierras distribuidas**

<b>Norma</b>	<b>MP</b>	<b>HC</b>	<b>CYC</b>
<b>Duración de la posesión</b>	Indefinida con restricciones: El comunero activo debe cumplir con sus obligaciones para con la organización comunal.	Una sola campaña agrícola (un año).	Indefinida con restricciones: El comunero activo debe pagar anualmente una cuota (S/. 10-20) para el beneficio del colectivo.
<b>Uso</b>	Libertad plena	Restringido. La	Libertad plena

<sup>22</sup> Sobre la importancia de la historia comunal en la definición de derechos trataremos específicamente en el capítulo 7).

		comunidad acuerda cada año el sector que será trabajado.	
<b>Disfrute</b>	Familiar sin restricciones	Familiar sin restricciones	Familiar sin restricciones
<b>Herencia</b>	Sí, con restricciones: El heredero debe estar inscrito como comunero y cumplir con sus obligaciones con la organización comunal	No.	Sí, con restricciones: El heredero debe estar inscrito como comunero y cumplir con las cuotas comunales.
<b>Venta</b>	No	No	No
<b>Toma de decisiones productivas</b>	Libertad plena	Restringida. La comunidad decide las fechas de inicio de siembra	Libertad plena
<b>Cerco de la parcela</b>	Sí	No	Sí
<b>Posibilidad de pérdida de la parcela</b>	Sí. Ante incumplimiento de obligaciones comunales.	-	Sí. Ante incumplimiento de obligaciones comunales.

Como podemos apreciar en el cuadro, si bien las familias tienen importantes derechos de uso y disfrute, sus derechos de disposición se encuentran restringidos en la posibilidad de venta de las parcelas en los tres casos y de herencia en el caso de Huayllay Chico. Existe pues un importante control de la comunidad sobre las tierras distribuidas, por lo cual podemos decir que el nivel de apropiación de las familias es sólo intermedio. A lo anterior se añade que la comunidad podría recuperar las tierras entregadas en caso de incumplimiento de los deberes comunales, lo cual acrecienta la percepción de los comuneros de que las tierras no son *suyas*. En efecto, las familias consideran que a pesar de mantenerlas y heredarlas generación tras generación, estas parcelas son de la comunidad y que ellos son sólo *posesionarios*. Las declaraciones de un comunero de Marcopata lo expresan: *“Dejar como herencia a mis hijos es difícil porque la comunidad les puede quitar si no están activos; la chacra de la comunidad es como prestada nomás”*.

La diferencia es clara cuando observamos lo que sucede en las tierras tomadas por los antiguos. Sobre éstas las familias comuneras tienen plena libertad de uso, usufructo e importantes márgenes para su disposición. Las tierras tomadas por los antiguos pueden ser heredadas sin restricciones y pueden incluso ser vendidas al interior de la comunidad sin necesidad de ningún acuerdo previo con su organización. En las mismas

comunidades, sin embargo, no existe claridad acerca de si estas tierras pueden ser vendidas a terceros externos a la comunidad. En CYC, en donde hay un alto número de parcelas vendidas a externos, hay mayor consenso al respecto. En Marcopata y en Huayllay, en cambio, la mayoría opina que las tierras no pueden ser vendidas a terceros y en los escasos casos en que ocurre son motivo de conflictos internos.<sup>23</sup>

Sobre este tipo de tierras la percepción de autoridades y comuneros es que las parcelas familiares son *propias* y que, a diferencia de las tierras distribuidas, ellos no son *posesionarios* sino legítimos *propietarios*. En esa medida, la comunidad no puede tomar sus parcelas, aún en el caso de que haya incumplimiento de las responsabilidades comunales, lo cual les otorga mayor seguridad sobre las mismas. De otro lado, las familias cuentan con documentos (documentos notariales y certificados elaborados por la propia comunidad) considerados títulos de propiedad que brindan seguridad a los comuneros y que son de especial importancia para las transacciones de tierras intracomunales.

Ahora bien, a pesar de lo anterior, hay a su vez conciencia de que las tierras *tomadas* también se encuentran adscritas a un territorio sobre el cual la comunidad tiene importantes atribuciones que hay que respetar. Una situación que ejemplifica este hecho se produce cuando familias comuneras deciden dejar la comunidad. En efecto, éstas mantienen el vínculo con la organización mediante el apoyo a la realización de actividades, obras o a través del pago de multas por su inasistencia a faenas y asambleas. Ello les garantiza a cambio que la comunidad velará por sus parcelas, defendiéndolas en caso de invasión por parte de otros comuneros o de terceros ajenos a la comunidad. De otro lado, existe mucho malestar en la comunidad cuando los pobladores que tienen parcelas no contribuyen con la organización comunal, aún si ellas son reconocidas por todos como *propias*. La idea que predomina es pues que “*están consumiendo de la comunidad*”. En la práctica, sin embargo, el respeto por la titularidad de estas tierras es grande y en ninguna de las comunidades estudiadas se encontró que la organización haya tomado parcelas familiares.

#### **4.3 Tierras de zonas nuevas y zonas antiguas**

---

<sup>23</sup> Aparentemente las modificaciones legislativas que autorizan a las comunidades a vender sus tierras a terceros no son conocidas y, por tanto, no han influido en las actitudes de los comuneros.



Un segundo criterio referido al origen de la tierra es el que divide a la propiedad comunal en zonas antiguas y nuevas. Esto es, zonas que tradicionalmente han pertenecido a la comunidad y zonas que han sido incorporadas a ella posteriormente, ya sea por la cesión o venta de tierras de las haciendas vecinas o por adjudicación durante el proceso de reforma y reestructuración agraria. Aun cuando esta situación no ha sido común a todas las comunidades del país, sí ha sido bastante frecuente. Nuestras tres comunidades tenían como parte de su propiedad porciones importantes adjudicadas durante el proceso de reforma agraria. Estos sectores son claramente identificados por los comuneros y definen derechos diferenciados sobre la tierra. En efecto, al recibir tierras *nuevas*, la comunidad debe decidir la mejor forma de tenencia para el colectivo. Así, parcelas de usufructo familiar en zonas de secano pueden establecer derechos disímiles en la misma familia según si se trata de una zona nueva o antigua de la propiedad comunal.

Encontramos en las comunidades estudiadas dos situaciones reveladoras. En CYC y en Marcopata las tierras adjudicadas por reforma agraria pasaron bajo el control comunal. En ambos casos las comunidades distribuyeron parcelas a sus comuneros, generando nuevos derechos y deberes para con la organización. De este modo, las tierras adjudicadas terminaron fortaleciendo la organización comunal, aumentando el control colectivo sobre la tierra y su poder frente a las familias comuneras. A diferencia del caso de CYC y Marcopata, en Huayllay Chico las tierras otorgadas durante el proceso de reestructuración de tierras fueron convertidas en tierras comunales trabajadas en faenas colectivas, es decir que sobre estas tierras las familias no contaban con ningún grado de apropiación ya que los beneficios de trabajo colectivo estaban dirigidos a hacer crecer la caja para los gastos de la organización comunal. Esta forma de tenencia, sin embargo, dio un giro de 180 grados cuando en 1998 las autoridades comunales repartieron la tierra de forma desigual entre un grupo de comuneros que tramitó la titulación individual de las parcelas. El Proyecto Especial de Titulación de Tierras (PETT) otorgó títulos de propiedad individual a este grupo de comuneros excluyendo toda posibilidad de intervención de la comunidad sobre sus parcelas. Este suceso, sin embargo, fue hecho sin el conocimiento y aprobación de la mayoría de comuneros, bajo cierta manipulación de un sector con más dinero y poder en la comunidad.

Resulta interesante el hecho de que en CYC, en donde desde su formación nunca existió una tradición de control comunal sobre las tierras familiares, la comunidad optó por un sistema de importante regulación que restringía de forma importante los derechos

familiares (como la disposición de las parcelas para la herencia, la venta y el alquiler). Se trata, pues, de la primera experiencia de CYC como organización reguladora de tierras de usufructo familiar. Para la comunidad de Marcopata la definición del sistema de tenencia fue más natural en tanto ésta ya poseía experiencias de regulación comunal de tierras familiares. Así, asimiló las tierras adjudicadas a su sistema tradicional de distribución de parcelas familiares. Finalmente, en Huayllay Chico, encontramos una figura paradójica: allí, en donde existía una importante y antigua tradición de control de las parcelas familiares, las tierras adjudicadas terminaron siendo parceladas y tituladas individualmente.

A diferencia, pues, de lo sugerido por algunos estudiosos y políticos, las tierras adjudicadas por reforma agraria no siempre originaron en las comunidades la individualización y desarticulación de la tenencia de la tierra. Como hemos visto, en CYC y Marcopata las tierras adjudicadas más bien fortalecieron la organización, generando espacios con formas importantes de regulación comunal.

Para concluir este capítulo mostramos de forma sintética los tipos de tierras encontrados en las comunidades de estudio:

**Cuadro 4.2**  
**Tipos de tierras**

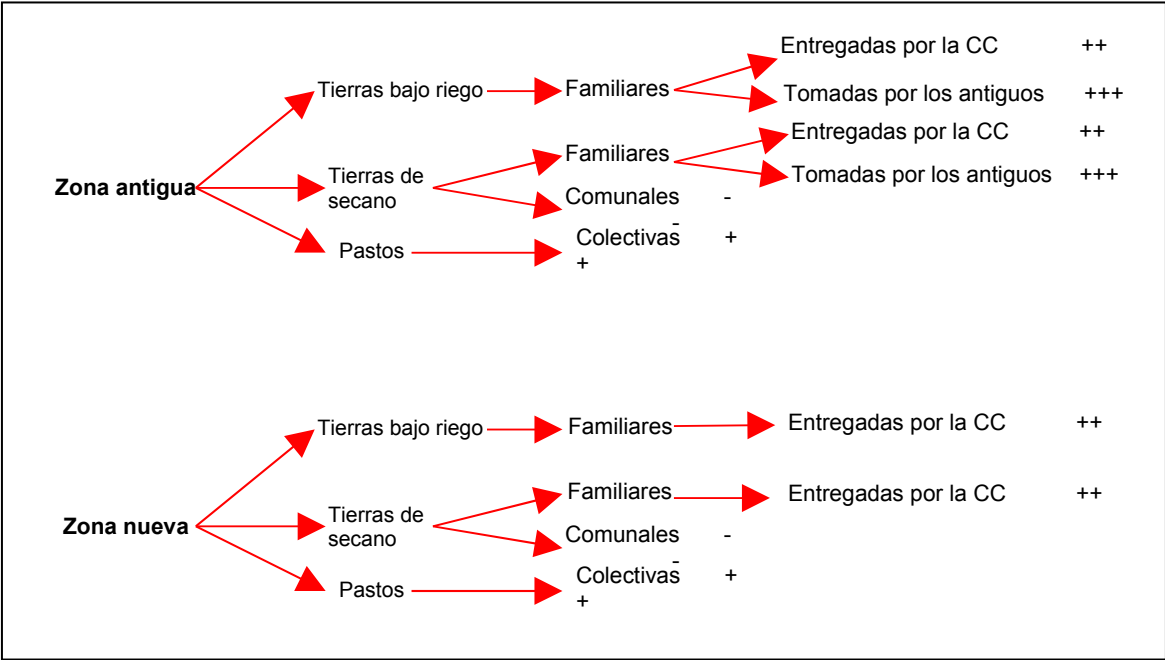
<b>Criterios de clasificación</b>	<b>Tipos de tierras</b>
<b>Zonas de producción</b>	Tierras de riego (zona baja)
	Tierras de secano (zonas baja, intermedia y alta)
	Tierras de pastos (zona alta): Libres y estancias
<b>Tipo de usufructo</b>	Tierras familiares
	Tierras colectivas
	Tierras comunales
<b>Origen de las tierras</b>	Tomadas por los antiguos
	Distribuidas por la comunidad
<b>Antigüedad de las tierras</b>	Tierras de zona antigua
	Tierras de zona nueva (RA)

Como resulta evidente, estos criterios para clasificar los tipos de tierras se cruzan entre sí, generando distintas combinaciones de tierras y distintos derechos y grados de

apropiación. A continuación mostramos un diagrama que indica para el caso de la comunidad de MP cómo entran en relación las distintas categorías de tierras que hemos señalado anteriormente, así como sus distintos grados de apropiación indicados por los símbolos -, +, ++, +++ (apropiación nula, baja, media y alta, respectivamente).

**Gráfico 4.2**

**Combinaciones según tipos de tierras y sus grados de apropiación**



## **5. DERECHOS DIVERSIFICADOS PARA EL ACCESO A LA TIERRA**

Según la legislación peruana vigente, la propiedad de la tierra en las comunidades campesinas es formalmente colectiva. En tanto tal sería esperable que cada familia comunera tenga acceso a la tierra y que dicho acceso, además, sea relativamente uniforme. La realidad es diferente.

Cuando observamos la cantidad de tierra que poseen las familias en cada una de las tres comunidades, la primera constatación es que existen entre ellas importantes diferencias. En HC algunos poseen diecinueve parcelas mientras que otros poseen sólo tres, en Marcopata las diferencias oscilan entre cuatro y trece parcelas, y en Choclococha entre dos y dieciocho parcelas. Estas diferencias, como resulta evidente, se reflejan también en el número de hectáreas que trabaja cada familia. En Marcopata los máximos y mínimos encontrados fueron de más de cinco hectáreas frente a menos de media hectárea, en Huayllay Chico entre siete hectáreas y un décimo de hectárea, y en Choclococha entre quince hectáreas y menos de una hectárea. A estas diferencias hay que añadir que en Marcopata y Huayllay Chico existen también pobladores que no poseen tierras y que trabajan ofreciendo su fuerza de trabajo en chacras de otros comuneros.

De los datos anteriores es posible observar que no todos poseen en las comunidades estudiadas los mismos derechos para acceder a la tierra. Estos dependen de varios factores, entre ellos la edad y el sexo de los comuneros. A continuación nos referiremos a los mecanismos con los que cuentan los comuneros para obtener parcelas de la comunidad. Hemos identificado para las tres comunidades patrones muy similares.

### **5.1 La entrega o distribución de tierras**

La entrega o distribución de tierras es el mecanismo de acceso a la tierra de mayor relevancia para la organización comunal y obedece a complejas normas regulatorias.

La distribución de tierras es efectuada por la directiva comunal a las familias comuneras de forma tal que quede asegurada la posesión de medios mínimos de subsistencia. Aunque con ciertas variaciones, este mecanismo lo encontramos en las tres comunidades. Ahora bien, tal como hemos visto en el capítulo anterior no todas las tierras

del territorio comunal pueden ser distribuidas.<sup>24</sup> Sólo pueden serlo aquéllas sobre la cual la comunidad posee mayores derechos y, por tanto, mayor control. Hay una relación entre la forma de acceso y el tipo de comunero del que se trate. En efecto, existen categorías de comuneros que definen distintos derechos sobre la tierra y distintos deberes con la comunidad. Estas categorías, como veremos, guardan relación con el ciclo de vida familiar y, por tanto, con la edad del comunero. No obstante, su funcionalidad y, por tanto, su existencia se explica en buena medida para regular el acceso a la tierra de los comuneros en cada comunidad.

La primera norma a destacar y que opera en los tres casos del mismo modo es que no todos los habitantes de la comunidad pueden beneficiarse de la distribución de parcelas sino que para ello hay que tener la categoría de **comunero activo**. En las tres comunidades, los comuneros *activos* –*activantes*, en Huayllay – son los hijos de comuneros que, habiendo cumplido la mayoría de edad, se inscriben en el padrón comunal. No obstante, obtener esta categoría no siempre es automático. Como veremos, los yernos o los jóvenes deben previamente pasar por periodos de prueba que aseguren a la comunidad que se trata de un buen candidato para su organización. Existe, de esta forma, la categoría de **comunero honorario** para MP, de **comunero pasivo** en Huayllay y de **aspirante** en CYC. Veamos estos casos.

Los comuneros *honorarios* son en Marcopata los jóvenes o los yernos de la comunidad (esposo de hija de comunero) cuando recién se inscriben en el padrón comunal. Al inscribirse en el padrón se contraen obligaciones con la comunidad, así como –tal como otros autores lo han llamado- se inicia el *récord personal*<sup>25</sup> de comunero, en función de sus niveles de cumplimiento, de las responsabilidades asumidas en la comunidad, pero también de su comportamiento en general.

<sup>24</sup> En el caso de MP y de HC, estas tierras corresponden a aquellas que no fueron tomadas por los primeros comuneros (los antiguos) y que quedaron a merced de las decisiones de la directiva comunal. En el caso de HC se trata exclusivamente de las tierras de uso agrícola más altas de la comunidad. En el caso de MP, en cambio -aunque la mayor parte se encuentra en los sectores altos y de secano- es posible encontrar también estas tierras en el sector de menor altura y bajo riego. A diferencia de los casos anteriores, en CYC la distribución de tierras es un proceso de reciente data. Allí las tierras que pueden ser distribuidas por la comunidad son aquellas que provienen del sector adjudicado por reforma agraria, ya que el resto de tierras agrícolas fue tomado por las familias comuneras muchos años antes. Cabe señalar que en MP las tierras adjudicadas por reforma agraria son parte de las tierras distribuidas y de fuerte control comunal. En HC, en cambio, las tierras adjudicadas por reforma agraria fueron distribuidas en una sola oportunidad para ser tituladas individualmente por el PETT, con lo cual la comunidad perdió todo forma de control sobre el sector.

<sup>25</sup> Nuijten Monique et al. (2006 : 6)

Las actividades básicas que un comunero debe realizar obligatoriamente son la asistencia a las asambleas ordinarias, el cumplimiento de las faenas comunales (normalmente para la construcción de infraestructura de uso colectivo: caminos, limpia de acequias, construcción de escuelas, locales comunales, etc.) y el pago de cuotas eventuales cuando hacen falta fondos para alguna actividad. De no cumplir con estas obligaciones existe un sistema estricto de multas (en dinero o en jornadas de trabajo) sobre el que los comuneros tendrán que responder. De manera no obligatoria, pero fundamentales para el *récord* del comunero, son asistir a las asambleas extraordinarias y, especialmente, asumir cargos en el seno de la directiva comunal o de los comités especializados (comité de riego, comités temporales para la gestión de trámites o la organización de alguna actividad).

Los comuneros se refieren a todo ello, como “*servir a la comunidad*”. En efecto, la relación del comunero con la organización comunal es percibida como la de una prestación de servicios, y el cumplimiento de sus obligaciones considerado como un aporte que debe realizar para el beneficio propio y del colectivo. En una investigación de Nuijten y Lorenzo, esta relación es identificada con lo que los comuneros de su estudio llaman “el esclavismo de la comunidad”,<sup>26</sup> denotando una fuerte carga negativa. En Marcopata el *servicio a la comunidad* también es percibido con malestar por los jóvenes comuneros.

Así, durante un primer periodo, los comuneros *sirven* a la comunidad sin obtener nada a cambio, esto es, sin activarse su derecho individual de acceso a la tierra. Cuando el *récord* del comunero es lo suficientemente apreciable, éste deja de ser comunero *honorario* para convertirse en comunero *activo*. No encontramos un consenso en cuanto al número de años de *servicio* previos a la entrega de tierras. Existen, pues, criterios que entran en juego y que, aún siendo reconocidos, se encuentran menos definidos. Uno de ellos es la conducta del comunero en su vida privada y en su relación con la comunidad. Ésta es observada en el tiempo por las familias y autoridades y juzgada en el momento de evaluar la pertinencia de la entrega de tierras. Un segundo criterio tiene relación con las responsabilidades asumidas por los comuneros con la comunidad, lo cual se materializa con claridad en el ejercicio de cargos comunales. Mientras se ocupen cargos desde menor edad, mayores serán las posibilidades de recibir tierras tempranamente.

---

<sup>26</sup> Cf. Nuijten Monique et al. (2006: 19).

Una figura similar encontramos en Huayllay Chico y en Choclococha con los comuneros *pasivos* y *aspirantes*, respectivamente. Esta categoría se refiere a aquellos que ostentan la categoría de comuneros *activantes* o *activos* y que, tal como en el caso de los *honorarios*, se encuentran acumulando *bonos* hasta hacerse acreedores de la nueva categoría. No obstante, a diferencia de Marcopata esta categoría se refiere sólo a los *yerros* de la comunidad, lo cual genera una diferencia importante entre los jóvenes: mientras que aquellos nacidos en la comunidad pueden ser *activos* y recibir parcelas desde que deciden inscribirse en el padrón comunal, los *yerros* se limitan a trabajar las tierras de su esposa hasta ser admitidos como *activos*. Una diferencia adicional entre las tres comunidades es que en Huayllay el periodo de espera hasta poder alcanzar la categoría de comunero *activo* está bastante más definido (dos años desde la instalación en la comunidad) que en Marcopata y Choclococha, en donde se trata más bien de evaluaciones individuales y coyunturales.

Un elemento importante que encontramos como una constante en las tres comunidades es la pérdida paulatina del interés de los jóvenes hacia la organización comunal. Muchos jóvenes consideran que el *servicio* que deben prestar a la comunidad es muy grande frente a los beneficios que esta les aporta. En efecto, en los casos de Marcopata y de Choclococha las parcelas que proveen las comunidades se encuentran cada vez más alejadas y son cada vez más pequeñas y, por lo menos en Maracopata, cada vez es más difícil lograr ser acreedor de una de ellas. De este modo, algunos *yerros* o comuneros jóvenes deciden no inscribirse en el padrón comunal y optan por acceder a parcelas vía mecanismos distintos al de la distribución. La organización comunal, por su parte, expresa su malestar ante esta situación ya que considera que mientras vivan y tengan una familia en la comunidad deben cumplir con las obligaciones del comunero, “están consumiendo de la comunidad y tenemos derecho a obligarlos”. En Huayllay, por ejemplo, la organización comunal ha creado un mecanismo de incentivo para la inscripción de los jóvenes que consiste en otorgar certificados de comunero activo y de residencia, que muchas veces necesitan los jóvenes al presentarse ante alguna institución para pedir trabajo o para solicitar créditos a instituciones externas.

Hasta acá hemos visto la existencia de dos categorías distintas, los comuneros *activos* (o *activantes*) y los comuneros *pasivos* (*honorarios* o *aspirantes*). A estos dos habría que



añadir tres categorías adicionales, una de ellas está directamente vinculada a la edad del comunero y las dos otras a su condición de migrante. Veamos brevemente estos casos.

En Choclococha y en Marcopata existe la categoría de comunero **jubilado**. Los *jubilados* son aquéllos que llegados a cierta edad dejan de estar obligados a cumplir con los deberes de los comuneros activos por haber aportado a lo largo de los años lo suficiente para el beneficio colectivo. Sus derechos sobre la tierra, sin embargo, se mantienen invariables. La ventaja de los jubilados es que no corren el riesgo de perder las parcelas entregadas por la comunidad –como puede suceder con los activos si es que no cumplen con sus obligaciones. La posesión de tierras sin restricción alguna es, pues, un derecho ganado y reconocido por el colectivo.

En las tres comunidades encontramos la categoría de comunero **residente**. El *residente* es aquél que habiendo sido comunero *activo* (beneficiario, por tanto, de tierras entregadas por la comunidad) deja la comunidad para trasladarse a vivir a un lugar diferente (independientemente de si se va a otro país o al distrito vecino). No obstante, el *residente* mantiene sus relaciones con la comunidad aportando en dinero el equivalente a las multas acumuladas por la inasistencia a faenas y asambleas, así como a las cuotas otorgadas en el año. Los ingresos de los comuneros residentes pueden ser significativos para la organización comunal. A cambio de sus aportes, los residentes pueden mantener derechos sobre las parcelas entregadas por la comunidad antes de su partida y la comunidad velará por sus derechos sobre las otras parcelas. Éstas son usualmente dejadas en la comunidad para el uso de algún pariente, en alquiler o bajo la modalidad de al partir. Una variación del comunero *residente* en Huayllay Chico es la del comunero **profesional**, que es el *residente* que alcanzó los estudios superiores y se va de la comunidad para buscar un trabajo afín a su profesión, fuera de la comunidad. Este tiene los mismos deberes y derechos que los *residentes*.

Finalmente, se encuentran los **no comuneros**. Al no ser obligatoria la inscripción en el padrón, algunos pobladores deciden mantenerse al margen de la organización comunal. Los no comuneros suelen ser los jóvenes –algunos de ellos yernos de comuneros- que al alcanzar la mayoría de edad o al independizarse no tienen mayor interés en beneficiarse de los derechos que la comunidad les otorga, esto es, el acceso a parcelas para trabajar de forma independiente. Esto se expresa también en la migración de los jóvenes hacia las

ciudades en búsqueda de trabajos no agrícolas. En Huayllay Chico encontramos también que por conflictos internos en la comunidad, un grupo importante de pobladores decidió no empadronarse, así ellos no acceden a las tierras que designa la comunidad y tampoco participan en los trabajos comunales.

**Cuadro 5.1**  
**Tipos de comuneros**

<b>MP</b>	<b>HC</b>	<b>CYC</b>
<b>Comuneros</b>	<b>Comuneros</b>	<b>Comuneros</b>
Honorarios	Pasivos	Aspirantes
Activos	Activantes	Activos
Jubilados	-	Jubilados
Residentes	Residentes	Residentes
-	Profesionales	-
-	Mujeres	Mujeres
Viudas	Viudas	Viudas
<b>No-comuneros</b>	<b>No-comuneros</b>	<b>No-comuneros</b>
Pobladores no inscritos	Pobladores no inscritos	Pobladores no inscritos
Mujeres	-	-

En síntesis y retomando nuestra pregunta inicial acerca de la relación entre la edad del comunero y los derechos sobre la tierra, constatamos que existe un vínculo en cuanto a sus posibilidades de acceso a parcelas a través del mecanismo de distribución comunal de tierras. Esta relación puede observarse sólo si contemplamos las distintas categorías de comuneros y los derechos y deberes que cada uno posee. En efecto, los comuneros con menos derechos son los comuneros *honorarios*, *pasivos* y *aspirantes*, es decir, aquellos que recién se inscriben o llegan como yernos a la comunidad y que son, por lo general, los más jóvenes. Superada esta condición luego de algunos años, los comuneros adquieren la categoría de *activos* o *activantes* teniendo plenos derechos de acceso a las tierras distribuidas y, por tanto, acumulando mayor número de hectáreas y parcelas que los más jóvenes. Normalmente, cuando se alcanza esta categoría los comuneros ya tienen una familia constituida e hijos en edad escolar. Finalmente, llegados a los 60-70 años y luego de muchos años de aportar a la comunidad, si bien no se distribuyen más parcelas, los comuneros adquieren mayores derechos de apropiación sobre estas ya que –a diferencia de lo que sucede con los comuneros activos- no cabe la posibilidad de que

las tierras regresen al poder de la comunidad por el incumplimiento de deberes comunales.

Además de las diferencias en la distribución o mantenimiento de las parcelas según la categoría de comunero del que se trate, este sistema para el acceso a la tierra se encuentra regulado por otras normas de gran importancia para cada comunidad. Algunas de ellas son las que hemos agrupado en el siguiente cuadro:

**Cuadro 5.2**  
**Normas del sistema de distribución de parcelas: el acceso**

<b>Norma</b>	<b>MP</b>	<b>HC</b>	<b>CYC</b>
<b>Límites a la posesión</b>	Máximo cuatro parcelas por comunero	Sólo una parcela por comunero	Sólo una parcela por comunero
<b>Extensión de parcelas</b>	0,125-0,25 ha	0,25 ha	0,25 ha
<b>Forma de distribución</b>	A solicitud oral del comunero activo	A solicitud oral del comunero activo	A solicitud escrita del comunero activo
<b>Requisitos</b>	Ser comunero activo y estar al día en las obligaciones para con la organización comunal.	Ser comunero activo y estar al día en las obligaciones para con la organización comunal.	Ser comunero activo y estar al día en las obligaciones para con la organización comunal.
<b>Tiempo de espera para la entrega</b>	Indefinido (pueden ser meses o años). Normalmente, las 4 parcelas son entregadas a lo largo de los años y no en una sola oportunidad.	Inmediato	Inmediato

## **5.2 Los derechos de las mujeres**

Hemos visto hasta acá los distintos tipos de comuneros que existen en las tres comunidades de estudio y sus posibilidades de acceso a las tierras que la comunidad distribuye. Ahora bien, ¿qué lugar ocupa la mujer en este entramado de categorías y derechos? Encontramos en las tres comunidades elementos muy similares, en donde la constante es que la mujer tiene una condición de inferioridad frente a los varones. En Huayllay Chico y en Choclococha las mujeres pueden inscribirse como comuneras en el

padrón comunal y en el discurso son consideradas como tales. No obstante, no son consideradas comuneras activas, ya que ser *activo* es una categoría sólo reservada a los hombres.<sup>27</sup> En ambas comunidades es el hombre el representante de la familia y el que es considerado jefe de hogar. En MP la relación de la mujer con la comunidad es similar, no obstante, tampoco en el discurso son consideradas comuneras ni pueden inscribirse en el padrón comunal. Podemos distinguir cuatro situaciones en la vida de una mujer que definirán su forma de acceso a la tierra:

a. La primera es cuando no ha formado una familia y vive en casa de sus padres. En esta etapa, las mujeres dependen de sus padres y trabajan conjuntamente con ellos en sus actividades productivas, constituyendo un apoyo de mano de obra para la familia; en esa medida, no son posesionarias de ningún tipo de tierras. b. La segunda etapa es cuando la mujer encuentra una pareja y, entonces, se independiza de sus padres para formar su propia familia. En esta segunda etapa, las mujeres pasan de depender de sus padres a depender de su pareja, en tanto es ésta quien posee derechos de acceder a las tierras entregadas por la comunidad. c. La tercera situación se da en caso de que la mujer quede viuda y con hijos que mantener. Independientemente de la edad que posea, la mujer puede convertirse en comunera reemplazando a su marido en la comunidad y obteniendo, en principio, los derechos que éste poseía. De este modo, la nueva comunera tendrá derecho a mantener las tierras entregadas por la comunidad a su esposo, pero también deberá cumplir con las obligaciones sociales de todo comunero activo, esto es, asistir a las asambleas, a las faenas colectivas, etc. d. Finalmente, la cuarta posibilidad es que la mujer sea madre soltera. A diferencia del caso de las viudas, la madre soltera no es reconocida como comunera ni adquiere derechos de acceso a la tierra. Así, de haber tenido hijos sin haberse independizado del yugo familiar, seguirá dependiendo económicamente de sus padres y, si es que no consigue otra pareja, no podría independizarse y seguir viviendo en la comunidad. En el caso de que una madre con hijos sea abandonada por su pareja, la situación puede ser más compleja porque es posible que el comunero forme una nueva familia y requiera todas sus tierras.

Como vemos, sólo en caso de viudez las mujeres son aceptadas como comuneras activas y por tanto pueden acceder de forma individual a las parcelas distribuidas por la

---

<sup>27</sup> En el anexo de Choclococha de CYC las autoridades señalaron que las mujeres sí podían ser comuneras activas y asumir cargos –aunque menores– en la comunidad. No obstante se trata de casos aislados y de una situación no siempre bien vista por el colectivo.

comunidad. No obstante, incluso en este caso se mantienen importantes diferencias con sus pares comuneros. En MP, por ejemplo, las viudas si bien cumplen con las obligaciones de un comunero activo, no asumen responsabilidades políticas, como ser autoridad de la comunidad.

Podemos concluir que las mujeres tienen menos derechos que los varones para acceder a la tierra y que su situación personal dependerá en buena medida de la condición en la que se encuentren sus parejas o padres. Un ejemplo claro de ello en Choclococha y en Huayllay Chico es el del aparejamiento de comuneros y comuneras con jóvenes provenientes de otras localidades: una mujer tendrá menos recursos disponibles si forma una familia con una pareja no comunera que si lo hace con alguien de la misma comunidad, en tanto los hombres foráneos no pueden recibir parcelas durante los primeros años. En cambio, los hombres de la comunidad no tendrán este problema ya que son ellos los que recibirán las tierras y, en ningún caso sus parejas mujeres.

Luego de haber revisado las particularidades de este sistema de acceso a la tierra, queremos regresar sobre la idea de su relevancia para la organización comunal. En efecto, la distribución de tierras es un mecanismo que permite a la comunidad ejercer presión sobre los comuneros para el cumplimiento de sus obligaciones, como la asistencia a asambleas, la participación en faenas, asumir los cargos comunales, el pago de cuotas, etc. De otro lado, constituye una forma para retener a los jóvenes –aunque no siempre con éxito- en el seno de la comunidad. Observamos entonces que las comunidades ejercen control efectivo sobre estas tierras y que ello les brinda poder y legitimidad frente a las familias y comuneros.

### **5.3 Otras formas de acceso a la tierra**

En las tres comunidades encontramos además de la distribución de parcelas cuatro formas más en las que un comunero o comunera puede acceder a la tierra. A excepción de cierto tipo de herencia, las posibilidades de acceso a través de estos otros mecanismos pueden ser más equitativos entre los distintos tipos de comuneros, incluyendo las mujeres y los no comuneros. Revisémoslos brevemente.

**La herencia.** La herencia es el mecanismo más extendido de acceso a la tierra, a excepción de Choclococha en donde la compra es ligeramente superior. Ahora bien, no todas las parcelas que posee una familia pueden ser heredadas bajo las mismas condiciones. Las parcelas tomadas por los antiguos –como hemos visto, las de mayor apropiación familiar- pueden ser heredadas tal y como sus posesionarios lo estimen conveniente. Encontramos que la herencia de estas tierras suele hacerse de forma equitativa entre hijos e hijas en las tres comunidades y que la organización comunal no tiene ninguna injerencia sobre dicha decisión. Otra forma utilizada para determinar la herencia es por la expectativa de futuro que tanto los jóvenes tienen para sí mismos como por los proyectos que sus padres tienen para ellos (muchas veces lejanos de la agricultura).

En cambio, en las tierras distribuidas por la comunidad, las limitaciones para la herencia son importantes: estas tierras sólo pueden ser heredadas a comuneros activos que, además, cumplan adecuadamente con sus deberes hacia ella. De otro lado, en tanto las mujeres no poseen en la práctica el mismo estatus que un comunero activo, éstas no pueden beneficiarse de estas tierras a través de la herencia. Como hemos visto, la única posibilidad de una mujer para acceder a las tierras distribuidas es a través de su pareja.

**La compra de tierras.** La compra de tierras es un mecanismo muy extendido de acceso a la tierra en MP y en Huayllay Chico, y el más importante en CYC. No obstante no es posible acceder a todas las tierras a través de este mecanismo, pues aquéllas distribuidas por la comunidad no pueden ser vendidas bajo ninguna circunstancia. De otro lado, las tierras tomadas por los antiguos sólo pueden ser vendidas al interior de la comunidad –a excepción de Choclococha en donde encontramos algunas situaciones de venta a terceros. Lo que importa resaltar de este punto es que cualquier individuo que viva en la comunidad puede acceder a la tierra a través la compra bajo las mismas condiciones, esto es, independientemente de la categoría de comunero que tenga o de su sexo. La relación en estos casos es mucho más contractual que en los casos anteriores: las dos partes interesadas llegan a un arreglo sobre el precio y posteriormente buscan acreditar la transacción a través de la entrega de un documento por parte de las autoridades comunales o de la firma de un contrato certificado notarialmente. El mercado de este tipo de tierras está principalmente marcado por la migración de los pobladores ya que ante la

imposibilidad de mantener las chacras en la comunidad, los comuneros optan por venderlas.

**Alquiler.** Como en cualquier relación de propiedad privada, el alquiler se hace a través de un contrato, en el que se acuerda un monto fijo y un periodo determinado. Este periodo suele establecerse según un número de campañas agrícolas y el monto a pagar es en dinero, según la cantidad y la calidad de la tierra alquilada. No se requiere de la presencia de ningún actor externo ni de la organización comunal para este tipo de transacciones. Al igual que en el caso de la compra de parcelas, cualquier poblador de la comunidad puede alquilar tierras independientemente de su categoría social, estado civil o sexo. Los arrendadores son normalmente comuneros activos que no necesitan o no pueden hacerse cargo de todas sus parcelas, pero en mayor medida son comuneros residentes que mantienen sus tierras y obtienen de esta forma un ingreso anual.

**Al partir.** Más común que el alquiler, resulta el acceso **al partir**. Esta modalidad consiste en que el posesionario de la tierra entrega su parcela a un comunero *socio* con quien llegará a un acuerdo de trabajo no basado en intercambios monetarios. El acuerdo suele consistir en que tanto posesionario como socio invertirán lo mismo en hacer producir la parcela (incluyendo la valorización de la tierra) y en que llegada la cosecha, la producción se distribuye a medias. Con mucha frecuencia los poseedores de las parcelas que se trabajan al partir son comuneros residentes y los socios son familiares. Este sistema es especialmente importante para quienes no tienen mayores recursos económicos ni posibilidades de heredar parcelas, es decir, los jóvenes, los yernos y las mujeres.

**El préstamo.** Finalmente, una última modalidad común entre familiares cercanos es el **préstamo**. Éste suele darse entre padres e hijos cuando estos últimos tienen una necesidad importante, o entre otros familiares (hermanos, sobrinos, primos) cuando los poseedores de la tierra se encuentran en calidad de comuneros residentes y no pueden trabajarla. A través de esta modalidad pueden acceder todos los pobladores de la comunidad, independientemente de su género o categoría de comunero.

#### **5.4 Comuneros en la legislación nacional**

La Ley General de Comunidades Campesinas, promulgada en 1987 en el primer gobierno de Alan García se aprobó para regular la gran diversidad de comunidades campesinas.

Uno de los aspectos de los que se ocupó fue de clasificar a los miembros de las comunidades en distintos tipos de comuneros. Revisemos de qué modo esto es equiparable o no a lo encontrado en nuestro estudio.

Según la ley y su reglamento los miembros de la comunidad se clasifican como comuneros, comuneros integrados y comuneros calificados.

Los *comuneros* son los nacidos en la comunidad sin importar su lugar de residencia, de igual condición gozarían sus hijos y las personas integradas a la comunidad (artículos 5 de la Ley y 21 del Reglamento). Los *comuneros integrados* son el varón o la mujer mayor de edad (18 años) o con capacidad civil que forme pareja estable con un miembro de la comunidad o solicite ser admitido y sea aceptado por la Asamblea General; en ambos casos, si se tratase de un miembro de otra comunidad tendría que renunciar previamente a esta.

Los *comuneros calificados* deben ser mayores de edad o tener capacidad civil, tener residencia estable no menor de cinco años en la comunidad, no pertenecer a otra comunidad, estar inscritos en el Padrón Comunal y los demás requisitos que establezca el estatuto comunal (artículo 5 de la Ley). Solo los comuneros calificados tienen derecho a elegir y ser elegidos para los cargos propios de la comunidad y a participar con voz y voto en las asambleas generales, tal como expresa el artículo 6 de la Ley.

Se debe tener presente que, según el artículo 23 del Reglamento, tanto los comuneros como los comuneros integrados pueden adquirir la condición de comuneros calificados, a solicitud de parte, la cual debe ser aceptada por la Asamblea General por mayoría simple de votos de los asistentes.

Finalmente, se señala en el artículo 20, inciso e, y 50, inciso e, del Reglamento, que para ser elegido como miembro de las directivas comunales, se debe contar además con la condición de comunero *hábil* “de conformidad con los derechos y deberes señalados en el Estatuto de la Comunidad”. De ello se desprende que el estatus de comunero *hábil* solo se refiere a una situación de aptitud para ser elegido miembro de la directiva comunal, de acuerdo con lo que establezca el estatuto comunal (Espinoza 1997: 551).



Contrastando lo que dicta la legislación nacional con lo visto en nuestro estudio encontramos algunas similitudes y diferencias. Los comuneros *calificados* podrían tener correspondencia con los comuneros *activos* o *activantes* de las tres comunidades, en tanto están inscritos en el Padrón Comunal y en tanto tienen derecho a participar en la vida política de la comunidad (asambleas, elecciones, etc.). De igual modo, los comuneros *integrados* podrían ser los comuneros *yernos*, en tanto se incorporan a la comunidad siendo naturales de otro lugar. Más difícil resulta encontrar una correspondencia para los *comuneros*, a secas. De un lado, se asemejan por su descripción a los jóvenes que aún no se han inscrito en el padrón comunal pero que podrían hacerlo por haber nacido en la comunidad o ser hijos de padres comuneros, es decir, los *honorarios* o *activantes*. No obstante según la legislación, estos no tienen que residir necesariamente en la comunidad, lo cual sería imposible en las tres comunidades estudiadas. Al contrario, es cuando se posee la condición de **residente** que los comuneros deben hacer más esfuerzos por cumplir con las obligaciones con la organización comunal (asistiendo a faenas, asambleas, etc.), y lograr así ser considerado un buen candidato para la comunidad y ser admitido como comunero *activo* (o *calificado*). De este modo, observamos que la legislación establece un vínculo entre el individuo y la comunidad, basado en su procedencia (nacimiento u origen de los padres), mientras que en las comunidades de estudio, el vínculo lo establece la residencia en la comunidad y, con ello, las posibilidades de *servir* a la organización comunal. Así, existe en las tres comunidades, una categoría para definir a quien habiendo sido comunero *activo* (o *calificado*) deja de serlo por partir fuera de la comunidad, el *residente*.

Otro aspecto que cabe mencionar tiene relación con el sexo del comunero. Hemos notado que la legislación no hace referencia a la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres para obtener la categoría de comunero o comunero calificado, excepto para el caso de los comuneros *integrados*. Como hemos visto en la práctica, las mujeres encuentran dificultades para ser consideradas comuneras en cualquiera de sus formas y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Por tal razón, consideramos que la legislación debería incidir en este aspecto e impulsar así relaciones internas más equitativas.

La legislación contempla una categoría que no encontramos en las comunidades de estudio. Según la ley revisada el comunero *calificado* puede poseer además la condición

de *hábil*, lo cual le otorgaría el derecho a ser elegido miembro de la directiva comunal. Esto quiere decir que no todos los *calificados* son *hábiles*, con lo cual se complejiza la clasificación. Si bien en la práctica no encontramos esta distinción de manera explícita, los comuneros deben encontrarse al día en el pago de cuotas o de multas por inasistencia a faenas u otros para poder ejercer una serie de importantes derechos en la comunidad: posesión de parcelas entregadas por la comunidad, ser autoridad, inscribirse en el padrón comunal, ejercer el derecho al voto, etc. Este paquete de deberes y derechos son los que definen centralmente a un comunero *activo* (o *calificado*) y su incumplimiento implicaría la pérdida de dicha condición. Quizás la denominación de *hábil* pueda aplicar para un periodo en el cual el comunero activo con incumplimientos se pone al día en sus obligaciones sin dejar de ser comunero. No obstante no resulta una clasificación de mayor utilidad.

Una figura que encontramos en las tres comunidades y a la que no hace referencia la legislación es la de no-comunero. Ello quizás porque ésta otorga la condición de *comunero* aunque no haya inscripción previa en el padrón comunal. En las comunidades de estudio, en cambio, los no-comuneros son todos aquellos que –aun siendo hijos de comuneros, de haber nacido en la comunidad y de residir bajo territorio comunal- no se inscriben en el padrón comunal, siendo dispensados de los deberes y excluidos de los derechos de los demás. Finalmente, otras categorías encontradas como la de comunero *jubilado* o la de comunero *profesional* tampoco han sido consideradas por la legislación.

Hacer el esfuerzo por establecer categorías fijas y bien definidas<sup>28</sup> de comuneros frente a la enorme heterogeneidad que caracteriza a las comunidades campesinas del país resultará una tarea poco productiva. De otro lado, como hemos visto, los derechos en las comunidades podrán modificarse en función de una multiplicidad de factores pudiendo dejar obsoleta la clasificación hecha por la legislación nacional. No obstante, deben incluirse algunos parámetros amplios bajo la línea de respaldar aquello que en la práctica fortalece a la organización comunal y de contribuir a la igualdad de género en el acceso a los recursos. Un elemento central para esta tarea es considerar que las categorías de comuneros se sustentan en buena medida en la necesidad de un intercambio de bienes y

---

<sup>28</sup> Por ejemplo, tal como lo ha hecho la legislación nacional, intentar establecer el número de años de residencia para lograr ser comunero calificado, lo cual no sólo varía en cada comunidad sino que al interior de cada una de ellas es una norma poco definida y variable en función de distintos criterios. Sobre este aspecto volveremos más adelante.

servicios que garantice en último término la reproducción de la comunidad. De un lado se trata de asegurar el compromiso de los comuneros para con la organización comunal y, con ello, su disposición para distintas tareas y necesidades colectivas (expresadas en el pago de cuotas, en la participación en faenas y en asumir ciertos cargos en la comunidad), y de otro lado, de la retribución de la comunidad a través del acceso a la tierra, del soporte colectivo frente a dificultades individuales o conflictos con terceros y de la representación frente a instituciones externas para el beneficio colectivo.

## 6. PAQUETES DE DERECHOS SOBRE LA TIERRA

Tal como hemos visto en el capítulo dos, una de las propuestas conceptuales pertinentes para el análisis de los derechos sobre la tierra es la de *paquetes de derechos*.<sup>29</sup> Ésta nos permite considerar la multiplicidad de derechos que poseen las personas sobre un mismo recurso, así como la forma en la que éstos pueden modificarse en función de distintas variables y contextos, rompiendo con el esquema de derecho unitario y fijo que se maneja en el discurso tradicional. Esta teoría alternativa resulta una herramienta útil para pensar en las diversas combinaciones de derechos en la relación tierra-comunidad. En efecto, la complejidad de las relaciones que se establecen con la tierra nos impide hablar de *el derecho* de los comuneros sobre *la tierra*, sino que cada poblador poseerá un paquete de derechos distinto sobre los también diversos tipos de tierras.

Hemos elaborado algunas tablas en las que mostramos a modo de ejemplo los *paquetes de derechos* de distintos tipos de pobladores, en función de los distintos tipos de tierras vistos en capítulos anteriores. Asimismo, clasificamos los distintos derechos en función de los atributos de *uso*, *disfrute* y *disposición*, tratados anteriormente, a lo que añadimos los derechos de *acceso* a la tierra. En el siguiente cuadro, mostramos el *paquete de derechos* de un comunero activo sobre las tierras en su comunidad.

**Cuadro 6.1**  
**Paquete de derechos de un comunero activo – caso Marcopata**

		TIPOS DE TIERRAS				
		Secano/Riego - Familiares			Pastos - Colectivos	Secano-Comunales
		Zona antigua	zona nueva			
Derechos sobre la tierra		Tomadas	Distribuidas			
Acceso	Nº ilimitado de parcelas	√	X	X	-	-
	Nº ilimitado de hectáreas	√	X	X	X	X
	Por herencia	√	√	√	X	X
	Por compra	√	X	X	X	X
	Por entrega/cesión comunal	X	√	√	√	√
	Por alquiler/ al partir	√	√	√	X	√
	Por préstamo	√	√	√	X	X
	Posibilidad de pérdida de la parcela	X	√	√	-	-
Uso	Uso agrícola: decisión sobre qué sembrar, cuándo y donde.	√	√	√	X	X
	Uso de técnicas e insumos no tradicionales	√	√	√	X	X

<sup>29</sup> Este concepto desagrega los atributos de la propiedad del derecho romano – uso, usufructo, disposición – en un abanico mayor de derechos, los cuales pueden entrar en diferentes combinaciones para formar ‘paquetes’ de derechos (*bundle of rights*).

	Siembra de pastos	√	√	√	X	X
	Cerco de terrenos	√	√	√	X	X
	Construcción de inmuebles	√	√	√	X	X
<b>Disfrute</b>	Aprovechar los frutos de la cosecha, de los productos ganaderos, etc.	√	√	√	√	X
	Cobro por pastear a foráneos	-	-	-	X	-
<b>Disposición</b>	Herencia	√	√	√	X	X
	Venta interna	√	X	X	X	√
	Alquiler/Trabajo a partir	√	√	√	X	X
	Entrega a comuneros	X	X	X	X	X

**Nota:** √ = sí; X = no; - = no aplica.

Tal como es posible observar, el comunero activo no posee los mismos derechos sobre las distintas tierras de la comunidad, pudiendo incluso existir importantes diferencias entre las parcelas que trabaja de forma individual o familiar. El mismo cuadro nos ayuda también a visualizar que los derechos de uso y disfrute de las tierras son bastante más amplios que aquellos de acceso y disposición, lo cuales se encuentran en algunos casos restringidos por el colectivo. De otro lado, poniendo en comparación los derechos en función de los tipos de tierras, notaremos que las tierras de secano o riego que fueron tomadas en la zona antigua son aquellas sobre las cuales los comuneros poseen una mayor densidad de derechos.

En los dos cuadros siguientes realizamos un ejercicio similar pero comparando en cada uno los paquetes de derechos que poseen distintos tipos de comuneros sobre un mismo tipo de tierra. En efecto, cada persona o grupo puede tener distintos *paquetes de derechos*, siendo algunos más completos o dominantes que otros para las demandas o reclamos específicos sobre la tierra. Hemos escogido como ejemplo, las parcelas de uso individual entregadas por la comunidad (cuadro 6.2) y aquellas tomadas por los antiguos (cuadro 6.3) del caso de la comunidad de Marcopata.

**Cuadro 6.2**

**Paquetes de derechos en parcelas familiares:  
Tierras entregadas por la comunidad**

		Tipos de actores						
		Tipo de comunero				Mujer (no-comunera)	No- comunero	Organización comunal
Derechos sobre la tierra		Honorario	Activo	Residente	Jubilado			
Acceso	Por herencia	?	?	?	-	X	X	-
	Por compra	X	X	X	X	X	X	-
	Por entrega comunal	X	?	X	X	X	X	-
	Por alquiler/ al partir	?	?	?	?	?	?	-
	Por préstamo	?	?	?	?	?	?	-
Uso	Uso agrícola	?	?	?	?	?	?	X
	Uso de insumos y técnicas no tradicionales	X	?	?	?	X	X	X
	Siembra de pastos	X	?	?	?	X	X	X
	Cerco de terrenos	X	?	?	?	X	X	X
	Contrucción de inmuebles	X	?	?	?	X	X	X
Disfrute	Aprovechar de la cosecha, de los productos ganaderos, etc.	?	?	?	?	?	?	X
Disposición	Herencia	X	?	?	?	X	X	X
	Venta	X	X	X	X	X	X	X
	Alquiler /trabajo al partir	X	?	?	?	X	X	X
	Entrega a comuneros	X	X	X	X	X	X	?
Posibilidad de pérdida de tierra		-	?	?	X	-	-	-

Del cuadro anterior es posible observar que aquellos pobladores que poseen paquetes de derechos menos densos son las mujeres, quienes se encuentran casi en la misma posición que los *no-comuneros*. Seguidamente se encuentran los *comuneros honorarios*, quienes sólo pueden acceder a estas tierras haciendo uso de aquellas poseídas por terceros.<sup>30</sup> De otro lado, en la medida en que estos tres actores no son los titulares de la posesión última de estas tierras, sus posibilidades de uso también se ven limitadas. Finalmente, observamos que los comuneros activos poseen paquetes de derechos más densos y que los jubilados son los que en mejor situación se encuentran, en tanto son los únicos que no pueden ser desposeídos de sus tierras.

Tras observar el siguiente cuadro, notaremos una diferencia importante con lo visto en el cuadro precedente. En efecto, sobre las *tierras tomadas por los antiguos* los distintos tipos de pobladores cuentan con los mismos derechos, siendo en este caso, la organización comunal la que queda al margen en la relación con la tierra.

**Cuadro 6.3**

<sup>30</sup> A excepción de la herencia paterna, con la cual los *comuneros honorarios* dejarían de serlo, para ser *comuneros activos*.

**Paquetes de derechos en parcelas familiares:  
Tierras tomadas por los antiguos**

Derechos sobre la tierra		Tipos de actores						
		Tipo de comunero				Mujer (no-comunera)	No- comunero	Organización comunal
		Honorario	Activo	Residente	Jubilado			
Acceso	Por herencia	?	?	?	?	?	?	X
	Por compra	?	?	?	?	?	?	X
	Por entrega comunal	X	X	X	X	X	X	X
	Por alquiler/ al partir	?	?	?	?	?	?	X
	Por préstamo	?	?	?	?	?	?	X
Uso	Uso agrícola	?	?	?	?	?	?	X
	Uso de insumos y técnicas no tradicionales	?	?	?	?	?	?	X
	Siembra de pastos	?	?	?	?	?	?	X
	Cerco de terrenos	?	?	?	?	?	?	X
	Contrucción de inmuebles	?	?	?	?	?	?	X
Disfrute	Aprovechar de la cosecha, de los productos ganaderos, etc.	?	?	?	?	?	?	X
Disposición	Herencia	?	?	?	?	?	?	X
	Venta	?	?	?	?	?	?	X
	Alquiler /trabajo al partir	?	?	?	?	?	?	X
	Entrega a comuneros	X	X	X	X	X	X	X
Posibilidad de pérdida de tierra		X	X	X	X	X	X	-

De los cuadros anteriores podemos aseverar que el enfoque de paquetes de derechos para la comprensión de los sistemas de tenencia en comunidades campesinas contribuye a la comprensión de un aspecto que no siempre resulta evidente: los derechos sobre la tierra no son uniformes. Hemos tomado este enfoque para estudiar las variables internas<sup>31</sup> que inciden en la determinación de derechos sobre la tierra, identificando que éstas se encuentran relacionadas con las características de los actores pero también con las características de la tierra. En el caso de los actores jugarán un rol importante el sexo y la relación establecida entre el poblador y la comunidad, esto es, el grado de compromiso y de servicio que éste brindará a la organización comunal. Cabe señalar que dicha relación genera distintas categorías sociales (comunero activante, honorario, activo, jubilado, residente, entre otras), las cuales guardan un vínculo importante con la edad del poblador, de forma tal que podemos hablar de una tendencia en la cual los más jóvenes poseen menos derechos sobre la tierra que los adultos y, menos aún que los ancianos de la comunidad.

En relación con las características de la tierra encontramos que resulta fundamental en la definición de derechos considerar el origen de la parcela. Como hemos visto, en las comunidades de Marcopata y de Huayllay Chico –con una historia de formación que

<sup>31</sup> Tal como presentamos en la propuesta de investigación, consideramos como variables internas aquéllas que guardan relación con características que identificamos al interior de comunidad (género, edad, poder relativo en la comunidad). Como variables externas hemos considerado la relación con el mercado y la presencia de terceras instituciones en la comunidad (instituciones públicas, ONG, asociaciones, etc.).

reposa sobre una antigua comunidad de indios- la distinción entre tierras tomadas por los antiguos y aquellas que son entregadas por la comunidad define mayores y menores grados de apropiación familiar sobre la tierra, respectivamente.

La clasificación según zonas de producción es igualmente un elemento importante a considerar, en la medida en que las tierras de pastos definen menores grados de apropiación que las tierras de uso agrícola. No obstante, el *origen de la tierra* sigue siendo un elemento con el que esta clasificación debe cruzarse pues muchas veces puede resultar dominante. En el caso de Huayllay Chico, por ejemplo, existen áreas al interior de las tierras de pastos que fueron tomadas en tiempos de los antiguos y sobre las que familias poseen mayores niveles de apropiación que sobre el resto de pastizales. De igual modo, encontramos que la diferencia entre tierras de riego y de secano para la definición de derechos no resultó un factor determinante. En las dos comunidades que poseían ambos tipos de tierras (Marcopata y Huayllay Chico) los derechos familiares sobre riego y secano eran casi los mismos mientras las parcelas tuvieran un mismo *origen*, esto es, tomadas por los ancestros o distribuidas por la comunidad. El caso de Huayllay Chico resulta especialmente interesante (y complejo) ya que existen parcelas de secano tomadas por los antiguos que poseen distintos grados de apropiación. En este último caso la zona de producción se antepuso para establecer la diferencia: en las tierras de secano de la *zona alta* las familias deben ajustarse al calendario agrícola establecido por la comunidad, a diferencia de aquellas de la *zona intermedia* de secano.

En los tres casos estudiados identificamos un tercer factor relevante para la determinación de los derechos sobre la tierra: la diferencia entre las tierras adjudicadas por reforma agraria y las que la comunidad ya venía poseyendo. En efecto, como hemos visto, sobre las primeras la comunidad tiene la oportunidad de decidir en colectivo sobre su destino, lo cual otorga a la organización nuevas e importantes atribuciones de regulación. En los casos de MP y CYC, las tierras adjudicadas por la reforma derivaron –aunque con distintos matices- en formas de importante control comunal, en las que las parcelas son distribuidas a solicitud de los comuneros. En Huayllay Chico, en cambio, la mayor parte de las tierras fueron distribuidas entre algunas familias y tituladas individualmente por el PETT. De cualquier modo, las tierras adjudicadas por reforma agraria son claramente identificables por los comuneros de los tres casos estudiados y establecen diferencias en relación con otras áreas de la propiedad comunal.



Llegado a este punto dos elementos deben ser destacados. El primero es que para la identificación de los derechos sobre la tierra y para comprender el sistema de tenencia de una comunidad no es posible aislar las variables tratadas anteriormente o seleccionar sólo algunas de ellas para el análisis. Más bien, se debe hacer un esfuerzo por identificar las diferencias tanto en las características de los pobladores como en los tipos de tierras y cruzarlos para obtener el abanico completo de posibilidades. El segundo elemento es que, como se ha evidenciado en el capítulo anterior, las características centradas en los actores están vinculadas directamente con los derechos de acceso a la tierra, mientras que aquellas centradas en la tierra estarán vinculadas al grado de apropiación que establecen las familias sobre sus parcelas (uso, disfrute y disposición). De este modo, no será posible comprender ni el acceso a la tierra ni la forma de apropiación de las familias, sin analizar previamente las diferencias entre los pobladores de una comunidad y los tipos de tierras que éstos identifican en su interior.

El análisis realizado hasta el momento nos permite identificar la pluralidad de derechos que existen sobre un mismo recurso y muestra, por contraste, lo inadecuado de las concepciones tradicionales acerca de un derecho de propiedad único y uniforme. En el siguiente capítulo analizaremos una característica central del sistema de tenencia y de los derechos sobre la tierra: su carácter dinámico. Ello contribuirá a una mejor comprensión de las diferencias que es posible encontrar en el número y extensión de parcelas, entre los comuneros activos que en apariencia se encuentran bajo las mismas condiciones en la comunidad. Para poder explicarlas toman especial relevancia la historia y el poder relativo de los comuneros en su comunidad.

## 7. DERECHOS SOBRE LA TIERRA, PODER E HISTORIA COMUNAL

En esta sección de nuestro informe queremos exponer la importancia de la historia de la comunidad y del poder relativo de los comuneros en la definición de derechos sobre la tierra. Hasta el momento hemos centrado nuestro análisis en normas y derechos producidos por la comunidad en función de ciertas variables internas (género, condición del comunero, origen de la tierra, etc.). Estas normas y derechos suelen ser conocidos y aplicados de forma más o menos regular para establecer la relación entre los comuneros y la tierra. Se trata de normas que podríamos catalogar como *explícitas* ya que es posible encontrarlas fácilmente en el discurso público y porque son aceptadas por el colectivo. No obstante, existe un discurso alterno entre las familias, que trata sobre las diferencias internas, que se maneja cuidadosamente y que suele ser fuente de conflictos y tensiones. Este discurso responde a lo que llamaremos aquí las normas y derechos *no explícitos*.

Estas normas y derechos no explícitos contribuyen a una mejor comprensión de las diferencias que es posible encontrar en la comunidad en términos de número y extensión de parcelas entre comuneros que en apariencia se encuentran bajo la misma condición. Por ejemplo, en Marcopata, en donde existen normas explícitas y definidas acerca del número de parcelas que entrega la comunidad a cada comunero activo, encontramos que algunos recibieron cuatro parcelas mientras que otros recibieron siete. En efecto, detrás de un discurso comunal de igualdad para el acceso a la tierra (casos de Marcopata y Huayllay Chico) se esconden diferencias internas importantes. ¿Cómo explicarlas?

Para hacerlo, debimos indagar en la historia de cada una de las tres comunidades estudiadas, identificando los hitos que marcaron periodos distintos en cuanto a las relaciones internas y al vínculo con la propiedad comunal. Encontramos que de estos momentos surgen una serie de actores que al interior de la comunidad juegan papeles diferentes, que configuran relaciones de poder y que se posicionan de forma distinta para el acceso a los recursos. En efecto, uno de los criterios centrales que interviene de forma no explícita para el acceso a la tierra está relacionado con el poder relativo que la historia les ha conferido a algunos comuneros. En lo que sigue hacemos una revisión de estos periodos de la historia comunal y de la forma en la que intervienen en los derechos sobre la tierra.

## 7.1 La formación de la comunidad y el poder de los *antiguos*

Las comunidades de Marcopata y Huallay Chico tuvieron como origen a la *comunidad de indios* proveniente del periodo colonial o de la república temprana. Cuentan con manuscritos del S. XIX considerados como los documentos históricos que explican su origen pero que a la vez sustentan la propiedad comunal de la tierra. Estos manuscritos suelen ser testamentos de herencias de tierras pero sobre todo, relatos y resoluciones acerca de los conflictos por la tierra entre la comunidad y los pueblos vecinos. Esto nos muestra que desde los años de los ancestros existía un territorio considerado común que había que defender y, lo que es más importante, que la historia de formación de la comunidad es, a su vez, la historia de la lucha y defensa de la tierra.

Las primeras familias que conformaron estas comunidades y que lucharon en numerosos conflictos para defender el territorio comunal tuvieron la oportunidad de apropiarse de las mejores parcelas en calidad productiva y en extensiones suficientes para el buen mantenimiento de sus familias. De otro lado, sobre dichas parcelas, las familias contaban con amplios derechos, se trató de una apropiación casi total. Ello era posible debido a la menor cantidad de familias que habitaba en la zona y a una consiguiente menor presión por la tierra. Podemos referirnos a este periodo como el de *las tomas de tierras*.

Los comuneros guardan actualmente respeto por estas familias por considerarlas fundadoras de la comunidad y propietarias originarias de las tierras que ahora pertenecen al conjunto de la comunidad. A ellas se les conoce como los *abuelos*, los *ancestros* o, más comúnmente los *antiguos*. Algunas de estas familias permanecieron en la comunidad, heredando sus tierras generación tras generación y perpetuando sus apellidos en la comunidad. En otros casos, (en MP especialmente) quedan muy pocos descendientes de los *antiguos* porque la mayoría ha migrado fuera de la comunidad vendiendo sus tierras a otros comuneros.

De cualquier modo, este periodo inicial resulta en ambos casos fundamental en la medida en que se establece una relación entre antigüedad y poder que tiene efectos hasta la actualidad. Las familias que fueron llegando y asentándose posteriormente en la comunidad ya no pudieron “tomar tierras” libremente porque existía un menor número de hectáreas disponibles pero también porque se había establecido un liderazgo conformado

por los fundadores que mantenía un control sobre el territorio comunal. De esta forma, ya avanzado el S. XX, se establecía una primera diferencia entre los pobladores, en la que aquellos que llegaron después poseían menos tierras y dependían mucho más de la organización comunal para el acceso a la tierra.<sup>32</sup> De otro lado, a las familias antiguas el poseer más tierras les otorgó mayores recursos y mejores posibilidades de acceder a la educación, de vincularse con las ciudades y de establecer lazos con personas externas a la comunidad. El hecho de contar con todas estas ventajas también los hacía mejores candidatos para ocupar los cargos y conseguir el liderazgo en la comunidad. De este modo, los antiguos y sus descendientes tienen acumulado a su favor un historial de mando -y de trabajo invertido- por el desarrollo de la comunidad.

A pesar del transcurrir de los años, los descendientes de los antiguos que quedan en cada comunidad continúan conservando un liderazgo importante y poseyendo mayores extensiones de tierra y más amplios derechos de apropiación que el común de los habitantes. Estas diferencias internas producen en la población dos efectos que se encuentran en fricción pero que conviven en la comunidad: por un lado son aceptadas a modo de reconocimiento y respeto por los apellidos *antiguos* pero de otro lado producen un malestar que en ocasiones sale a relucir en las asambleas comunales. El derecho de los antiguos de poseer ciertos privilegios sobre los otros comuneros no está plenamente aceptado por aquellos que se encuentran en posición de desventaja, ni se encuentra definido en las actas o reglamentos comunales. Se trata pues de un derecho *no explícito* que, sin embargo, interviene junto con aquellos *explícitos* para el acceso y apropiación de la tierra.

En Choclococha, sin embargo, encontramos una figura muy distinta: a diferencia de las otras dos comunidades, no tiene su origen en una *comunidad de indios* ni posee una historia de formación en la que se reconozca a un grupo de familias con vínculos parentales y territoriales. El territorio que actualmente ocupa esta comunidad se ubicaba en el medio de un camino de arrieros que comunicaba a las provincias de Acobamba y Huanta, lo cual hizo de este lugar el destino de comerciantes que transitaban por esas rutas. Algunos de ellos se instalaban allí por temporadas apropiándose de las tierras libres y otros terminaron asentándose ahí. El mercado de compra y venta de tierras entre las

---

<sup>32</sup> En Marcopata, por ejemplo, esta dependencia se basaba en la entrega de tierras por la organización comunal, mientras que en Huayllay Chico, en la organización del Yupanaco (ver capítulo 5).

familias fue desde los inicios del asentamiento del poblado un mecanismo muy común para el acceso a la tierra. Las transferencias de tierras sumadas a la gran movilidad de la población generaron desde inicios del siglo XX numerosos conflictos por tierras. No hubo en la historia de Choclococha enfrentamientos colectivos o intercomunales para preservar un territorio común, sino disputas individuales por la titularidad de las parcelas. De este modo, en Choclococha no hubo familias *notables* o de líderes comunales que defendieran la propiedad de la tierra, tampoco ha existido en Choclococha un grupo de poder que produzca diferencias en el acceso a la tierra.

De esta forma, en Choclococha, la acumulación de tierras por algunas familias era posible mientras unas tuvieran mejores condiciones económicas que otras para comprarlas. En efecto, este sistema más propio de las relaciones de mercado y de la propiedad privada ha continuado operando en Choclococha hasta la fecha en casi toda la extensión de tierras agrícolas.

Recordemos, de otro lado, que Choclococha está conformada por tres poblados – Choclococha, Yanacocha y Chilcapite - que poseían organizaciones independientes. La comunidad de Choclococha se forma ante la necesidad de los tres poblados de ascender formalmente a una categoría política que los ubicara en mejor posición frente al Estado. Así, con el reconocimiento de la comunidad lo que se produce es la unión de tres poblados relativamente autónomos, así como la convivencia de un esquema comunal importado con un esquema privado de organización y tenencia de la tierra. De este modo, la organización comunal (junta directiva y asamblea Choclococha, Yanacocha y Chilcapite) fue una creación artificial y sus líderes difícilmente contaron con un reconocimiento colectivo.

## **7.2 La Reforma Agraria y la reconfiguración de liderazgos**

Hasta el momento nos hemos referido a un periodo que corresponde a una antigua etapa de formación de las comunidades y de sus liderazgos. Pero en los tres casos estudiados encontramos una etapa posterior que marcará diferencias importantes entre sus pobladores y en el acceso a la tierra. Este periodo se inicia en la década del 70, cuando gracias a la Reforma Agraria las comunidades ven la oportunidad de anexar a su

propiedad predios pertenecientes a las haciendas colindantes afectadas. Revisemos brevemente cada caso.

En el caso de Huayllay Chico las tierras de la antigua hacienda pasaron primero a conformar una Sociedad Agrícola de Interés Social (SAIS) en la que trabajaban los antiguos peones de la misma hacienda. Ya en los años 80, luego de la disolución de la SAIS uno de los predios afectados fue otorgado a Huayllay, pero el Estado nunca otorgó un documento en el que constara un derecho de propiedad sobre la tierra. Durante un largo periodo la comunidad mantuvo este predio como tierra comunal en donde se realizaban faenas colectivas, no obstante, ante la falta de formalización de su propiedad, las comunidades colindantes de Huayllay Grande y Ocopa empezaron a reclamar las tierras. La amenaza que significaba prolongar los conflictos con los vecinos impulsó a un grupo de líderes *antiguos* y a autoridades de la comunidad a gestionar un título formal de propiedad con el Estado. Un primer intento se realizó en el año 1990, en el que el Ministerio de Agricultura elaboró un proyecto de adjudicación definitiva del predio a favor de la comunidad. Sin embargo, el proyecto nunca llegó a concretarse. Finalmente en el año 1998, el proceso de titulación individual favorecido por el gobierno de Alberto Fujimori abordó nuevamente el problema de dicho predio. Lo que se ofrecía no fue, sin embargo, la anexión del predio a la propiedad comunal sino la parcelación y titulación individual de las nuevas parcelas. El resultado fue una distribución desigual de la tierra: algunos recibieron más que otros y a algunos no les tocó nada.

El caso de Marcopata es particular debido a que las tierras que obtuvieron de la hacienda vecina habían pertenecido originalmente a la comunidad. En efecto, una porción importante del territorio de la comunidad<sup>33</sup> fue “comprada” por la propietaria de la hacienda cuando una grave crisis alimentaria obligó a la comunidad a rematar las tierras a cambio de sacos de maíz para la población. Desde entonces, hasta la Reforma Agraria, las tierras permanecieron bajo dominio de la hacienda y eran trabajadas por los peones que vivían al interior de la misma. A fines de los años 70, incentivados por los funcionarios del Sistema Nacional de Movilización Social (SINAMOS)<sup>34</sup>, un grupo de comuneros líderes y

<sup>33</sup> Aproximadamente dos tercios de la totalidad del terreno.

<sup>34</sup> El SINAMOS fue creado en 1972 por el Gobierno de las Fuerzas Armadas del General Velasco y tenía por finalidad lograr la consciente y activa participación de la población nacional en las tareas que demandase su Plan de Desarrollo Económico y Social. Algunas de las tareas que le asignaron fueron la organización y capacitación de la población, la promoción del desarrollo de entidades de interés social y el fomento del diálogo entre el Gobierno y la población.

autoridades decidió recuperar las tierras que habían perdido en las primeras décadas del siglo XX. La historia de la lucha por la recuperación de las tierras no fue, sin embargo, sólo con los propietarios de la hacienda sino también con los yanaconas que vivían en ella. Una porción importante de los trabajadores de la hacienda vio también, con la Reforma Agraria, la posibilidad de obtener las tierras de las que eran trabajadores. Cuando la comunidad inicia la contienda por la recuperación de las tierras encontró entonces doble resistencia; en efecto, la percepción de muchos líderes es que el juicio que tuvo que llevarse a cabo se dio tanto con los hacendados como con sus yanacunas. Luego de dos años y medio de juicio, un nuevo panorama que modificaba las relaciones sociales y políticas en la zona quedaba configurado. Podemos señalar la siguiente sucesión de hechos: la comunidad de Marcopata logró recuperar las tierras de la hacienda con lo cual se dio una distribución de la tierra entre sus miembros, dirigida por los líderes comunales. Aquellos yanaconas que apoyaron a la comunidad durante el proceso se incorporaron a ella y la comunidad, a cambio, les ofreció una porción de tierra como reconocimiento a su apoyo. Aquellos yanaconas que habían hecho frente a la comunidad formaron un pequeño grupo campesino (Checche) con una pequeña porción de tierras de la hacienda.

En el caso de Choclococha, entre los años 1977 y 1979 las autoridades comunales gestionaron la adjudicación de dos predios colindantes afectados por la reforma agraria. Durante ese periodo se produjo un enfrentamiento entre los comuneros y los peones de las ex haciendas que apoyaron a sus patrones a cambio de verse beneficiados con un pedazo de tierra. Luego de estos sucesos, el presidente de Choclococha fue encarcelado acusado de homicidio. Prosiguió un juicio en el cual la comunidad apoyó a su presidente solventando los gastos que esto implicaba. Finalmente los predios le fueron adjudicados a Choclococha, convirtiéndose en tierras comunales cuyo uso debía revertir en beneficio de toda la colectividad. A pesar de no haber existido en Choclococha familias de notables, el episodio vivido con la adjudicación de tierras estableció dos cambios importantes en la comunidad. El primero fue que se creó por primera vez un importante terreno de uso agrícola que se encontraba bajo el control directo de la organización comunal.<sup>35</sup> El segundo cambio producido fue que se generó una diferencia importante al interior de la comunidad entre quienes participaron del proceso de adjudicación de tierras y quienes no

---

<sup>35</sup> Ello implicó que la comunidad de Choclococha desarrolle rápidamente una serie de normas y de mecanismos de control antes inexistentes. Surgieron de ello, las faenas agrícolas colectivas, la distribución de una parcela por familia, el manejo de un padrón de parceleros, la estipulación de cuotas anuales, entre otras normas.

lo hicieron. A pesar de que, en principio, la adjudicación sería para el conjunto de la comunidad, sólo participaron en el proceso de adjudicación las familias de Choclococha. La abstención de Yanacocha y Chilcapite en la lucha por la tierra produjo a su vez su exclusión del proceso redistributivo de las tierras nuevas.

Lo que observamos de los tres casos revisados es que, luego del proceso de adhesión o recuperación de predios, no sólo quedaba reconfigurada la distribución interna de tierras sino también la composición social de los miembros de cada comunidad, pronunciándose las antiguas diferencias internas. De este modo, en Huayllay Chico, se reafirman los liderazgos de las familias de *antiguos* que defendieron los predios -entonces de uso comunal- en momento de conflicto y cobran especial importancia aquellas nuevas familias que gestionaron la titulación con el Estado.<sup>36</sup> Frente a ellos se encuentran las familias comuneras que no intervinieron directamente en este proceso y, por debajo de la escala social se ubicarán aquellos ex trabajadores de la hacienda que se adhirieron a la comunidad. De forma similar, en MP cobran importancia y poder el grupo de familias que lideró el juicio –entre las cuales algunas eran descendientes de los antiguos pero otras eran nuevas en la comunidad- para la recuperación de las tierras comunales. Frente a ellos se encuentran las familias del común y, muy por debajo, los ex peones de la hacienda vecina. En Choclococha, fueron solo las dos autoridades centrales las que se diferenciaron del resto acentuando su liderazgo y reconocimiento en la comunidad. En esta comunidad, más bien, las diferencias importantes se establecieron a nivel de los poblados que la conforman, acrecentándose los celos de Yanacocha y Chilcapite hacia la protagonista de la lucha por las tierras adjudicadas: Choclococha. Ahora bien, ¿cómo se expresó esto en el acceso y la apropiación de la tierra?

Las diferencias generadas en el acceso y apropiación de la tierra luego de este proceso pueden entenderse de la siguiente manera: a mayor participación en la defensa de las tierras, mayores derechos sobre las mismas. En efecto, en Marcopata los nuevos líderes obtuvieron un mayor número de parcelas que el resto de comuneros en la repartición de tierras. En el siguiente recuadro podemos observar un ejemplo de ello.

<b>Acceso a la tierra y poder en la comunidad – Caso Marcopata.</b>
---

---

<sup>36</sup> Muchas de estas familias contaron con la ayuda de algunos comuneros residentes de Lima para las gestiones de titulación.



**Lucho Mallqui** (48), actual registrador civil de Marcopata y perteneciente a una de las familias más importantes de la comunidad -tanto por antigüedad como por liderazgo durante los tiempos de la Reforma Agraria- posee un total de ocho parcelas, de las cuales seis son tierras entregadas por la comunidad y suman 2,4 ha. Asimismo, **Juan Meza** (42), proveniente de una familia líder en tiempos de Reforma, posee un total de 13 parcelas, de las cuales siete son tierras entregadas por la comunidad y suman 1,25 ha.

Del polo opuesto, se encuentra **Demetrio Mauricio** (40), comunero descendiente de una familia ex trabajadora de la hacienda vecina, posee un total de 5 parcelas, de las cuales ha recibido cuatro de la comunidad y que suman un total de 0,5 ha. Igualmente, **Víctor Quispe** (51), él mismo ex trabajador de la hacienda, recibió de la comunidad un total de 4 parcelas que suman 0,38 ha y no posee otras parcelas adicionales.

Los casos del recuadro anterior ejemplifican el modo en el que los derechos de los comuneros para el acceso a la tierra se vinculan a factores que siendo internos no son explícitos. Recordemos que en Marcopata existe una norma que dicta que cada comunero sólo tiene derecho a 4 parcelas distribuidas por la comunidad, la cual se mantiene invariable hasta la fecha en el discurso de comuneros y autoridades. En cambio, no es posible recoger del discurso actual la existencia de derechos diferenciados en función de roles asumidos –y de poder atribuido- hace más de 30 años atrás. En efecto, las familias son conscientes de las diferencias y las asumen. Se trata pues de derechos no explícitos que surgen y se entienden al analizar contextos sociopolíticos específicos. De otro lado, se trata también de derechos que no se encuentran bien definidos, lo cual hace imposible encontrar una uniformidad en los casos. Esto es posible al observar que las diferencias que existen entre Lucho Mallqui y Juan Meza son también amplias.

En Huayllay Chico las diferencias producidas tras la titulación del predio afectado fueron aún más extremas: i. Sólo se repartieron tierras entre las familias *notables* y aquellos que participaron directamente en el proceso de titulación,<sup>37</sup> por lo cual buena parte de la población quedó totalmente excluida de los beneficios. ii. Aquellos que fueron ex trabajadores de la hacienda no sólo no recibieron parcelas sino que fueron obligados a dejar las pequeñas chacras que ya venían trabajando hacia años atrás. iii. Al poseer los nuevos propietarios un título individual refrendado por el Estado, la comunidad perdió todo poder sobre dichas parcelas, las familias se encontraron libres de la presión comunal y obtuvieron derechos de apropiación absolutos sobre sus tierras. A pesar de estas

---

<sup>37</sup> Principalmente los representantes de la directiva comunal.

diferencias, algunos comuneros entrevistados valoran el hecho de que el predio haya finalmente quedado fuera del alcance de las comunidades vecinas: “los *abuelos* lo hicieron defender y ganaron”. De este modo, la obtención de la titulación definitiva del predio puede percibirse como un logro en la defensa de la tierra que es luego recompensado con la entrega de parcelas, aunque ello no haya significado un beneficio para todos. No obstante, hubo también muchas críticas sobre la forma en la que se llevó a cabo la distribución de tierras y hasta la fecha algunos comuneros piden que se haga una nueva repartición más justa. Ello, sin embargo, ya no depende más de la organización comunal.

Finalmente, en CYC, solo los comuneros de Choclococha se vieron beneficiados y las familias de Yanacocha y Chilcapite nunca hicieron reclamos para el uso de los predios adjudicados. Al igual que los casos de Huayllay Chico y de Marcopata, de forma no explícita es aceptada una norma según la cual la tierra es de quien ha luchado por ella. En este caso, sin embargo, es interesante añadir que recientemente dos comuneros que han tenido un acercamiento a la legislación oficial vienen reclamando a la organización comunal su derecho a recibir una parcela de la zona adjudicada, bajo el argumento de que la propiedad es de la comunidad lo cual incluye a los tres poblados y no sólo a uno de ellos. Por su parte, las dos autoridades que asumieron el rol más activo en la lucha por la tierra se beneficiaron más que el resto de comuneros en el momento de la distribución de tierras. Ellos recibieron no una sino dos parcelas y, además, se encuentran exonerados de pagar las cuotas anuales que la comunidad exige a todas las familias usufructuarias de estas tierras.

### **7.3 Derechos permeables y variables sobre la tierra**

Los episodios atravesados por estas tres comunidades nos demuestran que existen una serie de derechos sobre la tierra que están vinculados al poder relativo de un individuo -o grupo de individuos- frente a los otros comuneros de su comunidad. Estos derechos pueden contar con distintos grados de aceptación en función de cada contexto pero pueden eventualmente ser puestos en cuestión y generar fricciones al interior de la comunidad. De otro lado, estos derechos son más difíciles de categorizar e inscribir en esquemas de paquetes de derechos, tal como hicimos en el capítulo anterior, ya que son producto de situaciones particulares o de negociaciones que no suelen determinar

derechos regulares. No obstante, suelen interferir en los derechos explícitos haciendo que las fronteras que delimitan los paquetes de derechos de uno u otro individuo puedan tornarse borrosas o tomar formas distintas en una u otra circunstancia. De este modo, podemos decir que los derechos sobre la tierra no son rígidos ni constantes sino permeables y variables.

El enfoque de *campo de fuerzas* desarrollado en el planteamiento teórico es particularmente útil para explicar esta situación. Como hemos visto, los campos de fuerza son los espacios de lucha entre actores por determinados recursos, en los que se desarrollan reglas del juego que no llegan a ser ni formales ni fijas.<sup>38</sup> Este campo de fuerzas se ubica en el seno de la comunidad, en donde interactúan la organización comunal, las familias con sus distintos grados de poder, los individuos diferenciados por edad y por género, todos alrededor del acceso y el usufructo del recurso tierra. Este campo de fuerzas tiene su propia lógica, en la cual es posible encontrar algunas regularidades que devienen en reglas explícitas y aceptadas por el colectivo. Por ejemplo, las tierras inicialmente *tomadas por los antiguos* han producido derechos explícitos de apropiación al punto que la tierra se utiliza, se aprovecha y, incluso, se hereda sin ninguna restricción. Otras reglas, como los años de *servicio* a la comunidad que debe cumplir un joven o un yerno para el acceso a la tierra, están menos reguladas y por tanto entran en conflicto con otras –como el poder relativo de estos jóvenes en su comunidad–, encontrándose en el campo de fuerzas.

El análisis realizado nos permite observar que en Choclococha algunas de las normas producidas se encuentran menos definidas que en MP y Huayllay Chico. Por ejemplo, las autoridades entrevistadas en Choclococha difícilmente coincidieron en elementos como el periodo de prueba para los yernos, la edad de los jubilados, la participación de las mujeres en la organización comunal, la posibilidad de vender parcelas a personas foráneas, la contribución de los honorarios, el pago de multas por ausencias a faenas, etc. Las normas producidas constituyen, más que mandatos rígidos, un marco para la negociación de derechos en función del cual las autoridades –y en algunos casos la asamblea– toman decisiones que pueden ser variables en función de cada autoridad, de cada implicado o del contexto particular por el que atraviese la comunidad. Así, los derechos no pueden ser estáticos, sino que varían en función de contextos tanto internos

---

<sup>38</sup> Cf. Nuijten Monique y Lorenzo, 2006.

como externos, en un campo de fuerzas en el que el dinamismo es la característica central.

En los campos de fuerza es posible identificar tanto las regularidades como los campos de conflicto y tensión.<sup>39</sup> Notamos que en los conflictos se evidencia el modo en el que entran en juego la multiplicidad de normas y derechos para defender el acceso y la apropiación de la tierra. Citamos como ejemplos, en el siguiente recuadro, los casos de Juan Osore y Lucho Mallqui (MP).

#### **Conflicto, negociación y derecho a la tierra**

La comunidad de MP alertó a Juan Osore (41), comunero del anexo de Marco, por tener más de cuatro parcelas entregadas por la comunidad. Juan corría el riesgo de perder una de ellas y no encontró ninguna norma explícita para mantenerlas en su poder. De otro lado, Juan no había ocupado cargos públicos ni provenía de una familia con poder en la comunidad como para recurrir a uno de estos criterios. El conflicto se solucionó cuando Juan decidió asumir una responsabilidad importante en la comunidad: La contratación de varios días de banda para la fiesta de aniversario de la comunidad. De este modo, Juan hizo crecer su récord como comunero y logró negociar con la organización comunal los derechos a mantener las tierras que ya venía poseyendo.

En la misma época, algunas familias cuestionaron el número de parcelas y hectáreas que poseía Lucho Mallqui, en vista de que en ese entonces asumía la función pública de regidor de la Municipalidad del distrito y no necesitaba tantas tierras para trabajar. Este comunero proviene de una de las familias más poderosas de la comunidad y posee casi 5 hectáreas de tierra. El problema se resolvió en una Asamblea, cuando los comuneros *antiguos* argumentaron que Lucho tenía el derecho de mantenerlas ya que se trataba de tierras *antiguas* –lo cual no era enteramente correcto- y que, por tanto, eran tierras *propias*. En este caso la negociación fue más sencilla: los actores en juego tenían poderes desiguales y se recurrió a una norma aceptada y explícita, difícilmente rebatible por la comunidad.

Cabe señalar que la escasa definición de normas en Choclococha no implica, sin embargo, que existan mayores conflictos por el acceso y uso de la tierra. Probablemente, incluso, este sistema resulte el más eficiente para la regulación de derechos sobre la tierra en esta comunidad. Esto puede explicarse -entre otras razones- debido a que en Choclococha frente a una mayor debilidad de la organización comunal, resulte más difícil llegar a establecer normas específicas de control comunal que a deliberaciones particulares. Como hemos visto, Choclococha carece de liderazgos tradicionales debido a

---

<sup>39</sup> Cf. Nuijten Monique y Lorenzo, 2006.

que su formación reposa sobre la unión de tres poblados conformados, a su vez, por familias de escasa tradición comunal y de organización colectiva. De otro lado, buena parte de los líderes de tiempos de reforma agraria migraron hacia las ciudades a consecuencia de la violencia política o en búsqueda de mejores condiciones de vida. De esta forma, la comunidad de Choclococha como organización no posee la fortaleza suficiente como para establecer normas duraderas y reconocidas por el colectivo. Resulta paradójico que uno de los efectos frente a esta situación sea la mayor importancia que recae sobre la figura del presidente de la comunidad para las distintas deliberaciones y para marcar el dinamismo de la comunidad, incluso más allá de la producción de normas.

Queremos recalcar que este enfoque pone de relieve la necesidad de tomar en consideración la historia y los contextos sociopolíticos. Recordemos que, tal como hemos visto en el capítulo dos, éstos configuran relaciones sociales y estas últimas se ven expresadas en las relaciones de propiedad. En el análisis que hemos realizado para las tres comunidades de estudio comprobamos la pertinencia de esta aproximación identificando dos momentos centrales que definen y otorgan derechos particulares a las personas sobre la tierra. No obstante, otros procesos se vienen desarrollando en los últimos años que podrían –aunque de forma aún no muy evidente– producir nuevas demandas y normas sobre la tierra en cada comunidad.

#### **7.4 Procesos en curso y nuevas fuentes de poder**

En efecto luego de las etapas de reconfiguración interna atravesadas por las tres comunidades con la adjudicación y redistribución de tierras podemos identificar dos procesos centrales que podrían tener paulatino impacto sobre sus sistemas de tenencia. El primero tiene relación con la progresiva pérdida de importancia de la organización comunal frente a la población joven, en su función de garantizar la subsistencia familiar a través del control y reparto de algunos recursos, como la tierra. En Marcopata y Huayllay Chico, los comuneros señalan que las tierras son cada vez más escasas y, en los tres casos estudiados, que los jóvenes tienen cada vez mayores problemas para acceder a nuevas parcelas. Ello se expresa en el creciente número de jóvenes que deja de inscribirse como comunero, que se dedica a actividades no agropecuarias y que migra –especialmente aquellos con mayor nivel educativo– hacia las ciudades. Así, resulta cada

vez más difícil encontrar jóvenes o nuevos líderes que quieran ocupar los cargos comunales.

El interés por ser autoridad se ha trasladado en cambio hacia otros espacios, con ello guarda relación el segundo proceso que hemos observado: El acercamiento de los líderes a la vida política distrital y el interés de sus pobladores en la municipalización. Este proceso de partida doble tiene como elemento en común el valor que se le otorga al espacio municipal y, con ello, al establecimiento de vínculos con el Estado y con la administración de recursos –y servicios- públicos para el beneficio comunal. Especialmente en Choclococha y Marcopata, ha habido en los últimos 15 años un aumento de la presencia del Estado tanto con programas y proyectos sociales, como con la participación de la población en la política local. En Marcopata, algunos comuneros ya han ocupado cargos públicos como regidores de la municipalidad distrital, mientras que en Choclococha un comunero que fue hace pocos años alcalde del Centro Poblado de Choclococha es actualmente el alcalde del distrito. De otro lado, en Choclococha, existe desde la década de los 80 una fuerte pugna entre los tres poblados que la conforman por convertirse en capital de distrito ante el logro eventual de su distritalización.<sup>40</sup> Por su parte, en Huayllay existe un fuerte interés por convertirse en Municipalidad de Centro Poblado, lo que los ha obligado a fortalecer los vínculos con los comuneros residentes, incentivándolos a empadronarse como comuneros y mantener así la cuota de habitantes necesaria para ser centro poblado.

De este modo, aunque los liderazgos tradicionales se han mantenido vigentes, comienzan a observarse nuevos espacios y criterios para determinar el poder. Los comuneros que empiezan a vincularse a las municipalidades locales pueden empezar a sustituir en liderazgo a aquellos que se vinculen a la organización comunal. De otro lado, la institución municipal con presencia en la comunidad podría también empezar a reemplazar a la comunidad en algunas de sus funciones tradicionales cobrando mayor importancia para el colectivo. Este, sin embargo, es un proceso aún incipiente que debe ser abordado en estudios específicos sobre el tema. De otro lado, consideramos que no se puede pretender encontrar en todos los casos una misma tendencia. De lo observado en nuestro estudio, por ejemplo, notamos claramente que en Marcopata y Choclococha -ambas

---

<sup>40</sup> A pesar de la antigüedad de este conflicto, hasta la fecha solo el pueblo de Choclococha ha dado un paso adelante logrando su reconocimiento como Centro Poblado.

comunidades con centro poblado- existe una importante diferencia: en Marcopata a diferencia de Choclococha, la institución comunal cuenta con mayor legitimidad y poder que la municipal. En cualquier caso, estos procesos en curso, configurarán paulatinamente nuevas relaciones entre los actores de la comunidad y, con ello, nuevas formas de reclamar los derechos de propiedad.

Finalmente, queremos señalar que otros procesos externos –más allá de la determinación de poder o liderazgo entre sus miembros- pueden generar cambios importantes en la forma de tenencia de la tierra comunal. La mayor presencia de proyectos del Estado o de ONG y los cambios en la legislación y políticas nacionales vinculadas a la propiedad de la tierra y a las comunidades campesinas son algunas de ellas. En el capítulo 9 abordaremos algunos de estos aspectos.

## **8. MERCADO Y DERECHOS DE PROPIEDAD**

Una de las hipótesis de la investigación vinculaba el grado de integración del mercado a los derechos de propiedad sobre la tierra. El estudio no llega a conclusiones firmes; para hacerlo, hubiese sido necesario estudios más detallados y durante un período mayor, dado que estos cambios pueden ocurrir en procesos largos y no son obvios.

Ya determinar el grado de ‘involucramiento’ de la economía comunal y de las familias comuneras con el mercado puede ser una tarea compleja. Simplificando, este involucramiento puede ser en el mercado de factores: tierras, trabajo y capital, y en el mercado de productos.

### **8.1. Mercado de productos**

Que las comunidades están vinculadas al mercado es un hecho establecido y estudiado. Figueroa (1981: 131) encontró que a fines de la década de 1970 aproximadamente la mitad de los ingresos totales de la familia campesina en la sierra sur provenía de su propia producción y la otra mitad era intercambiada con el mercado (incluyendo la producción agraria, pecuaria y una gama de productos no agropecuarios como artesanías y construcción). No sólo la economía campesina estaba integrada al mercado, sino “Como quiera que el sistema de precios se modifica como consecuencia, entre otras cosas, de cambios en políticas macroeconómicas, controles de precios, precios internacionales, es claro que la economía campesina está integrada a la economía nacional e internacional”. (1981: 132). Más de una década después, Efraín González (1994: 331) concluía, matizando los hallazgos y las conclusiones de Figueroa, que “La principal causa de la pobreza y de las limitadas posibilidades de desarrollo campesino se encuentra en su débil articulación e integración en los mercados de bienes y factores rurales y regionales...”. Estas limitaciones son que “venden poco, no muy lejos de donde viven, sus productividades son bajas y su mano de obra es poco calificada. Es decir su oferta es limitada e inelástica y la demanda por sus bienes y trabajo no es muy grande en los mercados regionales en donde participan.”

A pesar de que Huancavelica es una de las regiones del país con mercados menos desarrollados, las comunidades destinan una importante parte de su producción agrícola y pecuaria a la venta. Así, la mayor relación de las familias comuneras con el mercado es a



través de la venta de sus productos y la adquisición de insumos para el proceso productivo y de bienes de consumo importados de fuera de la comunidad. La compra y venta es el modo de intercambio predominante; el trueque es casi inexistente. Ello revela que las relaciones de las familias con la economía regional (para la adquisición de alimentos complementarios y de otros bienes de consumo) son básicamente mercantiles (monetarizadas). Sin embargo, como suele ocurrir en las economías campesinas que comparten recursos naturales similares, su producción es relativamente homogénea y no favorece un mayor desarrollo del mercado agrícola. Este hecho había sido notado ya por Efraín González. Como se muestra en el cuadro 8.1, las tres comunidades tienen cinco cultivos comunes: maíz, habas, cebada, papa y arveja.<sup>41</sup>

**Cuadro 8.1**  
**Destino de la producción por cultivo**  
**(campaña 2005-2006)**  
**Porcentajes**

<b>Cultivo</b>	<b>Huayllay Chico</b>		<b>Marcopata</b>		<b>Choclococha-Yanacocha-Chilcapite</b>	
	<b>Venta (%)</b>	<b>Autocónsumo (%)</b>	<b>Venta (%)</b>	<b>Autocónsumo (%)</b>	<b>Venta (%)</b>	<b>Autocónsumo (%)</b>
<b>Maíz</b>	18	67	47	46	58	9
<b>Habas</b>	15	52	75	11	50	10
<b>Cebada</b>	14	71	4	79	24	31
<b>Papa</b>	0	74	79	11	60	32
<b>Arveja</b>	0	47	90	10	85	4
<b>Trigo</b>	0	81	-	-	-	-
<b>Olluco</b>	-	-	88	2	-	-
<b>Frejol</b>	-	-	-	-	20	-

Sin embargo, como lo muestra el cuadro, hay importantes diferencias en la relación producción autoconsumida y producción vendida. Las familias de las comunidades MP y CYC venden la mayor parte de su producción agrícola, mientras que en Huayllay Chico la mayor parte de la producción es autoconsumida. En consecuencia, los ingresos monetarios provenientes de la venta de productos agrícolas en las dos primeras comunidades son obviamente superiores a los de Huayllay Chico.

<sup>41</sup> Ver más detalles en recuadros al final del capítulo.

La vinculación al mercado de productos condujo a que en Marcopata las tierras de cultivo de secano que son de uso comunal terminen siendo alquiladas a familias comuneras. Este cambio, ocurrido en los últimos diez años, se debió, según los entrevistados, a las imprevisibles variaciones de los precios de los productos extraídos de esas tierras (los ingresos generados por la venta iban directamente al fondo comunal). Ello significaba una incertidumbre sobre el monto de los ingresos que la comunidad recibiría. En contraste, alquilando las tierras, se puede prever con precisión cuál será el ingreso para la comunidad, pues son las familias las que asumen el riesgo. Por esta razón la comunidad decidió alquilar estas tierras.

En Huayllay Chico la mayor parte de los ingresos monetarios de las familias provienen de la venta de ganado.<sup>42</sup> Ahora bien, un examen más detallado de la información recogida indica grandes diferencias entre las familias en el stock de ganado. Los ingresos de las familias que tienen ganado vacuno – el 30% de las familias entrevistadas – son bastante mayores que las que no lo tienen. La información recogida en las otras dos comunidades indica también que hay importantes diferencias en la cantidad y tipo de ganado que tienen las familias, aunque en éstas el peso de los ingresos provenientes de la ganadería es menor, respecto de aquellos provenientes de la producción agrícola, que en Huayllay Chico. En síntesis, en las tres comunidades el nivel económico de las familias y el grado de integración al mercado de bienes puede ser muy desigual, lo cual ya se había podido apreciar con relación a la desigual distribución de las tierras entre ellas en las tres comunidades.

---

<sup>42</sup> Según Escobal, Saavedra y Torero (1998), los aumentos en el hato ganadero son muy importantes para no caer en la pobreza, junto con el nivel y aumento en educación, la experiencia laboral, la reducción del tamaño de la familia y las mejoras en el acceso a agua potable.

**Cuadro 8.2**  
**Tenencia de ganado e ingresos por su comercialización**

<b>Tipo de ganado</b>	<b>Huayllay Chico</b>		<b>Marcopata</b>		<b>Choclococha Yanacocha Chilcapite</b>	
	<b>Familias con ganado %</b>	<b>Ingresos por venta de ganado S/.</b>	<b>Familias con ganado %</b>	<b>Ingresos por venta de ganado S/.</b>	<b>Familias con ganado %</b>	<b>Ingresos por venta de ganado S/.</b>
<b>Vacuno</b>	30	1.933	19	1.400	47	1.105
<b>Equino</b>	20	430	--	--	6	500
<b>Porcino</b>	30	170	19	313	12	145
<b>Ovino</b>	40	98	13	240	12	310
<b>Caprino</b>	30	75	6	160	--	--
<b>Av. corral</b>	10	20	--	--	6	20
<b>Cuyes</b>	30	24	--	--	6	40

La desigual distribución de recursos entre las familias comuneras ha sido objeto de atención hace ya varios años. Hace más de cuatro décadas José Matos Mar (1976: 204) daba cuenta de ello:

“la homogeneidad interna de las comunidades y la aparición de una estratificación social, basada en la desigual apropiación de los recursos comunales, se agudiza desde mediados del siglo pasado, por el impacto del mundo capitalista que introdujo, entre otros, cambios de cultivos, alteración en la rotación de las tierras agrícolas y el trastorno de los sistemas de trabajo comunal. “

César Fonseca (1988: 168) atribuía el origen de esta diferenciación “en las diversas modalidades de manipulación de las relaciones de reciprocidad [cargos civil-religiosos, trueque de productos, la minka, etc.] por sectores de campesinos acomodados”, es decir, a la extracción de la plusvalía de los más pobres por vías diferentes a las del mercado. Efraín González de Olarte (1994: 180) es más enfático al precisar que son tres los factores que producen las diferencias internas en la comunidad: complejos procesos de herencia vinculados con el ciclo de vida de cada familia, la capacidad de ahorro en recursos (tierras, ganado, capital comercial o educación de los hijos, y comportamientos ‘gorreros’ (*free riders*) e ilícitos que se producen entre familias campesinas (usurpación de tierras, robo de ganado o bienes duraderos, etc.). Richard Webb (1975: 38) generaliza al mundo rural la existencia de la estratificación socioeconómica: “La masa uniforme de pobres, distribuida a lo largo de un nivel de ingresos de subsistencia, es una abstracción

estadística. Lo cierto es que la sociedad rural está compuesta por muchas pirámides sociales pequeñas y separadas, cada cual con su propia mezcla de pobres y ricos”.

## **8.2. Mercado de tierras**

### *Compra y venta*

Se ha visto en diferentes partes de este trabajo que, al interior de las tres comunidades, existen transferencias de tierras, incluyendo su compra y venta. Este mecanismo de transferencia puede ser muy importante: en la comunidad CYC, de un total de 132 parcelas de 17 entrevistados, el 37% fueron adquiridas de este modo (contra el 34% por herencia y el 22% por otras vías, que incluyen alquiler, al partir y préstamos). En Huayllay Chico las parcelas que se compran y venden son aquellas dejadas por los emigrantes, sobre todo aquellos que abandonan la comunidad definitivamente.

La mayor parte de estas transferencias se realizan entre comuneros mismos y sólo bajo ciertas condiciones se venden a terceros. Para los efectos de explicar estas condiciones consideremos que hay dos tipos de tierras: aquellas que son de la comunidad desde antes de la reforma agraria – tierras ‘antiguas’ y aquellas que recibieron por la reforma agraria – tierras ‘nuevas’. Entre las primeras, como se ha dicho ya, existen las áreas comunales y las áreas familiares. Sobre estas últimas las familias comuneras tienen derecho de uso, usufructo y disposición. De hecho, la compra y venta de tierras entre comuneros es bastante común, *pero* no pueden venderlas a terceros (compradores fuera de la comunidad). Es decir, los derechos de las familias son similares a los de la propiedad privada contemplada en el Código Civil, a excepción de esta última y muy importante limitación. Las tierras antiguas están, por tanto, excluidas del mercado de tierras.

En cambio, las familias no tienen derechos sobre las tierras nuevas: éstas son administradas por la comunidad. No sólo no se venden a terceros sino tampoco se entregan a las familias.

La excepción es Huayllay Chico. En esta comunidad las tierras nuevas fueron distribuidas entre las familias. Pero esto fue así porque intervino directamente el PETT. En efecto, en

1995 el PETT otorgó títulos privados a las familias sobre las tierras que habían sido adjudicadas por la reforma agraria a la comunidad. Con este acto, la comunidad dejó de tener cualquier derecho sobre esas tierras, las que pueden ser transferidas a terceros si así lo decidieran las familias propietarias.

En cuanto a las tierras antiguas, hemos visto que no pueden ser transferidas a terceros. Pero aquí también hay una excepción en la comunidad CYC, en donde se han vendido parcelas familiares a terceros, aunque en contados casos. Aquí la explicación puede encontrarse en el hecho de que esta comunidad es, para muchos efectos, más parecida a una asociación de pequeños agricultores (o más bien a *tres* asociaciones) que a una comunidad. Recordemos que esta comunidad se creó en la década de 1960 por la decisión de pequeños agricultores de acogerse a la figura de la comunidad por las ventajas que esta ofrecía. Por consiguiente, puede esperarse que en CYC es más débil el sentido de que las tierras de las familias son parte de un territorio sobre el que la comunidad, como institución, tiene la ‘soberanía’ en última instancia (expresada en la prohibición de su venta a terceros), que en las otras dos comunidades.

En la memoria colectiva de ninguna de las tres comunidades existe un ‘derecho histórico’ sobre las tierras nuevas recibidas. De alguna manera fueron un regalo de la reforma agraria a las comunidades. Aparentemente, no hubo, ni hay, el sentimiento de que esas tierras se incorporan al ‘territorio comunal’. Ello explicaría la aceptación por Huayllay Chico, sin resistencia, de que sean separadas totalmente del control comunal al ser tituladas como propiedades privadas individuales en favor de las familias. También explicaría que en los otros dos casos esas tierras sean administradas por la comunidad como una suerte de reservas.

Podemos resumir las diferentes situaciones en el siguiente cuadro:

**Cuadro 8.3**

Comunidad	Tierras zona antigua	Tierras zona nueva
Huayllay Chico	Amplios derechos, salvo venta a ter-	Propiedad individual titulada. (PETT)

	ceros	
Marcopata	Amplios derechos, salvo venta a terceros	Control comunal
Choclococha-Yanacocha-Chilcapite	Amplios derechos, salvo venta a terceros (más débil)	Control comunal

Es interesante constatar que, por más ‘privados’ que sean los derechos de las familias sobre sus parcelas en las tierras antiguas, hay un derecho superior que corresponde a la comunidad y que la mayor parte reconocen: que las parcelas familiares no pueden venderse a terceros, a no-comuneros.<sup>43</sup>

El sentido de territorialidad es plenamente compatible con el carácter inalienable de las tierras de las comunidades contemplada por la legislación de protección de las tierras comunales previa a 1993.

#### *Arrendamiento y producción al partir*

En las tres comunidades también existe el arrendamiento de tierra y el trabajo al partir. En Huayllay Chico, son muy pocos los casos de alquiler; la mayoría, más bien, opta por el trabajo al partir. La migración favorece este tipo de relación que se establece entre un emigrante y gente de la comunidad que recibe el encargo de trabajar las chacras del primero a cambio de que le entregue parte de la producción que saque en cada campaña.

En CYC el mercado de alquiler de parcelas existe pero tampoco se encuentra tan extendido. Los arrendadores son normalmente comuneros activos que no necesitan o no pueden hacerse cargo de todas sus parcelas, pero en mayor medida son comuneros residentes que mantienen sus tierras y obtienen de esta forma un ingreso anual. El arreglo entre los interesados suele hacerse sólo entre las dos partes y de forma oral. Aquí también el trabajo al partir es más común.

---

<sup>43</sup> Este sentido de territorialidad, sin embargo, puede estar debilitándose en las nuevas generaciones. En Marcopata algunos de los entrevistados jóvenes, aunque no sin dudar, dijeron que sí era posible vender las tierras de los antiguos. Pareciera que, al menos subjetivamente, la idea de la ‘inalienabilidad’ está debilitada.

Es posible que bajo otras circunstancias institucionales las zonas en donde se encuentran las comunidades podrían incorporarse al mercado de tierras. Algunos cambios son relativamente sencillos de lograr, como son las leyes y normas estatales. De hecho existen iniciativas desde el Estado y el sector privado para reducir los obstáculos a la venta de las tierras comunales. Pero otros son más complejos. Aún con cambios de la legislación, es presumible que los comuneros sigan considerando que las tierras que se encuentran dentro del perímetro de la comunidad son *territorio* comunal y, por lo tanto, son de los comuneros como colectivo. Esta puede ser una de las razones por las que después de doce años de vigencia de la ley de tierras 26505, no se haya desarrollado un mercado de tierras.

Por lo tanto, no se puede hablar propiamente de que las tierras comunales están incorporadas al mercado de tierras de la región o del país. “En muchas áreas de la economía, sobre todo en las zonas rurales – subraya Javier Alvarado –, persisten transacciones que no se pueden catalogar como de mercado”, entre otras razones porque son personalizadas. (Alvarado 1996: 64). Se realizan entre personas que cumplen una serie de requisitos, de las cuales están excluidos los demás compradores potenciales.<sup>44</sup>

Así, en Huayllay Chico la seguridad que el comunero tenga sobre la tierra que está comprando dependerá en primer lugar de quién sea la persona que vende, lo que determinará también la forma como se decida formalizar el trato. Aquí entran en juego las relaciones de parentesco y compadrazgo y los grados de confianza construidos en el tiempo. Las relaciones de compra-venta se establecen con frecuencia con familiares hasta de segundo grado. La garantía está dada en la confianza y se apela a la memoria colectiva de la comunidad, en donde todos conocen las historias familiares y saben quién es quien y qué tiene cada quien. Con frecuencia la transacción no consta en documento escrito, salvo cuando por alguna circunstancia existe un riesgo de conflicto. En este caso, los documentos más valorados son, en este orden, un título individual dado por el PETT, un documento notarial, un documento de Juez de Paz, y un recibo simple. En Marcopata y en CYC sucede de forma diferente, pues usan el título cuando se trata de una operación de compra y venta.

---

<sup>44</sup> Aquí puede ser aplicable el concepto de *economía étnica*. “Hay economía étnica ahí donde cualquier inmigrante o minoría étnica mantiene un sector económico privado sobre el que mantiene un control.” (Light y Karageorgis 1994: 648):

### **8.3. Mercado de capitales**

Las comunidades estudiadas tampoco están involucradas en el mercado de capitales. La economía de la comunidad y de las familias no participa de los mercados financieros, por lo demás ausentes en gran parte de los espacios rurales de la sierra peruana. No son sujetos de crédito (al menos de manera regular y sistemática) y tampoco reciben inversiones de fuera. Este hecho refuerza la información del Informe de Desarrollo Humano del Perú ya citado, que daba cuenta que la integración del departamento de Huancavelica al mercado financiero nacional es prácticamente inexistente.

### **8.4. Mercado laboral**

Aunque el estudio no ha profundizado en el grado de articulación con el mercado laboral, esto es un hecho en las tres comunidades.<sup>45</sup> Esta articulación opera sobre todo a través de la emigración, particularmente de jóvenes en búsqueda de nuevas y mayores oportunidades que la comunidad no está en la capacidad de ofrecer. Permanecer en la comunidad no justifica la relación costo-beneficio. El beneficio material más importante para un joven en Huayllay Chico es la entrega de una parcela de un cuarto de hectárea, lo cual puede ser insignificante para jóvenes que migran cada vez más hacia otras localidades, que tienen mayor vínculo con la dinámica urbana y que se dedican también a actividades no agrícolas. Otros combinan sus actividades dentro de la comunidad con una migración temporal hacia la selva para trabajar como peones en la cosecha de café, durante los meses de abril, mayo y junio.<sup>46</sup>

Las comunidades son ofertantes de mano de obra fuera de su ámbito, pero no son demandantes. La emigración por razones laborales está bastante generalizada en el medio rural. Algunas familias comuneras de CYC realizan trabajos eventuales en la ciudad de Acobamba o trabajan como jornaleros en la selva de Junín. Otros realizan diversas actividades en la propia zona: chofer, acopiador de arveja, herrero, secretario de

---

<sup>45</sup> En un estudio realizado en 1978-1979 en ocho comunidades de la sierra sur, Adolfo Figueroa ya constataba que “el mercado de trabajo tiende a constituirse en el principal mecanismo de articulación de la economía campesina al resto del sistema económico”. (Figueroa 1981: 135)

<sup>46</sup> También migran las familias notables. En CYC, además de los jóvenes han migrado también los comuneros con mayor predicamento e influencia en la institución comunal. Este último hecho ha contribuido al debilitamiento de la autoridad comunal, lo que a su vez ha traído como resultado un debilitamiento también del respeto y cumplimiento de las normas.



notaría y regidor de la municipalidad distrital o, de forma muy esporádica, arreglan pistas y trochas o venden comida de manera ambulatoria.

En Marcopata de las 16 familias entrevistadas sólo tres tenían actividades no agropecuarias. Dos de ellas cuentan con pequeñas tiendas de abarrotes ubicadas en la misma comunidad, que les proveen de ingresos, a modo de caja chica, para cubrir las necesidades de alimentación diaria. El tercero con la elaboración y venta de quesos (de su propia producción lechera) a las tiendas del distrito de Pampas, con un ingreso mensual de 160 nuevos soles.

La vinculación con el mercado laboral sí tiene influencia en la transferencia de derechos sobre la tierra. Como ya se mencionó, en muchos casos las tierras de los emigrantes permanentes son adquiridas por los comuneros no migrantes. Otros tipos de arreglos incluyen el trabajo al partir, vigentes en Huayllay Chico y CYC, sobre la base de un acuerdo entre un comunero residente (emigrante) y uno o más comuneros, a menudo familiares, que se mantienen en la comunidad.<sup>47</sup>

Tampoco el estudio ha abordado la importancia de las remesas y su importancia en la economía de las familias comuneras. Cabe conjeturar, sin embargo, que los mayores ingresos obtenidos por una familia gracias a las remesas pueden ser invertidos en la adquisición de más tierras.

Un tema que merece ser más explorado es el de la influencia de la dinámica demográfica en los derechos sobre la tierra. Se sabe que las tierras de cultivo en la región andina son relativamente escasas y están saturadas. Por ello hay extensiones significativas de tierras cultivadas que no son aptas para cultivos – tierras de protección, por ejemplo –, causando la erosión de laderas. Esta es una de las razones por la que existe una migración constante del campo serrano a las ciudades o al oriente (en donde aún hay una frontera agrícola), lo que reduce la creciente presión demográfica. En las entrevistas era recurrente constatar la alta tasa de emigración de familiares, particularmente los jóvenes, quedando en la comunidad, con frecuencia, mucho menos miembros de los que la abandonaron.

---

<sup>47</sup> En Marcopata esta modalidad es más bien una forma en la que pobladores y comuneros sin tierra pueden acceder a la tierra. Los comuneros mayores que tienen tierras pero que no están ya en condición de hacerlas producir también acuden a esta modalidad.

## 8.5. Derechos sobre la tierra y el mercado en síntesis

Se dijo ya que las tierras comunales son prácticamente intransferibles a terceros (no comuneros) no por prohibición legal (levantada por la Constitución de 1993), sino porque son consideradas por los comuneros como parte de un territorio, criterio este muy ligado a la existencia misma de la comunidad. Hay un amplio sentimiento entre los pobladores de que existe un derecho superior de la comunidad sobre las tierras comunales, expresado en la prohibición de su transferencia a terceros. Este es el límite más importante que tienen los derechos de las familias sobre sus tierras. Están, pues, fuera del mercado de tierras. Éste no influye, al menos directamente, sobre los derechos de propiedad de los comuneros.<sup>48</sup>

Los mercados financieros rurales tampoco influyen en los derechos de propiedad de las familias comuneras por el hecho que éstas no participan en ellos. La hipoteca es una institución inexistente. Además, una larga tradición legal, hoy interrumpida, prohibía el embargo de tierras comunales; por lo demás, hay una total desconexión/incompatibilidad cultural de las comunidades con la institución de la hipoteca.

La incorporación a los mercados de trabajo ciertamente tiene influencia en los derechos sobre la tierra, tanto en el acceso como en otros atributos de la propiedad. El estudio constató que en las comunidades hay un importante y permanente movimiento emigratorio de la población comunera, particularmente, pero no exclusivamente en edad laboral. Los efectos son: (1) la transmisión de parcelas por herencia se ve comprometida por la renuencia de los jóvenes en aceptarlas dada la adversa relación de costo-beneficio de formalizar su condición de comunero y asumir las responsabilidades consiguientes (condición para recibir la tierra); (2) el desarrollo de la producción al partir y, en menor medida, del arrendamiento de tierras, en el caso de los comuneros 'residentes', fenómeno constatado en las tres comunidades; (3) la posibilidad de los comuneros de comprar tierras en la comunidad con los ingresos adicionales logrados por participar en los mercados laborales con ingresos superiores a los que puede lograr en la comunidad; (4)

---

<sup>48</sup> No hay restricciones a que los comuneros compren o arrienden tierras que no son de la comunidad. Este acceso al mercado de tierras eventualmente podría influir en las estrategias de los comuneros para acceder o ceder internamente tierras que poseen en la comunidad. Sería un caso de influencia indirecta del mercado de tierras, externo a la comunidad, sobre las transferencias intracomunales de tierras.

la posibilidad de las familias comuneras que reciben remesas de parientes emigrantes, de adquirir tierras de la comunidad con las remesas enviadas por éstos.<sup>49</sup>

En cuanto a la influencia que tiene la participación de la economía familiar comunera en los mercados de productos, sobre los derechos de propiedad de la tierra, la relación no es clara. Una investigación más focalizada en las economías familiares y su vinculación con los mercados podría probablemente concluir que en las comunidades estudiadas esta relación es del tipo  $m - d - m$ , es decir, que en el intercambio no se pretende obtener ganancias, sino acceder al dinero como medio de cambio universal. Tal relación no genera acumulación, es decir, la posibilidad de disponer de mayores recursos derivados del intercambio comercial, para adquirir más tierras en una lógica  $d - m - d$ . Esto no descarta que familias comuneras sí acumulen, pero que la realización de esta acumulación se realice fuera de la comunidad.

#### **El mercado: concepto complejo**

Determinar el grado de ‘involucramiento’ de la economía comunal y de las familias comuneras en el mercado no es algo que pueda saltar a la vista como obvio. La unidad económica familiar campesina es al mismo tiempo productora y consumidora de su producción. En su expresión extrema – inexistente en la realidad – es una unidad autónoma y autárquica. Pero en el mundo real las familias campesinas se mueven en un continuum inestable de mayor o menor vinculación al mercado. Inestable en tanto que las variaciones en el contexto económico pueden estimular o inhibir la vinculación al mercado. Así, en contextos inflacionarios muchos campesinos se distancian del mercado (para aislarse de la elevación de los precios) e incrementan el autoconsumo.

El límite lo marca la migración definitiva, es decir, el abandono completo de la tierra, base que sustenta la producción y reproducción campesina. Ello significa, por lo tanto, el fin de la condición campesina. Manrique lo señala de la siguiente manera:

“...para la constitución de un mercado interno, es clave el proceso de *proletarización* del campesinado. Solamente en la medida en que el campesino deja de ser campesino, es que se vuelve consumidor – solvente – de la producción de otros. Un campesino tradicional compra muy pocas cosas... En la medida en que la gente deja de producir aquello que consume, es que se va metiendo al mercado.” (Manrique 2007:88) (La cursiva es del autor.)

‘El mercado’ no es un concepto sencillo, y tiene muchos significados diferentes según la perspectiva de análisis del investigador o del contexto en el que se emplee. Swedberg (1994) hace un recorrido de los diferentes significados del concepto desde su introducción en Inglaterra en el siglo doce, hasta la actualidad. Subraya que la mayor contribución reciente del pensamiento

<sup>49</sup> Al respecto, Bebbington et al. (2001:139) hacen una interesante reflexión. En referencia a la preocupación de los padres para que los hijos se eduquen y dejen de ser campesinos, en un estudio realizado en Bolivia y Perú, afirma que ello “refleja una respuesta adaptativa a la creciente presión sobre el agroecosistema, y expresa las estrategias explícitas de control demográfico de la comunidad y de las familias”, fenómeno observado también en estudios sobre agricultura familiar en los Alpes suizos.

económico a la teoría social del mercado puede encontrarse en los trabajos sobre la Nueva Economía Institucional.

Alejandro Diez, toma como referencia a Kart Polanyi y a los antropólogos de la Commonwealth en sus análisis sobre el África, para distinguir entre “los espacios en los que se realizan transacciones, a los que [dichos autores] llaman ‘plazas de mercado’, y los mecanismos de formación de precios de acuerdo al equilibrio construido entre la oferta y la demanda, que constituyen lo que propiamente llamamos... ‘mercado’”. (Diez 2007b: 207)

Tomando como base varias experiencias de desarrollo rural implementadas por ONG en áreas campesinas, Diez propone una suerte de continuum entre (a) el autoconsumo y (b) las plazas locales de mercado, luego entre estas y (c) espacios en los que operan mecanismos de oferta y demanda para la fijación de precios desde mercados locales hasta (d) ámbitos internacionales. (Diez 2007b: 208)

## 9. DERECHOS DE PROPIEDAD. EL ESTADO Y OTRAS INSTITUCIONES

En el proyecto de investigación se planteó la siguiente hipótesis:

“La conformación y distribución de derechos es influenciada por la presencia del Estado y de otras instituciones externas (instituciones promotoras de desarrollo, agencias implementadoras de programas gubernamentales, etc.) en la comunidad. En general, la mayor presencia de estas instituciones en las comunidades tenderá a fortalecer los paquetes de derechos familiares en desmedro de los comunales.”

La legislación sobre comunidades campesinas cambió radicalmente en los últimos tres lustros. La Constitución de 1993 eliminó el carácter proteccionista de las constituciones anteriores que, desde 1920, garantizaban que las tierras de las comunidades no podrían ser transferidas a terceros. La nueva legislación liberal está orientada a la promoción de la inversión privada en las tierras de las comunidades campesinas, impulsando la titulación individual de tierras (o parcelación) y la libre disposición de parcelas familiares para la venta. La ley de tierras 26505 llegó a mayores precisiones, estableciendo algunos procedimientos – como la necesaria aprobación de la asamblea comunal – para hacer posible la venta de ese recurso.

Los efectos directos de estas normas en las comunidades estudiadas no son aparentes. No han ocurrido tales transferencias desde la dación de la ley y nuestros entrevistados no informaron de que existiesen terceros interesados en adquirir tierras de la comunidad. Si la intención de las referidas normas era crear condiciones favorables al desarrollo de un mercado de tierras de las comunidades, estas no han tenido efecto visible sobre las comunidades estudiadas. En Marcopata, por ejemplo, su relativa autonomía para la producción de normas propias y la inaplicabilidad de las medidas propiciadas por el Estado a las prácticas comunales complejizaron la puesta en marcha de los objetivos trazados por el gobierno. Esto es, si bien la comunidad puede ser vulnerable a las reglas y condiciones externas, el cambio en las normas estatales no producirá modificaciones automáticas en las formas de tenencia y derechos sobre la tierra.

Hasta donde nuestra información llega, la nueva legislación tampoco ha tenido efectos sobre las comunidades de otras regiones del país.

*Influencia del contexto*

Es plausible considerar que el contexto político e ideológico ejerce en las comunidades, aunque sea de manera indirecta, influencia en las normas y los conceptos sobre los derechos de propiedad de la tierra. Tienen que haber fortalecido la memoria histórica de los comuneros, de sus derechos sobre la tierra comunal un régimen de protección legal durante casi tres cuartos de siglo (1920-1993), acompañado de un influyente discurso de la izquierda política e intelectual sobre la necesidad de mantener esa protección, sumado finalmente a una reforma agraria que destacaba los derechos de las comunidades sobre las tierras. Este contexto también debe de haber estimulado a que campesinos formen comunidades ahí donde no las había, como una manera de lograr tanto la protección de sus derechos sobre la tierra (caso de CYC) como el acceso a servicios públicos.

También debe de haber influido, aunque no sabemos cómo, los conflictos armados durante la década de los ochenta y noventa.

En el departamento de Huancavelica, las provincias de Angaraes y Acobamba fueron zonas fuertemente golpeadas por la violencia política. En Angaraes hubo más de 600 entre muertos y desaparecidos a lo largo de todo el período de violencia, concentrados en 1984 y luego en 1988-1991. Sin embargo, a diferencia de otras comunidades – Chincho, Cuticsa, Santo Tomás de Pata y otras-, la comunidad de Huayllay Chico no estuvo entre las más afectadas.

La comunidad de CYC en Acobamba se encuentra al pie de la carretera que comunica Acobamba con Huanta y constituía entonces un corredor importante de las movilizaciones tanto de militares como terroristas. A pesar de ello, sorprende que en la comunidad de CYC no haya habido mayor intervención de ninguno de los dos grupos. Las familias entrevistadas recuerdan el intento de las bases militares de Marcas y Acobamba, –muy cercanas a las comunidades- de organizar a la población en una ronda campesina. Intento rechazado por la población por considerar que era una provocación a la violencia. (Comisión de la Verdad y Reconciliación 2003: 143) La comunidad sólo fue entonces un corredor de la violencia, en donde no hubo enfrentamientos ni destitución o enjuiciamiento de las autoridades comunales. A pesar ello hubo emigración; aunque no fuese cuantitativamente importante, sí lo fue cualitativamente: fueron muy pocas familias las que migraron, pero a su vez, fueron precisamente aquéllas que tenían un liderazgo importante en la comunidad.

En síntesis, la violencia de los ochenta y comienzos de los noventa no causó víctimas en las comunidades estudiadas, aunque los desplazamientos forzados de la población en zonas especialmente castigadas con seguridad han tenido que afectar la institución comunal.

El contexto político e ideológico cambió en la década de los noventa. Tenemos la conjetura de que el discurso de las entidades públicas sobre las comunidades campesinas ha influido en la subjetividad de los comuneros. Ese “ambiente” proteccionista (del cual participó el presidente Alan García en su primer gobierno 1985 – 1990)<sup>50</sup> se fue erosionando por lo menos desde la década de los noventa, con la influencia y hegemonía de los planteamientos neoliberales no solo en las propuestas económicas, sino en la explicación de cómo funciona la sociedad. Estos planteamientos son incompatibles totalmente con nociones de propiedad colectiva, racionalidades económicas diferentes a las del *rational choice* y con la aceptación de que la esfera de la economía está influenciada por la cultura y la historia. Las comunidades pasaron a ser invisibles para la clase política<sup>51</sup> y más recientemente hasta hostiles a ella.<sup>52</sup>

Este ambiente político e ideológico puede estar influyendo en los jóvenes de las comunidades, más expuestos a los medios de comunicación masiva. En Marcopata afirmaban, aunque sin mucha convicción, que las tierras de la comunidad sí pueden ser vendidas. El propio presidente de la comunidad no estaba muy seguro sobre el punto.

---

<sup>50</sup> En mayo de 1986 el entonces presidente Alan García declaraba ante las propias comunidades: “¿Como puede alguien litigar con la comunidad, si las tierras de la comunidad histórica son inembargables, inalienables, inajenables, según dice la Constitución; como puede alguien litigar con la comunidad si en principio la comunidad fue dueña de todo antes de que llegaran los demás? La comunidad estuvo antes quizás que el propio Imperio, antes que la Republica, la Conquista y la Colonia, antes que los García Pérez y todos los demás apellidos?” Discurso pronunciado en el acto de clausura del Primer Encuentro de Comunidades Campesinas del Norte: Rimanakuy, Piura. En: *Rimanakuy '86: hablan los campesinos del Perú*, Centro Bartolomé de las Casas, Cusco 1987. Pp 5-18. Citado en Renique (2004) p. 277.

<sup>51</sup> No solamente han estado ausentes de las ofertas electorales de los años noventa y de este nuevo siglo, sino de planteamientos tan importantes como la Estrategia de Desarrollo Rural, aprobada en el 2004. Este documento contiene la política oficial del Estado Peruano sobre el tema.

<sup>52</sup> En un artículo publicado el 28 de octubre por el diario El Comercio con el nombre “El síndrome del perro del hortelano”, escribe el presidente Alan García, “Pero la demagogia y el engaño dicen que esas tierras [de las comunidades] no pueden tocarse porque son objetos sagrados y que esa organización comunal es la organización original del Perú, sin saber que fue una creación del virrey Toledo para arrinconar a los indígenas en las tierras no productivas. Este es un caso que se encuentra en todo el Perú, tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente. Esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología de la que se beneficiaría también el comunero, pero la telaraña ideológica del siglo XIX subsiste como un impedimento.”

## 9.1 Acción del Estado

### *Los programas de intervención del Estado*

Más directa es la influencia de ciertos programas del Estado, particularmente del Programa Especial de Titulación de Tierras. La incorporación de las tierras comunales al mercado formal de tierras tiene que pasar previamente por el saneamiento de la propiedad comunal.<sup>53</sup> El PETT se aplicó en las comunidades campesinas desde comienzos de los años 1990. En Marcopata, el PETT otorgó la titulación de la propiedad en 1995.

En donde más impacto parece que ha tenido el discurso del PETT es en la comunidad CYC. Recordemos que ésta es la que menos pasado histórico tiene como institución comunal, pues data de la década del sesenta, y se formó por las ventajas que ofrecía en ese momento ser comunidad. Las tierras de la comunidad anteriores a la reforma agraria fueron desde su inicio de las familias, de modo tal que el sentido de apropiación familiar es previsiblemente bastante mayor que en las otras dos comunidades y, por tanto, el sentido de que esas tierras son territorio comunal es también aparentemente menor. Todas las familias tienen título individual sobre estas tierras, ya sea como certificados de posesión elaborados por las autoridades comunales, o como certificados notariales (a los que se les da mayor validez). La actitud de los comuneros respecto a estas tierras es, pues, bastante más cercana a la de un pequeño agricultor independiente que a la de un comunero típico. Aparentemente el sentido de territorialidad en CYC es mayor sobre las tierras recibidas por efecto de la reforma agraria, las cuales no pueden venderse a terceros.

A diferencia de las otras dos comunidades, los comuneros entrevistados en Choclococha estaban mucho más al tanto de la legislación, en parte por las visitas del PETT, de Cofopri y de la Defensoría del Pueblo.<sup>54</sup> Le han restado valor a sus títulos – cualquiera sea su tipo- pues consideran que existe otro que puede situarse en un escalón por encima de ellos: el título individual otorgado por el Estado. En efecto, los títulos que poseen no son reconocidos por los registros públicos. Los títulos otorgados

---

<sup>53</sup> Al año 2001 había en el Perú 1369 comunidades campesinas sin titular. Al año 2005, el Ministerio de Agricultura logró reducir el número a 1113, aproximadamente Fuente: Informe elaborado por el Grupo Allpa, Octubre 2005.

<sup>54</sup> Recientemente Cofopri, el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal ha absorbido al PETT.



por el Estado no ejercen una diferencia fundamental en términos de derechos sobre la tierra (las parcelas del sector pre-reforma agraria podían ser vendidas antes también); no obstante, son preferidos porque son considerados más seguros. Se trata pues del último documento que puede obtenerse para demostrar la propiedad de la tierra

En conclusión, y salvo para este último caso, la interacción entre el derecho estatal y las normas desarrolladas en las comunidades estudiadas es muy escasa; sólo es posible encontrar indicios de la legislación nacional si ésta otorga alguna facilidad o utilidad para los intereses comunales.

### *Los municipios*

La descentralización del Estado con la creación de los gobiernos regionales y el aumento de recursos de los municipios provinciales y distritales, no parece haber tenido influencia sobre las comunidades en lo relativo a los derechos de propiedad. Por ley las comunidades campesinas no tributan sobre el valor de la propiedad predial, así que no significan mayores ingresos para los municipios en donde se encuentran ubicadas.

Sin embargo, existen muchas comunidades que pretenden convertirse en municipalidades, y es el caso de dos de las tres comunidades estudiadas. Las autoridades de Huayllay Chico tienen un proyecto en marcha para convertirse en una municipalidad de centro poblado. El camino de la municipalización implica retener a la población y mantener el territorio. En una comunidad como Huayllay Chico, con un alto porcentaje de migración, esto se vuelve un gran reto. Uno de los temas cruciales por ello es que Tauricay se convierta en un anexo de la comunidad. En palabras del gestor de esta iniciativa, *“la creación de anexos expresa que un pueblo está organizado y que el pueblo está creciendo”*. De ahí la importancia del empadronamiento. Una propuesta que el gestor de esta iniciativa de municipalización tiene es lotizar las tierras de altura que limitan con otras comunidades y donarlas o venderlas a las personas que vienen de otras comunidades -previa renuncia y empadronamiento- y formar así un nuevo poblado que pueda convertirse en un anexo más. De esa manera ganarían población y también una nueva circunscripción en el ámbito comunal.

Como se hizo ya referencia, en Choclococha las iniciativas para convertirse en distrito datan de la década de 1940, pero no tuvieron resultado. En la década de 1980 dos de los pueblos que forman la comunidad CYC iniciaron de forma paralela y no coordinada

los procedimientos para su conversión en distrito. El enfrentamiento surgió entre ambas, seguido de denuncias. Finalmente el proceso se truncó y ninguno obtuvo el reconocimiento como distrito.

En Marcopata la presencia del Estado es mayor a través de programas y proyectos sociales, y aumenta la participación de la población en la política local a través, especialmente, del municipio distrital. Los liderazgos que se gestaron en etapas anteriores se han mantenido en los mismos individuos y sus descendientes. No obstante, empiezan a observarse nuevos criterios para determinar su poder. La posibilidad de los comuneros de participar en la vida política más allá de las fronteras de la comunidad empieza a movilizar a los líderes hacia el exterior. Varios de los 'notables' ya han ocupado o, al menos, postulado a cargos públicos como regidores de la municipalidad distrital.

Todos estos procesos que se encuentran en curso, configurarán probablemente nuevas relaciones entre los actores de la comunidad y, con ello, nuevas formas de relacionarse con la tierra y de reclamar los derechos de propiedad.

Una de las razones por las que existe el incentivo para la municipalización es que habría posibilidades, reales o imaginadas, de acceder a mayores recursos públicos. Diez (2007: 134) sugiere que la comunidad puede ser un efectivo articulador <hacia dentro> pero que tienen serias dificultades para conectarse <hacia fuera>, mientras que las municipalidades tienen claras ventajas.

## 9.2 Intervención de instituciones privadas

### *Las ONG*

En las tres comunidades intervienen instituciones externas, particularmente ONG, con el propósito de promover lo que convencionalmente ha dado en llamarse desarrollo rural, es decir, la generación de uno o más cambios en la esfera productiva o institucional que impacte positivamente en algunos de los componentes de la calidad de vida de las familias o del colectivo.

Uno de los rasgos distintivos de estas intervenciones es que las ONG se relacionan para lograr los cambios esperados no con toda la comunidad, sino sólo con un grupo de familias, ya sea por razones prácticas o en aplicación de metodologías que suponen que el proceso de aprendizaje se irradia desde grupos pequeños a círculos más amplios. Aún cuando las ONG recurren efectivamente a las autoridades de la comunidad y a la asamblea comunal para explicar el programa o proyecto y buscar la aprobación de su ejecución, los beneficiarios sólo son una parte de ellos. Aunque la investigación no dispone de información necesaria para afirmarlo enfáticamente, es posible que las familias que se vinculan a las ONG a través de sus proyectos, fortalezcan su posición relativa dentro de la comunidad, tanto por la posibilidad de acceder a conocimientos y recursos de los que los demás no disponen, como por la posibilidad de ampliar sus relaciones con el mundo externo a la comunidad. Podría hablarse, pues, de un 'empoderamiento' de un grupo al interior de la comunidad, lo que podría otorgarle ventajas en el acceso de ciertos recursos comunales.

Desde el momento en que se forman los grupos, las ONG no suelen coordinar las actividades subsecuentes con la comunidad. Empiezan a generarse nuevos procesos organizativos que operan de forma paralela a la organización comunal. Se generan nuevas reglas internas y formas de trabajo. La ONG tiene reglas precisas para con los comuneros y, en tanto entidad externa a la comunidad, menos sujeta a negociaciones por parte de las familias.

De otro lado, la formación de grupos y la elección de nuevos líderes al margen de la organización comunal contribuyen a la formación de nuevos espacios de organización, de trabajo colectivo, así como nuevos liderazgos. El hecho de que éstos se desarrollen de forma paralela y casi sin considerar a la organización ya existente puede contribuir al debilitamiento de la comunidad como reguladora de la vida productiva del conjunto.

Las asociaciones al interior de la comunidad suelen replicar la forma organizativa de la comunidad pero a muy pequeña escala. Las ONG pueden generar espacios de organización colectiva que ya habían dejado de existir, como las faenas agrícolas en tierras colectivas, por ejemplo, a las que se recurre poco, al haber sido reemplazadas paulatinamente por sistemas de alquiler más propios de las relaciones de propiedad privada.

Una de las diferencias, sin embargo, es que las familias se encuentran más comprometidas con la participación en actividades, que asisten de forma más regular a las reuniones y faenas colectivas y, sobre todo, que las normas internas se encuentran más definidas y son más constantes que a nivel de la comunidad.

Estas asociaciones suelen trabajar en las tierras libres de la comunidad con la que llegan a algún acuerdo, usualmente el pago de una renta por campaña. No obstante, también se pueden producir algunos conflictos internos con relación a las tierras utilizadas por el proyecto. Las familias que no participan en él sienten que las diferencias en el interior de la comunidad se acentúan, siendo unos más beneficiados que otros.

De esta forma, las normas de la ONG y de la comunidad conviven en un mismo espacio influyendo las primeras sobre los roles tradicionales de ésta y produciendo nuevas normas entre las familias comuneras. Es posible que si las ONG, en el diseño de sus programas de desarrollo, trabajaran con estrategias que integren a la organización comunal y no duplicaran espacios y formas de organización, podrían contribuir mejor al fortalecimiento de la organización comunal y al beneficio colectivo.

### *Las iglesias*

Encontramos en las tres comunidades de estudio la presencia de dos iglesias: una católica y una evangélica (Pentecostal). En MP y HC la religión evangélica posee muy pocos seguidores (10 y 16 familias, respectivamente), y en CYC encontramos diferencias según el poblado del que se trate. A pesar de que no contamos con cifras exactas, según nuestros informantes, en Chilcapite los fieles de ambas religiones se encontrarían más o menos empatados, en Yanacocha la gran mayoría pertenecerían a la religión evangélica, mientras que en Choclococha –en donde se concentra la mayor parte de comuneros- la gran mayoría serían católicos.

Una de las diferencias entre ambas es que los evangélicos tienen prácticas religiosas más constantes que en el caso de los católicos; de igual modo, sus iglesias se encuentran más activas. En MP y en HC los templos católicos se abren sólo cuando hay alguna festividad en la comunidad (una o dos veces al año) y en CYC, cada domingo para la celebración de la misa. En las iglesias evangélicas, en cambio, los fieles se reúnen de dos a cuatro veces por semana.

A pesar de que la relación de las familias con la religión evangélica puede ser más intensa que con la católica, la iglesia católica posee en general mayor cantidad de fieles y éstos –en HC y en MP- ven a los evangélicos como gente aislada, ya que no participan de algunas de las costumbres comunales. Por ejemplo, en MP, las familias evangélicas han propiciado la disolución de las festividades tradicionales por considerarlas una distracción y desperdicio innecesario de tiempo y dinero. De igual modo, los más drásticos, no aceptan trabajar con ONG o en programas del Estado que incluyen donaciones de comida o dinero (como el programa Juntos, por ejemplo) ya que aquello que se regala se considera proveniente de *fuentes malignas*.

Merece una mención la importancia del templo católico como parte de la infraestructura básica de la comunidad. En MP, si bien el templo católico sólo se abre unas cuantas veces al año, éste está vinculado a las celebraciones más apreciadas y antiguas de la comunidad. Otro es el caso de CYC, en donde el templo es una construcción reciente, moderna y costosa, que se distingue del resto de la infraestructura tradicional de la comunidad por su estilo y materiales utilizados. Para su construcción los comuneros tuvieron que aportar cuotas y para completar el presupuesto se requirió la colaboración de la municipalidad provincial y del club de comuneros residentes de Lima. Se trata de la obra que ha movilizado más recursos en la comunidad a lo largo de muchos años. Por su parte, en Yanacocha, en donde la mayoría pertenece a la religión evangélica, las autoridades se encuentran gestionando, con el apoyo de la municipalidad distrital, la construcción de una nueva y moderna iglesia que reemplace a la anterior que se encuentra en muy mal estado. En este caso, la renovación de la iglesia no responde tanto al peso de esta institución como al afán modernizador y a la competencia que existe entre los poblados por lograr convertirse en capital de distrito.

A pesar de la presencia de dos diferentes Iglesias en las tres comunidades de estudio, no podemos decir que éstas ejercen influencia en lo que a la tenencia de la tierra y a la

definición de derechos se refiere. A lo sumo debemos señalar que la importancia de contar con sus templos amerita la donación de terrenos por parte de la comunidad o de algunas familias comuneras para su construcción y ubicación estratégicas. Más allá de la devoción que cada individuo profese por una u otra religión, en el caso de la católica su importancia e influencia sobre la comunidad quedan restringidas esencialmente al ámbito tradicional y festivo; en el caso de la evangélica, algún impacto sobre los comportamientos individuales frente a la comunidad es posible –en cuanto a su participación o no en ciertas actividades colectivas- pero ello resulta aún marginal frente a una mayoría de familias católicas.

## **CONCLUSIONES**

### **Sobre el pluralismo jurídico y los paquetes de derechos**

El análisis de los derechos de propiedad en las comunidades requiere de una perspectiva de pluralismo jurídico. Hay una evidente inadecuación de la legislación oficial y de la tradición sobre la que se basa – el derecho romano y el código napoleónico – con la realidad comunal, que se sustenta sobre usos, costumbres y tradiciones, que finalmente componen sistemas normativos diferentes. En ese sentido, las normas oficiales responden a representaciones o idealizaciones que no corresponden a la forma en que se usa y aprovecha la tierra al interior de las comunidades.

Esa inadecuación se expresa incluso en la incapacidad de la legislación nacional para definir con claridad el tipo de derechos que tienen los comuneros sobre la tierra, incluso moviéndose estrictamente dentro del marco del derecho civil. La ampliación del número de transacciones sobre las parcelas muestra también cómo ese estrecho marco legal es sobrepasado por las prácticas y costumbres comunales, tales como la herencia, el trabajo al partir, la venta de parcelas a otros comuneros e incluso a no comuneros. El enfoque del pluralismo jurídico no niega, sin embargo, la existencia de ‘préstamos’ de normas que corresponden a diferentes sistemas jurídicos, sino que por el contrario, ayuda a comprender como esos distintos sistemas jurídicos se interrelacionan e interactúan.

El pluralismo jurídico contribuye a comprender mejor el universo normativo de las comunidades campesinas y sus especificidades. Ahora bien, es un hecho conocido que bajo el nombre de comunidades campesinas se incluye una diversidad de organizaciones rurales. Sin embargo, con frecuencia se comete el error – del que no escapan los legisladores – de considerarlas como entes homogéneos. La legislación sobre comunidades no asume esta complejidad. Asumir la perspectiva del pluralismo jurídico contribuiría, pues, en un terreno práctico, a que la producción de la legislación sobre comunidades campesinas se adecue efectivamente a las particularidades de estas instituciones, respondiendo por tanto mejor a sus necesidades.

Este estudio constata, una vez más, que las comunidades son heterogéneas, aún cuando sean físicamente cercanas, dentro de un espacio regional limitado. Las variaciones en las formas de tenencia de la tierra, en efecto, rompen con la

simplificación mantenida por la legislación, que las entiende como grupos de familias que trabajan y poseen en común las tierras.

En medio de esta diversidad, puede distinguirse gruesamente a las comunidades que desde el punto de vista histórico, sociológico y antropológico son instituciones con densas redes familiares, culturales e identitarias (caso de Huayllay Chico y Marcopata) y las comunidades 'de ocasión', que están más próximas a ser asociaciones de pequeños productores (CYC). En las primeras influye más la 'razón simbólica', mientras que en las segundas prima más la 'razón instrumental'. En términos de Ferdinand Tönnies,<sup>55</sup> las primeras estarían más cerca de ser clásicamente 'comunidades' (Gemeinschaft), tipo de asociación en la cual predomina la 'voluntad natural', mientras que las segundas serían más '[sociedades](#)' (Gesellschaft), tipo de comunidad formada y condicionada por la 'voluntad racional', más cercanas a las asociaciones, conforme al derecho oficial peruano.

En ese orden de ideas, la justificación del PETT (ahora Cofopri-Rural) para la titulación individual de las tierras comunales a las familias es que son 'sociedades'. El discurso más proteccionista, adoptado tradicionalmente por las izquierdas (en sus versiones proteccionistas, románticas o posmodernas) y las organizaciones campesinas, sustentan a veces en sus extremos la primera concepción. Esto tiene trascendencia cuando se trata de hacer normas para las comunidades.

El concepto de paquetes de derechos ha sido de gran utilidad como herramienta para identificar la diversidad de derechos sobre la tierra existentes al interior de las comunidades estudiadas. A su interior se constata que distintas personas tienen diferentes derechos y éstos están desigualmente distribuidos.

La investigación ha sido un microanálisis que ha permitido ver recurrencias y diferencias. A partir de un punto las normas existentes, que pueden ser válidas para todas las comunidades, dejan de serlo, pues comienzan las diferencias entre ellas. Por tanto, las normas aplicables a las comunidades campesinas deberían ser generales, y luego dejarles mucha autonomía para que definan sus propias normas internas. En alguna medida eso ya existe, por lo menos en el plano declarativo, pero normas como la de reducir las condiciones de transferencia de sus tierras a terceras personas están en un límite.

Este es precisamente uno de los aspectos donde es más factible que el Estado, rompiendo con una tradición centralista en lo jurídico, de un paso adelante, poniendo

---

<sup>55</sup> Gemeinschaft und Gesellschaft. Leipzig, 1887.



en práctica el reconocimiento de la autonomía comunal y el respeto a la diversidad cultura.

### **Los diferentes derechos sobre la tierra**

El estudio encontró que los derechos sobre la tierra al interior de la comunidad son desiguales. La existencia de estas diferencias en sí no es una novedad. A pesar de ello, no han sido objeto de suficiente atención de los investigadores sociales, particularmente en los años recientes.

La comunidad, como institución, y las familias comuneras y sus miembros tienen derechos que varían según las características y origen de las tierras, así como de las características de las familias y de sus integrantes.

No todos los habitantes de la comunidad pueden beneficiarse de la distribución de parcelas; para ello hay que tener la categoría de comunero activo, esto es, ser hijos de comuneros que, habiendo cumplido la mayoría de edad, se inscriben en el padrón comunal y logran su reconocimiento del estatus de comunero con derecho a acceder a parcelas de tierras comunales. Existen otras categorías de comuneros que, como se muestra en el estudio, están en situaciones diferentes con relación a los derechos sobre las tierras: comunero honorario, pasivo, aspirante, jubilado y residente. Encontramos que en las tres comunidades la mujer tiene una condición de inferioridad frente a los varones. Finalmente, están los no comuneros, que no tienen derechos sobre las tierras comunales.

Este estudio muestra que una de las causas de estas diferencias se encuentra en los mecanismos de acceso a la tierra. Algunas formas de acceso son controladas por la comunidad, y otras no. Ésta distribuye parcelas, siendo favorecidos los varones adultos (que hayan servido por más tiempo a la comunidad) y aquellos que cuentan con liderazgo reconocido en la comunidad. Las mujeres tienden a ser excluidas, siendo las madres solteras las que sufren la mayor marginación.

También son marginados los jóvenes. En la percepción de los jóvenes, la relación 'costo -beneficio' de pertenecer a la comunidad es demasiado baja: las responsabilidades hacia la comunidad, como son la participación en faenas o asumir cargos, no están en relación con los beneficios que pueden tener, en particular la obtención de una parcela. Surge de esta situación una desafección de los jóvenes respecto a su comunidad; en último caso, no se inscriben como comuneros. Así, viven

en el territorio comunal pero al margen de su organización. Esta situación se convierte ocasionalmente en un círculo vicioso, dado que los jóvenes no acumulan méritos para acceder a tierras, pero la incertidumbre de acceder a tierras – o hacerlo en cantidad suficiente – inhibe a los jóvenes de asumir responsabilidades comunales. Tal desequilibrio podría estar minando las relaciones entre los jóvenes comuneros y la comunidad, resultando en su paulatino debilitamiento, lo cual plantea un serio problema, de carácter estratégico, pues se encuentra en juego las posibilidades de reproducción de la propia comunidad.

No es de sorprender que en el territorio comunal haya una población no comunera en crecimiento, que no presta “servicios a la comunidad”. Esta, no obstante, no será una opción sino para aquellos que cuenten con otros medios de subsistencia, esto es, otras formas acceso a la tierra o de trabajo fuera de la comunidad.

La emigración ha sido y continúa siendo una respuesta frecuente de los jóvenes, lo cual es una real descapitalización de la comunidad, dado que son más educados que los padres y, en principio, más abiertos a las innovaciones.

Existen, sin embargo, otros mecanismos de acceso a tierras que no dependen de la comunidad, que en principio no marginan a las mujeres y a los jóvenes: la compra-venta, el alquiler y el trabajo al partir. La compra venta y el alquiler tienden a su vez a excluir a los más pobres. El trabajo al partir termina siendo la forma más importante de acceso a la tierra de este sector, de los jóvenes y de las mujeres.

Un segundo factor que tiene que ver con la diversificación de derechos es el tipo de tierras. En el estudio se distingue las tierras por zonas de producción, por origen de la parcela, y las tierras que fueron adjudicadas por la reforma agraria.

Con relación a las zonas de producción, en general, las tierras agrícolas son de posesión familiar, mientras que las de pastos son comunales. Este rasgo, muy extendido en las comunidades andinas, caracteriza también a las comunidades estudiadas. Sin embargo, en algunos casos hay pequeñas extensiones de cultivo que son directamente controladas por la comunidad, así como hay áreas de pastos que son explotadas por grupos de familias, en lo que hemos llamado tierras colectivas.

Pero resulta también fundamental el origen de la parcela. En general, las familias tienen derechos más firmes sobre las tierras que fueron inicialmente tomadas por los fundadores en las etapas iniciales de formación de la comunidad. En cambio, son

menores los derechos de las familias ejercidos sobre las tierras que la comunidad distribuyó después. Así, por ejemplo, un comunero puede comprar y vender tierras que originalmente fueron tomadas por una familia antigua de la comunidad, mientras que no podrá hacerlo con parcelas que fueron distribuidas internamente por la comunidad.

Finalmente, otro criterio importante es el que distingue entre tierras adjudicadas por la reforma agraria y aquellas que ya eran parte previa del territorio comunal.

Otro factor que incide en la distribución diferenciada de los derechos sobre la tierra es el papel que las familias han cumplido en la historia comunal. Algunas tienen un prestigio cuyo origen viene de su participación, o el de sus ascendientes, en las luchas de la comunidad por la tierra, ya sea en competencia con otras comunidades o con las haciendas circundantes. Las que tuvieron un mayor compromiso o un papel de liderazgo adquieren mayores derechos que las que se mantuvieron al margen.

Estos derechos pueden contar con distintos grados de aceptación en función de cada contexto, pero pueden eventualmente ser puestos en cuestión y generar fricciones internas. De otro lado, estos derechos son más difíciles de categorizar e inscribir en esquemas de paquetes de derechos, pues son producto de situaciones particulares o de negociaciones que no suelen determinar derechos regulares. No obstante, suelen interferir sobre los derechos más definidos o explícitos haciendo que las fronteras que delimitan los paquetes de derechos de uno u otro individuo puedan tornarse borrosas o tomar formas distintas en una u otra circunstancia. De este modo, podemos decir que los derechos sobre la tierra no son rígidos ni constantes sino permeables y variables.

En el estudio se utiliza el enfoque de campo de fuerzas para explicar esta situación, como espacios de lucha entre actores por determinados recursos, en los que se desarrollan reglas del juego que no llegan a ser ni formales ni fijas. Interactúan la organización comunal, las familias con sus distintos grados de poder, los individuos diferenciados por edad y por género: todos alrededor del acceso y el usufructo del recurso tierra. Este campo de fuerzas tiene su propia lógica, en la cual es posible encontrar algunas regularidades que devienen en reglas explícitas y aceptadas por el colectivo.

Para comprender a cabalidad el sistema de tenencia de una comunidad no es posible aislar las variables antes señaladas o seleccionar sólo algunas de ellas, aun cuando algunos factores tenderán a ser dominantes sobre otros en la definición de derechos.

Más bien se debe hacer un esfuerzo por identificar las diferencias tanto en las características de los pobladores como en los tipos de tierras y cruzarlos para obtener el abanico completo de posibilidades, lo que hemos intentado hacer a lo largo del informe. No obstante, por ejemplo, encontramos que sobre las tierras de riego y de secano (distintas zonas de producción) las familias poseían los mismos derechos siempre y cuando éstas tuvieran un mismo origen (factor dominante).

## **Los mercados**

Las vinculaciones de las comunidades al mercado parecen no haber afectado mayormente los derechos sobre la tierra, con la importante excepción del mercado laboral. La emigración, estacionaria o permanente, deriva en un considerable número de parcelas libres. De mantener el vínculo con la comunidad, las parcelas suelen ser trabajadas al partir o alquiladas por las familias que permanecen en la comunidad. De perder este vínculo, las parcelas suelen ser vendidas o regresan al seno de la organización comunal (dependiendo del tipo de tierras del que se trate). No obstante, en no pocos casos las parcelas se quedan sin ser utilizadas y, por respeto a la posesión familiar de las tierras, las autoridades comunales no recuperan las parcelas.

Por otro lado, la articulación con los mercados de bienes a través de la compra y venta de productos agrícolas y ganaderos, no ha desencadenado dinámicas de concentración de los derechos sobre mayores áreas de tierras, quizá, entre otras razones, porque esa relación es modesta y no genera ventajas económicas suficientes que incentiven el interés por ampliar las parcelas en posesión.

Es posible que esta sea también una razón por la que los cambios en la legislación sobre comunidades campesinas, que permite desde 1995 la venta de tierras comunales a terceros, no ha tenido mayores efectos. Hay transferencias de tierras entre familias comuneras, pero no hacia terceros. También es cierto que las tierras de las comunidades andinas no son consideradas como atractivas para inversionistas – salvo para las industrias extractivas –, por lo que no se aprecia presión externa por sus tierras. Proyecciones sobre el potencial forestal comercial en tierras de comunidades podrían, en el futuro, cambiar esta situación.

Por otro lado, las familias comuneras no han aprovechado los cambios legislativos para demandar la titulación individual de sus tierras. La única individualización formal de los derechos de propiedad que pudimos conocer fue la promovida – posiblemente

inducida – por el PETT sobre las tierras adjudicadas por la reforma agraria a la comunidad de Huayllay Chico.

Sin embargo, las transacciones entre familias comuneras no son infrecuentes, aunque los comuneros que radican de forma estable en las comunidades no suelen poner a la venta sus parcelas. En nuestro estudio identificamos muchos casos de compra pero escasas parcelas vendidas. Los que venden son los comuneros que emigran. Los comuneros establecidos en la comunidad consideran, más bien, que tienen pocas tierras y que no las venderían salvo que por alguna razón ajena a su voluntad no las puedan trabajar.

Vender a terceros entrañaría varios riesgos. La venta de tierras en un mercado abierto probablemente enrumbaría a las comunidades a su disolución para dar pie a nuevas formas de administración menos tradicionales.

### **Instituciones externas y comunidades**

El estudio se preguntaba cuál es la influencia de entes externos a la comunidad en el cuerpo de normas comunales que rigen los derechos de propiedad. Algunos de estos, como el Estado en sus diferentes niveles, son generadores de normas ‘formales’ y obligatorias para personas e instituciones que se encuentran bajo su jurisdicción. Otros, como ONG o las iglesias, también generan normas, pero limitadas a regular su propio funcionamiento y las relaciones con las personas o instituciones con las que establecen vínculos.

Tradicionalmente, las tierras comunales han sido objeto de una legislación especial protectora hasta mediados de la década de 1990. La legislación liberal posterior, que permite la transferencia de tierras comunales a terceros, no parece haber generado cambios en las comunidades, y cuando ello ha ocurrido se ha debido más a la incidencia de la propia acción estatal, particularmente a través del PETT. Es el caso de la comunidad de Huayllay Chico, en donde el PETT tituló las propiedades familiares, dejándolas expeditas para que puedan ser vendidas a terceros.

Los municipios distritales, por su lado, no han emitido normas que afecten de algún modo las reglas de posesión de las tierras comunales. Sin embargo, la superposición de jurisdicciones y de atribuciones crea espacios de ambigüedad y no siempre queda claro qué corresponde a uno y otro, lo cual es una fuente potencial de conflictos. También hay competencia entre las autoridades comunales y las autoridades

municipales. La tendencia es a que estos cobren paulatinamente más importancia, debilitando a las primeras.

De otro lado, los municipios de centro poblado podrían cobrar mayor importancia asumiendo ciertas funciones de la organización comunal. Observamos en nuestro estudio que aunque los liderazgos tradicionales se mantienen vigentes, comienzan a abrirse nuevos espacios y criterios para determinar el poder. Los comuneros que empiezan a vincularse a las municipalidades locales pueden sustituir paulatinamente en liderazgo a aquellos que se vinculen a la organización comunal.

Otras entidades externas que tienen presencia – aunque temporal - en las comunidades son las ONG. Las ONG vienen con sus propias reglas, que supuestamente combinan criterios de eficiencia con lo que ellas perciben que son costumbres e instituciones comunales, como el trabajo colectivo. Es así que promueven la formación de grupos o asociaciones, cuyo funcionamiento y cumplimiento de las actividades comunes funcionan incluso mejor que a nivel comunal. Esto es así, sin embargo, en la medida en que las familias perciben que los beneficios resultantes de la relación con la ONG son lo suficientemente provechosos como para asumir el costo en tiempo de asistencia a charlas y faenas en parcelas demostrativas.

## BIBLIOGRAFÍA CITADA

Alvarado, Javier

1996. *Los contratos de tierras y crédito en la pequeña agricultura*. Lima: CEPES.

Bebbington, Anthony; Rafael Rojas y Leonith Hinojosa

2001 *Contributions of the Dutch Co-Financing Program to Rural Development and Rural Livelihoods in the Highlands of Perú and Bolivia*. Synthesis Report. Second draft. Boulder, Colorado

Borillo, Raúl

2001 *Sobre el pluralismo jurídico*, XV Jornadas de Filosofía Jurídica y Social, Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, Rosario  
<[http://www.aafd.org.ar/filosofia/documentos/15\\_Borello.doc](http://www.aafd.org.ar/filosofia/documentos/15_Borello.doc)>

Bruce, John W.

1995 *Desarrollo Forestal Comunitario. Diagnóstico rápido de árboles y tenencia de la tierra*. Roma: FAO  
<<http://www.fao.org/docrep/006/AD436S/AD436S00.HTM>>

Burneo, Zulema

2005 *La propiedad colectiva de la tierra y las comunidades campesinas del Perú*, Lima, ILC - FAO <[http://dgroups.org/groups/fao/landcoalition/docs/23.\\_Burneo-CEPES\\_Peru.doc](http://dgroups.org/groups/fao/landcoalition/docs/23._Burneo-CEPES_Peru.doc)>

Caballero, Víctor

1992 "Urbanización de la sociedad rural puneña, crecimiento y cambios en las comunidades campesinas", *Debate Agrario: Análisis y Alternativas*, nº 14, Lima: CEPES

Cabanellas, Guillermo

1979 *Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual*, Buenos Aires: Editorial Heliasta.

INEI

1994 *Tercer Censo Nacional Agropecuario*. Lima: INEI

CEPES

2005 *Informativo Legal Agrario*, nº 21. Lima: CEPES

1992 *Debate Agrario: Análisis y alternativas*, nº 14, CEPES, Lima.

Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú

2004 *Hatun willakuy. Versión abreviada del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú*. Lima: CVR

2003 *Informe Final. T. IV*. LIMA: CVR

Congreso de la República

1995 *LEY DE TIERRAS*, nº 26505. Lima.

1987 *LEY GENERAL DE COMUNIDADES CAMPESINAS*, nº 24656. Lima.

Contreras, Carlos

1989 "La comunidad indígena en la historia peruana", en *Comunidades Campesinas y Nativas. Normatividad y Desarrollo*, Lima: SER – Fundación Naumann.

- Cuadros Villena, Ferdinand  
1995 *Los Derechos Reales*. Tomo II, Lima: Cultural Cuzco
- Defensoría del Pueblo  
2003 *Comentarios al Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes*, Lima: Defensoría del Pueblo
- Deininger, Klaus  
2003 *Políticas de tierras para el crecimiento y la reducción de la pobreza*, Bogotá: BM-Alfaomega
- De La Cadena, Marisol  
1985 *Cooperación y mercado en la organización comunal andina*, Lima: IEP
- De Souza Santos, Boaventura  
2004 *Vers un nouveau sens commun juridique. Droit, science et politique dans la transformation paradigmatique*, Collection Droit et Société, Série sociologie 39, París: LGDJ
- Diez Hurtado, Alejandro  
2007a "Organización y poder en comunidades, rondas campesinas y municipios". En *¿Qué sabemos de las comunidades campesinas?* P. Castillo, A. Diez, Z. Burneo, J. Urrutia, P. del Valle. Lima: Allpa
- 2007b "Acerca de cómo pueden conectarse los pequeños productores con el mercado". En *Perú hoy. Mercados globales y (des)articulaciones internas*. Lima: DESCO
- 2006 "Las organizaciones colectivas, los recursos y los pueblos indígenas en el Perú", en *Reforma agraria y desarrollo rural en la región andina*, Lima: CEPES, Fernando Eguren (editor).
- 2003a *Los desplazados en el Perú*, Lima: Comité Internacional de la Cruz Roja
- 2003b "Interculturalidad y comunidades: propiedad colectiva y propiedad individual", *Debate Agrario. Análisis y perspectivas*, n° 36, Lima: CEPES (71-88)
- 2001 *Organizaciones e integración en el campo peruano después de las políticas neoliberales, ¿Una nueva ruralidad en América Latina?*, Giarracca, N. (comp.), Buenos Aires: CLACSO
- 1990 *Comunidades mestizas: tierras, elecciones y rituales en la sierra de Pacaipampa (Piura)*, Lima: PUCP, CIPCA-Piura
- s/f *De la comunidad difusa a las comunidades descentradas. Perspectivas analíticas sobre las comunidades de la sierra de Lima desde las etnografías de la segunda mitad del siglo XX*. (mimeo)
- Dobyns, Henry  
1970 *Comunidades campesinas del Perú*, Monografías Andinas no. 6, Lima: Editorial Estudios Andinos
- Escobal, Javier, Jaime Saavedra y Máximo Torero  
1998 *Los activos de los pobres en el Perú*. Lima: Grade. (Documento de trabajo 26)



FAO

2003a *Tenencia de la tierra y desarrollo rural*, Estudios sobre tenencia de la tierra, n° 3, Roma: FAO

2003b Las cuestiones del género y el acceso a la tierra, *Estudios sobre tenencia de la tierra*, n° 4, Roma: FAO

Figueroa, Adolfo

1981 *La economía campesina de la sierra del Perú*. Lima: PUCP, Fondo Editorial.

Fitzpatrick, Daniel

2005 "‘Best Practice’ Options for the Legal Recognition of Customary Tenure". *Development and Change*, Vol. 36, No 3, ISS The Hague, mayo 2005.

Fonseca, César

1988 "*Diferenciación campesina en los Andes*, Comunidad y producción en la agricultura andina," En C. Fonseca y E. Mayer, *Comunidad y producción en la agricultura andina*. Lima: FOMCIENCIAS

Godelier, Maurice

1990 *Lo ideal y lo material: pensamiento, economías, sociedades*, Madrid: Taurus

Gonzáles de Olarte, Efraín

1994 *En las fronteras del mercado*. Lima: IEP

1984 *Economía de la comunidad campesina: aproximación regional*. Lima: IEP

Guevara Gil, Armando y Joseph Thome

1999 "Apuntes sobre pluralismo legal", *Ius y Veritas*, año 9, n° 19, Lima: PUCP

Guevara Gil, Armando

2006 "Las Causas Estructurales de la Pluralidad Legal en el Perú". En *Global Jurist Frontiers*, Volume 6, Issue 1

Light, Ivan y Stavros Karageorgis

1994 "The Ethnic Economy". En Neil J. Smelser y Richard Swedberg (editors). *The Handbook of Economic Sociology*. New York: Princeton University Press/Russel Sage Foundation

Maisch von Humboldt, Lucrecia

1984 *Los Derechos Reales* (3ª- Edición), Lima: Studium

Manrique, Nelson

2007 "Mercado interno, campesinado e historia". En *Perú hoy. Mercados globales y (des)articulaciones internas*. Lima: DESCO

Matos Mar, José

1976 "Comunidades indígenas del área andina". En J. Matos, *Hacienda, comunidad y campesinado en el Perú*. Lima: IEP

Meinzen-Dick, Ruth y Rajendra Pradhan

- 2005 "Pluralismo político y derechos dinámicos de propiedad", *Debate Agrario: Análisis y alternativas*, n° 39/40, Lima: CEPES (1-30)
- Moore, Sally Falk  
2000 *Law as process. An anthropological approach* (1978), 2nd ed, Hamburg: Lit and International African Institute
- Mossbrucker, Harald  
1990 *La economía campesina y el concepto de comunidad: Un enfoque crítico*. Lima: IEP
- Nuijten, Monique  
2003 *Power, community and the state. The political anthropology of organization in Mexico*. London: Pluto press
- Nuijten, Monique y David Lorenzo  
2006 *Moving borders and invisible boundaries: a force field approach to property relations in the commons of a Mexican ejido*, Changing properties of property, New York: Franz von Benda-Beckman, Oxford
- Nuijten, Monique, David Lorenzo David y Pieter de Vries  
2005 *Property relations and the concept of community in the Central Andes of Peru*, Colloque international « Les frontières de la question foncière », Montpellier. [http://www.mpl.ird.fr/colloque\\_foncier/Communications/PDF/Nuijten.pdf](http://www.mpl.ird.fr/colloque_foncier/Communications/PDF/Nuijten.pdf)
- Elinor Ostrom, Elinor  
2002 "Reformulando los bienes comunes", en *El Cuidado de los bienes comunes, Gobierno y manejo de los lagos y bosques en la Amazonía*, Lima: IEP y IBC (49-77)
- PETT  
2002 *Directorio de Comunidades Campesinas del Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural*. Versión electrónica no publicada. s/p.
- 1998 *Directorio de Comunidades Campesinas del Perú*. Lima: MINAG-Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural
- PNUD  
2005 *Informe sobre Desarrollo Humano. Hagamos de la competitividad una oportunidad para todos*. Lima: UNDP-Perú
- Rubina, Alberto y José Barreda.  
2000 *Atlas del departamento de Huancavelica*. Lima: DESCO
- Rundolph Bruns, Bryan, Ruth S. Meizen-Dick  
2005 *Water Rights Reforms: Lessons for institutional design*, Washington D.C: International Food Policy Research Institute
- Testart, Alain  
2004 « Propriété et non propriété de la terre (2ème partie). La confusion entre souveraineté politique et propriété foncière », *Études rurales*, Paris: EHESS, janvier-juin 2004. <[www.alaintestart.com/documents/Foncierpartie2.pdf](http://www.alaintestart.com/documents/Foncierpartie2.pdf)>

2003 « Propriété et non propriété de la terre (1<sup>re</sup> partie). L'illusion de la propriété collective archaïque », *Études rurales*, Paris : EHESS, janvier-juin 2003.  
<[www.alaintestart.com/documents/Foncierpartie1.pdf](http://www.alaintestart.com/documents/Foncierpartie1.pdf)>

Trazegnies, Fernando de

1978 “La transformación del derecho de propiedad”, en *Derecho*, n° 33, Lima: Facultad de Derecho PUCP

Trivelli, Carolina

1992 “Reconocimiento legal de comunidades campesinas: una revisión estadística”, *Debate Agrario: Análisis y Alternativas*, n° 14, Lima: CEPES (23-37)

Urteaga, Patricia

2006 “El derecho colectivo al agua”, En *Derechos colectivos y políticas hídricas en la región andina*, Lima: IEP y WALIR

Valera Moreno, Guillermo

1997 *Las comunidades campesinas en el Perú. Una aproximación estadística*, Aportes para el Debate n° 6, Lima: Instituto Rural del Perú -IRP

Van den Brink Rogier, Glen Thomas, Hans Binswanger, John Bruce y Frank Byamugisha.

2006 *Consensus, Confusion, and Controversy. Select Land Reform Issues in Sub-Saharan Africa*. Technical Document. International Conference on Agrarian Reform and Rural Development, Roma: FAO

Webb, Richard

1975. “Políticas gubernamentales y distribución del ingreso en el Perú 1961-1971”. En R. Webb, *Distribución del ingreso en el Perú*. Lima: IEP

## ANEXO 1

**Cuadro 1**  
**Número de comunidades campesinas y superficie**  
**1994**

Departamento	No. Comuni- dades por departamento	Porcentaje del total de comunidades	Superficie ocupada por comunidades (ha)	Porcentaje de tierras comunales con área del Dpto.	Porcentaje tierra comunal / superficie agropecuaria
Puno	1.274	22,4%	1.835.527,7	13,0%	41,86%
Cusco	927	16,3%	1.343.678,0	9,5%	48,60%
Huancavelica	500	8,8%	901.160,5	6,4%	68,97%
Ayacucho	454	8,0%	1.240.142,6	8,8%	72,21%
Apurímac	438	7,7%	1.228.710,6	8,7%	85,49%
Junín	414	7,3%	797.686,2	5,6%	33,65%
Áncash	350	6,2%	750.550,4	5,3%	56,51%
Lima	289	5,1%	1.710.981,8	12,1%	80,69%
Huanuco	241	4,2%	334.678,0	2,4%	24,86%
Piura	154	2,7%	601.155,3	4,2%	49,34%
La Libertad	125	2,2%	312.938,0	2,2%	30,90%
Cajamarca	110	1,9%	289.592,6	2,0%	16,95%
Pasco	96	1,7%	286.045,2	2,0%	28,67%
Arequipa	91	1,6%	1.002.510,8	7,1%	49,06%
Moquegua	68	1,2%	433.451,7	3,1%	87,00%
Amazonas	50	0,9%	176.511,7	1,2%	17,99%
Tacna	48	0,8%	435.616,6	3,1%	69,59%
Lambayeque	33	0,6%	421.907,3	3,0%	59,03%
Loreto	8	0,1%	3.547,0	0,0%	0,11%
Ica	7	0,1%	57.769,1	0,4%	23,50%
Madre de Dios	1	0,0%	2.020,0	0,0%	0,38%
San Martín	1	0,0%	663,5	0,0%	0,06%
Tumbes	1	0,02%	5.123,3	0,04%	16,17%
<b>Total</b>	<b>5.680</b>	<b>100,0%</b>	<b>14.171.967,6</b>	<b>100,0%</b>	<b>39,77%</b>

Fuente: Tercer Censo Nacional Agropecuario (1994)

Elaboración: CEPES.

## ANEXO 2

### Información económica de la Comunidad Huayllay Chico

La actividad económica principal de Huayllay Chico es la agropecuaria. La crianza de ganado vacuno, equino y porcino, así como de ovinos y camélidos en la parte alta es importante para la economía familiar. La mayor parte de la producción agrícola –esencialmente cereales, papa y frutales- está dirigida al autoconsumo y una parte menor es vendida en la feria sabatina de Lircay, que es el punto de encuentro comercial más importante donde confluyen los pobladores de las comunidades y distritos aledaños. En el siguiente cuadro, mostramos para las 12 familias entrevistadas los principales cultivos y su nivel de comercialización y de autoconsumo.

**Cuadro 1**  
**Huayllay Chico - Destino de la producción por cultivo**  
**(campaña 2005-2006)**  
**Porcentajes**

Cultivo	venta	trueque	autoconsumo	semilla
Maíz	18	0	67	15
Habas	15	0	52	32
Cebada	14	0	71	15
Papa	0	0	74	26
Alverja	0	0	47	53
Trigo	0	0	81	19

Del cuadro anterior podemos observar que el maíz, las habas y la cebada son comercializados en muy pequeña escala, siendo el resto productos solo de autoconsumo familiar. En comparación con la actividad agrícola, la actividad ganadera provee a las familias mayores ingresos monetarios. En el siguiente cuadro mostramos los ingresos promedio familiares por la comercialización de la producción para la campaña agrícola 2005-2006 y por la venta de ganado de un año (abril 2006 – marzo 2007).

**Cuadro 2**  
**Huayllay Chico - Ingreso familiar por comercialización**  
**de producción agropecuaria**

Ingresos agropecuarios familiares		
Venta de producción agrícola S/.	Venta de ganado S/.	Total S/.
72	859	931

En el cuadro que sigue mostramos la distribución de la actividad ganadera entre las familias de Huayllay Chico, así como los ingresos que la venta de ganado genera a las familias entrevistadas. De este observamos que el ganado vacuno es el que más ingresos genera a las familias comuneras.

**Cuadro 3**  
**Huayllay Chico - Tenencia de ganado e ingresos por su comercialización**

<b>Tipo de ganado</b>	<b>Familias con ganado %</b>	<b>Ingresos por venta de ganado S/.</b>
Ganado vacuno	30	1.933
Ganado equino	20	430
Ganado porcino	30	170
Ganado ovino	40	98
Ganado caprino	30	75
Aves de corral	10	20
Cuyes	30	24

### **Información económica de la Comunidad Marcopata**

La población comunera tiene como actividad económica central la agricultura. El nivel de articulación con el mercado es importante, siendo los cultivos principales para la venta la papa, el olluco, el maíz, las habas y las alverjas. En el siguiente cuadro es posible observar, para las familias entrevistadas, los principales cultivos y su nivel de comercialización y de autoconsumo:

**Cuadro 4**  
**Marcopata. Destino de la producción por cultivo**  
**Porcentajes**

<b>Cultivo</b>	<b>Venta</b>	<b>Trueque</b>	<b>Autoconsumo</b>	<b>Semilla</b>
Alverja	90	0	10	0
Olluco	88	0	2	10
Papa	79	0	11	10
Haba	75	0	11	13
Maíz	47	1	46	6
Cebada	4	1	79	17

Como vemos en la Cuadro anterior, los porcentajes de comercialización son cuantitativamente altos y existe una variedad importante de productos articulados al mercado. Ahora bien, a pesar de que el porcentaje de comercialización de la arveja es el mayor, resulta un producto poco trabajado en la zona (solo 6 de las 16 familias entrevistadas la cultivaron en la campaña 2006-2007) y que reporta bajos ingresos monetarios, frente a otros como la papa y el olluco. En el siguiente cuadro es posible observar los ingresos familiares promedio que se obtuvieron por la venta de los diferentes cultivos en la campaña agrícola 2005-2006.

**Cuadro 5**  
**Marcopata - Ingreso promedio familiar por cultivo**

**(campaña agrícola 2005-2006)**

<b>Cultivos</b>	<b>Ingreso promedio familiar S/.</b>
Papa	1.628
Olluco	1.167
Maíz	440
Haba	266
Alverja	206

Otros cultivos destinados en mayor medida al autoconsumo son la mashua, la cebada, la oca, la avena, entre otros. La actividad ganadera es marginal debido a que las áreas de pastoreo son muy reducidas o de muy difícil acceso. En el siguiente cuadro, mostramos los ingresos que se obtuvieron de la comercialización de la producción agrícola de la campaña 2005-2006 y de la venta de animales de un año (diciembre 2005- noviembre 2006).

**Cuadro 6**  
**Marcopata - Ingreso familiar por comercialización de la producción agropecuaria**

<b>Comunidad</b>	<b>Ingresos agropecuarios familiares</b>		
	<b>venta de producción agrícola S/.</b>	<b>venta de ganado S/.</b>	<b>Total S/.</b>
<b>Marcopata</b>	2.035	361	2.396

**Cuadro 7**  
**Marcopata. Tenencia de ganado e ingresos por su comercialización**  
**Porcentajes**

<b>Tipo de ganado</b>	<b>% de familias</b>	<b>Ingresos por venta de ganado S/.</b>
Ganado vacuno	19	1.400
Ganado ovino	13	240
Ganado porcino	19	313
Ganado caprino	6	160

**Información económica de la Comunidad**  
**Choclococha Yanacocha Chilcapite**

La principal actividad económica de la comunidad es la agricultura, siendo los principales productos el maíz y la alverja y, en segunda instancia, las habas. Otros productos como la papa, el frejol y la cebada son cultivados en muy pequeña escala. A pesar de que la comunidad se encuentra en un antiguo camino de arrieros, las familias no se dedican a la actividad ganadera. Algunas familias comuneras, en cambio, realizan trabajos eventuales en la ciudad de Acobamba o trabajan como jornaleros en la selva de Junín.

La articulación con el mercado, en relación con el estándar de comunidades de la sierra del país es importante para la economía familiar. En el siguiente cuadro se muestra, para las 17 familias entrevistadas, los principales cultivos y su nivel de comercialización y de autoconsumo.

**Cuadro 8**  
**CYC - Destino de la producción por cultivo (porcentajes)**

Producto/ Destino	Venta	Trueque	Autoconsumo	Semilla
<b>Alverja</b>	85	0	4	4
<b>Papa*</b>	60	0	32	8
<b>Maíz</b>	58	0	9	6
<b>Haba</b>	50	0	10	10
<b>Cebada</b>	24	6	31	16
<b>Frejol</b>	20	0	0	6

Como vemos, casi la totalidad del cultivo de alverja es destinado a la venta y para el caso de la papa, el maíz y las habas, más de la mitad de la producción también es comercializada. Las familias conocen bien el circuito comercial de la zona, aunque la mayor parte vende su producción a los mismos acopiadores de la comunidad o a los intermediarios de Acobamba. Cabe señalar que a pesar de que el porcentaje de comercialización de la papa es importante, resulta un producto poco trabajado en la zona; sólo 3 de las 17 familias entrevistadas cultivaron papa en la campaña 2006-2007. En términos de ingresos por la venta de la producción agrícola, tomamos los tres principales cultivos y observamos en el siguiente cuadro la importancia del maíz en primer lugar, seguido de la alverja y de las habas.

**Cuadro 9**  
**CYC. Ingreso promedio familiar por cultivo**  
**(campaña agrícola 2006-2007)**

Cultivos	Ingreso promedio S/.
Maíz	1.310
Alverja	833
Haba	528

En los últimos años ha habido un incremento de la presencia de ONG en la zona. Estas promueven, entre otros, proyectos orientados a incrementar la producción agrícola y la comercialización de la misma. Esto ha propiciado la conformación de asociaciones de productores de cultivos específicos (alverja, para el caso de la comunidad CYC), así como la articulación con otros mercados, como el mercado mayorista de Lima. No obstante aún se trata de un proceso incipiente y la comercialización en los mercados de la capital se encuentra a cargo de la misma ONG y no de las familias comuneras.

Los ingresos familiares provienen esencialmente, aunque no exclusivamente, de la actividad agrícola. En el siguiente cuadro mostramos los ingresos promedio familiares por la comercialización de la producción en la última campaña agrícola (2006-2007) y por la venta de ganado de un año (julio 2006 – junio 2007).



**Cuadro 10**  
**CYC- Ingreso familiar por comercialización**  
**de producción agropecuaria**

Comunidad	Ingresos agropecuarios familiares		
	Venta de producción agrícola S/.	Venta de ganado S/.	Total S/.
<b>CYC</b>	1.965	270	2.571

**Cuadro 11**  
**CYC - Tenencia de ganado e ingresos por su comercialización**  
**Porcentajes**

Tipo de ganado	% de familias	Ingresos por venta de ganado S/.
Ganado vacuno	47	1.105
Ganado ovino	12	310
Ganado porcino	12	145
Ganado equino	6	500
Aves de corral	6	20
Cuyes	6	40

### ANEXO 3

**Comunidad campesina**

## Marcopata

### Metodología de investigación

La metodología de investigación para el presente informe fue la del estudio de caso, con recojo de información esencialmente cualitativa. El área de estudio se circunscribió a la comunidad campesina de Marcopata, ubicada en el distrito de Daniel Hernández, provincia de Tayacaja y departamento de Huancavelica.

Para el recojo de información, realizamos un trabajo de campo de un mes, durante el cual vivimos en una casa de la misma comunidad. Allí, aplicamos entrevistas en profundidad –como principal herramienta- a autoridades comunales (información general acerca de la comunidad, su historia y organización), a familias comuneras (información base de la investigación), a instituciones internas y externas pero con presencia en la comunidad, y a comuneros con casos concretos de conflictos por tierras. La distribución de la información recogida se muestra en el siguiente cuadro<sup>56</sup>:

**Cuadro 1**

#### Entrevistas realizadas

Tipo de informantes	Nº de entrevistas
Autoridades y líderes de la comunidad: Presidente, vicepresidente, teniente gobernador, juez de paz, fiscal y líder antiguo.	6
Familias comuneras	17
Comuneros por casos específicos de conflicto	2
Representantes de instituciones de la CC (Comités de vaso de leche, promotor de asociación de productores)	2
Representantes de instituciones externas con presencia en la comunidad (iglesia evangélica, ONG, escuela, puesto de salud)	5
Alcaldes (distrital y de centro poblado menor)	2
<b>Total</b>	<b>34</b>

Las familias a ser entrevistadas fueron escogidas según algunos criterios de selección que nos permitieron tener no sólo una muestra variada de nuestros informantes sino también comparaciones entre grupos -definidos en función de la edad, el poder relativo en la comunidad y la situación familiar- que nos ayudaran a responder las preguntas de investigación. De esta forma obtuvimos la siguiente muestra:

<sup>56</sup> Ver en anexo, el cuadro con el detalle del trabajo de campo realizado: Relación informantes, actividades realizadas día por día y técnicas utilizadas.

**Cuadro 2**

**Entrevistas familiares según criterios de selección**

Criterios de selección			Nombre del jefe de hogar	Barrio
Edad	Poder	Situación familiar		
18 – 30	+	Casado/conviviente	David Cañete Meza	Alianza
			Julián Montes Cañaví	La Florida
	-		Víctor Mallqui Palomino	Central
			Arturo Bujaico Amancay	Central
			Mauro Carbajal Quispe	La Libertad
			Jesusín Fernández Javier	Los Ángeles
31-50	+	Casado/conviviente	Juan Meza Quispe	Alianza
			Celestino Coica Silva	Alianza
	-		Demetrio Mauricio	Marco
			Juan Osores Meza	Marco
51 a más	+	Casado/conviviente	Luis Mallqui Crispín	Alianza
			Fortunato Silva Sinchi	Central
	-		Alejandro Meza Bendezú	Alianza
			Víctor Quispe García	Marco
		Madre soltera	Paulina Javier Santa Rosa	Alianza
		Viudo	Pedro Villalba Aquino	La Florida
		Viuda	Santa Meza Mallqui	Marco

El registro de la información primaria se hizo esencialmente a través de la toma de notas en cuadernos de campo y en carpetas organizadas por familia. Fue de gran utilidad el uso de papelotes para que los entrevistados pudieran ubicar sobre un croquis hecho por ellos, sus parcelas y definir allí sus características. El registro auditivo fue utilizado sólo para algunas entrevistas dirigidas a recoger información general sobre la comunidad.

Cabe mencionar que parte importante de la información que obtuvimos provino de conversaciones espontáneas e informales con los comuneros y familias de Marcopata, así como de la observación de la vida cotidiana y de los numerosos sucesos que en un mes ocurren en el seno de una organización social, como lo es la comunidad campesina.

Fue también de gran importancia el recojo de información secundaria en la misma zona de estudio, a través de documentos internos de la comunidad y de entidades públicas como el ministerio de agricultura, el puesto de salud o alcaldía del centro poblado menor (CPM). En el siguiente cuadro, mostramos la información secundaria obtenida:

### Cuadro 3

#### Información secundaria recogida en campo

Tipo de información	Fuente
Mapa de la comunidad campesina de Marcopata y sus límites	PETT-MINAG
Mapa del centro poblado menor de Marcopata (incluye CC vecinas)	CPM Marcopata
Actas de colindancia de la propiedad comunal con los propietarios vecinos.	PETT-MINAG
Actas sobre conflictos al interior de la CC	Libro de actas del teniente gobernador
Actas de la Asamblea de CC: 1977-1983, 1991-2006	Libros de actas de la comunidad
Documento de 1818 conservado como prueba de la propiedad de la tierra de la CC	Documento de la CC
Información estadística sobre población e infraestructura de la CC	CPM / Puesto de salud
Estatuto de la CC	Documento de la CC
Relación de inscritos en el sistema de riego	Libro de actas de la Junta de Riego
Resolución suprema de reconocimiento de la CC (1963)	Documento de la CC
Acta de conformidad de titulación comunal (1995)	PETT-MINAG

Finalmente, se recogió información visual y geográfica, a través de tomas fotográficas y mediciones en GPS, respectivamente.

## 1. Presentación

La comunidad campesina de Marcopata se encuentra ubicada en la sierra central del país, en la cuenca del río Upamayo y en la sub-cuenca del río Checche. Su altitud va desde los 3350 hasta los 4200 m.s.n.m., situándose el poblado central a 3440 m.s.n.m. Territorialmente, pertenece al distrito de Daniel Hernández, provincia de Tayacaja y departamento de Huancavelica. Sin embargo, su cercanía a la ciudad de Huancayo (3 horas en transporte público), en el departamento de Junín, define un contacto permanente con esta zona, brindándole la posibilidad de integrarse al circuito comercial del centro del país.

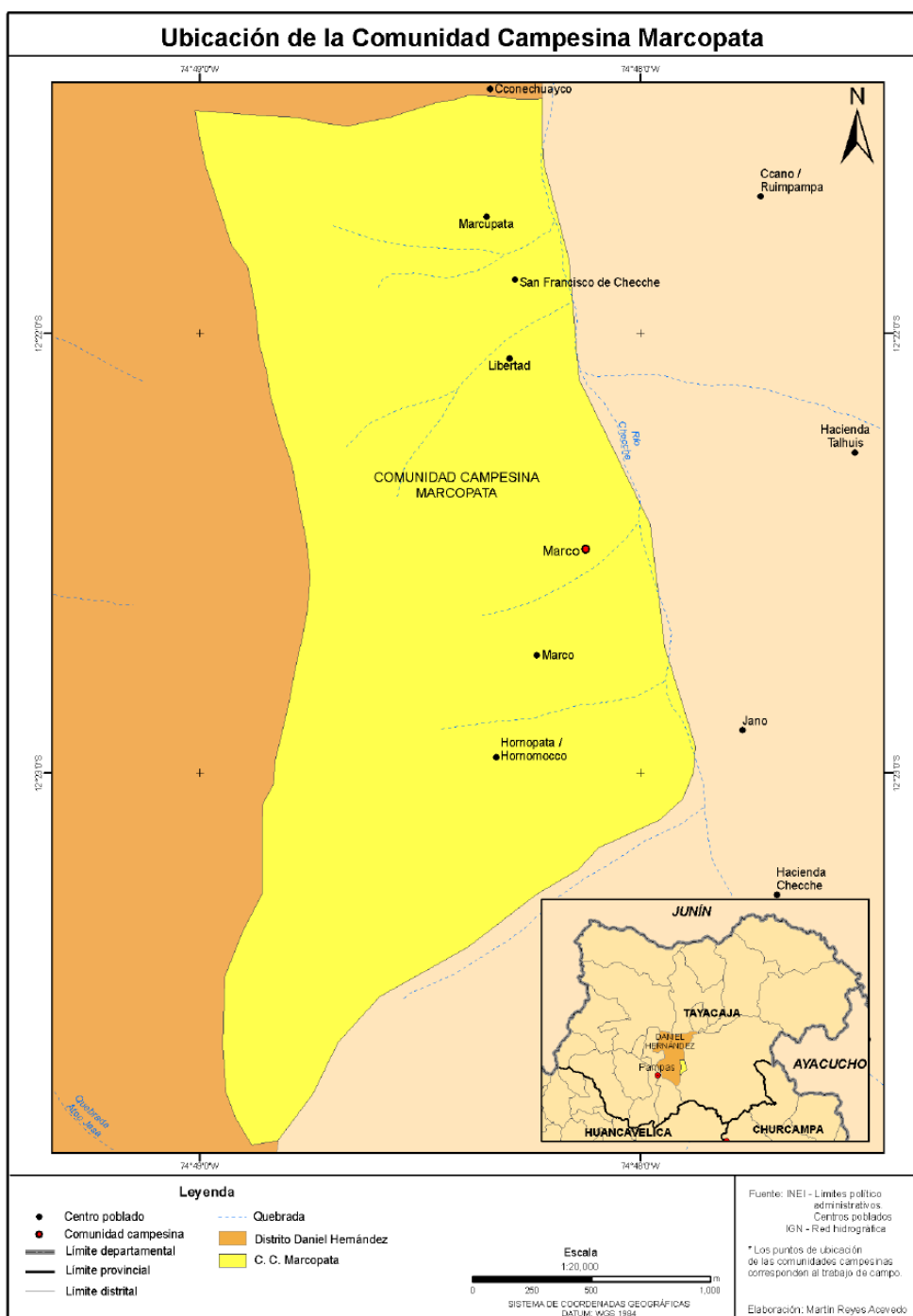
Su principal vía de acceso es la trocha afirmada que une el distrito de Pampas (capital de la provincia de Tayacaja) con el distrito de Colcabamba, ubicándose Marcopata en el km. 16 de esta ruta. Limita por el norte con tierras de propiedad de la familia Fernández, por el este con los pequeños propietarios del poblado de Rundo, con el sur con el grupo campesino de Checche y por el este con pequeños propietarios del distrito de Colcabamba.

Marcopata cuenta con una población de 480 habitantes, agrupados en aproximadamente 120 familias<sup>57</sup> y en siete barrios (La Florida, Alianza, Centro, Túpac, Los Ángeles, La Libertad y Marco). La comunidad cuenta con un puesto de salud, un jardín de niños y una escuela primaria con dos docentes. Posee agua potable del que se surten desde algunos caños distribuidos en distintos puntos de la comunidad. Tienen fluido eléctrico sólo en los dos barrios más poblados. No poseen desagüe ni alcantarillado.

---

<sup>57</sup> Información obtenida de documentación del Centro Poblado Menor de Marcopata.

# Mapa 1



La población comunera tiene como actividad económica central la agricultura. El nivel de articulación con el mercado es importante, siendo los cultivos principales para la venta la papa, el olluco, el maíz, las habas y las alverjas. En el siguiente cuadro es posible observar, para las familias entrevistadas, los principales cultivos y su nivel de comercialización y de autoconsumo:

**Cuadro 4**

**Destino de la producción por cultivo (Campaña 2006-2007)**

<b>Cultivo</b>	<b>venta</b>	<b>trueque</b>	<b>autoconsumo</b>	<b>semilla</b>
Alverja	90%	0%	10%	0%
Olluco	88%	0%	2%	10%
Papa	79%	0%	11%	10%
Haba	75%	0%	11%	13%
Maíz	47%	1%	46%	6%
Cebada	4%	1%	79%	17%

Como vemos en la tabla anterior, los porcentajes de comercialización son cuantitativamente altos y existe una variedad importante de productos articulados al mercado. Ahora bien, a pesar de que el porcentaje de comercialización de la arveja es el mayor, resulta un producto poco trabajado en la zona (sólo 6 de las 16 familias entrevistadas la cultivaron en la campaña 2006-2007) y que reporta bajos ingresos monetarios, frente a otros como la papa y el olluco. En el siguiente cuadro es posible observar los ingresos familiares promedio que se obtuvieron por la venta de los diferentes cultivos en la campaña agrícola 2005-2006.

**Cuadro 5**

**Ingreso promedio familiar por cultivo (Campaña 2005-2006)**

<b>Cultivos</b>	<b>Ingreso promedio familiar S/.</b>
papa	1.628
olluco	1.167
maíz	440
haba	266,00
alverja	206,00

Otros cultivos destinados en mayor medida al autoconsumo son la mashua, la cebada, la oca, la avena, entre otros. La actividad ganadera es marginal debido a que las áreas de pastoreo son muy reducidas o de muy difícil acceso. En el siguiente cuadro, mostramos los ingresos que se obtuvieron de la comercialización de la producción agrícola de la campaña 2005-2006 y de la venta de animales de un año (diciembre 2005- noviembre 2006) en Marcopata:

**Cuadro 6**

**Ingreso familiar por comercialización de producción agropecuaria**

<b>Comunidad</b>	<b>Ingresos agropecuarios familiares</b>		
	<b>venta de producción agrícola</b> <b>S/.</b>	<b>venta de ganado</b> <b>S/.</b>	<b>Total</b> <b>S/.</b>
<b>Marcopata</b>	2.035	361	2.396

Finalmente, cabe señalar que de nuestras 16 familias entrevistadas sólo tres tenían actividades no agropecuarias. Dos de ellas cuentan con pequeñas tiendas de abarrotes ubicadas en la misma comunidad, que les proveen de ingresos, a modo de caja chica, para cubrir las necesidades de alimentación diaria. El tercero con la elaboración y venta de quesos (de su propia producción lechera) a las tiendas del distrito de Pampas, con un ingreso mensual de S/.160 nuevos soles.

## **2. Historia de la comunidad campesina de Marcopata**

### **2.1. La formación de la comunidad campesina**

De un armario cerrado con candado en el local comunal, el secretario de la comunidad desempolvó los antiguos documentos de Marcopata para responder a mi pregunta sobre el origen de la comunidad. Él mismo no conocía la historia, pero había papeles que podían explicarlo. Escogió entre varios documentos uno que me entregó y al que llamó “testamento”. Se trataba de un intrincado relato de 1818 en el que el cobrador de tributos coloniales defendía las tierras del *ayllu* de Marcopata frente a la invasión de los *indios* del *ayllu* de Tocllacuri.

Según este documento, durante el s. XIX habría muy pocos pobladores en el territorio que actualmente ocupa la comunidad de Marcopata. Éste, ubicado en la margen derecha del río Checche, pertenecía a la doctrina de Pampas, mientras que en la margen izquierda del río se ubicaba el *ayllu* de Tocllacuri, perteneciente a la doctrina de Colcabamba. El hecho de existir tan pocos pobladores en esta zona hizo que los indígenas de Tocllacuri utilizaran algunos de sus terrenos, lo cual permitía el cobro de nuevos tributos. Sin embargo, la cantidad de pobladores en Marcopata empezó a aumentar y, con ello, surgieron los problemas con los pobladores de Tocllacuri. Es así que el cobrador de tributos del *ayllu* de Marcopata recurre a instancias a las autoridades judiciales para ordenar su desalojo:

*“... interpelo a la orden de este tribunal para que concordando la justicia que acierta mi acción, concilie la paz y el sosiego que intentamos abrazar, siendo para ello de urgentísima diligencia que sean notificados seriamente aquellos indios de la doctrina extraña del pueblo de Tocllacuri, no reincidan en los continuos insultos que nos infieren tanto de acciones como de palabras y en esta atención a usted merece con justicia se sirva mandar para que los indios de Tocllacuri no se entrometan en manera alguna a las enunciadas tierras ni protesten en la actualidad cobranza de las rentas,*



*tributos y mitas (...) por ser las predichas tierras de esta doctrina de pampas y propia de aquellos indios de mi mando*<sup>58</sup>

No se trataba, pues, de un testamento propiamente dicho pero para efectos de demostrar la propiedad comunal de la tierra bien podía tener la misma función. Lo que sí estaba más claro era que para el señor secretario, la historia de la comunidad era en alguna medida la historia de la defensa de las tierras de la comunidad. De otro lado, el “testamento” de la comunidad pone de manifiesto la existencia de un territorio considerado *ancestral* perteneciente a los pobladores de Marcopata y sobre en base al cual se identifican como grupo. Fragmentos como los que siguen lo expresan: “... desde inmemorial tiempo de nuestros antepasados poseyemos (sic) las tierras en que actualmente sembramos...”, “... dicho cobrador quiere destroncarnos de nuestras posesiones antiguas que por derecho nos toca y pertenece...”, “... bien sabe el juzgado que somos faltos de entendimiento, porque Dios así lo ha determinado, pero daremos a entender a cualquier persona o a nuestros defensores...”<sup>59</sup>

Existe, pues, una identificación entre comunidad y territorio que se mantiene vigente hasta nuestros días y que se expresa cada vez que existe un peligro de intrusión por parte de externos, ya sea en el acceso a los recursos (a la tierra, particularmente) o, simplemente, con la llegada de personas nuevas a la comunidad.

A pesar de la claridad y de la vigencia de este vínculo, son muy pocos los comuneros que conocen la historia relatada anteriormente. Entre los comuneros *antiguos*<sup>60</sup> existe, sin embargo, mayor recuerdo acerca de los inicios de s. XX, cuando Marcopata empezaba a recibir pobladores de otras zonas, especialmente de Colcabamba y de la hacienda vecina de Ranra. Cuenta Marcelina Huamán, anciana proveniente de una de las familias más antiguas de la comunidad: “Como sufrían allí en Ranra y acá había tierras libres, descansadas, vinieron acá. Al principio venían trayendo ganado, como negociantes. Después ya se han quedado”. Tal como lo explica Marcelina, a principios del s. XX, había aún tierras desocupadas que las familias que llegaban podían apropiarse. De otro lado, en esos tiempos, Marcopata aún no estaba reconocida como comunidad<sup>61</sup> y es posible que haya habido un menor control sobre el uso de las tierras. Este momento de *tomas de tierras* es importante para comprender la distribución actual de derechos sobre la tierra, ya que marcó diferencias que se mantienen hasta el día, como veremos más adelante.

Marcopata es reconocida como comunidad campesina en el año 1963<sup>62</sup>. Luego de 44 años de haber logrado su reconocimiento, son pocos los comuneros que recuerdan su historia de formación y reconocimiento. Un número importante de jóvenes pierde cada vez más el vínculo con la institución comunal, al no inscribirse en el padrón de comuneros, y no tiene mayor interés por la historia de Marcopata. No obstante, muchos de ellos conocen una historia más reciente y que, como veremos más

---

<sup>58</sup> Documento de la comunidad de Marcopata, “Testamento” 1818 (mimeografiado por nosotros y adjunto en anexo).

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Los *antiguos* son los comuneros más ancianos de la comunidad y normalmente son los que mejor guardan su historia. También se les llama *antiguos* a los primeros comuneros que llegaron a la zona.

<sup>61</sup> La Constitución peruana de 1920 reconoce por primera vez la existencia de comunidades campesinas -en ese entonces llamadas “comunidades de indígenas”- y en 1926 se dieron las primeras inscripciones en el registro de nacional de comunidades. Cf. Trivelli Carolina, *Reconocimiento legal de comunidades campesinas: una revisión estadística*, Debate Agrario: Análisis y Alternativas, n° 14, CEPES, Lima, 1992, Pág.23-37.

<sup>62</sup> PETT, *Directorio de Comunidades Campesinas del Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural*, 2002. Versión electrónica no publicada.

adelante, será determinante para la distribución de derechos sobre la tierra para las familias de la comunidad: la de la adjudicación de tierras por Reforma Agraria.

## 2.2. La recuperación de las tierras comunales

Buena parte de las tierras de Marcopata fueron adjudicadas durante el proceso de Reforma Agraria, a fines de la década del 70. Incentivados por los propios funcionarios del Sistema Nacional de Movilización Social (SINAMOS)<sup>63</sup>, un grupo de comuneros líderes decidió recuperar las tierras que habían sido alguna vez de la comunidad y que poseía la hacienda vecina -propiedad de la señora Agripina Pacheco- desde las primeras décadas del siglo XX. Cuenta Miguel Cañete, uno de los líderes centrales de tiempos de la Reforma: *“Esta gente (los hacendados) lo hacían trabajar bajo golpe y tortura a la gente. Yo le dije: ‘en primer lugar, su documento (de propiedad de la tierra)’ y, para esto, nosotros sí teníamos”*.

En efecto, una porción importante del territorio de la comunidad<sup>64</sup> fue “comprada” por la propietaria de la hacienda cuando una grave crisis alimentaria obligó a la comunidad a rematar sus tierras a cambio de sacos de maíz para la población. Desde entonces, hasta la Reforma Agraria, las tierras permanecieron bajo dominio de la hacienda y eran trabajadas por los peones que vivían al interior de la misma. La comunidad, sin embargo, guardaba bajo llave un documento que fue desempolvado y utilizado como evidencia de la propiedad de las tierras durante la Reforma: el *testamento*. De este modo, si bien puede no conocerse a ciencia cierta el contenido del documento, la percepción de que se trata de la prueba central del vínculo entre la comunidad y su territorio se mantiene vigente hasta la fecha.

La historia de la lucha por la recuperación de las tierras no fue, sin embargo, sólo con los propietarios de la hacienda sino también con los *yanaconas* que vivían en ella. Una porción importante de los trabajadores de la hacienda vio también, con la Reforma Agraria, la posibilidad de obtener las tierras de las que eran trabajadores. Cuando la comunidad inicia la contienda por la recuperación de las tierras encontró entonces doble resistencia; en efecto, la percepción de muchos líderes es que el juicio que tuvo que llevarse a cabo se dio tanto con los hacendados como con sus yanás. Señala Miguel Cañete: *“Legalmente así nomás no lo querían soltar, porque los yanaconas que vivían parte de arriba decían, por nuestro servicio por ley nos corresponde el terreno, pero los grandes abogados (...) sabían que el título es de la comunidad, el terreno también es de la comunidad. Ellos (los yanaconas) en vez de aliviarnos a nosotros comenzaron a hacernos juicios con los dueños”*.

Llegado a este punto de la historia es necesario poner en evidencia a sus actores centrales. Hemos clasificado a dichos actores en cuatro grupos: El grupo 1 estaría conformado por los líderes comunales pertenecientes al grupo promotor de la acción judicial para la recuperación de las tierras, dentro de los cuales, destacaron especialmente 4 familias: Los Mallqui, los Cañete, los Meza y los Bujaico. El grupo 2, estaría conformado por el conjunto de comuneros de Marcopata que trabajaron apoyando al grupo promotor: Todas las familias de Marcopata acordaron emplearse

---

<sup>63</sup> El SINAMOS fue creado en 1972 por el Gobierno de las Fuerzas Armadas del General Velasco y tenía por finalidad lograr la consciente y activa participación de la población nacional en las tareas que demandase su Plan de Desarrollo Económico y Social. Algunas de las tareas que le asignaron fueron la organización y capacitación de la población, la promoción del desarrollo de entidades de interés social y el fomento del diálogo entre el Gobierno y la Población.

<sup>64</sup> No pudimos acceder a documentos que señalen con exactitud el área en litigio, sin embargo, según las autoridades entrevistadas se trató de aproximadamente los dos tercios de la propiedad actual de la comunidad.

como peones en una hacienda vecina, y poder así conseguir colectivamente los recursos monetarios necesarios para pagar los gastos del juicio con la hacienda (trámites, abogados, etc.). El grupo 3, estaría conformado por *yanaconas* de la hacienda en litigio, pero que apoyaron las acciones de la comunidad para la recuperación de las tierras, con el pago de cuotas o con trabajo; cabe señalar que estos actores esperaban poder incorporarse a la comunidad y beneficiarse de las tierras comunales. Y finalmente, el grupo 4, conformado también por *yanaconas* de la hacienda en litigio pero que se opusieron a las acciones de la comunidad ya sea porque preferían continuar bajo el sistema de hacienda en el que vivían, o porque consideraron en último término que podrían ellos mismos apoderarse de las tierras.

Luego de dos años y medio de juicio, un nuevo panorama que modificaba las relaciones sociales y políticas en la zona quedaba configurado. Podemos señalar la siguiente sucesión de hechos: La comunidad de Marcopata logró recuperar las tierras de la hacienda con lo cual se dio una distribución de la tierra entre sus miembros (grupo 2), dirigida por los líderes comunales (grupo 1). Aquellos *yanaconas* que apoyaron a la comunidad durante el proceso (grupo 3) se incorporaron a ella y la comunidad, a cambio, les ofreció una porción de tierra como reconocimiento a su apoyo y en tanto nuevos comuneros de Marcopata. Aquellos *yanaconas* que habían hecho frente a la comunidad (grupo 4) formaron un pequeño grupo campesino con otra porción de tierras de la hacienda: Checche. Sin embargo, el terreno otorgado a Checche era muy pequeño en comparación con el que poseía Marcopata, por lo cual un grupo reducido de estos ex *yanaconas* decidió unirse también a Marcopata.

Luego de este proceso, la población de la comunidad aumentó en vista de los nuevos integrantes de la comunidad. Estos nuevos integrantes, sin embargo, no se asentaron en los barrios en los que tradicionalmente vivían los antiguos pobladores de Marcopata (Barrios Central, Túpac, Alianza, La Florida y Los Ángeles) sino que permanecieron en la zona que pertenecía a la hacienda, constituyendo dos nuevos barrios para la comunidad: Barrio Marco y La Libertad. Esto explica por qué estos dos barrios no se encuentran contiguos a los otros cinco, tal como se puede apreciar en el croquis número 1.

De esta forma, Marcopata quedaba reconfigurada tanto en la distribución de las tierras como en la composición social de sus miembros. Como veremos en la segunda parte del estudio, este momento es fundamental para comprender las relaciones de propiedad que operan en la actualidad. Finalmente, cabe añadir que resultado de este proceso fue también el surgimiento de una nueva rivalidad para Marcopata con el vecino grupo campesino de Checche. Éste es limítrofe a Marcopata y funciona en su interior al igual que una comunidad campesina, sin embargo, no ha sido reconocido como tal por el Estado. Actualmente, Marcopata y Checche aún tienen conflictos por el uso de los recursos<sup>65</sup>.

---

<sup>65</sup> El conflicto que se ventilaba entre Checche y Marcopata cuando realizamos el trabajo de campo era por el uso del agua. Las tierras de Checche se encuentran en zonas altas por lo cual casi no cuentan con riego, sin embargo, existe una toma de agua en las partes más bajas de su territorio. La comunidad de Marcopata consiguió recursos públicos para construir conductos que llevaran el agua desde dicha toma hasta sus tierras en las zonas bajas. Checche se opuso a la construcción de conductos, con lo cual los recursos se perdieron. Actualmente, la comunidad intenta negociar con Checche y reiniciar el proyecto de riego con apoyo de la Municipalidad.

### 3. Clasificación de las tierras de la comunidad

La comunidad de Marcopata cuenta con 373 hectáreas de propiedad de la tierra. Si bien buena parte de los trabajos de deslinde de sus tierras se hicieron en el año 1980, no obtuvieron su título de propiedad sino hasta el año 1995, luego de la creación del Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural (PETT)<sup>66</sup>.

El territorio que ocupa la comunidad, se ubica en la ladera de un cerro y se extiende desde la base del mismo (3350 m.s.n.m.), en donde se encuentra el río Checche, hasta su punto más alto, llamado *Banderasayacc*<sup>67</sup> (4200 m.s.n.m.). La variedad de pisos ecológicos le permite tener distintos tipos y usos de sus tierras. Existen, de este modo, *tierras de riego*, ubicadas el río Checche y la carretera (3500-3350) *tierras de secano*, ubicadas sobre la carretera (3500-4000) y *pastos naturales* en la zona más alta (4000-4200). Los pastos, sin embargo, son poco utilizados ya que son mayoritariamente *ichu*, poco apropiado para el ganado vacuno, y porque se encuentran a muchas horas de camino desde el poblado.

Siendo las tierras de secano las más vastas, las de mayor variabilidad en cuanto a la altura y, por tanto, en cuanto a sus aptitudes productivas, hemos identificado dos zonas distintas: La primera se ubica entre la carretera y la trocha carrozable<sup>68</sup> (3500-3800 m.s.n.m.), y en ella es posible obtener algunos cereales (habas, alverjas) además de tubérculos (papa, olluco); la segunda, se ubica sobre la trocha carrozable (3500-4000 m.s.n.m.) y en ella sólo crecen tubérculos. Estas dos zonas de secano sumadas a las zonas de tierras de pasto y de riego, conforman el conjunto de las zonas de producción de la comunidad. El croquis 1, localiza, los distintos barrios de la comunidad, así como las zonas mencionadas.

Una segunda clasificación -aunque con límites ciertamente difusos- es la que divide a la propiedad comunal según el tipo de usufructuario. En Marcopata, como en la mayoría de comunidad campesinas del país, existen tierras familiares (o individuales), tierras colectivas (varias familias) y tierras comunales (usadas de distintos modos pero siempre respondiendo al interés colectivo). La mayor parte del territorio de la comunidad está compuesto por tierras familiares, y éstas están divididas en un elevado número de parcelas. Las tierras colectivas están conformadas por las áreas de pastos naturales y si bien tienen una extensión considerable, se encuentran muy alejadas, el pasto suele acabarse rápidamente y escasea en la temporada seca o resulta poco apropiado para el ganado vacuno. Finalmente, las tierras comunales están conformadas por dos áreas de aptitud agrícola de 5 hectáreas cada una, ubicadas en las zonas 2 y 3 de la comunidad, entre los 3600 y 3800 m.s.n.m.

Una tercera clasificación de las tierras de Marcopata, divide el territorio en dos mitades. De un lado, se encuentran las tierras que vienen siendo usadas por la

---

<sup>66</sup> El PETT es un organismo del Ministerio de Agricultura, creado en 1993, durante el gobierno de Fujimori. Con un financiamiento importante del BID, su misión central fue la titulación de la propiedad rural, lo cual era requisito indispensable para agilizar una de las medidas impulsadas por dicho gobierno: el mercado de tierras. Posteriormente se le atribuyeron nuevas funciones, entre las cuales el reconocimiento y registro de las comunidades campesinas del país.

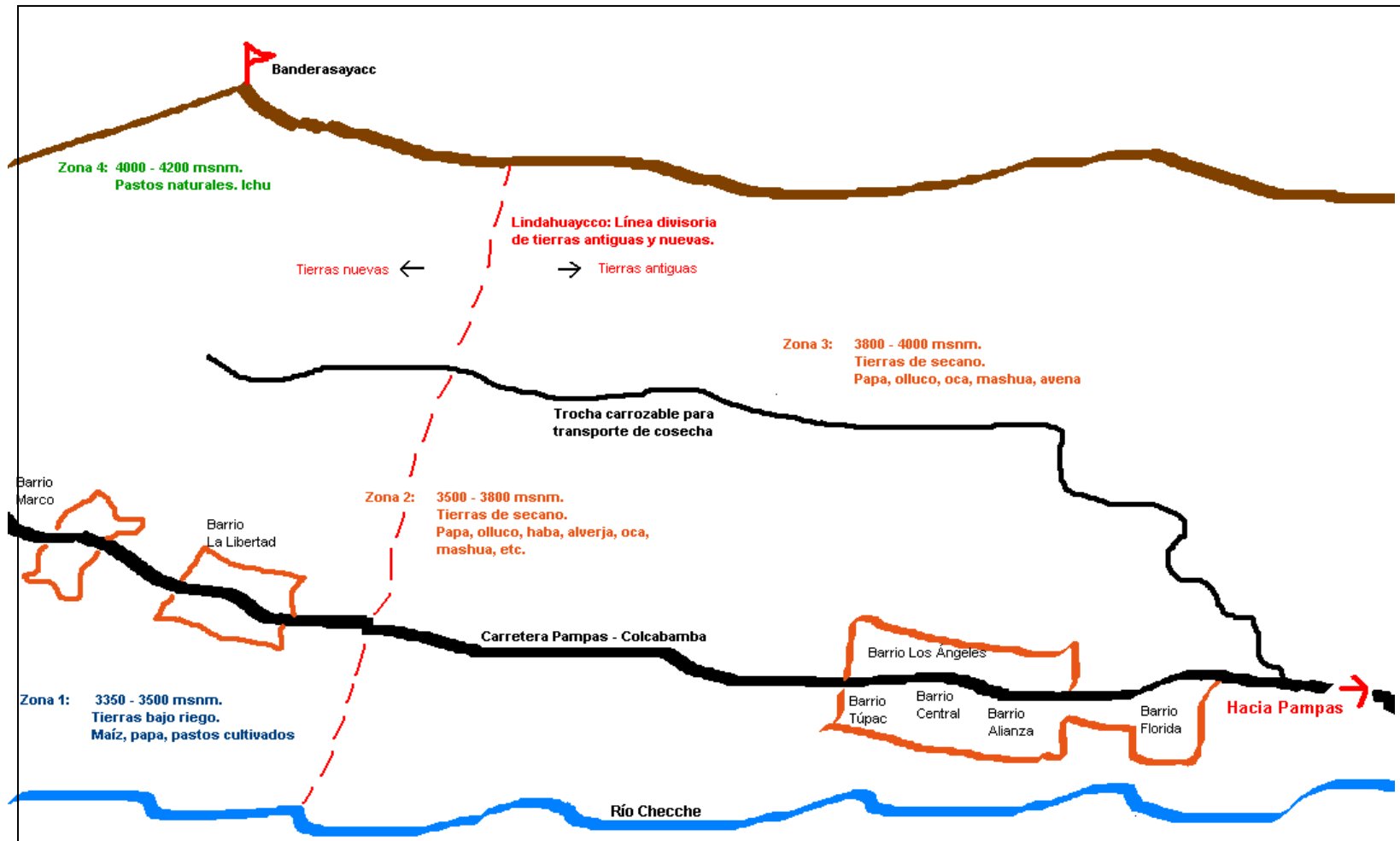
<sup>67</sup> *Banderasayacc* quiere decir, "donde se iza la bandera" en quechua.

<sup>68</sup> La trocha carrozable fue construida por los mismos comuneros de Marcopata a mediados de los 70, cuando la presión por la tierra los obligó a abrir nuevas zonas de cultivo en las partes más altas de la zona de secano. Esta trocha es utilizada para sacar la producción en tiempo de cosecha, ya sea en camión o animales de carga.

comunidad desde tiempos de la colonia y, del otro, aquéllas que fueron recuperadas de la hacienda de Agripina Pacheco y adjudicadas a la comunidad durante el proceso de Reforma Agraria. La línea divisoria es vertical y está marcada por la quebrada de *Lindahuaycco*, siendo la margen derecha la *zona antigua* y la izquierda, la *zona nueva*.

Finalmente, encontramos una distinción fundamental, aunque restringida a las parcelas familiares: el origen de la parcela familiar. Esto, no es más que la forma en la que un individuo o familia obtuvo la parcela por primera vez. Existen, gruesamente, dos categorías: la primera, es la de las *tierras tomadas por las familias comuneras antiguas*, y alude a cuando los primeros pobladores de Marcopata fueron apropiándose de las tierras libres del lugar, antes de que existiera una organización o control comunal para regularlo. Y la segunda es la de *tierras entregadas por la comunidad*, que es cuando la organización comunal hace entrega de parcelas a sus comuneros para que trabajasen. Esta clasificación tiene una dimensión temporal importante, ya que actualmente –y desde hace más de 50 años atrás- las parcelas ya no pueden ser tomadas. Esto explica que sólo haya parcelas tomadas en la *zona antigua* de la comunidad.

**Croquis 2: Marcopata, sus barrios y zonas de producción**

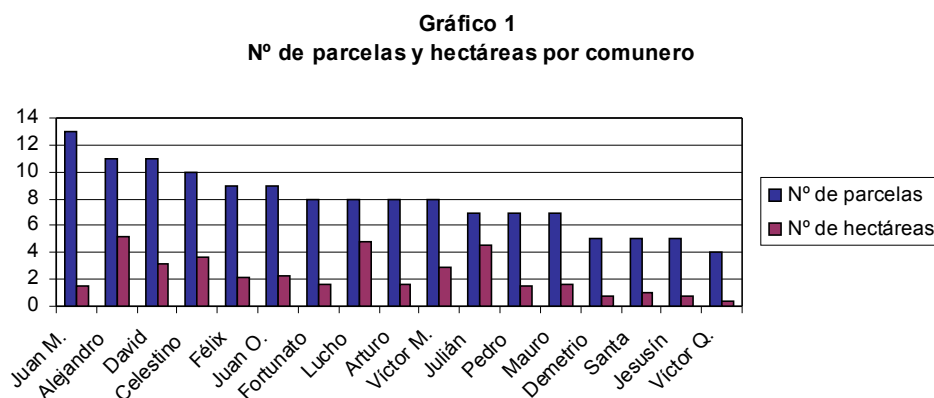


#### 4. Los derechos sobre la tierra: el acceso

En Marcopata, cada comunero tiene un promedio de 6 parcelas, a las que se suman 2 parcelas más de propiedad de otros -que usualmente alquilan o que trabajan bajo alguna otra modalidad-, sumando un promedio de 8 parcelas. Sin embargo, no todas las parcelas son trabajadas al mismo tiempo, sino que algunas descansan para permitir la recuperación de las propiedades productivas de la tierra, alcanzando un promedio de 5 parcelas sembradas por campaña agrícola. Estas 5 parcelas, todas juntas alcanzan, a su vez, un promedio de una sola hectárea.

En tanto la propiedad formal de la tierra es colectiva, sería razonable que cada familia comunera tenga acceso a la tierra y que dicho acceso, además, sea relativamente uniforme. Esto, sin embargo, dista mucho de la realidad. En efecto, lo que no muestran los promedios anteriores es que algunos comuneros pueden tener acceso a 4 parcelas, mientras que otros alcanzan a tener 13. De igual modo, algunos alcanzan a sembrar más de 5 hectáreas, mientras otros no alcanzan la media hectárea.

De otro lado, existen familias o pobladores de Marcopata que no poseen ninguna parcela por no encontrarse inscritos como comuneros, es decir, por no participar de las *faenas* comunales (trabajos colectivos), no asumir cargos de directiva comunal, no participar de las Asambleas, etc. Existen así, en contraste con lo que señala la visión más tradicional de la comunidad campesina, diferencias importantes en su interior. En efecto, los principios de justicia e igualdad acuñados a las comunidades por un sector de académicos y profesionales indigenistas, y utilizados en actuales discursos políticos esconden las diferencias y los procesos de exclusión que existen en su interior. El gráfico n° 1 muestra el acceso a la tierra de las diferentes familias entrevistadas<sup>69</sup>.



Queremos continuar en esta parte del informe señalando los distintos mecanismos a través de los cuales se puede acceder a la tierra. Hemos identificado 6 de ellos, siendo el más complejo la *entrega* de tierras a comuneros por parte de la organización comunal.

<sup>69</sup> Cabe señalar que todos nuestros entrevistados estaban inscritos como *comuneros* y, por tanto, tienen derecho formal sobre los recursos colectivos de la comunidad.

#### 4.1. La entrega y designación de tierras

Según las normas internas, la comunidad puede distribuir parcelas a sus comuneros, los cuales pueden mantenerlas y heredarles en función de algunas condiciones. Estas parcelas suelen tener entre 0.125 y 0.25 hectáreas y no está permitido hacer entrega de más de cuatro parcelas a cada comunero. Para comprender cómo se desarrolla este proceso, es necesario hacer una clasificación de las distintas categorías de comuneros en Marcopata, ya que ello determinará formas de acceso y derechos diferenciados.

Tal como hemos visto anteriormente, existen al interior de la comunidad diferencias entre los comuneros en relación con el acceso a la tierra, las cuales son disimuladas detrás de un discurso de igualdad entre las familias. No obstante, una distinción que se presenta de forma explícita y que implica una diferencia en el acceso y derechos sobre la tierra es aquella que divide al conjunto de pobladores en distintas categorías sociales. Existe al interior de la comunidad una diferencia entre comuneros y no-comuneros, pero también al interior de la categoría misma de comunero. Existen así 4 tipos: comuneros *honorarios*, comuneros *activos* (o, tan solo, *comuneros*), comuneros *residentes* y comuneros *jubilados*, cada uno con diferentes derechos y obligaciones ante la organización comunal.

Un potencial comunero de Marcopata es ya sea un hijo de otro comunero que llega a la mayoría de edad o el esposo de una hija de comunero (también llamados *yernos de la comunidad*). Las mujeres no son comuneras, salvo en caso de viudez. Ahora bien, para ser comunero es necesario inscribirse en el padrón comunal, en el cual se registra cada dos años a todos los comuneros de Marcopata. De una vez inscritos en el padrón comunal se activan para el nuevo comunero sus obligaciones para con la comunidad, así como –tal como otros autores lo han llamado– su *récord personal*<sup>70</sup> de comunero, en función de sus niveles de cumplimiento, de las responsabilidades asumidas voluntariamente en la comunidad, pero también de su comportamiento en general.

Las actividades básicas que un comunero debe realizar (de manera obligatoria) son la asistencia a las asambleas ordinarias, el cumplimiento de las faenas comunales (normalmente para la construcción de infraestructura de uso colectivo: caminos, limpia de acequias, construcción de escuelas, locales comunales, etc.) y el pago de cuotas eventuales cuando hacen falta fondos para alguna actividad. De no cumplir con estas obligaciones existe un sistema estricto de multas (en dinero o en jornadas de trabajo) sobre el que los comuneros tendrán que responder. De manera no obligatoria, pero fundamentales para el *récord* del comunero, son asistir a las asambleas extraordinarias y, especialmente, asumir cargos en el seno de la directiva comunal o de los comités especializados (comité de riego, comités temporales para la gestión de trámites o la organización de alguna actividad).

Los comuneros se refieren a todo ello, como “*servir a la comunidad*”. En efecto, la relación del comunero con la organización comunal es percibida como la de una prestación de servicios, y el cumplimiento de sus obligaciones considerado como un aporte que debe realizar para el beneficio propio y del colectivo; el hecho de que exista una categoría de comuneros, llamada *comuneros jubilados* dice bastante de esta relación. En una investigación de Nuijten y Lorenzo, esta relación es identificada con lo que los comuneros de su estudio llaman “el esclavismo de la comunidad”<sup>71</sup>, denotando una fuerte carga

<sup>70</sup> *Ibid.*, p. 6.

<sup>71</sup> Cf. Nuijten Monique, Lorenzo David and de Vries Pieter, *Property relations and the concept of community in the Central Andes of Peru*, Colloque international « Les



peyorativa. Como veremos en un ejemplo posterior, en el caso de los jóvenes la carga del servicio a la comunidad resulta cada vez más difícil de sobrellevar, ya que cada debido a la disminución de tierras libres, cada vez se reparten menos parcelas, más pequeñas y más lejanas.

Durante un primer periodo de tiempo, los comuneros *sirven* a la comunidad sin obtener nada a cambio, esto es, sin activarse su derecho individual de acceso a la tierra. Durante este periodo de servicio los comuneros se encuentran bajo la **categoría de honorarios**. Cuando el *récord* del comunero es lo suficientemente apreciable, éste puede hacerse acreedor de una parcela entregada por la comunidad. En este momento deja de ser *honorario* y obtiene la categoría de comunero activo. Encontramos que no existía un consenso en cuanto al número de años de *servicio* previos a la entrega de tierras. Existen, pues, criterios que entran en juego y que, aún siendo reconocidos, se encuentran menos definidos. Uno de ellos es la conducta del comunero en su vida privada y en su relación con la comunidad. Ésta es observada en el tiempo por las familias y autoridades y juzgada en el momento de evaluar la pertinencia de la entrega de tierras. Un segundo criterio tiene relación con las responsabilidades asumidas por los comuneros para con la comunidad, lo cual se materializa con claridad en el ejercicio de cargos comunales. Mientras se ocupen cargos desde menor edad, mayores serán las posibilidades de recibir tierras tempranamente.

Para un ejemplo de ello, citamos el caso de David Cañete y Jesús Fernández: David tiene 28 años de edad y se inscribió como comunero a los 22 años. A los 25 años ocupó el cargo de Teniente Gobernador de la comunidad. Al término de su periodo como autoridad, David recibió una parcela de 0.25 Ha. De otro lado, Jesús Fernández tiene 29 años de edad, se inscribió como comunero a los 23 años. Han pasado 6 años desde entonces, Jesús no ha ocupado ningún cargo en la comunidad y aún no ha recibido ninguna parcela. Según nos explicó, la comunidad había prometido hacerle entrega próximamente de una parcela de 0.125 Ha.

Los **comuneros activantes** son aquellos que tienen las mismas obligaciones que los honorarios en relación con la organización comunal, sin embargo al tener más tiempo como comunero se esperaría que empiecen a ocupar cargos de mayor importancia en la comunidad. En efecto, si bien no existe una escala formal de cargos comunales, los comuneros honorarios suelen ser vocales o fiscales, y los activos, presidentes, vicepresidentes, secretarios o tesoreros. El comunero activo puede también solicitar a la comunidad la distribución de nuevas tierras, si es que considera que las que posee aún son insuficientes. En efecto, cuando los comuneros jóvenes reciben tierras de la comunidad suelen recibir sólo una o dos pequeñas parcelas. De otro lado, como hemos señalado anteriormente, según las normas comunales cada comunero puede poseer hasta 4 parcelas entregadas por la comunidad, por lo cual aquellos que aún tengan una cantidad menor tienen derecho a solicitar más tierras. Esto no quiere decir, sin embargo, que la comunidad entregará automáticamente más tierras a los comuneros que lo soliciten, sino que cada situación particular es puesta en evaluación y discutida por la asamblea comunal.

La norma de las 4 parcelas resulta, de este modo, más que un derecho para los comuneros, una norma que restringe es el acceso y la acumulación de tierras. De otro lado, al igual que en el caso de los comuneros honorarios, no existen normas claras que

indiquen algún tipo de procedimiento para definir cuándo es posible hacer entrega de nuevas parcelas a los comuneros activos. Así, los casos son analizados individualmente y se pone en evaluación nuevamente el *récord* del comunero para la decisión de la asamblea, utilizando criterios como el comportamiento y responsabilidades asumidas por el comunero a lo largo de su vida. Para estos casos, un criterio adicional a tomar en cuenta es la cantidad de tierras que el comunero solicitante posea, además de las parcelas ya entregadas por la comunidad. Así, si se trata de un comunero que posee una buena cantidad de tierras de los *antiguos* (ya sean compradas o heredadas) se cuestionará más la necesidad de otorgarle nuevas parcelas. En cualquier caso, el hecho de que no existan normas específicas y de que se trate de arreglos más bien personales abre la puerta para un sinnúmero de situaciones y manipulaciones que harán que cada caso sea distinto al otro, generándose diferencias en el acceso a la tierra y celos entre las familias de la comunidad.

Los **comuneros residentes**. El comunero residente es aquél que habiendo sido comunero activo (poseedor, por tanto, de tierras entregadas por la comunidad) deja la comunidad para trasladarse a vivir a un lugar diferente (independientemente de si se va a otro país o al distrito vecino). No obstante, el *residente* mantiene sus relaciones con la comunidad aportando en dinero el equivalente a las multas acumuladas por la inasistencia a faenas y asambleas, así como a las cuotas otorgadas en el año. Los ingresos de los comuneros residentes pueden ser significativos para la organización comunal, sin embargo, con frecuencia existen problemas de atrasos en los pagos. A cambio de sus aportes, los residentes pueden mantener las parcelas que la comunidad le había hecho entrega antes de su partida. Éstas son usualmente dejadas en la comunidad para el uso de algún pariente, en alquiler o bajo la modalidad, al partir.

La cuarta y última categoría es la de **comuneros jubilados**. Al cumplir los 60 años, los comuneros activos tienen la posibilidad, si así lo desean, de optar por *jubilarse de la comunidad*. Esto es, pueden dejar las obligaciones que tiene un comunero activo para con la organización comunal sin perder, no obstante, los derechos que éste posee. De este modo, los comuneros jubilados no corren ningún riesgo de pérdida de sus parcelas, aún si éstas fueron entregadas por la comunidad.

Finalmente, se encuentran los pobladores **no-comuneros**. La decisión de ser o no comunero puede ser tomada libremente por los pobladores de Marcopata, de modo tal que no todos aquellos que viven en la comunidad poseen esta categoría. Los no-comuneros suelen ser los *yernos de la comunidad* o grupos de jóvenes que al alcanzar la mayoría de edad e independizarse ya no tienen mayor interés en beneficiarse de los derechos que la comunidad les otorga, esto es, al acceso a parcelas para trabajar de forma independiente.

Si bien el número de *no-comuneros* es muy reducido, se trata de una tendencia que viene creciendo en los últimos años y que trae consigo consecuencias importantes de orden político. En efecto, las instancias de poder político en una comunidad campesina como Marcopata son la Directiva Comunal y la Asamblea Comunal, y la participación en alguna de ellas requiere tener la categoría de comunero. De este modo, los *no-comuneros* no pueden participar de la vida pública de la comunidad, ni menos aún ser elegidos autoridad. De otro lado, la mayor parte de las actividades y decisiones que se toman en estas instancias políticas comunales, van mucho más allá de lo productivo y de los derechos sobre la tierra, sino que involucran a otros dominios de la vida en comunidad, como la salud, la educación, la intervención de proyectos del Estado u ONG, etc.

Los *no-comuneros* quedan entonces, no sólo excluidos del acceso a cierto tipo de tierras, sino de la vida social y política de la comunidad. Durante nuestra estadía observamos

este problema en repetidas ocasiones. Por ejemplo, a la llegada de la ONG Cáritas a la comunidad, las autoridades comunales convocaron a una asamblea comunal para presentar el proyecto y realizar la inscripción de los interesados como beneficiarios. Al ser este el único espacio de participación, los *no-comuneros* perdieron automáticamente la posibilidad de ser incluidos como beneficiarios.

En el siguiente recuadro, a modo de ejemplo, citamos el caso de la familia Silva Sinchi, en el seno de la cual confluyen distintos tipos de comuneros.

**Categorías sociales al interior de una familia:  
El caso de los Silva Sinchi.**

Fortunato Silva Sinchi tiene 64 años de edad, vive en Marcopata y es *comunero jubilado*. Decidió jubilarse hace dos años y actualmente puede abstenerse de sus responsabilidades como comunero. Fortunato es considerado comunero *antiguo* y además perteneció al grupo líderes que luchó en tiempos de Reforma Agraria por la recuperación de la tierra comunal. Actualmente, goza de mucho respeto en la comunidad y se encuentra exonerado de las responsabilidades de todo comunero activo. De otro lado, según señala, siente seguridad sobre las parcelas que posee: “*mi tierra está segura, nadie me la puede quitar porque ya soy jubilado*”.

Fortunato y su esposa Victoria Osore, de 51 años, tuvieron 7 hijos, de los cuales cinco partieron de Marcopata para instalarse en la ciudad de Lima y de Huancayo. Uno de ellos, Armando (30) salió hacia Lima hace 4 años de la comunidad pero se mantiene como *comunero residente*, aportando a la comunidad con las cuotas correspondientes. Armando se empadronó de muy joven y logró recibir una parcela de la comunidad. Actualmente, dicha parcela es mantenida a su nombre y trabajada por la familia de su esposa, la cual no posee muchas tierras para sostenerse.

Raimundo (38), su único hijo hombre que reside en Marcopata, se es *comunero activo* y ha recibido sólo una parcela de la comunidad, por lo cual accede a otras tierras trabajando *al partir*. Finalmente, Reyna (23), quien también se quedó a vivir en la comunidad, se casó con Leoncio, joven de una comunidad vecina. Leoncio es considerado yerno de la comunidad, sin embargo, tiene la categoría de *no-comunero*, ya que decidió no inscribirse en el padrón comunal y evitar con ello el *servicio a la comunidad*. Leoncio prefiere emplearse fuera de la comunidad, en obras de construcción civil, porque considera que las parcelas que entrega la comunidad son pequeñas e insuficientes; esto es, inscribirse como comunero demandaría muchos compromisos y poca recompensa.

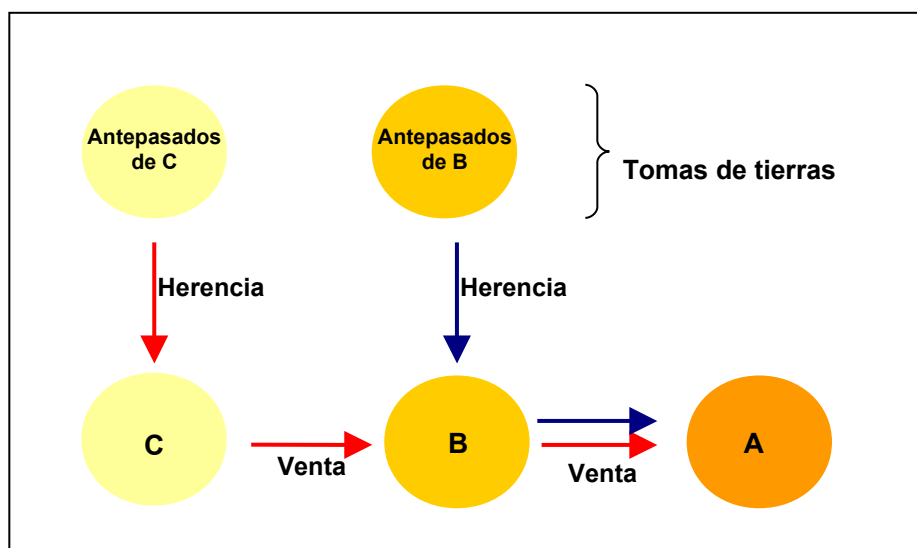
## 4.2. Otras formas de acceso a la tierra

Una segunda forma de acceso a la tierra es la *herencia*, habiendo dos tipos distintos según el origen de la parcela familiar, esto es, la herencia de *tierras tomadas* por los antiguos y la herencia de *tierras entregadas* por la comunidad. Como ya señalamos anteriormente, las *tierras tomadas* son aquéllas que las primeras familias de Marcopata tomaron libremente antes de su reconocimiento oficial como comunidad, de forma tal que

se trata de las tierras más antiguas en posesión de las familias comuneras. Como veremos más adelante, las condiciones de herencia entre unos y otros tipos de tierras son muy diferentes.

Una tercera forma es la **compra** de la parcela a otro comunero. El mercado de compra-venta de tierras existe desde tiempos de los *antiguos* y es una práctica común en la comunidad. No obstante, las tierras no suelen ser vendidas a personas que no residan de la misma comunidad. De otro lado, no todas las tierras familiares pueden ser vendidas, sino que dependerá del origen de la parcela familiar. Así, sólo las tierras que fueron originalmente *tomadas* por los *antiguos* pueden ser vendidas a otras personas. Por ejemplo, un comunero A puede comprarle tierras a un comunero B, siempre y cuando éstas hayan sido *tomadas* por los antepasados de B y recibidas por él en herencia o compradas a un comunero C bajo las mismas condiciones. El siguiente diagrama ejemplifica mejor esta relación:

**Diagrama 1: Dos casos de venta de parcelas**



Una cuarta forma es el **alquiler**. Como en cualquier relación de propiedad privada, el alquiler se hace a través de un contrato, en el que se acuerda un monto fijo y un periodo determinado. Este periodo suele establecerse según un número de campañas agrícolas y el monto a pagar es en dinero, según la cantidad y la calidad de la tierra alquilada. No se requiere de la presencia de ningún actor externo adicional para este tipo de transacciones.

Una quinta es la modalidad **al partir**. Esta tiene como característica que la inversión y la repartición de beneficios entre el propietario de la tierra y el comunero con quien se hace el acuerdo, se hacen de forma equitativa. Así, por ejemplo, el dueño de la parcela pone la tierra y las semillas, y el comunero socio pone la mano de obra y el abono. Esta forma de acceder a la tierra se encuentra muy extendida y es sobre todo utilizada por los pobladores y comuneros sin tierra, y por los comuneros mayores que poseyendo tierras ya no tienen tanta fuerza para trabajarlas.

Finalmente, la sexta modalidad es a la que hemos denominado **préstamo**. El préstamo de tierras se da normalmente entre familiares muy cercanos, como por ejemplo entre padres e hijos, entre hermanos o, con menos frecuencia entre tíos y sobrinos. El préstamo de

tierras entre familiares se da normalmente cuando el que recibe las tierras se encuentra en una situación de necesidad por no poseer parcelas suficientes para sostener a su familia. Es muy común, por ejemplo, que los padres entreguen en préstamo tierras a sus hijos jóvenes cuando éstos se independizan y aún no poseen parcelas. Este caso (padres-hijos) es particular porque en algunas ocasiones –y siempre que no sean necesitadas por los padres- las tierras no son devueltas por los hijos, mientras los padres están en vida. Aún así, los hijos identifican claramente que son tierras de sus padres y no suyas. De otro lado, a la muerte de los padres, la figura cambia y entran en juego las normas sobre la herencia, como veremos más adelante.

En los siguientes dos recuadros mostramos ejemplos sobre el acceso a la tierra de dos comuneros de Marcopata.

### **El caso de Celestino Coica**

Celestino Coica tiene 38 años de edad; nació y reside en Marcopata. Es comunero activo y actualmente ocupa el cargo de Juez de Paz de Marcopata. Anteriormente, también ocupó los cargos de secretario y teniente gobernador, además de haber asumido algunas responsabilidades con proyectos de ONG y del Estado. Actualmente vive con su esposa, Marina Torres (32) natural de Marcopata, y sus tres pequeños hijos.

Celestino tiene 10 parcelas bajo su poder actualmente, las cuales alcanzan las 3.6 Ha. De estas, la primera que recibió (0.25 Ha.) le fue entregada en préstamo por su padre, hace 6 años atrás. Por esos mismos años, la comunidad le hizo entrega de 2 parcelas (0.25 y 0.75 Ha.) en tanto Celestino se encontraba cumpliendo activamente con su rol de comunero. Luego de tres años, la comunidad le hizo entrega de dos parcelas más (0.25 y 0.75 Ha.), de forma tal que alcanzó el límite de las cuatro parcelas que es posible recibir por la comunidad. Con eso, señala, *igualó a los antiguos*. Adicionalmente, Celestino trabaja *al partir* hace tres años en dos parcelas de su padre (0.5 y 0.125 Ha.) y en una de un comunero vecino (0.25 ha.), y hace un año, en tierras de un comunero residente (0.25 Ha.). Finalmente, el suegro de Celestino falleció hace dos años y le dejó en herencia una parcela (0.25 Ha.) con *título*, a 15 minutos de su casa pero fuera de la jurisdicción de la comunidad. Sobre esta última parcela, tiene un conflicto con sus cuñados por la *propiedad* de la misma.

Cabe añadir que además de las 10 parcelas mencionadas, Celestino posee una casa ubicada en el barrio principal de la comunidad. Esta casa fue comprada originalmente como terreno a la organización comunal, hace 14 años atrás. Según señala Celestino, este terreno posee un *título* hecho por las comunidades y tiene valor propio.

### **El caso de Víctor Mallqui**

Víctor tiene 30 años de edad; nació y reside en Marcopata. Se inscribió como comunero activo hace cerca de 10 años pero aún no ha recibido tierras. Nunca ha ocupado un cargo en la directiva comunal. Actualmente vive con su esposa, Isidora (32) natural de Marcopata, y sus tres hijos de diez, ocho y 5 años.

Víctor maneja actualmente 8 parcelas que suman menos de 3 Ha. Dos de ellas, de 0.25 Ha. cada una, pertenecen a la familia de Isidora; se trata de tierras *antiguas* que su suegra le ha otorgado en préstamo hasta que tenga tierras propias. Otras tres parcelas son alquiladas: una proviene de los terrenos comunales y es alquilada a S/.600 Nuevos Soles por una hectárea y media; la segunda proviene de las tierras antiguas de su padre y se la alquila a S/.200 por un cuarto de hectárea, y la tercera, se la alquila a un comunero activo a S/.100 por un cuarto de hectárea. Dos parcelas más, de 0.125 y 0.13 Ha., son de propiedad de una pequeña propietaria agrícola y son trabajadas al partir fuera de la jurisdicción de la comunidad. Finalmente, la última, de 0.125 Ha., es una parcela entregada por la comunidad a su padre hace tan sólo 3 años y éste se la otorgado en *préstamo* hasta que Víctor no la necesite.

### **4.3. La familia, la mujer y el acceso a la tierra**

Los derechos de las mujeres en relación al acceso a la tierra son muy limitados. Tal como hemos señalado anteriormente, ellas no tienen la opción de ser comuneras a menos que queden viudas, por lo cual se encuentran en una posición muy similar a la de los *no-comuneros*. Podemos distinguir cuatro situaciones en la vida de una mujer en la comunidad, que definirán su forma de acceso a la tierra. Dichas situaciones, como veremos, no están tan sujetas a su edad como a su situación civil.

La primera es cuando no ha formado una familia y vive en casa de sus padres. En esta etapa, las mujeres dependen de sus padres y trabajan conjuntamente con ellos en sus actividades productivas, constituyendo un apoyo de mano de obra para la familia; en esa medida, no son posesionarias de ningún tipo de tierras. La segunda etapa es cuando la mujer encuentra una pareja y, entonces, se independiza de sus padres para formar su propia familia. En esta segunda etapa, las mujeres pasan de depender de sus padres a depender de su pareja, en tanto es ésta quien posee derechos de acceder a las tierras entregadas por la comunidad. En efecto, los hombres pueden haber recibido o, al menos, solicitado parcelas a la comunidad. El argumento utilizado para no hacer entrega de tierras a las mujeres es que ellas estarán siempre bajo el yugo de padres o parejas y que, por tanto, no requieren derechos de acceso a los recursos productivos. Del mismo modo, no se considera necesario que adquieran la categoría de comuneras, en tanto sus padres o parejas siempre podrán representarlas para la vida pública ante la organización comunal.

La tercera situación se da en caso de que la mujer quede viuda y con hijos que mantener. Independientemente de la edad que posea, la mujer puede convertirse en comunera reemplazando a su marido en la comunidad y obteniendo, en principio, los derechos que éste poseía. De este modo, la nueva comunera tendrá derecho de mantener las tierras entregadas por la comunidad a su esposo, pero también deberá cumplir con las obligaciones sociales de todo comunero activo, esto es, asistir a las asambleas, a las faenas colectivas, etc<sup>72</sup>.

Finalmente, la cuarta posibilidad es que la mujer sea madre soltera. A diferencia del caso de las viudas, la madre soltera no es reconocida como comunera ni adquiere derechos de acceso a la tierra. Así, de haber tenido hijos sin haberse independizado del yugo familiar, seguirá dependiendo económicamente de sus padres y, si es que no consigue otra pareja, no podría independizarse y seguir viviendo en la comunidad. En el caso de que una madre con hijos sea abandonada por su pareja (siendo comunero de Marcopata), la situación puede ser más compleja porque es posible que el comunero forme una nueva familia y requiera todas sus tierras. En nuestro estudio, hallamos sólo un caso como este y encontramos que la madre soltera se presentaba como viuda, condición que era reconocida por la organización comunal. De este modo, el comunero no tenía que abandonar sus parcelas y la mujer podía ser considerada comunera y recibir nuevas tierras para trabajar con sus hijos.

Llegado a este punto, cabe hacer una distinción importante. Nos hemos referido hasta el momento a la posibilidad de las mujeres de acceder a la tierra *entregada* por la organización comunal, explicitando las limitaciones y posibilidades que tiene para ello. No obstante, para el caso de las tierras *tomadas* por los antiguos -aquellas que poseen "título" y que han sido transferidas individualmente entre los comuneros a través de los años- la situación es radicalmente distinta. Como veremos más adelante, la amplitud de derechos que los comuneros poseen sobre este tipo de tierras es tal, que la comunidad difícilmente puede intervenir sobre las decisiones familiares. De este modo, son las familias las que deciden si entregan o no parcelas a sus hijas mujeres y, en la gran mayoría de los casos estudiados, encontramos que éstas reparten sus tierras entre hijos e hijas de manera equitativa. De otro lado, las mujeres pueden comprar tierras (de este tipo) a otros comuneros en el momento que lo prefieran. Esto quiere decir que, si bien no podrán beneficiarse de la repartición de tierras comunales, sí será posible acceder a otro tipo de tierras, ya sea a través de la herencia o de la compra-venta. Finalmente, aunque solo a través de tratos y contratos periódicos, las mujeres pueden también tener acceso a la tierra a través del alquiler, del trabajo *al partir* o del préstamo.

En el siguiente recuadro, citamos el caso de Santa Meza, una viuda comunera de Marcopata.

<sup>72</sup> A pesar de que las viudas son consideradas comuneras existen importantes diferencias para con sus pares comuneros. Como hemos señalado, si bien ellas cumplen con las obligaciones de un comunero activo, no asumen responsabilidades políticas, como ser autoridad de la comunidad.

### **Las mujeres y el acceso a la tierra: El caso de Santa Meza**

Santa Meza tiene 42 años de edad y reside en Marcopata, en el anexo de Marco. Quedó viuda a los 35 años con 7 hijos de entre 22 y 7 años. Antes de morir, su esposo era comunero de Marcopata y poseía sólo dos parcelas entregadas por la comunidad, de 0.13 Ha cada una. Un año después de su muerte, señalaron a Santa que de no inscribirse como comunera perdería las tierras que fueran de su esposo. De este modo, Santa se volvió comunera y empezó su vida activa en la el seno de la organización comunal.

Sin embargo, Santa ha tenido problemas para organizarse sola. Las parcelas que la comunidad hizo entrega a su esposo se encuentran a muchas horas de distancia a pie desde su casa, y Santa no puede encargarse de cocinar, atender a sus hijos y, a la vez de las labores agrícolas. De este modo, decidió trabajar *al partir* en otras tres parcelas, localizadas en zonas más cercanas, y enviar a sus tres hijos mayores a trabajar como jornaleros a la Selva. Su cuarta hija (Virginia, 18) se casó con un comunero del distrito vecino, de quien ahora depende. De esta forma, ella vive actualmente con Miriam (12), Héctor (9) y Esmeralda (7), sus tres últimos hijos.

Actualmente, Santa teme por la seguridad de sus tierras. A pesar de cumplir con todas sus obligaciones de comunera, explica que al no contar con mano de obra suficiente para explotar las tierras entregadas, la comunidad podría desposeerla de las mismas. En esta circunstancia, Santa no tendría tierras en un futuro para trabajar con ayuda de sus hijos, ni dárselas en préstamo o en herencia si ellos decidiesen ser comuneros de Marcopata.

De este modo, Santa considera que no tiene muchas alternativas para sacar a sus hijos adelante en Marcopata y que quizás sea mejor partir también hacia la Selva del país.

## **5. Los derechos sobre la tierra: apropiación familiar y control comunal**

Los distintos *grados de apropiación* de la tierra en Marcopata por parte de las familias comuneras pueden ser muy diferentes según el tipo de tierras del que se trate. Hemos distinguido anteriormente hasta 4 formas de clasificarlas: Según zonas de producción (riego, secano y pastos), según la forma de usufructo (familiar, colectiva, comunal), según si se trata de tierras antiguas o tierras recuperadas durante la reforma agraria y según el origen de la parcela familiar (tierras tomadas por las familias o entregadas por la comunidad).

Hemos definido –en el marco teórico– la apropiación de la tierra como el “conjunto de prácticas, reglas y normas de uso y aprovechamiento de la tierra...”. Queremos subdividir estas prácticas en formas de *uso*, *usufructo* y *disposición*, tomando los tres atributos que definen a la propiedad según el derecho romano para establecer los grados de apropiación. Los derechos de *uso* serán aquellos vinculados para nuestra investigación a elementos como la toma decisiones del ciclo productivo y calendario agrícola, la posibilidad de cercar las parcelas, la construcción de viviendas, el cambio de la actividad productiva realizada en la parcela (agricultura, ganadería producción lechera), la introducción de nuevas tecnologías productivas o el uso de nuevos productos (químicos, pesticidas), etc. Los derechos de usufructo serán aquéllos que permitan a los comuneros beneficiarse del uso que le dan a su parcela, esto es, de la venta de su producción y uso

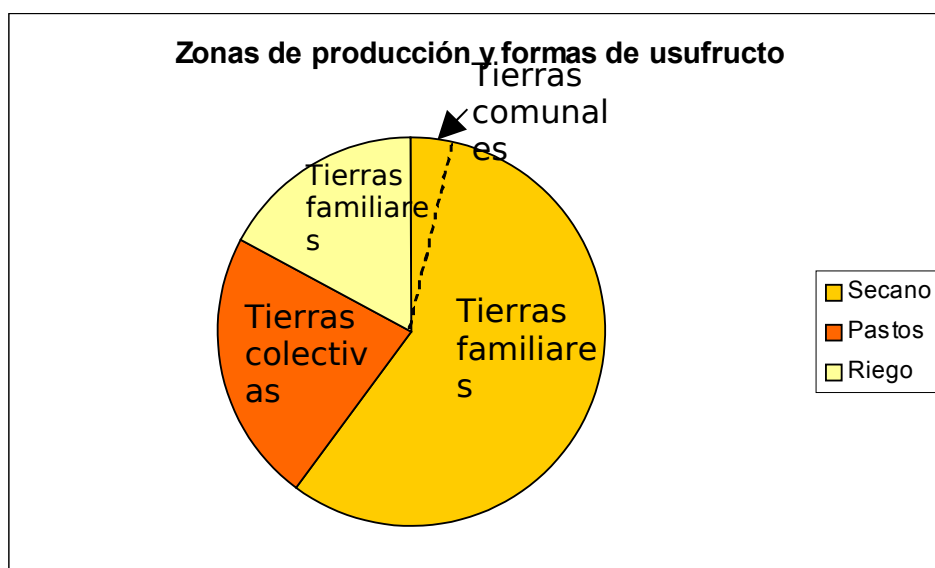


de los ingresos percibidos por ella, el consumo de la producción, etc. Los derechos de disposición de la tierra se referirán a la posibilidad de los comuneros de transferir la tierra ya sea en herencia, alquiler, venta u otras modalidades. Todas las anteriores posibilidades conforman una lista de hechos prácticos y observables. A ellos hay que añadir un nivel más subjetivo de análisis, con el cual las prácticas deben ser confrontadas: el discurso y la percepción de los comuneros sobre la propiedad de su parcela.

La diferenciación según los atributos de uso, disfrute y disposición nos permitirá hablar de grados de apropiación en función de si la relación de la familia con la tierra cumple o no plenamente con uno, con dos o con los tres atributos antes señalados. De otro lado, el control comunal sobre la tierra tenderá a aumentar en tanto disminuya el grado de apropiación sobre la tierra. En lo que sigue nos referiremos a los grados de apropiación encontrados, en función de los tipos de tierras y sus cruces.

La *forma de usufructo* (familiar, individual y colectiva) está vinculada al tipo de tierra según *zonas de producción*. Esto es, las zonas de riego sólo son usufructuadas familiarmente, y aquéllas de pastos de forma colectiva. Las zonas de secano son usufructuadas casi íntegramente de forma familiar, a excepción de unas pocas áreas de usufructo comunal, como vemos en el gráfico 1.

**Gráfico 2**



### 5.1. Tierras de riego y secano: uso familiar

A diferencia del caso de las tierras de pastos, no es posible para las **tierras de secano** y las de **riego** de uso familiar, referirnos a un modo de apropiación uniforme, ya que existe otra clasificación dominante de tierras que interviene estableciendo diferencias. Nos referimos a la que distingue, por el *origen de la parcela familiar*, entre *tierras tomadas de tierras entregadas* por la comunidad. Señalamos los diferentes derechos atribuidos en lo que sigue.

*a. Tierras tomadas por los antiguos.*

Señalamos anteriormente que las *tierras tomadas* son las parcelas más antiguas de la comunidad que han sido traspasadas por herencia o por venta a través de las generaciones. Aquéllos comuneros que poseen este tipo de parcelas tienen derecho de usarla de la manera que mejor les convenga y hacer uso de sus frutos sin ningún tipo de restricción. Es decir que tienen plena libertad de determinar tiempos de siembra y cosecha, de realizar innovaciones productivas, de construir una vivienda, de disponer su producción de la manera que mejor les convenga, etc. Adicionalmente, tienen derechos de disposición sobre la tierra, es decir que la parcela puede ser traspasada en cualquier momento o heredada a los hijos, puede ser alquilada e incluso vendida.

Podemos decir, de lo anterior, que el grado de apropiación en este tipo de tierras es alto y que el control comunal sobre ellas es prácticamente nulo. En efecto, en términos prácticos, los derechos sobre este tipo de tierras para sus poseedores son casi tan amplios como los que otorga el derecho de propiedad según la legislación occidental. A ello se suma la percepción que tienen los comuneros sobre ellas, lo cual completa la idea de propiedad. En muchas declaraciones, lo que se dice sobre las parcelas antiguas es que *“son como privadas”* o, quienes las poseen, *“eso es mío ya”*. Finalmente, la aceptación generalizada acerca de la propiedad de estas tierras al interior de la comunidad, se materializa con la existencia de títulos que conservan los comuneros y que son reconocidos y respetados por las autoridades comunales. Si bien el referido título no tiene validez oficial -en tanto la propietaria última de las tierras es la misma comunidad-, constituye para ellos una constancia válida de su propiedad o, mejor, del grado de propiedad que tienen sobre dicha parcela.

Existen, no obstante, algunas restricciones vinculadas a la relación de los comuneros con el exterior de la comunidad. La primera es la imposibilidad de vender las tierras a personas ajenas a la comunidad. Las entrevistas realizadas evidenciaron, sin embargo, que no existe claridad sobre esta regla, incluso no todas las autoridades de la comunidad concordaron sobre este punto. Los líderes más antiguos y algunas autoridades señalaron que no era posible vender las tierras a un externo porque *“todo es comunidad”*. Las siguientes citas lo señalan: *“No es posible vender tierra a gente de fuera, ni las que tienen título, por que es de la comunidad, todo”* (Fortunato Silva, comunero antiguo); *“No vendería mis parcelas (con título) porque las uso y quiero dejarlas a mis hijos o a mis nietos; además aún si quisiera hacerlo, la comunidad no me lo permitiría”* (Pedro Villalba, comunero antiguo). *“A ellos ya no se les puede quitar porque son personas antiguas, tienen título, pero aunque tenga título no puede vender a gente que no es comunidad”* (Oscar Irrazábal<sup>73</sup>, vice-presidente la comunidad).

A pesar de lo anterior, podemos encontrar la siguiente declaración del presidente de la comunidad: *“De la época de nuestros abuelos, según dicen, esas tierras deben respetar, ellos tienen ya como título de propiedad, (a los de fuera) ya pueden vender”* (Nemesio Mallqui, presidente de la comunidad). Asimismo, algunos de los entrevistados jóvenes, aunque no sin dudar, dijeron que sí era posible vender las tierras de los antiguos. A nivel de los hechos, encontramos que existían en la comunidad, dos casos de venta de parcelas a personas externas a la comunidad. Esto, sin embargo, había generado un malestar entre las autoridades, y el secretario de la comunidad ya estaba emprendiendo acciones para desalojarlos de la comunidad. En efecto, si bien existe mucha confusión entre lo que es y no es posible hacer con las tierras tomadas por los antiguos, la

<sup>73</sup> Cuando llegamos a la comunidad para nuestro trabajo de campo, Don Oscar Irrazábal era el vice-presidente de la comunidad. Sin embargo, durante nuestra estadía fue elegido presidente para el periodo 2007-2008.

comunidad se presenta como poseedora de un territorio colectivo que comprende entre otras cosas, las tierras de todos sus comuneros, y sobre las cuales tiene el poder y el deber de responder.

Es interesante anotar que en las entrevistas realizadas, al surgir la duda acerca de la posibilidad o no de venta de parcelas a externos, los criterios para apoyar una u otra alternativa responden a elementos internos y no externos. Esto es, la antigüedad de la tierra y el respeto por la amplitud de derechos que tienen sus usufructuarios o la consideración de la comunidad como administradora última del territorio (elementos internos), mas no lo que pueda encontrarse escrito en la legislación nacional acerca de la transferencia de tierras comunales<sup>74</sup>. Como retomaremos más adelante, ni las autoridades comunales ni sus comuneros conocen la legislación nacional acerca de las comunidades campesinas y sus tierras.

#### *b. Las tierras entregadas por la comunidad.*

Tal como hemos señalado, las tierras entregadas por la comunidad son aquéllas que la organización otorga a sus comuneros para su usufructo. Los derechos que poseen las familias sobre estas tierras son muy amplios pero guardan algunas restricciones importantes. Al igual que en el caso de las *tierras tomadas*, los poseedores de las mismas tienen plenos derechos de uso y usufructo, teniendo libertad para la toma de decisiones productivas, así como libertad para aprovechar los frutos que se obtengan de dicho uso. No obstante, la idea de *posesión* y no de *propiedad* está mucho más marcada en la relación de las familias con la tierra, esto es, las familias no se consideran propietarias de sus tierras, sino que aluden constantemente a que se trata de “*tierras de la comunidad*”. El hecho de que las tierras sean “*de la comunidad*” pone restricciones al atributo de *disposición* sobre las parcelas. Estas parcelas pueden ser alquiladas, prestadas y trabajadas al partir por las familias, pero en ningún caso pueden ser vendidas.

Sin embargo, la prohibición de la venta puede ser para las familias de Marcopata menos importante que una segunda restricción a la transferencia de las tierras: la herencia. La herencia es el mecanismo a través del cual los padres aseguran parte de la futura sobrevivencia de sus hijos, sin embargo, ésta no depende exclusivamente de su voluntad. Las tierras entregadas por la comunidad pueden ser heredadas a los hijos a la muerte de los padres, siempre y cuando estos últimos se inscriban como comuneros de Marcopata y cumplan con todas las funciones y trabajos que ser comunero implica. De no inscribirse como comuneros, los hijos pierden el derecho de usufructo de las tierras de sus padres, y éstas regresan a manos de la comunidad para ser repartidas a los comuneros que lo soliciten. Declaraciones como las que siguen fueron frecuentes en nuestras entrevistas: “*Dejar como herencia a mis hijos es difícil porque la comunidad les puede quitar si no están activos; la chacra de la comunidad es como prestada nomás*” (Juan Osores Meza, comunero) “*No podría dejar nada a mis hijos porque la comunidad me las puede quitar si mis hijos no las trabajan*” (Lucho Mallqui, comunero y registrador civil de Marcopata).

Esta restricción a la herencia es, en realidad, fruto de una norma comunal que dicta que para poder entregar parcelas a sus comuneros y que éstas puedan mantenerse bajo su posesión, los comuneros deben estar debidamente inscritos en el padrón y estar al día con sus obligaciones ante la organización comunal. De lo contrario, la parcela puede ser arrebatada y regresar al seno de la organización comunal<sup>75</sup>.

<sup>74</sup> Según la Ley General de Comunidades Campesinas (Nº24656), artículo 7, las tierras de las comunidades campesinas pueden ser vendidas, con previo acuerdo de por lo menos los dos tercios de la asamblea comunal.

<sup>75</sup> Aunque, todos los entrevistados señalaron que el arrebato de tierras por incumplimiento de deberes para con la organización comunal es muy poco frecuente,

De este modo, independientemente de la cantidad de tiempo que las familias posean tierras entregadas por la comunidad<sup>76</sup>, existe la posibilidad de que éstas retornen al seno de la comunidad. Se trata de una norma que regula la distribución de tierras en la comunidad, que otorga derechos a los comuneros sobre su acceso a las parcelas y que, aunque de forma indirecta, les impone ciertas obligaciones para con la organización comunal. En efecto, tal como hemos visto en el punto anterior, el acceso a la tierra de los comuneros se encuentra condicionado por su comportamiento frente a la comunidad, lo cual forma parte de lo que los comuneros llaman *servir* a la comunidad.

Retomando la variable de inicio, podemos decir que en este tipo de tierras existe un grado *medio* de apropiación de la tierra por parte de las familias comuneras. Los derechos de uso y de usufructo se encuentran muy desarrollados, mientras que existen restricciones importantes en cuanto al acceso y transferencia de la tierra. El control comunal sobre estas tierras se mantiene y ejerce presión permanente sobre los comuneros a pesar de que algunas familias trabajen en las mismas tierras de sus abuelos y prevean continuar transmitiéndolas en herencia a sus hijos.

Es importante señalar que a pesar de que existe claridad en cuanto a la condicionalidad existente para la conservación de estas parcelas, las familias comuneras valoran su posesión, en tanto perciben que se trata de *tierra segura*: “*Es segura esta tierra, nadie nos puede quitar*” (Jesús Fernández, comunero); “*Nadie puede quitarme mis parcelas, si alguien reclamara mis parcelas, las autoridades resolverían*” (Juan Meza, comunero). Al ser consideradas con claridad como propiedad de la comunidad, existe garantía de que ante algún conflicto (con externos o con otros comuneros), la organización comunal defenderá los derechos de acceso y uso de la tierra al comunero que las posea. La comunidad otorga, en ese sentido, una excelente garantía de “propiedad” sobre las parcelas familiares. De otro lado, también existe seguridad de que si se cumple intergeneracionalmente con los mandatos de la organización comunal, las parcelas podrán ser mantenidas y heredadas de forma indefinida sin correr ningún riesgo de pérdida.

## 5.2. Tierras de secano: uso comunal

A pesar de la escasa extensión de las tierras comunales, éstas merecen nuestra atención en tanto representan el único espacio bajo control exclusivo de la comunidad. Éstas representan el 3% de las tierras de propiedad comunal, con alrededor de 10 Ha. de uso agrícola en tierras de secano y se encuentran ubicadas entre los 3600 y los 3800 m.s.n.m. Sobre estas tierras, la apropiación familiar es inexistente. Las tierras son usadas y administradas por la comunidad y en beneficio de la misma. Hasta hace 10 años atrás, las áreas comunales eran trabajadas en faenas colectivas por todos los comuneros. La producción era vendida y el dinero era utilizado por la directiva para obras, gestiones, fiestas o cualquier actividad para la que la comunidad requiriese recursos monetarios. Actualmente, sin embargo, las tierras no se trabajan más de forma colectiva sino que son alquiladas a los mismos comuneros que así lo soliciten. Ellos deben pagar a la directiva comunal una cantidad de dinero, con lo cual la directiva ya no debe hacerse más cargo de

---

durante nuestra estadía en la comunidad fuimos testigos de dos conflictos originados por esta situación. En ambos casos, se trató de comuneros que habían partido de la comunidad y que a pesar de continuar dándole uso a sus parcelas (bajo la modalidad al partir, en préstamo a algún pariente o en alquiler) habían dejado de lado otras obligaciones, como aportar ciertas cuotas solicitadas por la comunidad a todos sus comuneros.

<sup>76</sup> Una familia puede mantener las parcelas entregadas por la comunidad y transmitir las por herencia de generación en generación.

la organización de la faena ni de la venta de la producción. Los recursos obtenidos, sin embargo, se destinan y utilizan de la misma forma.

Este cambio en el sistema de explotación de las tierras comunales es explicado debido a la inestabilidad de los precios de los productos agrícolas en el mercado, lo cual en ocasiones les producía algunas pérdidas monetarias. Como señala uno de nuestros entrevistados: *“Alquilando es menos dinero pero el precio es fijo, es seguro”* (Celestino Coica, comunero y juez de paz de la comunidad)<sup>77</sup>. La diferencia entre los ingresos del sistema de alquiler y los de la siembra comunal de papa son tan grandes que buscamos razones adicionales para el cambio. De un lado, encontramos que el trabajo colectivo sobre estas tierras implica para los comuneros ceder valiosas jornadas de trabajo, sacrificando el propio en las parcelas familiares u en otras actividades no-agrícolas. Asimismo, de no asistir a las faenas, los comuneros son multados con una suma de dinero que podría acumularse hasta constituir un grave problema en la economía familiar. La creciente dificultad de cumplir con estas obligaciones fue un factor que se sumó para cambiar de un sistema colectivo a uno, más bien, propio de las relaciones de la propiedad privada. Un segundo factor a considerar para el cambio de uno a otro sistema de explotación fue el de los consecutivos malos manejos de los comités encargados de la gestión de espacio comunal.

### 5.3. Tierras de pastos: uso colectivo

Ahora bien, podemos afirmar que en las **tierras de pastos** (o, para el caso, colectivas) el grado de apropiación de la tierra de las familias comuneras es bajo. El área de pastizales de Marcopata es de libre acceso para todas las familias e individuos de Marcopata –lo cual incluye a los no-comuneros y a las mujeres- y no existe ningún sistema de rotación ni de control de pastoreo al interior de las mismas. Es decir que cualquier comunero puede llevar a pastear al número de animales que desee, en cualquier momento del año y sobre cualquier extensión. Esto puede ser interpretado como una plena libertad para el uso de las tierras, sin embargo, los comuneros tienen restricciones que impiden el paso de un sistema colectivo a uno de uso individual (o familiar). Por ejemplo, no es posible sembrar productos agrícolas (o variedades de pastos) en esta área, ni es posible cercar partes de ella o, peor aún, levantar alguna infraestructura. Estas restricciones sobre el uso de las áreas de pastos limitan, a la vez, sus posibilidades de usufructo: el único aprovechamiento que se hace posible es el uso de pastos naturales.

De este modo, sobre las tierras de pastos, no es posible hablar plenamente de derechos de uso (*usus*) ni de usufructo (*fructus*). Menos aún es posible hablar de disposición (*abusus*), en tanto las tierras no pueden ser alquiladas, ni vendidas ni heredadas. Sobre estas tierras es la comunidad la que mantiene el control y la toma de decisiones sobre su uso, usufructo y disposición. A pesar de ello, la escasa regulación que la comunidad ejerce a falta de un sistema de pastoreo, produce la percepción de que se trata de un espacio no-regulado. Esto, sin embargo, dista mucho de la realidad si consideramos que Marcopata cobra -a pagar en animales- a los pobladores del vecino Grupo Campesino de Ccheche por el uso de los pastos. De otro lado, en las áreas más bajas de la zona de pastos, la organización comunal ha ido entregando paulatinamente pequeños espacios de tierra como parcelas para nuevos comuneros, toda vez que las áreas de secano quedan agotadas.

<sup>77</sup> El alquiler en la zona de Patahuasi es de S/. 400 nuevos soles por hectárea, mientras que en Ccasapata es de S/. 300 nuevos soles por hectárea (en Ccasapata, el riesgo de heladas es mayor que en Patahuasi). En términos comparativos, la comercialización de una hectárea de papa en Marcopata puede generar un ingreso S/. 5500 nuevos soles y la inversión monetaria no supera los S/. 1000 nuevos soles (entre semillas y abonos).

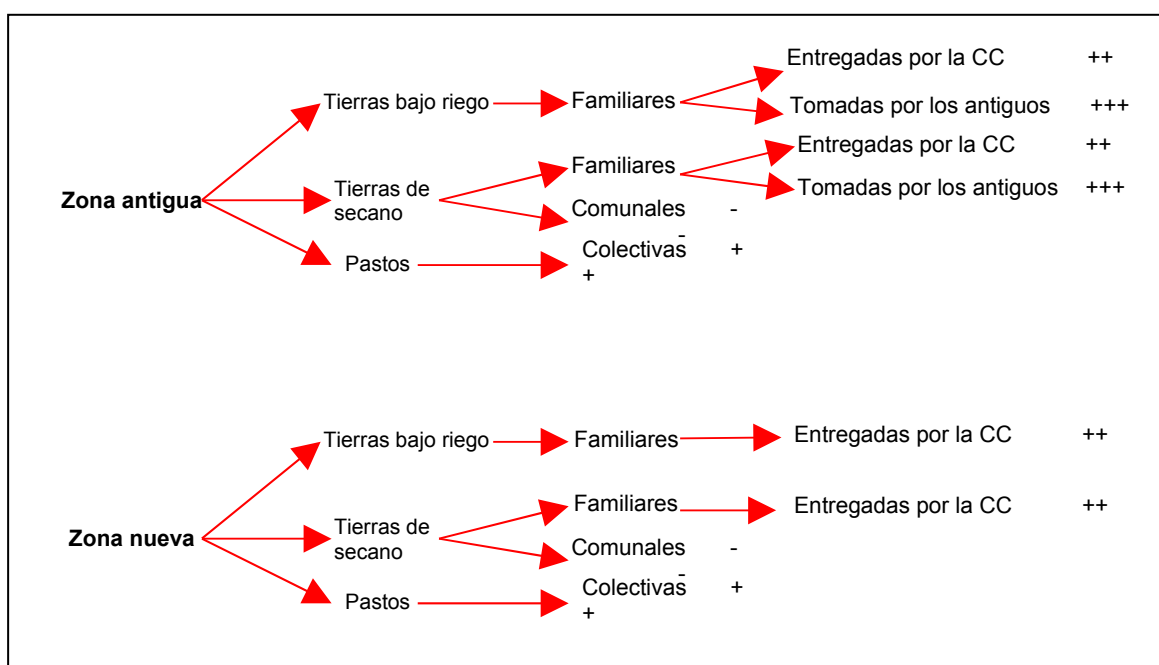
#### 5.4. Tierras antiguas y tierras nuevas

Las tierras antiguas y nuevas se superponen a todas las zonas de producción y a todos los tipos de usufructo anteriormente señalados, ya que el corte que divide ambos tipo de tierras sobre el territorio es transversal, como puede observarse en el croquis<sup>1</sup>. No obstante, no es posible encontrar en la zona de tierras nuevas, tierras *tomadas por los antiguos* ya que no hubo tomas de tierras sobre los terrenos adjudicados por Reforma Agraria. Los derechos y formas de apropiación familiar de la tierra en zonas antiguas y nuevas se encuentran en función de los otros criterios de clasificación de tierras descritos anteriormente. Sin embargo, podemos decir, grosso modo, que en la zona nueva –por no haber habido tomas de tierras- la amplitud de derechos de las familias comuneras y los grados de apropiación sobre la tierra suelen ser menores que en la zona antigua.

A continuación mostramos un diagrama que indica cómo entran en relación las distintas categorías de tierras que hemos señalado anteriormente, así como sus distintos grados de apropiación indicados por los símbolos -, +, ++, +++ (apropiación nula, baja, media y alta, respectivamente):

**Diagrama 2:**

#### **Cruces según tipos de tierras y sus grados de apropiación**



## 6. Derechos plurales y dinámicos de la propiedad

Hemos trabajado en el acápite anterior sobre las formas de acceso a la tierra y los modos de apropiación familiar de las tierras, distinguiendo criterios de uso, disfrute y disposición, así como sobre el control que ejerce la organización comunal sobre estas. Todo ello configura un conjunto de normas y de derechos que operan al interior de la comunidad campesina y que dan forma a un sistema particular de tenencia de la tierra.

Como hemos visto, no es posible comprender los derechos sobre la tierra sin reconocer y definir una serie de elementos básicos, como las diferentes categorías sociales entre comuneros pero, sobre todo, sin realizar una identificación y clasificación de los distintos tipos de tierras que comprende la comunidad. En efecto, la diversidad de formas a través de las cuales la comunidad campesina y sus comuneros pueden vincularse a la tierra es tan amplia que no sería posible describir su relación con la tierra a través de la definición clásica de propiedad. En esta última parte del informe, queremos revisar la concepción tradicional de propiedad contrastándola con lo que sucede en la práctica en la comunidad. Utilizaremos el concepto de *paquetes de derechos* para identificar cómo se combinan los criterios recogidos en la sección anterior del trabajo, vinculando tipos de actores y tipos de tierras en la comunidad. Seguidamente, veremos el modo en que los derechos sobre la tierra en Marcopata son permeables y dinámicos, desbordando el concepto de sistemas normativos definido en el marco teórico. Finalmente, analizamos la interacción que existe entre el conjunto de normas y derechos producidos por la comunidad, con otros producidos por otras fuentes de derecho, como el Estado o las ONG.

### 6.1. La propiedad comunal.

La confusión entre la propiedad de la tierra –reconocida por la legislación estatal- y la propiedad del territorio –percepción comunera de base identitaria- es una constante en las comunidades campesinas del país. En Marcopata encontramos esta confusión expresada en distintos aspectos, como veremos en lo que sigue.

Para comenzar, retomemos brevemente el concepto de propiedad comunal. Según el derecho románico, bajo el cual se rige la legislación estatal, la organización comunal en tanto propietaria de las tierras debiera poseer los atributos de uso, disfrute y disposición sobre las mismas. Con estos tres atributos el derecho de gozar y disponer de la tierra de la manera más absoluta –tal como se define el derecho de propiedad- quedaría garantizado. Como hemos visto, sin embargo, la comunidad no posee estos tres atributos más que en una porción de la totalidad de las tierras.

Podríamos considerar que las tierras comunales cumplen con todos los atributos de la propiedad: la comunidad las puede utilizar cuando y como lo considere necesario, así como gozar de sus beneficios plenamente. En cuanto a las tierras de pastos, aunque son las familias las que poseen el derecho de uso de los pastos, la comunidad tiene el atributo de disposición, en tanto puede otorgar a los comuneros nuevos algunos espacios de terreno para el uso agrícola o alquilar el pastoreo a los vecinos de la comunidad de Checche, y de disfrute, en tanto se beneficia de los recursos del alquiler. De otro lado, es la comunidad la que toma las decisiones sobre estas tierras y bien podría modificar el sistema de usufructo familiar imponiendo límites al uso de los pastos o utilizándolos para el beneficio comunal. Ahora bien, si bien la comunidad cuenta con estas atribuciones, es importante señalar que las tierras comunales sólo representan el 5% del territorio comunal y que las tierras de pastos son muy marginales en términos de su capacidad productiva y de su aprovechamiento.

El caso de las tierras de riego y secano, como veremos es muy diferente: Éstas representan el 80% de la propiedad comunal y la comunidad no tiene capacidad de intervenir ni sobre los derechos de uso ni de usufructo, ya que éstos han sido otorgados a las familias comuneras. El único atributo que tiene la comunidad sobre estas tierras, si es que se trata de las parcelas otorgadas por la organización comunal, es el de transferencia, al tener la posibilidad de otorgárselas o quitárselas a sus comuneros. Finalmente, sobre las tierras de riego o secano tomadas por los *antiguos*, la comunidad no posee ninguna forma regulación o, por lo menos, existe muy poca claridad y consenso al respecto.

Dicho lo anterior, y retomando la definición clásica de propiedad, ¿podemos acaso afirmar que la comunidad posee derechos absolutos sobre la tierra? De tomar como alternativa para el análisis la definición tradicional de propiedad, entonces podríamos concluir que la comunidad campesina no es propietaria de las tierras sobre las cuales se asienta. En efecto, esta definición no contribuye a una comprensión del sistema comunal de tenencia de la tierra sino que conlleva a una aparente contradicción.

Ahora bien, qué sucede en cambio con la noción de *territorio*. El Estado peruano no reconoce a las comunidades campesinas como propietarias del territorio, ya que ello implicaría la soberanía política sobre el mismo y el completo control sobre los recursos. En la práctica, sin embargo, tanto a nivel de percepciones como de prácticas concretas, es posible observar lo contrario. A pesar de la extrema parcelación y del fuerte grado de apropiación de las familias sobre la tierra, la imagen de la comunidad como poseedora y protectora del conjunto de las tierras de la comunidad persiste. De ahí que sea la organización comunal la que, como hemos visto anteriormente, se ocupe de resolver los conflictos por la venta de parcelas familiares a personas externas a la comunidad. Asimismo, en Marcopata, son las autoridades en consulta con la Asamblea, las que aceptarán o no la presencia de personas externas o la intervención de proyectos de ONG aunque éstos estuviesen dirigidos a familias o individuos<sup>78</sup>. De otro lado, es en el seno de la comunidad que se atienden resuelven los conflictos a través del Juez del Paz, que se regula el orden a través del Teniente Gobernador o del Fiscal, e incluso que se toman las decisiones políticas que escapan de los mandatos de la mera organización comunal<sup>79</sup>. Resulta paradójico que, a pesar de ocuparse de todas estas tareas, la institución comunal no sea parte integral de la estructura formal del Estado.

Hemos visto entonces que, a pesar de que la comunidad como institución no posee todos los atributos que la definición clásica de propiedad otorga como derechos, sí resulta importante y persiste la imagen de la comunidad como propietaria del conjunto de las tierras y como poseedora de un territorio colectivo sobre el cual tiene el control. Se hacen necesarios entonces, otros enfoques para comprender las relaciones de la comunidad y sus comuneros con la tierra, para lo cual en lo que sigue retomamos algunos de los conceptos abordados por el pluralismo jurídico.

<sup>78</sup> Un ejemplo de ello lo encontramos a nuestra llegada a la comunidad. Para poder emprender el trabajo de investigación y pernoctar en la comunidad, debí hablar primero con las autoridades comunales. Ellos convocaron a dos Asambleas para comunicar y recibir la aprobación de todos sus comuneros. Sin este consentimiento yo podía ser echada de la comunidad, aún si mi trabajo fuera hacer entrevistas familiares o individuales.

<sup>79</sup> Durante nuestra estadía, la organización comunal –en la que no participa la población no-comunera de Marcopata– tomó medidas para destituir al alcalde del Centro Poblado Menor (CPM) de Marcopata, ámbito que forma parte de la estructura política del Estado y que comprende a toda su población. Posteriormente, la comunidad invocó a la formación de listas de candidatos y a nuevas elecciones.



## 6.2. Familias comuneras y derechos diferenciados sobre la tierra

Uno de las teorías pertinentes para el análisis de los derechos sobre la tierra es la de *paquetes de derechos*. Ésta nos permite considerar la multiplicidad de derechos que poseen las personas sobre un mismo recurso, rompiendo con el esquema de derecho unitario y fijo que normalmente se maneja en el discurso tradicional. En efecto, esta teoría alternativa resulta una herramienta útil para pensar en las múltiples combinaciones de derechos en la relación de la tierra y la comunidad. Ahora bien, definir estos *paquetes de derechos* en Marcopata resulta una tarea compleja si consideramos el sin fin de formas en las que un individuo puede ser clasificado al interior de la comunidad, así como la variedad de modos de catalogar la tierra. En efecto, la complejidad de las relaciones que se establecen con la tierra en Marcopata nos imposibilita hablar de un “recurso tierra” en términos amplios, sino que habría que pensar en los derechos que se gestan alrededor de cada uno de los tipo de tierras existentes.

Realizamos un ejercicio tomando dos de las características de la tierra que consideramos centrales para el caso de Marcopata (tierras entregadas por la comunidad y tierras tomadas por los antiguos), siempre en función de las clasificaciones abordadas en el acápite 4.1 de nuestro trabajo. Asimismo, continuamos utilizando la variable acceso a la tierra, así como los atributos de uso, disfrute y disposición. De ello, obtuvimos 2 cuadros en los que es posible observar con facilidad la forma en la que sobre la tierra actores distintos poseen derechos diferenciados. De otro lado, en la comparación de ambos cuadros es posible contrastar la densidad de los derechos que poseen los individuos sobre uno u otro tipo de tierras.

### Cuadro 7

#### **Paquetes de derechos en parcelas familiares: tierras entregadas por la comunidad**

# Derechos

Del cuadro anterior es posible observar que aquellos que poseen paquetes de derechos menos densos son las mujeres, quienes se encuentran en la misma posición que los *no-comuneros*. Seguidamente se encuentran los *comuneros honorarios*, quienes sólo pueden acceder a estas tierras haciendo uso de aquellas poseídas por terceros<sup>80</sup>. De otro lado, en la medida en que estos tres actores no son los titulares de la posesión última de las tierras, sus posibilidades de uso también se ven limitadas. Finalmente, observamos que los comuneros jubilados son los que en mejor situación se encuentran, en tanto son los únicos que no pueden ser desposeídos de sus tierras.

Es importante señalar que la diferenciación que existe al interior de la categoría de comunero se encuentra asociada a la edad del comunero en cuestión. Es decir, que los comuneros honorarios son, en la gran mayoría de casos, jóvenes con hijos pequeños, mientras que los comuneros activos suelen ser, más bien, mayores de 35 años con hijos mayores e incluso nietos. Esto se explica debido a que, como hemos señalado, el comunero honorario debe pasar un número de años de *servicio* a la comunidad, así como comprobar su buena conducta. Otro elemento a considerar es que resulta importante haber asumido cargos en la comunidad para poder recibir tierras, lo cual puede requerir un periodo regular de tiempo<sup>81</sup>.

De lo anterior es posible señalar que son las mujeres pero también los jóvenes quienes poseen menos ases para reclamar sus derechos sobre la tierra. No obstante, tras observar el siguiente cuadro, notamos una diferencia grande en los paquetes de derechos

<sup>80</sup> A excepción de la herencia paterna, con la cual los *comuneros honorarios* dejarían de serlo, para ser *comuneros activos*.

<sup>81</sup> Para ser autoridad en Marcopata, los comuneros deben ser elegidos en elecciones comunales, cada dos años. Normalmente son los comuneros activos y con más prestigio en la comunidad los que buscan a otros comuneros para conformar una lista electoral. Algunos comuneros honorarios quedarán excluidos de ese proceso, y de no serlo, deben posteriormente ganar las elecciones. En Marcopata, suele haber dos o tres listas electorales y siete cargos comunales.

de cada actor. En efecto, todos cuentan con los mismos derechos sobre las *tierras tomadas* por los antiguos, siendo en este caso, la organización comunal la que queda al margen en la relación con la tierra.

#### Cuadro 8

**Paquetes de derechos en parcelas familiares:  
tierras tomadas por los antiguos**

Derechos s	

El enfoque abordado nos permite afirmar que los derechos sobre la tierra no son uniformes. Así mismo, éste ha contribuido a identificar una serie de factores que influyen en la determinación de estos derechos y que se cruzan entre sí, generando muchas formas en las que una persona puede relacionarse con la tierra. En el caso de Marcopata,

Por comp

dichos factores están relacionados a las características del actor pero también a las características de la tierra. Para el caso de las características de los actores, podemos decir, entonces, que son importantes en la definición de derechos sobre la tierra: i. el género del poblador de Marcopata, poseyendo las mujeres menos derechos que los hombres sobre la tierra y ii. la relación establecida con la organización comunal, esto es, el compromiso de ser comunero o no comunero y de servir o no a la comunidad. Este factor tiene asimismo un estrecho vínculo con la edad del comunero, de forma tal que podemos hablar de una tendencia en la cual los más jóvenes poseen menos derechos sobre la tierra que los adultos y, más aún, que los ancianos de la comunidad.

Para el caso de las características de las tierras son factores importantes en la definición de derechos: i. El origen de la parcela familiar, determinando un mayor o menor grado de apropiación de la tierra por parte de las familias y de control por parte de la comunidad. ii. La zona de producción, siendo importante la distinción entre las zonas de pastos y las zonas de producción agrícola de la comunidad, determinando las primeras mucho menos derechos de apropiación familiar que las segundas. Cabe señalar que a diferencia de lo que es sostenido en otros estudios, la distinción entre las zonas de riego y de secano no determina grados de apropiación familiar muy diferenciados. En estos dos tipos de tierras el criterio dominante en la definición de derechos es el origen de la parcela familiar. No obstante es importante mencionar que la gran mayoría de tierras bajo riego son tierras originalmente tomadas por los antiguos, en esa medida podemos decir que la tendencia es que en las tierras bajo riego existe un grado mayor de apropiación sobre la tierra que en las tierras de secano. Del mismo modo, en la distinción entre las tierras antiguas y aquéllas recuperadas durante la Reforma Agraria, el criterio dominante es el origen de la parcela familiar, por lo cual no podemos considerar que este criterio pueda determinar los derechos sobre la tierra.

Luego de comparar los cuadros 4 y 5 podríamos decir que los derechos son más uniformes entre los distintos actores a medida que el poder de la organización comunal disminuye y que la relación con la tierra se acerca más a la forma de propiedad privada. No obstante, con esta herramienta no es posible observar las desigualdades que en la práctica existen en el acceso a la tierra e identificar otro tipo de criterios que marcan diferencias. Cabe preguntarse, de este modo, ¿Quiénes son los poseedores de las tierras de los antiguos? o ¿Cómo se generan las diferencias en la posesión y acumulación de las tierras?

Tal como hemos señalado anteriormente, las diferencias entre comuneros en relación con la cantidad de tierra que se posee y maneja es bastante amplia. Podríamos afirmar incluso que si existe una diferencia importante en los derechos de los comuneros sobre la tierra, ésta será más que a nivel de uso o disfrute de la misma, a nivel de acceso a ella. Este hecho, sin embargo, no es el primer discurso de autoridades ni comuneros, ni incluso entre las mujeres, quienes son las más afectadas. Existe, pues, en la comunidad un discurso público de igualdad y existen también normas explícitas que responden a los derechos y normas aceptadas por el colectivo y aplicadas de forma más o menos regular para establecer la relación entre los comuneros y la tierra. Estas normas y derechos son los que hemos venido desarrollando hasta el momento. No obstante, existe otro discurso entre las familias que trata sobre la diferencia, que se maneja cuidadosamente, que es fuente de tensiones y conflictos y que responde a normas y derechos no explícitos.

Estos derechos son más difíciles de categorizar e inscribir en esquemas de *paquetes de derechos*, como hemos hecho anteriormente, ya que son producto de casos particulares o de negociaciones que no siempre son regulares ni constantes. En efecto, el enfoque de *paquetes de derechos* resulta de gran utilidad para rebatir la universalidad del derecho e identificar más bien su pluralidad en función de actores o tipos de recurso en la

comunidad, pero para que su alcance en explicar las relaciones de propiedad no sea restringido, es importante comprender los *paquetes de derechos* no sólo como plurales y ligados a contextos y condiciones determinadas, sino también como permeables y dinámicos. Las fronteras que delimitan los *paquetes de derechos* de uno u otro individuo pueden ser borrosas y tomar formas distintas en una u otra circunstancia. Sobre este aspecto, profundizamos en lo que sigue.

### 6.3. Poder y derechos sobre la tierra

Uno de los primeros aspectos que desarrollamos en el presente informe fue la historia de la comunidad, rescatando algunos hechos que consideramos centrales. Podemos ubicar dichos hechos en el tiempo y dividirlo gruesamente dos momentos importantes:

La primera mitad del siglo XX: *Las tomas de tierras*. Periodo en el cual la población de Marcopata –muy escasa a principios de siglo- empezaba a aumentar. De este periodo datan las primeras familias y los *antiguos* a los que actualmente hacen referencia los comuneros. En este periodo se producen el grueso de las tomas de tierras, así como la venta de una porción de tierras a la hacienda vecina.

La segunda mitad del siglo XX: *La afirmación de liderazgos*. Hacia mediados del S. XX, las familias habían aumentado y quedaban cada vez más reducidos los espacios de tierra. Con alrededor de 60 familias, la organización comunal se fortalece y obtiene su reconocimiento como comunidad en 1963. Las tomas de tierras ya no son más posibles y la comunidad administra su distribución. A fines de los años 70, la comunidad logra recuperar las tierras vendidas a la hacienda vecina a principios de siglo, gracias a la acción de un nuevo grupo de líderes de la comunidad. La distinción entre los líderes de la Reforma Agraria frente al resto de las familias comuneras y, especialmente, frente a los ex trabajadores de la hacienda incorporados en el seno de la comunidad se hace evidente.

La importancia de especificar estos momentos radica en que de ellos surgen y se entienden una serie de actores que al interior de la comunidad juegan papeles diferentes, que se configuran relaciones de poder y que se posicionan de forma distinta para el acceso a los recursos. En efecto, uno de los criterios centrales que intervienen de forma *no explícita* para el acceso a la tierra está relacionado al poder relativo de los comuneros en la comunidad. No fue difícil distinguir a aquéllos que tenían más poder en la comunidad: vivían en los barrios más importantes, tenían mayor nivel educativo y, sobre todo, tenían tradición de ser autoridad en la comunidad y, recientemente, también accedían a plazas a niveles distritales<sup>82</sup>. Además de todo esto, claro, poseían mayores extensiones de terreno en la comunidad.

Ahora bien, ¿de qué forma están relacionados los dos momentos antes señalados con el poder de las familias comuneras? El primer momento es fundamental ya que en él se establece una relación entre antigüedad y poder, que tendrá efectos hasta la actualidad. Las familias asentadas en la zona desde principios de siglo son consideradas actualmente como las fundadoras de la comunidad y las propietarias originarias de las tierras que ahora pertenecen a toda la comunidad<sup>83</sup>. Las parcelas tomadas por los antiguos, de apropiación casi total, fueron mantenidas en buena medida por sus descendientes,

<sup>82</sup> Los apellidos Mallqui, Meza y Cañete podían leerse en muchas de las paredes de las viviendas de la comunidad, como propaganda de las elecciones municipales que se aproximaban; los hijos e hijas jóvenes de los comuneros (y en algunos casos ellos mismos) se encontraban postulando por alguna plaza en la Municipalidad del Distrito

<sup>83</sup> En el discurso actual, los comuneros señalan que lo que se recupera con la Reforma Agraria son las tierras *de sus abuelos*.

mientras que las familias que llegaron a Marcopata posteriormente ya no tenían el derecho de tomar tierras. De esta manera, se generaba una primera diferencia entre los comuneros: los segundos poseían menos tierras que los primeros y dependían, a su vez, mucho más de la organización comunal. De otro lado, el hecho de poseer más tierras les otorgó a las familias antiguas mayores recursos y mejores posibilidades de acceder a la educación, de vincularse con las ciudades y de establecer vínculos con personas externas a la comunidad. El hecho de contar con todas estas ventajas también los hacía mejores candidatos para ocupar los cargos y el liderazgo en la comunidad.

Actualmente, estas familias fundadoras aún gozan de prestigio y poder, aunque quedan muy pocas consideradas como sus descendientes. Muchas de ellas migraron a ciudades cercanas, vendiendo las tierras a nuevos comuneros. No obstante, la forma de apropiación de sus tierras se mantuvo en la comunidad, recayendo la fuente de derecho de un actor a un tipo de recurso.

Siguiendo la línea temporal, el segundo momento pone claramente en valor el activismo y liderazgo de los comuneros para realizar gestiones en beneficio del colectivo. Nos referimos a la gestión por el reconocimiento de la comunidad pero, sobre todo, a las gestiones para la recuperación de las tierras de la comunidad en manos de hacienda vecina. En esta lucha participaron algunos descendientes de comuneros antiguos (como la familia Mallqui), pero también surgieron nuevos liderazgos (como el de la familia Cañete). El liderazgo asumido en esta lucha conformó una nueva élite de poder, así como nuevas diferencias en la comunidad vinculadas a una serie de derechos frente al acceso y la apropiación de la tierra; estas diferencias podrían resumirse de la siguiente manera: *A mayor participación en la defensa de las tierras, mayores derechos las mismas*. De este modo, el grupo de líderes que condujo el juicio con la hacienda vecina se vio beneficiado con nuevas parcelas del sector incorporado a la comunidad, ampliando las diferencias al interior de la comunidad. A modo de ejemplo, en el siguiente recuadro, señalamos brevemente algunos casos.

#### **Acceso a la tierra y poder en la comunidad**

**Lucho Mallqui** (48), actual registrador civil de Marcopata y perteneciente a una de las familias más importantes de la comunidad -tanto por antigüedad como por liderazgo durante los tiempos de la Reforma Agraria- posee un total de ocho parcelas, de las cuales seis son tierras entregadas por la comunidad y suman 2.4 Ha.. Asimismo, **Juan Meza** (42), proveniente de una familia líder en tiempos de Reforma, posee un total de 13 parcelas, de las cuales siete son tierras entregadas por la comunidad y suman 1.25 Ha.

Del polo opuesto, se encuentra **Demetrio Mauricio** (40), comunero descendiente de una familia ex trabajadora de la hacienda vecina, posee un total de 5 parcelas, de las cuales ha recibido cuatro de la comunidad y que suman un total de 0.5 Ha. Igualmente, **Víctor Quispe** (51), él mismo ex trabajador de la hacienda, recibió de la comunidad un total de 4 parcelas que suman 0.38 Ha. y no posee otras parcelas adicionales.

Los casos del recuadro anterior ejemplifican el modo en el que los derechos de los comuneros para el acceso a la tierra se vinculan a factores que siendo internos no son explícitos, es decir, que no es posible recoger en el discurso de comuneros y autoridades la existencia de derechos diferenciados en función de los roles asumidos hace más de 30

años atrás. No obstante, las familias comuneras son conscientes de las diferencias y de sus determinantes, y las asumen. Se trata pues de derechos implícitos que surgen y se entienden al analizar contextos sociopolíticos específicos. De otro lado, se trata también de derechos que no se encuentran bien definidos, lo cual hace imposible encontrar una uniformidad en los casos. Esto es posible de observar, al notar que las diferencias que existen entre Lucho y Juan son también amplias.

Del mismo ejemplo, podemos notar un segundo aspecto importante: La norma (explícita) que dicta que los comuneros no pueden recibir más de 4 parcelas de la comunidad no se cumple para los casos de Lucho y Juan. A ello se suma, cabe señalar que los líderes de Reforma Agraria poseen también derechos diferenciados sobre la disposición de las tierras, en tanto aquellas entregadas luego del juicio, son consideradas por ellos *como privadas* y, por tanto, son heredadas sin ninguna restricción de la comunidad. Para Lucho Mallqui, esas parcelas son también “tierras tomadas” y por ello son “como privadas”.

De lo anterior podemos decir que la definición de derechos sobre la tierra en Marcopata reposa sobre un conjunto de normas explícitas pero que, sin embargo, pueden ser negociadas en la práctica y modificadas según una multiplicidad de elementos y contextos. De este modo, podemos decir que los derechos en la comunidad no son ni rígidos ni constantes, sino más bien permeables y dinámicos.

El enfoque de *campo de fuerzas* desarrollado en el marco teórico es particularmente útil para explicar esta situación. Como hemos visto, los campos de fuerza son los espacios de lucha entre actores por determinados recursos, en los que se desarrollan reglas del juego que no llegan a ser ni formales ni fijas<sup>84</sup>. En el caso de Marcopata, este campo de fuerzas se ubica en el seno de la comunidad, en donde interactúan la organización comunal, las familias con sus distintos grados de poder, los individuos diferenciados por edad y por género, todos alrededor del acceso y el usufructo del recurso tierra. Este campo de fuerzas tiene su propia lógica, en la cual es posible encontrar algunas regularidades que devienen en reglas explícitas y aceptadas por el colectivo. Por ejemplo, las tierras *tomadas por los antiguos*, en posesión de las familias comuneras de generación en generación, ha producido derechos de apropiación tan amplios que la tierra se utiliza, se aprovecha y, incluso, se hereda sin ninguna restricción. Otras reglas, como el *servicio* a la comunidad para el acceso a la tierra, están menos reguladas y por tanto entran en conflicto con otras, encontrándose en el campo de fuerzas.

Como hemos señalado, este enfoque pone de relieve la necesidad de tomar en consideración la historia así como los contextos sociopolíticos, ya que éstos configuran relaciones sociales y éstas últimas se ven expresadas en las relaciones de propiedad<sup>85</sup>. En el análisis que hemos realizado para el caso de Marcopata comprobamos la pertinencia de esta técnica identificando dos momentos centrales –las tomas de tierras de la primera mitad del siglo XX y el surgimiento de los liderazgos vinculados a la recuperación de la tierra comunal- que definen y otorgan derechos particulares a las personas sobre la tierra.

Bajo esta misma línea, queremos agregar que, aunque de forma menos evidente que las dos etapas ya desarrolladas, podemos ubicar una tercera que podría producir nuevas demandas y reglas sobre la tierra en la comunidad. Esta etapa se inicia luego de la adjudicación y redistribución de los terrenos de la hacienda (1980) y continúa hasta nuestros días. Durante este periodo, a pesar de la existencia de nuevas tierras, éstas se consideran cada vez más escasas y la migración de muchas familias hacia las ciudades va en aumento. De otro lado, la presencia del Estado es mayor en la zona a través de

<sup>84</sup> Cf. Nuijten Monique y Lorenzo, 2006.

<sup>85</sup> Cf. Nuijten Monique y Lorenzo, 2006.

programas y proyectos sociales, y aumenta la participación de la población en la política local a través, especialmente, del Municipio Distrital. Los liderazgos que se gestaron en la etapa precedente se han mantenido sobre los mismos individuos y sus descendientes. No obstante, empiezan a observarse nuevos criterios para determinar su poder. La posibilidad de los comuneros de participar en la vida política más allá de las fronteras de la comunidad empieza a movilizar a los líderes hacia el exterior. Los Mallquis, Cañetes y Mezas ya han ocupado o, al menos, postulado a cargos públicos como regidores de la Municipalidad Distrital. Todos estos procesos que se encuentran en curso, configuran nuevas relaciones entre los actores de la comunidad y, con ello, nuevas formas de relacionarse con la tierra y de reclamar los derechos de propiedad.

## 7. Conflictos por la tenencia de la tierra

Bajo el enfoque de *campo de fuerzas* uno observa las regularidades que se desarrollan así como los campos de conflictos y tensión<sup>86</sup>. En efecto, hemos notado que en Marcopata los conflictos por la tierra evidencian el modo en el que entran en juego la multiplicidad de criterios existentes para determinar y defender los derechos de propiedad. Queremos poner como ejemplo, dos casos en los que se las diferencias internas son cuestionadas poniendo en peligro el acceso a la tierra.

Hace unos años atrás, la comunidad alertó a Juan Osoreo (41), comunero del anexo de Marco, por tener más de cuatro parcelas entregadas por la comunidad. Juan corría el riesgo de perder una de ellas y no encontró argumentos ni el respaldo necesarios para poder mantenerlas en su poder. Juan no había ocupado cargos públicos ni provenía de una familia con poder en la comunidad. El conflicto se solucionó cuando Juan decidió asumir una responsabilidad importante en la comunidad: La contratación de varios días de banda para la fiesta de aniversario de la comunidad. De este modo, Juan hizo crecer su récord como comunero y logró negociar con la organización comunal los derechos a mantener las tierras que ya venía poseyendo.

En la misma época, algunas familias cuestionaron el número de parcelas y hectáreas que poseía Lucho Mallqui, en vista de que en ese entonces asumía la función pública de regidor de la Municipalidad del distrito y no necesitaba tantas tierras para trabajar. Como hemos visto, éste comunero proviene de una de las familias más poderosas de la comunidad y posee casi 5 hectáreas de tierra. El problema se resolvió en una Asamblea, cuando otros comuneros *antiguos* argumentaron que Lucho tenía el derecho de mantenerlas ya que se trataba de tierras antiguas –lo cual no era enteramente correcto- y que, por tanto, eran tierras *propias*. En este caso la negociación fue más sencilla: los actores en juego tenían poderes desiguales y se recurrió a una norma aceptada y explícita, difícilmente rebatible por la comunidad.

En Marcopata, los conflictos vinculados al uso de la tierra son escasos y, a diferencia de lo que sucede en otras comunidades campesinas, éstos no suelen ser por los linderos de las parcelas familiares. Los límites de las parcelas entregadas por la comunidad así como aquellos de las parcelas tomadas por los antiguos parecen estar bien definidos. Consideramos que el hecho de que la herencia sea el mecanismo más común para la transferencia de tierras y de que las ventas se restrinjan al interior de la comunidad contribuye a que se mantengan de forma más o menos clara y ordenada los linderos y a que se transmita en el tiempo el conocimiento acerca de los mismos.

De este modo, los conflictos más comunes suelen estar vinculados a cuestionamientos que involucran a la organización y al control comunal y que no son, por tanto, de interés

<sup>86</sup> Cf. Nuijten y Lorenzo, 2006.



sólo de dos familias enfrentadas. Así, pueden ser más frecuentes problemas por el retiro de parcelas a comuneros que dejan de cumplir con sus obligaciones o por reclamos hacia quienes poseen más parcelas de lo establecido por las normas comunales.

Otros conflictos son los que se dan al interior de las mismas familias, por falta de claridad en la herencia de tierras entre hermanos, especialmente cuando algunos migran de la comunidad y luego de unos años regresan a reclamar las parcelas familiares.

En cualquier caso, los conflictos por tierras en Marcopata se perciben como inherentes a la comunidad y son normalmente las autoridades comunales quienes se encargan de resolverlos. No registramos casos en los que acudir a niveles de justicia externa haya sido necesario.

## 8. Legislación estatal y derechos sobre la tierra

Abordar el enfoque de *campo de fuerzas* nos obliga a pensar en otros elementos desarrollados por los estudiosos del pluralismo jurídico. Tal como señalamos en el marco teórico, el pluralismo jurídico tiene como postulado central la existencia de múltiples sistemas legales y rechaza la idea del derecho estatal como la fuente más poderosa de control social. Asimismo, tomamos para la definición de *sistema legal* aquellos elementos que le atribuyen la aplicación de normas de forma constante, predecible y regular, tal como señala Pospisil. Dicho lo anterior, la pregunta que subyace es ¿en qué medida podemos considerar que en Marcopata lo que existe es un *sistema normativo* que define los derechos sobre la tierra?

De lo visto hasta el momento, podemos decir que encontramos en Marcopata dos tipos de normas y derechos que definen las relaciones de los distintos actores sobre la tierra. En el primer tipo, las normas y derechos se encuentran en función de factores vinculados a la categoría de comunero, al género e indirectamente a la edad del poblador. Así mismo, son elementos determinantes, el origen de la parcela y, en cierta medida, las zonas de producción. En el segundo tipo, se encuentran más bien el conjunto de normas que responden a las relaciones sociales y de poder que se configuran en función de contextos o hechos específicos, e incluso de situaciones de la vida cotidiana. Las normas del primer tipo pueden ser catalogadas como explícitas, regulares y reconocidas por las familias comuneras, mientras que las del segundo tipo son más bien implícitas, variables y no siempre aceptadas por el colectivo. En esa medida, las primeras podrían configurar sistemas normativos, mientras que las segundas se ubicarían en lo que hemos definido como *campos de fuerza*. En la práctica, sin embargo, no es posible separar estos dos tipos de normas y derechos, ya que pueden encontrarse, ya sea complementándose o rebatiéndose. El concepto de *sistema normativo* aparece entonces como limitado para definir las interacciones que se generan en las prácticas concretas. De este modo, consideramos que resulta más adecuado pensar en el pluralismo jurídico en términos de la existencia de una multiplicidad de fuentes productoras de normas y derechos, y no de sistemas u órdenes normativos.

Dicho lo anterior podemos decir que en Marcopata se desarrollan una serie de normas y derechos sobre la tierra que coexisten con la producción de normas proveniente de la fuente estatal. En efecto, el Estado peruano ha desarrollado una legislación que dicta para las comunidades campesinas una serie de derechos y deberes que existen de forma paralela a las comunales. Actualmente, podemos identificar tres leyes centrales para las comunidades campesinas de la sierra, referidas a la organización comunal (ley n° 24656), al deslinde y titulación de sus tierras (ley n° 24657), así como a la disposición de las mismas (ley n° 26505). De nuestras entrevistas, sin embargo, obtuvimos que ni los comuneros ni las autoridades comunales tenían conocimiento alguno sobre estas leyes.

No obstante, por la necesidad de ser formalmente reconocidos como comunidad por el Estado –y con ello, poder ser beneficiarios de programas sociales o proyectos de ONG– se ajustaban a algunos requerimientos básicos de tipo organizacional que habían sido aprendidos en la práctica. Indagamos sobre aquél que nos podría dar pistas acerca de la conjunción entre la legislación estatal y las prácticas comunales: el estatuto de la comunidad. Según la Ley General de Comunidades Campesinas (n.º 24656), las comunidades deben elaborar y poseer un Estatuto que debe regir su organización y funcionamiento, considerando sus propias particularidades, pero siempre dentro del marco de la misma ley. Este documento podría ser el único escrito que posea una comunidad, en el cual podría observarse la forma en la que están distribuidos los derechos y obligaciones de los comuneros. Sin embargo, nadie en Marcopata –ni los comuneros ni las autoridades– lo utiliza ni conoce lo que dice. Luego de revisar el documento, entendimos que se trataba de una copia del Estatuto de otra comunidad de la zona y que, por tanto, no reflejaba las prácticas de Marcopata ni tenía validez para sus pobladores.

Observamos de esta manera que la interacción entre el derecho estatal y las normas desarrolladas en la comunidad es muy escasa y que sólo es posible encontrar indicios de la legislación nacional si ésta otorga alguna facilidad o utilidad para los intereses comunales. En efecto, los líderes de la Reforma Agraria llegaron a conocer bien los derechos estatales sobre la tierra cuando hubo necesidad de defenderla (o de recuperarla) hace alrededor de 30 años atrás. En los últimos años, sin embargo, la comunidad no ha necesitado recurrir a la legislación estatal para cuestiones vinculadas a la tierra. De otro lado, tampoco encontramos que las modificaciones hechas en ella hayan influido sobre el sistema de tenencia comunal.

Queremos referirnos específicamente al giro de la legislación protectora que rigió a las comunidades hasta principios de los años 90 hacia la legislación liberal dada por el gobierno de Fujimori. Esta legislación liberal estuvo orientada a la promoción de la inversión privada en las tierras de las comunidades campesinas, impulsando la titulación individual de tierras (o parcelación) y la libre disposición de parcelas familiares para la venta. No obstante, el camino hacia el logro de este objetivo estatal es largo y complejo, lo cual ha postergado su aplicación. En efecto, antes de pensar en la venta de parcelas familiares era necesario sanear la propiedad comunal<sup>87</sup>. En el caso de Marcopata, la titulación de la propiedad se llevó a cabo en el año 1995, a través de la visita de funcionarios del PETT a la comunidad. Sin embargo, a pesar de los pocos años transcurridos desde este acercamiento del Estado, sólo algunas autoridades saben que, según la ley estatal, la propiedad última de todas las tierras es la comunidad.

De lo anterior podemos decir que en los últimos años, las leyes del Estado vinculadas a la tenencia de la tierra comunal no han afectado los procesos internos de definición de derechos en la comunidad. No obstante, por ello no debe entenderse que el sistema de tenencia en Marcopata se encuentre aislado y libre de la influencia de los procesos externos. Cabe recordar a este respecto, el concepto de *espacios sociales semi-autónomos* desarrollado por Moore, según el cual si bien dichos espacios tienen la capacidad de generar sus propias reglas, a la vez son vulnerables a reglas y decisiones externas. Como hemos visto, la comunidad de Marcopata como espacio semi-autónomo estuvo fuertemente influenciado por las modificaciones en las políticas agrarias en tiempos de la Reforma Agraria. De otro lado, de continuar el Estado peruano por la vía de la liberalización de las tierras y del impulso de la inversión privada en tierras comunales,

<sup>87</sup> Al año 2001 había en el Perú 1369 comunidades campesinas sin titular. Al año 2005, el Ministerio de Agricultura logró reducir el número a 1113, aproximadamente (Fuente: Informe elaborado por el Grupo Allpa, Octubre 2005).

sin duda, en unos años, podremos ver los impactos en las relaciones de la comunidad y los comuneros para con la tierra.

### *Otras fuentes normativas*

Hemos visto hasta acá de qué forma en la comunidad se produce un *campo de fuerzas* con regulaciones y derechos que se encuentran en la lucha por un recurso. Asimismo hemos visto que el concepto de *sistemas normativos* no resulta lo suficientemente amplio para analizar las interacciones que se gestan en su interior. El enfoque de campo de fuerzas resulta, pues, más acorde para nuestro análisis, ya que permite incluir para la definición de los derechos en la comunidad, no sólo la interacción con cuerpos normativos específicos sino también con contextos y situaciones específicas. La visión de pluralismo jurídico desde esta perspectiva resulta más inclusiva y nos permite pensar en la interacción de otras fuentes de producción de normas, además de la estatal y la comunal, que no sean necesariamente explícitas y constantes. Para el caso de Marcopata, tratamos de ubicar otras fuentes que generen sus propias normas y que incidan sobre la definición de derechos, en función de las instituciones presentes en la comunidad. Tras indagar entre varias instituciones -como el municipio distrital, el CPM, la escuela, el puesto de salud, la organización del vaso de leche, la iglesia, etc.- encontramos que quien producía alguna interacción era una ONG que trabajaba en Marcopata desde hacía un año atrás: SEPAR<sup>88</sup>. Revisemos brevemente este caso.

SEPAR conduce un proyecto productivo en el cual otorga créditos de semilla de cuatro productos que considera centrales por sus posibilidades de articulación con el mercado en la zona. Asimismo, brinda capacitación y asistencia técnica gratuita para todas las etapas del proceso productivo y para la comercialización de la producción agrícola. Para realizar este trabajo, SEPAR debe identificar a un número determinado de familias beneficiarias con las que trabaja a lo largo de todo el proyecto. Para ello, al llegar a la comunidad se dirige a las autoridades para presentarse y explicar su trabajo, luego de lo cual éstas suelen convocar a una Asamblea Comunal. Las familias interesadas se inscriben como beneficiarias del proyecto e inician el trabajo. El proyecto tiene una duración total de 3 años.

Ahora bien, ¿de qué forma las normas provenientes de la ONG intervienen en el campo de los derechos sobre la tierra? En primer lugar, es importante pensar en quiénes son los beneficiarios de la intervención. Se trata, pues, de algunas familias comuneras y no de la de la organización comunal en su conjunto. SEPAR, para trabajar con estas familias formó en Marcopata cinco grupos de alrededor de 15 familias cada uno, los cuales nombraron a su vez a un promotor de grupo, encargado de las gestiones, convocatoria y otros. Las autoridades comunales no siempre se encuentran inscritas como beneficiarias y cuando lo hacen no asumen necesariamente el papel de promotores de grupo. En segundo lugar, observemos algunas de las estrategias utilizadas para el trabajo: El acceso al crédito se hace de forma grupal y si uno no lo reembolsa a tiempo, los nuevos créditos quedan congelados para todas familias del grupo; la asistencia técnica se hace en un parcela grupal en la que trabaja el conjunto de los comuneros del grupo en faenas colectivas; los beneficios recibidos de la producción de la parcela son también redistribuidos entre las familias o se utilizan para la creación de un fondo común.

De lo anterior podemos decir que la ONG tiene reglas precisas para con los comuneros y, en tanto entidad externa a la comunidad, menos sujeta a negociaciones por parte de las familias. De otro lado, la formación de grupos y la elección de nuevos líderes al margen

<sup>88</sup> SEPAR significa por sus siglas Servicios Educativos de Promoción y Apoyo Rural. Es una ONG nacional dedicada a la promoción rural, que trabaja en la sierra centro del país.

de la organización comunal contribuyen a la formación de nuevos espacios de organización, de trabajo colectivo, así como nuevos liderazgos. El hecho de que éstos se desarrollen de forma paralela y casi sin considerar a la organización ya existente agrega al debilitamiento de la comunidad como reguladora de la vida productiva de la comunidad. La ONG puede convocar a más comuneros a la faena colectiva que la propia organización comunal, en tanto les ofrece a cambio elementos más atractivos que esta última: el acceso al crédito. A pesar de ello, la ONG genera a la vez espacios de organización colectiva que ya habían dejado de existir. Las faenas agrícolas en tierras colectivas, por ejemplo, ya habían desaparecido en la comunidad para ser remplazadas por sistemas de alquiler más propios de las relaciones de propiedad privada. Así mismo, la sujeción del pago común para el funcionamiento del sistema de crédito genera más responsabilidades entre los comuneros para con el grupo.

De esta forma, las normas de la ONG y de la comunidad conviven en un mismo espacio influyendo las primeras sobre los roles tradicionales de la comunidad y produciendo nuevas normas entre las familias comuneras. Pensamos que si las ONG, en diseño de sus programas de desarrollo, trabajaran con estrategias que integren a la organización comunal y que no dupliquen espacios y formas de organización, podrían contribuir al fortalecimiento de la organización comunal y al beneficio colectivo. Esto es aún más importante si consideramos que SEPAR busca como estrategia de trabajo para los próximos años, la integración de las parcelas de las familias, de forma tal de obtener áreas de trabajo más grandes que puedan generar una producción más competitiva en el mercado. Ello generaría una figura nueva en la distribución de las tierras y de los derechos sobre ella, y requeriría trabajo colectivo y prácticas productivas uniformes (productos de siembra, técnicas empleadas, tiempos de cosecha, etc.). Para todo ello, la organización y las decisiones colectivas serían un elemento medular.

## ANEXO 4

Comunidad campesina  
Huayllay Chico

### Metodología de la investigación

La metodología de investigación para el presente informe fue la del estudio de caso, con recojo de información esencialmente cualitativa. La mayor parte del trabajo se desarrolló en la comunidad de Huayllay Chico, pero parte del recojo de información se realizó en la ciudad de Huancavelica y Lircay principalmente en oficinas públicas.

El trabajo de campo se realizó en un periodo de un mes. En ese lapso realizamos entrevistas a profundidad dirigidas a jefes de familia y autoridades comunales, a familias comuneras, a instituciones internas y externas pero con presencia en la comunidad, y a comuneros con casos concretos de conflictos por tierras. La distribución de la información recogida se muestra en el siguiente cuadro:

**Cuadro 1**

### Entrevistas realizadas

Tipo de informantes	Nº de entrevistas
Autoridades y líderes de la comunidad: Presidente, teniente gobernador, campo de vara, alguacil mayor y menor, gestor para la municipalización de la comunidad, 2 ex presidentes de la comunidad-	8
Familias comuneras (jefes de familia, esposas e hijos solteros)	12
Dueños de fundos y ex fundos: Dueño del fundo Conrado Vidalón, esposa del dueño del sector de La Paz, dueño del sector de Pachas	3
Representantes de instituciones de la CC (Presidente de la junta de regantes)	1
Representantes de instituciones externas con presencia en la comunidad (iglesia evangélica, iglesia católica, ONG, escuela de	5

Huayllay Chico, puesto de salud de Lircay)	
Funcionario de la municipalidad de provincial de Lircay	1
<b>Total</b>	<b>30</b>

La información fue registrada mayoritariamente en cuadernos de campo y files por cada familia entrevistada. El recojo de información en audio, se hizo de manera complementaria en el caso de algunas entrevistas.

Para elegir a las familias entrevistadas se siguieron los criterios de edad y poder y también de ubicación con el fin de obtener un variado espectro de situaciones familiares en relación a la tenencia de la tierra, como se muestra en el siguiente cuadro:

**Cuadro 2**

**Entrevistas familiares según criterios de selección**

Criterios de selección			Nombre del jefe de hogar	Barrio
Edad	Poder	Situación familiar		
18 – 30	+	Casado/conviviente	Carlos Santos Condori	Huayllay Chico
			Fredy Espinoza Ichpas	Huayllay Chico
	-		Víctor Condori Ichpas	Huayllay Chico
31-50	+	Casado/conviviente	Emilio Marcañaupa	Huayllay Chico
			Marcelo Marcas	Huayllay Chico
	-		Teodoro Marcas	Huayllay Chico
			Jorge Rojas	Tauricay
51 a más	+	Casado/conviviente	Marcos Marcas	Huayllay Chico
			Julián Ichpas	Huayllay Chico
			Leonardo Ichpas	Huayllay Chico
		Viuda	Josefina Jurado	Yanama
		Viuda	Paulina Marcañaupa	Huayllay Chico

Por otro lado, se recogió información secundaria en distintas instituciones públicas, pero principalmente en la misma comunidad, y finalmente se hizo un registro fotográfico de las parcelas y actividades que pudimos observar durante ese tiempo.

**Cuadro 3**

**Información secundaria recogida en campo**

Tipo de información	Fuente
Mapa catastral de la comunidad campesina de Huayllay Chico.	Documento de la CC
Actas de colindancia de la propiedad comunal con los propietarios vecinos.	PETT-MINAG

Actas de la Asamblea de CC: 1982-1989, 1989-1999, 2000-2005	Libros de actas de la comunidad
Libro de contabilidad de la CC	Documento de la CC
Pucamacho: Documento de 1875 sobre deslinde de tierras y conflictos de la época.	Documento de la CC
Documentos de adjudicación de predios de la reforma agraria	Documento de la CC
Estatuto de la CC	Documento de la CC
Compendio estadístico agrario	Agencia agraria-Lircay
Resolución suprema de reconocimiento de la CC (1963)	Documento de la CC

## 1. Presentación

En la margen izquierda del río Lircay muy cerca de su encuentro con el río Sicra, se encuentra la comunidad de Huayllay Chico, en el distrito de Lircay, capital de la provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica. Su territorio se extiende desde los 3,150 m.s.n.m hasta los 4,473 m.s.n.m de altura. Limita por el norte con el río Lircay, por el sur con la comunidad campesina de Huanca Huanca, por el oeste con la comunidad campesina de San Juan de Dios de Lircay, y por el este con la comunidad campesina de Huayllay Grande y Huanca Huanca. Al noroeste, sobre la margen izquierda del río se encuentra el Fundo de Conrado Vidalón y al otro lado del río, frente a la comunidad, se encuentra la comunidad campesina de Ocopa.

Durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde, se hizo la carretera afirmada que une la comunidad de Huayllay Chico con los distritos de Huayllay Grande y Lircay. Esta nueva vía, dejaría a la comunidad a quince minutos de distancia, en transporte público, del distrito de Lircay y a sólo cinco minutos de Huayllay Grande. Hasta la actualidad esa carretera es la principal vía de acceso con que cuenta la comunidad. Su ubicación hace posible un vínculo fluido con ambos distritos que favorece el intercambio comercial, así como una relación cotidiana entre los distintos ámbitos, que se expresa en el uso de servicios públicos que no existen o son comparativamente más deficientes dentro de la comunidad de Huayllay Chico.

Sobre la carretera se encuentra la escuela de Huayllay Chico rodeada por un cerco perimétrico que alberga en su interior un campo deportivo y una construcción antigua de adobe que data del año 1971, hecha por los mismos comuneros. Años antes, la escuela se encontraba en la plaza del pueblo, donde hoy está el local de la comunidad. La cercanía con los distritos aledaños, facilitó la migración de los nuevos hijos de la comunidad a las escuelas de Lircay y Huayllay Grande. Debido a eso, en el año 2001 sufrieron un recorte del presupuesto y los seis grados con los que contaban se redujeron a cuatro. En la actualidad la escuela de Huayllay Chico cuenta con 48 niños matriculados y dos profesores de Lircay que llegan al pueblo cada mañana a dictar clases. En 1995 FONCODES construyó el local del centro de educación inicial que funciona con dos profesoras de Lircay. Cuentan también con tres wawa wasis en casas particulares.

La plaza del pueblo es un espacio vacío donde crece pasto, alrededor del cual hay casas y algunas edificaciones importantes como la iglesia, el local de la comunidad de tres pisos de altura construido durante el primer gobierno del alcalde Raúl Ayaipoma, junto al cual aun perdura un antiguo cabildo con un calabozo utilizado como carceleto. En el otro extremo de la plaza se encuentra el “coso”, un pequeño corralón techado que se usa para encerrar a los animales que hacen daño a los sembríos.

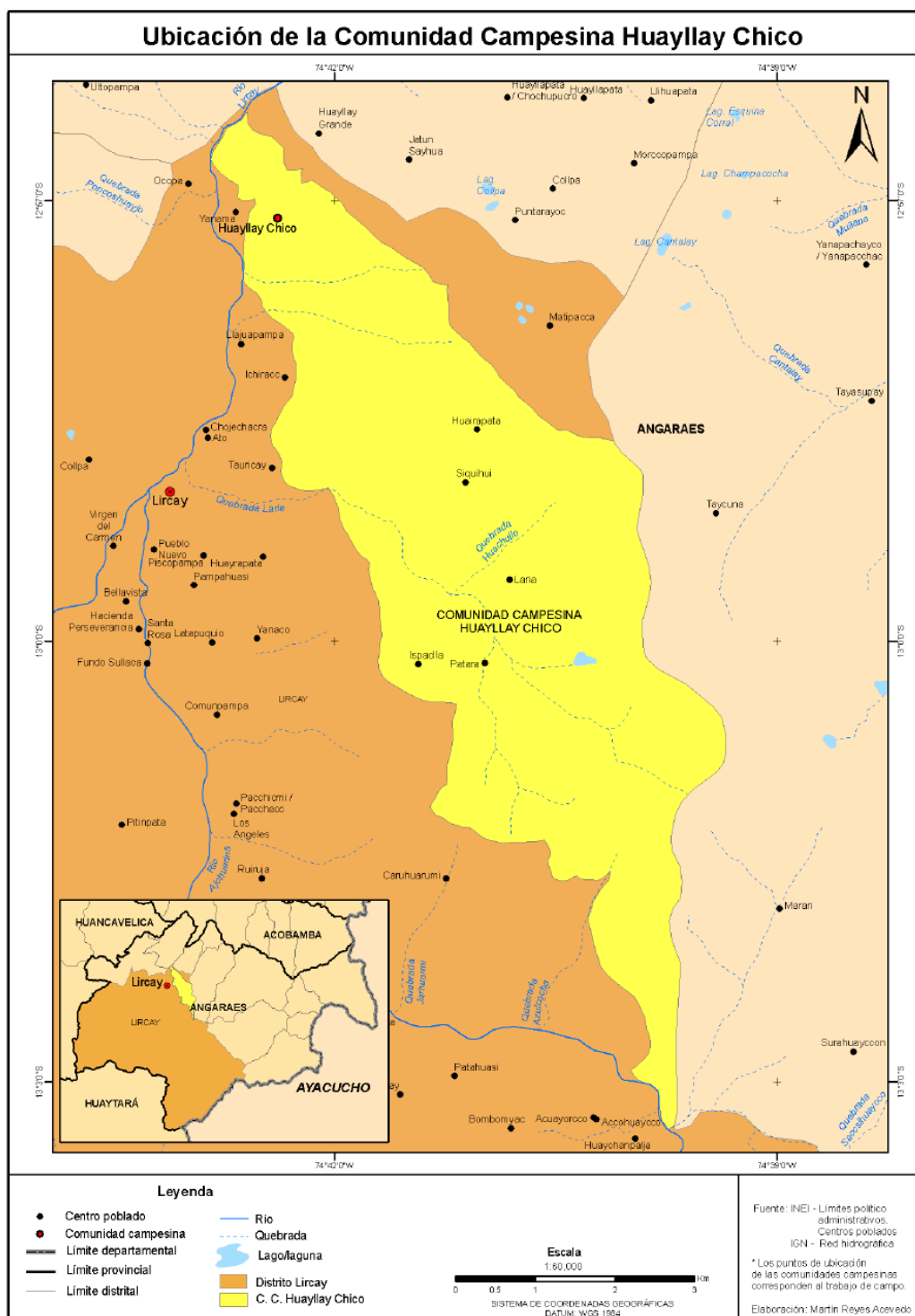
No cuentan con ninguna posta, por ello los pobladores tienen que dirigirse al Centro de Salud de Lircay al cual pertenece la comunidad. Tampoco cuenta con desagüe ni letrinas. En una pequeña tienda en la plaza se ha instalado un teléfono comunitario Gilat y actualmente se está instalando una antena para celulares de la empresa CLARO.

La comunidad de Huayllay Chico tiene una población de aproximadamente 427 habitantes. La población ha sufrido un fuerte proceso de migración principalmente a la ciudad de Lima. Los jóvenes en su mayoría, optan por trasladarse a vivir a la ciudad, y otros combinan sus actividades dentro de la comunidad con una migración temporal hacia la selva para trabajar como peones en la cosecha de café, durante los meses de abril, mayo y junio.



La población está concentrada en su mayoría en el poblado de Huayllay Chico. Aproximadamente 100 personas viven en el barrio de Tauricay y un número mucho menor vive en la parte baja cercana al río en la zona llamada Yanama.

Mapa 1



Su actividad económica central es la agropecuaria. La crianza de ganado vacuno, equino y porcino, así como de ovinos y camélidos en la parte alta es importante para la economía familiar. La mayor parte de la producción agrícola –esencialmente cereales, papa y frutales- está dirigida al autoconsumo y una parte menor es vendida en la feria sabatina de Lircay, que es el punto de encuentro comercial más importante donde confluyen los pobladores de las comunidades y distritos aledaños. En el siguiente cuadro, mostramos para las 12 familias entrevistadas los principales cultivos y su nivel de comercialización y de autoconsumo.

**Cuadro 4**

**Destino de la producción por cultivo (Campaña 2005-2006)**

<b>Cultivo</b>	<b>venta</b>	<b>trueque</b>	<b>autoconsumo</b>	<b>semilla</b>
Maíz	18%	0%	67%	15%
Habas	15%	0%	52%	32%
Cebada	14%	0%	71%	15%
Papa	0%	0%	74%	26%
Alverja	0%	0%	47%	53%
Trigo	0%	0%	81%	19%

Del cuadro anterior podemos observar que el maíz, las habas y la cebada son comercializados en muy pequeña escala, siendo el resto productos solo de autoconsumo familiar. En comparación con la actividad agrícola, la actividad ganadera provee a las familias mayores ingresos monetarios. . En el siguiente cuadro mostramos los ingresos promedio familiares por la comercialización de la producción para la campaña agrícola 2005-2006 y por la venta de ganado de un año (abril 2006 – marzo 2007).

**Cuadro 5**

**Ingreso familiar por comercialización de producción agropecuaria**

<b>Comunidad</b>	<b>Ingresos agropecuarios familiares</b>		
	<b>venta de producción agrícola</b> <b>S/.</b>	<b>venta de ganado</b> <b>S/.</b>	<b>Total</b> <b>S/.</b>
Huayllay chico	72	859	931

En el cuadro que sigue mostramos la distribución de la actividad ganadera entre las familias de Huayllay, así como los ingresos que la venta de ganado genera a las familias entrevistadas. De este observamos que el ganado vacuno es el que más ingresos genera a las familias comuneras.

**Cuadro 6****Tenencia de ganado e ingresos por su comercialización**

<b>Tipo de ganado</b>	<b>Tenencia de ganado en Huayllay</b>	
	<b>% de familias</b>	<b>Ingresos por venta de ganado S/.</b>
Ganado vacuno	30%	1.933
Ganado equino	20%	430
Ganado porcino	30%	170
Ganado ovino	40%	98
Ganado caprino	30%	75
Aves de corral	10%	20
Cuyes	30%	24

## 2. Historia de la comunidad campesina de Huayllay Chico

### 2.1. La formación de la comunidad campesina

La lucha por la defensa del territorio ha definido la historia de la formación de las comunidades desde siglos atrás. La historia de Huayllay Chico no es distinta. Las disputas por límites, eran ventiladas y se resolvían judicialmente en la jurisdicción de la doctrina de Lircay de la provincial de Angaraes a la cual pertenecía durante el siglo XVIII, y los documentos que se elaboraban equivalían a títulos donde se establecían los linderos entre los pueblos vecinos. La comunidad de Huayllay Chico aun conserva un documento manuscrito que data de 1875 y que ellos llaman “Pucamacho”, debido a la cubierta de cuero de color rojo que aun conserva. Cuentan algunos pobladores que conocen un poco más de la historia de la comunidad, que también tenían un “Yuraccmacho”, un libro de cubierta blanca posiblemente de mayor antigüedad, que hoy ya no existe. Ambos eran los principales documentos que garantizaban la posesión del territorio por parte de la comunidad.

Según este documento, en 1713, la autoridad de aquel entonces, el alcalde de campo de la comunidad de Huayllay Chico, llamada en ese entonces *Comunidad de Indios del Pueblo de San Francisco de Uchuy*<sup>89</sup> Huayllay, acude al *juez sub delegado para la medida, venta y composición de tierras* de la provincia de Angaraes, con el siguiente fin:

*“...parecemos ante usted en la mejor forma que proceda de acuerdo al mío dicho como convego = y decimos que su majestad (que dios guarde) por diferentes cedulas, provisiones y ordenanzas, ordeno y mando que el comisión de los indios de los pueblos tenga tierras para sembrar, corrales y pastos para sus ganados habida de sus obligaciones en cuya atención el dicho común han estado en posesión quieta y pacífica desde el tiempo del inga (...) por tanto a vuestra merced pedimos y suplicamos que en conformidad con la voluntad de su majestad (que dios guarde) y del donativo ofrecemos en nombre de dicho común se sirva de ampararlos en las dichas tierras despachándole un título en forma que será justicia...”*

Ese año el pueblo de San Francisco de Uchuy recibió un título donde se establecían los límites de la comunidad y donde se declaraba que *las tierras y pastos quedarían siempre indemnes, sin que las puedan vender, trucar o enajenar*.

El pueblo había mantenido continuas disputas con el vecino pueblo de Jatun<sup>90</sup> Huayllay sobre los límites de ambos territorios. Ambos eran pueblos antiguos y exponían en su defensa la posesión *inmemorial* de sus territorios desde época de los “*ingas*”. Para ello cada una de las partes se valía de documentos de conflictos antiguos que podían probar su posesión. En el Pucamacho, se habla de un litigio en 1786 sobre las tierras de Atoccmarca que se encontraban en uso del pueblo de San Francisco de Uchuy Huayllay y que las autoridades de Jatun Huayllay reclamaban como suyas, señalando que *“podrán ellos justificar si en algún tiempo han sembrado desde el tiempo del inca como nosotros o si exclamaron por suyas en algún tribunal la que nosotros probaremos la anticuada posesión que teníamos y nos favorece según la transacción de derechos y sembríos”*.

En esos años, la extensión de tierras que comprendía la comunidad de Uchuy Huayllay era mayor a la de Jatun Huayllay y una buena parte de ellas eran “*tierras sobrantes*”, mientras que Jatun Huayllay contaba con un número mayor de tributarios muchos de los cuales no tenían tierras. En ese contexto, las autoridades de ésta última comunidad, reclamaban a las autoridades de Lircay resuelva los problemas de límites entre ambos

<sup>89</sup> Uchuy significa Chico en quechua.

<sup>90</sup> Jatun significa Grande en quechua

pueblos teniendo en cuenta que “*los pobres tributarios de vuestra merced no tienen para sembrar y soportar todas las obligaciones de su cargo*”.

Los conflictos por límites entre los pueblos vecinos de la comunidad de San Francisco de Uchuy Huayllay continuaron a lo largo de siglos y los procesos políticos que siguieron significaron también cambios en la organización del territorio<sup>91</sup>, que ocasionarían la comunidad quedara reducida frente a sus vecinos. A fines del siglo XIX, Lircay es declarada capital de la provincia de Angaraes y en 1941, Manuel Prado eleva a la categoría de distritos a las comunidades de Huanca Huanca<sup>92</sup> y Jatun Huayllay, esta última con el nombre de Huayllay Grande<sup>93</sup>. Convertirse en distrito era desde esa época un deseo que los pueblos entrañaban porque permitía el acceso a servicios y una mayor injerencia política en la provincia. El reconocimiento comunal, por su lado, también tenía sus ventajas, debido a la seguridad que éste les otorgaba sobre la tierra. Dos años después en 1943<sup>94</sup>, el pueblo de San Francisco de Uchuy Huayllay, por su parte, sería reconocido como comunidad de indígena mediante resolución suprema, con el nombre de Huayllay Chico.

A partir de ese momento, la resolución sería el nuevo documento oficial que establecía la propiedad del territorio por parte de la nueva comunidad, reemplazando el fin que años atrás había tenido el Pucamacho, que pasó a ser un documento histórico “*sobre litigios antiguos*” como señalan algunos testimonios.

## 2.2. La hacienda

Durante el siglo XX, las familias Larrauri, Vidalón y Zorrilla, eran las notables de la zona y se rotaban los principales cargos políticos de la ciudad de Lircay. Como señala Plasencia (2001), las dos primeras habían formado una sociedad que estaba fortalecida por el vínculo matrimonial entre ambas familias. Larrauri era dueño de los predios Pongos y Ocopa donde tenían una casa hacienda que podía divisarse desde la comunidad de Huayllay chico al otro lado del río, mientras los Vidalón tenían un fundo de menor tamaño aledaño a la comunidad a las orillas del río Lircay. La sociedad llevaba el nombre de PYCHOY<sup>95</sup> y se dedicaba a la crianza de ganado y producción de lácteos y productos de pan llevar.

Huancavelica se caracterizó por ser una zona donde predominaron haciendas de mediana extensión de tierra<sup>96</sup>. Así, en la zona de Angaraes se podían encontrar a otro conjunto de

<sup>91</sup> Como señala Plasencia, “A fines de ese siglo la intendencia de Huancavelica se dividía en cuatro partidos: el cercado de Huancavelica, Castrovirreyna, Tayacaya y Angaraes, que por entonces comprendía cinco doctrinas: Lircay, Julcamarca, Acobamba, Conaica y Vilca. En 1825 Bolívar decretó la supresión de la Provincia de Angaraes y la redujo a simple distrito de Huancavelica. El presidente Ramón Castilla en el año 1847 le devolvió su anterior categoría de provincia la que se compuso de tres distritos: Lircay, Julcamarca y Acobamba, otorgando la capital provincial en este último pueblo. Plasencia Soto, Rommel. *Dos pueblos en la sierra central : el caso de los comuneros de Huayllay Grande y los mistis de Lircay Lima : UNMSM, 2001*

<sup>92</sup> Huanca Huanca es reconocida como comunidad en 1940.

<sup>93</sup> Archivo Digital de la Legislación en el Perú. Congreso de la República [www.congreso.gob.pe](http://www.congreso.gob.pe) Recién en el año 1940 Huanca Huanca sería reconocida como comunidad de indios y en 1957 Huayllay Grande sería reconocido.

<sup>94</sup> PETH, Directorio de Comunidades Campesinas del proyecto de Titulación de Tierras y Catastro Rural, 2002. Versión electrónica no publicada.

<sup>95</sup> El nombre de PICHAY viene de la unión de las siglas de los distintos predios que componían la sociedad: Pongos, Yanama, Chahuarma, Ocopa y Yanaututo.

<sup>96</sup> Favre Henri. *Evolución y situación de la hacienda tradicional de la región Huancavelica*. En hacienda, comunidad y campesinado en el Perú. Perú problema 3.

hacendados con esta característica, como lo fueron Nicanor Sánchez, que tenía tierras en una zona denominada La Paz y Filiberto Vidalón Arana que era dueño, de la zona de Pachas.

Como en otros lugares, los hacendados tenían sus peones que trabajaban sus tierras y vivían dentro de ese territorio. Los peones dependían del hacendado quien les proporcionaba casa y comida y protección a cambio de un trabajo arduo y permanente en sus tierras. Existía un intercambio asimétrico que se había establecido por años.

La relación entre los comuneros de Huayllay Chico y la hacienda se daba, por ejemplo, cuando se producían algunos conflictos por daños que los animales de los comuneros hacían en los sembríos de la hacienda, en esos casos, el hacendado obligaba al comunero a pagarle y si el daño era reiterado los castigaba: *El hacendado les hacía pagar el trabajo en la chacra o en plata para que saquen su ganado. Y si otra vez lo hacía el hacendado iba golpeando y le quitaba sus cosas al comunero*<sup>97</sup>. Aparte de ser vulnerables a los castigos del hacendado, los comuneros también lo eran a las levas que el Estado hacía cada cierto tiempo, a diferencia de los peones que eran protegidos por su hacendado.

### 2.3. Las tierras luego de la reforma.

La reforma agraria produjo un cambio en la configuración del territorio. Los hacendados que tenían extensiones más grandes, como Larrauri, fueron los más afectados. Sin embargo, otros como Conrado y Filiberto Vidalón, y Nicanor Sánchez lograron mantener su propiedad. En 1972, los predios que comprendían la hacienda Larrauri fueron afectados por la reforma agraria y a mediados de esa década fueron tomados en posesión por el Estado. La mayoría de los trabajadores de la hacienda se fueron y los que se quedaron mantuvieron sus casas y algunas chacras que el hacendado les había dado.

En los años que continuaron a la reforma agraria, identificamos tres periodos distintos por los que pasaron las tierras de la ex hacienda. Hubo un periodo en el que la SAIS funcionó y algunos de los peones que se quedaron continuaron trabajando bajo el mando del nuevo administrador. El segundo periodo corresponde a los años ochentas, cuando el predio de Yanama pasó a ser usado por la comunidad campesina como tierra comunal, de manera temporal mientras se gestionaba la formalización de esa propiedad. Aparentemente el ministerio de agricultura de la época fue otorgándole permiso a grupos de comuneros para que utilizaran esas tierras. Posteriormente la comunidad fue teniendo mayor control de dichas tierras institucionalizándose las faenas trabajadas en beneficio de la comunidad y no solo de manera grupal o individual.

Los ex peones de la hacienda se convirtieron en comuneros, se apoderaron de algunas chacras en la zona de Yanama, y se vieron obligados a trabajar para la comunidad. Un testimonio grafica lo que pudo haber sido un sentimiento común entre ellos frente al nuevo orden que se implantaba: *En la época de la hacienda era buena, cuando morían los enterraban, les prestaban dinero a cuenta del trabajo, a los viejitos los mantenían. En cambio ahora la comunidad nos hace trabajar gratis*<sup>98</sup>. El control de la comunidad sobre la tierra y las obligaciones que la organización comunal imponía se había extendido a nuevos territorios.

Por otro lado, los medianos propietarios decidieron irse del lugar y vender sus tierras. Nicanor Sánchez vendió sus tierras de La Paz a Julián Zorrilla y Filiberto Vidalón las

Lima, IEP 1976.

<sup>97</sup> Testimonio de Josefina Jurado ex trabajadora de la hacienda Larrauri.

<sup>98</sup> Josefina Jurado, ex trabajadora de la hacienda Larrauri.

vendió a Porfirio Marcas. Estos predios estaban dentro del territorio de la comunidad y se han mantenido como islotes privados aislados de la organización comunal hasta el día de hoy.

A partir de los años ochentas con la decadencia de la SAIS Huancavelica, los dirigentes de la comunidad de Huayllay Chico inician un proceso de formalización para la posesión del predio Yanama, solicitando al Estado les otorgue un título de propiedad. Hasta ese momento el predio había sido adjudicado en forma provisional para ser administrado temporalmente por la comunidad campesinada de Huayllay Chico. El tercer periodo corresponde a la etapa de titulación individual del predio de Yanama que se produce en 1998. En el año 1990, el Ministerio de Agricultura, elabora un proyecto de adjudicación definitiva del predio rústico de Yanama a favor de la comunidad. Los años transcurrieron y dicho título no llegó. En el año de 1998, el proceso de titulación individual favorecido por el gobierno de Alberto Fujimori abordó el tema de la titulación de dicho predio. La falta de documentos, había hecho que Yanama fuera objeto de disputa con la comunidad de Huayllay Grande y la comunidad de Ocopa, que también la reclamaban como suya, pero, como dicen algunos testimonios de los comuneros de Huayllay Chico, *los abuelos la hicieron defender y ganaron*.

Ese año llegó el PETT gracias también a la gestión de las autoridades de la época y los residentes en Lima. La política de este programa no fue titular el predio para la comunidad, sino, otorgar títulos individuales a los comuneros. La distribución debía ser equitativa y cada comunero debía recibir  $\frac{1}{2}$  yugada. Sin embargo, no fue así.

Sobre este reparto de tierras ha habido muchas críticas. Se dice que el reparto se hizo de manera arbitraria, que no se comunicó a todos los comuneros y tampoco a los residentes en Lima sobre el día que éste se realizaría y que por ello no todos recibieron, que el presidente de la comunidad de ese entonces, y otros comuneros, pagaron al ingeniero para recibir más parcelas, etc.

El resultado fue la parcelación de todo el predio de Yanama y una distribución desigual de éstas. Algunos comuneros, como las autoridades de ese entonces, recibieron más que otros y a algunos no les tocó nada. Los ex peones de la hacienda que vivían en ese lugar, fueron obligados a devolver las chacras que se habían apropiado y por distintas razones no recibieron ninguna parcela. En efecto, si bien las diferencias relativas entre comuneros son escasas, podemos identificar grupos con distinto poder, ya que la comunidad permite que aquellos que gestionaron la titulación se vean beneficiados con más recursos que el resto.

Por otro lado, la repartición también cambió los espacios comunales, reduciéndolos a una parcela para el cultivo de maíz y una parcela para el cultivo de eucaliptos en la zona de Yanama, que los comuneros decidieron dejar para uso comunal. Así, parte del territorio de la comunidad quedó comprendido por espacios privados, en propiedad de gente de foránea a la comunidad y por parcelas individuales tituladas.

Durante los años que siguieron a la reforma agraria, se sucedieron continuos conflictos por límites con los pueblos vecinos de Lircay, San Juan de Dios, Huayllay Grande y Huanca Huanca. Hasta que en 1988 se establecen las colindancias con dichos pueblos y se procede a otorgarle a la comunidad su plano de conjunto y título de propiedad.



### 3. Clasificación de las tierras de la comunidad

La comunidad de Huayllay Chico tiene una extensión de 2,826 hectáreas aproximadamente. De estas, 787 hectáreas corresponden a terreno cultivable, 629 hectáreas a terreno desnudo y 1,410 hectáreas a pastos naturales. Gran parte de las tierras cultivables son *de secano* y en los últimos años algunas extensiones de tierras son usadas *bajo riego*, que sirven principalmente para el cultivo maíz, habas y pastos mejorados. Sólo en algunas zonas de riego se logra obtener dos campañas al año, pero es una modalidad que recién se está dando en la comunidad hace algunos años. A grandes rasgos, se puede decir que la comunidad realiza sólo una campaña agrícola grande al año, y que ciertos productos como la alfalfa, las hortalizas y los frutales dan todo el año en las zonas de riego. Como vemos, la mayoría de las tierras son de *pasto* y buena parte también corresponde a tierras eriazas. Los pastos naturales están ubicados en su gran mayoría en las zonas altas sobre los 4000 m.s.n.m.

Una primera clasificación gruesa que se puede hacer, es *según zona de producción*. Desde los 3150 a los 3,500 encontramos *tierras bajo riego y de secano* donde se cultiva maíz, trigo, pastos cultivados, frutales y hortalizas. En la zona intermedia (3,500-4,000) encontramos *tierras de secano* donde principalmente se cultiva papa y cebada. La zona alta corresponde a las tierras de *secano y pastos naturales* y también al cultivo de papa nativa de manera rotativa. En esta zona también se encuentran tres estancias: la estancia de Laria, la de Ruirupampa y la de Huanuccla. En ellas algunos comuneros llevan a sus animales a pastear y viven temporalmente en pequeñas casas.

Una segunda clasificación se puede observar según *la forma de usufructo*. Aquí encontramos *las tierras familiares, las tierras colectivas y las tierras comunales*. Como sucede en otras comunidades, la mayor parte de la tierra cultivable está dividida en chacras que están en posesión de las familias de la comunidad. Las tierras de uso colectivo, se encuentran en la parte alta y son tierras de pastoreo. Las tierras comunales se encuentran en mayor cantidad en la zona alta y son usadas para el cultivo de papa nativa. Como veremos más adelante, estas tierras comunales tienen su particularidad por lo que los límites entre éste tipo y las tierras familiares se vuelven difusos. En la zona de Yanama, en la parte baja de la comunidad, encontramos también una chacra de maíz y un terreno donde crecen eucaliptos que son usados para la venta de madera en beneficio de la comunidad.

Otro tipo de clasificación, es la que se refiere al *dueño de la tierra*. Aquí distinguimos entre las tierras que son usadas por los comuneros, y las tierras que fueron vendidas a particulares luego de la reforma agraria en la zona de Pachas y la Paz. A estas tierras las llamaremos privadas<sup>99</sup>. Estas tierras a pesar de estar dentro del territorio de la comunidad, no se encuentran bajo el gobierno de la comunidad y sus dueños no son considerados comuneros.

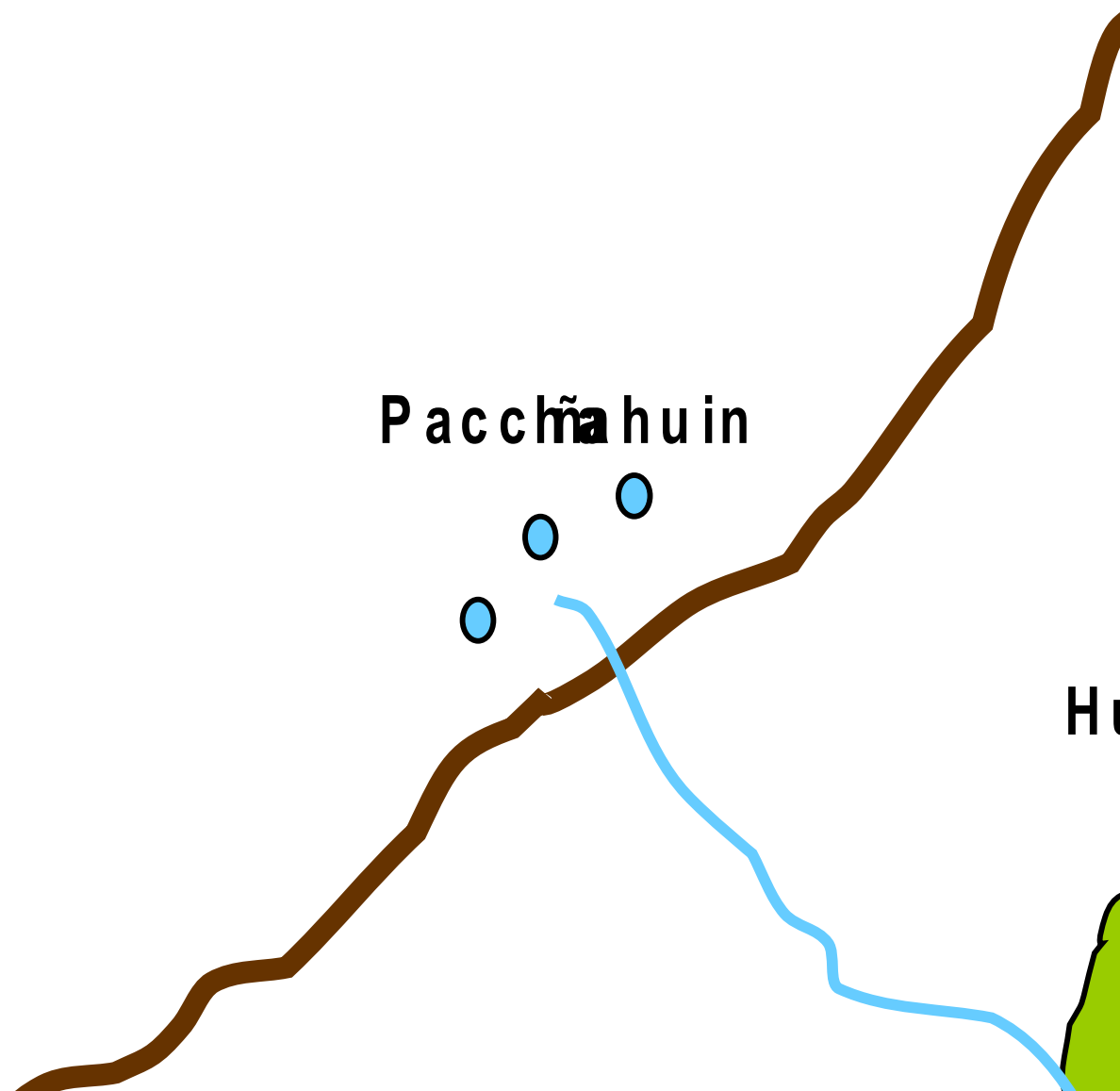
Una cuarta clasificación es la que distingue las tierras al interior de *las tierras familiares* según *el origen* de cada chacra que poseen. Aquí encontramos **dos** grandes tipos, uno corresponde a tierras antiguas que fueron *tomadas por las familias fundadoras* y que fueron heredadas al interior de la familia según fue pasando el tiempo. Otro tipo corresponde a las *tierras entregadas por la comunidad* que son las parcelas que han sido entregadas por la comunidad y que se encuentran ubicadas en la zona baja y en la zona alta, y sobre las cuales, como veremos más adelante, los comuneros gozan de distintos derechos de usufructo.

<sup>99</sup> Los comuneros se refieren a estas zonas como “privadas”. Desarrollaremos este punto en un siguiente acápite.

Una última clasificación es la que distingue las tierras que fueron de la hacienda y el resto del territorio comunal. Las primeras, corresponden al predio de Yanama cuyas tierras fueron adjudicadas a la comunidad y posteriormente parceladas con títulos individuales y distribuidos a los comuneros. Esto le da a estas tierras una característica distinta en relación al resto de chacras que poseen las familias por tener un título individual que respalda su propiedad.

## Croquis 2

Huayllay Chico, sus zonas de producción y espacios privados

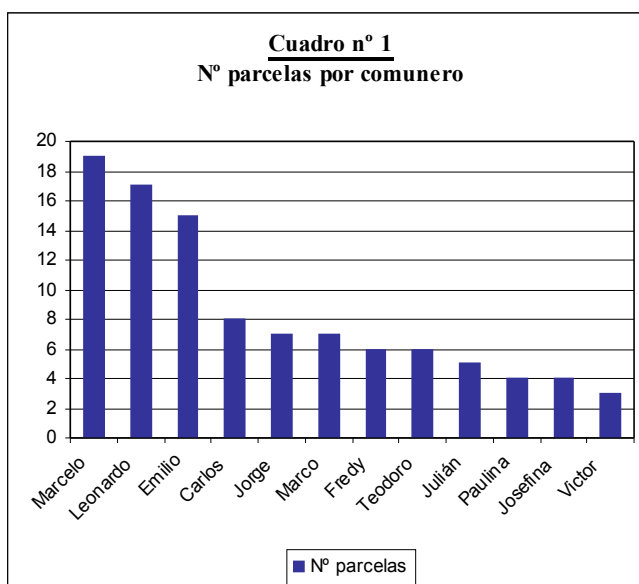


#### 4. Los derechos sobre la tierra: el acceso

En promedio cada comunero de Huayllay Chico tiene 9 parcelas, de las cuales 1 de ellas en promedio pertenece a otras personas y las trabajan al partir o en la modalidad de alquiler. Como en otras comunidades, en Huayllay Chico, las familias también dejan descansar sus tierras, sin embargo, son pocos los que pueden hacerlo y son aquellos que cuentan con más cantidad quienes se lo permiten, y tienen un promedio de 1 parcela en descanso.

En el siguiente cuadro se puede observar las diferencias en la tenencia de la tierra por parte de los comuneros. Observamos que se puede llegar a tener en uso 19 parcelas en un extremo y en el otro sólo 3 parcelas. Las razones de la inequidad en el acceso, como veremos más adelante, son de distinta índole y se explican en relación con la historia de cada familia, su vínculo con la comunidad y las características de los comuneros.

**Cuadro 7**



Es posible ser comunero y no poseer tierras, Sin embargo esta es una pequeña minoría. Existen en la comunidad dos casos de comuneros sin tierra, ambos jóvenes, que buscan mantenerse mediante el trabajo al partir, o como peón en las parcelas de otros.

En este acápite nos ocuparemos de las distintas modalidades a través de las cuales las familias pueden acceder a tierras dentro de la comunidad, que presentamos a continuación:

#### **4.1. La entrega y designación de tierras**

En la comunidad de Huayllay Chico se pueden identificar distintas categorías de comuneros. El estatuto de la comunidad señala dos: Comuneros por nacimiento y comuneros por asimilación. Los primeros son aquellos que han nacido en la comunidad o que son hijos de comuneros, y los segundos, son aquellos que han llegado a la

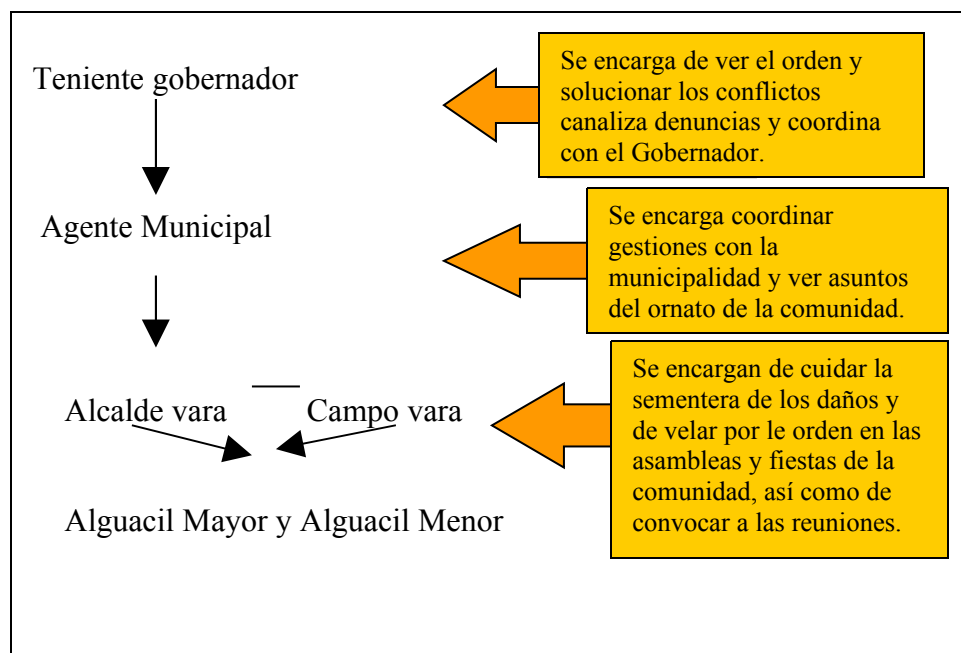
comunidad en calidad de yernos. Según este documento, para ser comunero se deberá cumplir con los siguientes requisitos: haber nacido en la comunidad/ser hijo de un comunero/ser jefe de familia o mayor de 18 años/ tener permanencia en la comunidad, mínima de dos años/ ser trabajador agrícola o ganadero/no ser propietario de predios rústicos/ no pertenecer a otra comunidad. Para ser aceptado como comunero por asimilación, el yerno deberá haber sido aceptado por mayoría de votos en una asamblea general/tener la calidad de agricultor o ganadero/haber constituido un hogar permanente.

Estos elementos reflejan sólo una parte de la realidad, ya que el espectro de categorías que encontramos en Huayllay Chico es más grande. Un punto interesante que ahí se señala, es cuando equipara el tema de la edad al hecho de ser jefe de familia. Al cumplir 18 años, una persona nacida en la comunidad ya esta lista para inscribirse como comunero. Sin embargo, muchas veces llegada esa edad aun no se han inscrito y recién lo hacen cuando forman una familia. Tanto el hombre como la mujer son comuneros y se inscriben en el padrón comunal. Sin embargo, no gozan de los mismos derechos y obligaciones. Es el hombre el que lleva la representación de la familia y el que cumple con las obligaciones que la comunidad determina, y la mujer actúa como reemplazo en ausencia del hombre.

Elegir y ser elegido son dos de los derechos más importantes que tiene un comunero. En Huayllay Chico, como en otras comunidades, encontramos una directiva comunal compuesta por el presidente, el vicepresidente, un tesorero, un fiscal y tres vocales, que se eligen conforme a la ley cada dos años. Las elecciones se realizan entre tres listas que son conformadas en una asamblea comunal. Se prefiere esta modalidad a la de la de listas formadas por grupos de interés, porque evita problemas entre los comuneros. Como señala el presidente actual de la comunidad, así evitan que luego alguien diga “¿Acaso te hemos elegido?”. Esta modalidad le otorga a los elegidos mayor legitimidad.

Por otro lado, existe otro tronco de autoridades compuesto por cargos más tradicionales y encabezado por el teniente gobernador. Veamos el siguiente esquema:

**Esquema 1**  
**Autoridades tradicionales**



Estas autoridades tradicionales son elegidas también en asamblea comunal. Se propone a dos personas por cada cargo y se elige por votación a mano alzada. Estos cargos duran un año.

Este entramado de autoridades, directiva comunal y autoridades tradicionales, es el que pone orden y gestiona el desarrollo de la comunidad. Si bien el presidente de la comunidad es considerado la máxima autoridad y tienen funciones distintas, es importante resaltar que son el alcalde vara y el campo vara quienes inspiran un respeto mayor. Estos cargos son tomados por personas mayores y respetadas de la comunidad, con cierto poder adquisitivo ya sea por tener más tierras o por un tema de prestigio basado en la antigüedad de la familia. Los alguaciles por su parte, suelen ser jóvenes que por primera vez ocupan un cargo. La relación entre los varas y los alguaciles, aun está ritualizada y expresa claramente una relación vertical que subraya la autoridad y el respeto por los mayores.

Para ocupar cargos dentro de la directiva, se tiene que ser una persona reconocida y activa en la comunidad, no necesariamente debe haber pasado por todos los cargos anteriores, pero sí haber acumulado un record en el que interviene determinadamente haber tenido un buen comportamiento. Precisamente un motivo para perder la condición de comunero es cometer faltas graves como abigeato, robo, o algún tipo de abuso contra otra persona. La edad no interviene con tanto peso en este caso.

Elegir y ser elegido son los derechos políticos de mayor relevancia que los comuneros tienen en la comunidad. Otro grupo de derechos tiene que ver con el usufructo que hacen de los recursos de la comunidad (tierra/agua/). Para gozar de estos derechos, se debe cumplir con dos principales actividades: las faenas comunales y la asistencia a las asambleas y aportar con una cuota anual que la comunidad establece para los gastos que se necesite hacer.

Estos derechos y obligaciones varían (o se suspenden) según las cuatro categorías de comuneros que hemos identificado en Huayllay Chico:

Los **comuneros pasivos** son los que el estatuto ha definido como comuneros por asimilación. Se trata, en primer lugar, de *los yernos*, es decir aquellos hombres que pertenecen a otra comunidad y que han hecho su familia con una mujer de Huayllay Chico, pero han decidido permanecer en la comunidad. Estos hombres deben renunciar a su comunidad y deben pasar un periodo de prueba de 2 años para luego convertirse en comunero activante, durante los cuales debe demostrar un buen comportamiento y debe vivir de manera estable en la comunidad. Las tierras que trabaja son las de su esposa y no puede acceder a las tierras que la comunidad designa anualmente, ni tampoco pasar cargos de autoridad. Recién luego de esos dos años podrá acceder a los cargos políticos de la comunidad, sin embargo, sí deberá cumplir con las obligaciones antes mencionadas. Algunos yernos llegan a la comunidad y no se ajustan a estas pautas, esta situación no es muy bien vista y la comunidad presiona para que se inscriban, porque “están consumiendo de la comunidad y tenemos derecho a obligarlos”. Sin embargo, la comunidad no tiene mecanismos eficaces para lograr esto. En este grupo y bajo condiciones similares, se encuentran las personas nacidas en otras comunidades que quieren vivir en Huayllay Chico y que solicitan vivir en la comunidad. La comunidad les da tierras como posesionario, principalmente en la zona de altura donde hay más tierras libres, a cambio de que ellos renuncien a su comunidad y se empadronen en Huayllay Chico.

Los **comuneros activantes** son aquellos hombres mayores de 18 años o que ya han formado una familia, que viven en la comunidad y tiene el derecho a elegir y ser elegidos,

y deben cumplir las obligaciones antes señaladas. El empadronamiento es voluntario. Las viudas son consideradas comuneras activantes al convertirse en jefe del hogar con la muerte de su pareja. Estos comuneros, tienen el derecho a acceder a las tierras que la comunidad entrega, que son y han sido de dos tipos:

*La entrega de tierras en la zona nueva.* Estas son las parcelas que los comuneros activos recibieron cuando se produjo la titulación individual en el PETT. Esta posesión tiene un carácter distinto al resto debido al documento que lo respalda, y como mencionamos anteriormente no todas las familias se beneficiaron.

*La designación temporal de tierras en las zonas altas de la parte antigua de la comunidad.* Cada año la comunidad designa tierras para el trabajo en faenas del cultivo de la papa nativa, conocido como Yupanaco. Este trabajo es voluntario y cada comunero activo que quiera participar recibe una parcela de una yugada aproximadamente. Esta parcela estará en posesión del comunero sólo durante una campaña y luego retornará a la comunidad, y no puede ser heredada. Esta forma de distribución corresponde a un trabajo rotativo que tiene sus propias particularidades y que desarrollaremos más adelante.

Los **comuneros profesionales** son los hombres mayores de 18 años, empadronados, que han estudiado y son profesionales, y que por esa razón viven fuera de la comunidad. Se le considera comunero, porque es *un hijo de la comunidad* que además, tiene casa y tierras en la comunidad. Por esa razón debe aportar de la forma que considere mejor a la comunidad. Se espera que debido a la profesión del comunero, la ayuda o aporte que pueda brinda a la comunidad sea sustanciosa. Este aporte reemplaza las obligaciones que debería cumplir si radicara en la comunidad, es decir, cumplir con pasar cargos políticos, participar en las faenas, la asistencia a las asambleas y la cuota anual. Si volvieran a radicar en la comunidad pasarían a ser comuneros activantes.

Los **comuneros residentes** son los comuneros que se han ido de la comunidad y que residen en otros pueblos y ciudades – principalmente en Lima - pero que sin embargo, conservan sus casas y sus parcelas dentro de la comunidad, que son cuidadas por sus familiares o trabajadas al partir. Al igual que en el caso de *los profesionales*, al no cumplir con sus obligaciones (faenas, asamblea, cuotas) están obligados a dar aportes a la comunidad, ayudar a los dirigentes en las gestiones que estén realizando, hacer donaciones, etc. Estos aportes pueden darse de manera individual o a través de la asociación de residentes “Hijos mutualistas de Huayllay Chico”. La comunidad no establece la forma como debe darse esta ayuda, pero está sobre entendido que estas personas tienen una obligación para con la comunidad que debe expresarse en estas contribuciones, *“es como ayni”*, es decir, debe haber una reciprocidad entre los hijos de un mismo pueblo, a pesar de la distancia.

La comunidad tienen un mecanismo para controlar quien sale y quien entra de la comunidad. Se espera que todo aquel que se vaya del pueblo por un periodo mayor o igual a tres meses, pida permiso a las autoridades a fin de que éstas, enteradas de su ausencia, puedan exonerar a la familia, hombre y mujer, del cumplimiento de las faenas, la asistencia a las asambleas, el pago de cuotas. Si no avisa el comunero debe pagar las multas su regreso. Si una persona se ha ido calladamente, como pasa muy a menudo, se considera una falta de respeto a las autoridades. Hacer cumplir esta norma dependerá de las autoridades, como señala un testimonio, *“si la autoridad se hace respetar se cobra, si lo deja, en buena hora no le cobran nada, depende de las autoridades”*. El funcionamiento de las normas comunales, está muy ligado al tipo de liderazgo que tenga la persona que ejerza el cargo en un momento determinado.

Los **no comuneros**. Como hemos señalado, el empadronamiento es voluntario, es decir que puede haber personas que decidan no inscribirse, aunque no es la mayoría. Suele ser una etapa temporal en la que un hombre se demora en tomar la decisión de inscribirse y a pesar de vivir en la comunidad no se inscribe como comunero. La migración de jóvenes, sobre todo, está vinculada a esta situación. Hay muchos jóvenes que han perdido el interés en inscribirse como comunero, y prefieren irse a trabajar fuera. La comunidad, sin embargo, busca que ellos se inscriban a través de un mecanismo de incentivo que consiste en su potestad de otorgar certificados de ser comunero activo y residencia, que muchas veces necesitan los jóvenes al presentarse ante alguna institución para pedir trabajo. Un grupo de no comuneros importante son los pobladores del barrio de Tauricay que por razones de conflicto con los comuneros del poblado de Huayllay Chico no se encuentran empadronados. Ellos no acceden a las tierras que designa la comunidad y tampoco participan en los trabajos comunales.

#### 4.2. Otras formas de acceso a la tierra

En la comunidad de Huayllay Chico la **herencia** es la modalidad más frecuente para acceder a una parcela. Dentro de este rubro podemos resaltar dos tipos importantes de tierras que son heredadas:

*Las tierras tomadas.* Estas son las tierras que pertenecieron a los abuelos, como dicen algunos, y cuyo origen es ancestral. La toma de posesión de estas tierras se produjo en años antiguos cuando había menos gente y más tierras y la apropiación de éstas por parte de la familia se hizo de manera libre. Estas son las familias más antiguas cuyos troncos se mantiene hasta la fecha. Estas tierras son consideradas por los comuneros como suyas y pueden disponer de ellas con mayor libertad que en el caso de las primeras, que son asumidas como propiedad de la comunidad

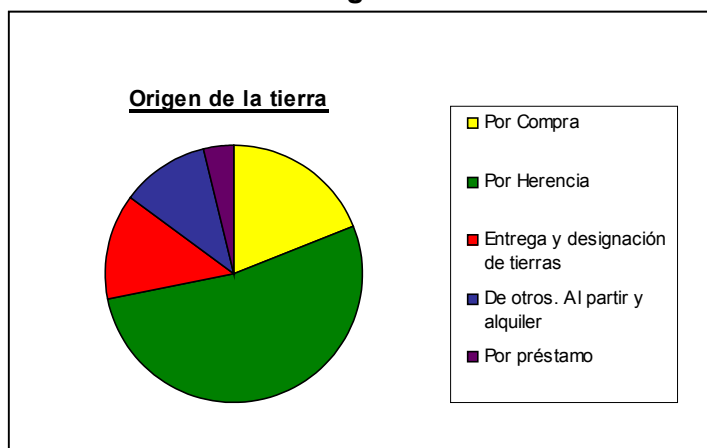
*Las tierras en posesión.* Las tierras en posesión se ubican en la zona alta de secano y en las estancias. Son aquellas que han sido entregadas por la comunidad por solicitud de los comuneros en una asamblea comunal, en tiempo de los abuelos y que ellos trabajan sólo como posesionarios. Los comuneros identifican estas tierras como propiedad de la comunidad, pero aun así, estas tierras son posibles de ser heredadas al interior de la familia y la comunidad no ejerce presión para que las devuelvan ni se las puede quitar. Existe una legitimidad en el derecho dada por el tiempo. Si embargo, hay algunos posesionarios que obtuvieron sus parcelas sin permiso y que no tienen tanta legitimidad como los otros, de quienes se sabe además, la historia familiar al interior de la comunidad.

Finalmente, cabe decir, que las tierras que han sido recibidas en herencia, pueden haber pasado por un proceso de compra y venta, y luego ser heredadas a sus sucesores.



Gráfico 2

## Origen de la tierra



La cuarta forma más común de acceder a tierras es a través de la **compra y venta** de tierras. Existe un mercado de tierras dinámico al interior de la comunidad marcado principalmente por la migración de muchos pobladores ya sea temporal o permanente. Este hecho ocasiona que queden chacras abandonadas y que los migrantes opten por vender. En los casos estudiados, la referencia sobre quiénes eran los que vendían aludía principalmente a gente que ya no vivía en la comunidad. La mayoría de tierras de las familias pueden ser vendidas. Sin embargo, un caso particular son las tierras en posesión que los comuneros no pueden vender debido a que pertenecen a la comunidad.

En general, los testimonios de los comuneros coinciden en que no se puede vender tierras a gente de fuera de la comunidad. Algunas autoridades señalan que esto puede darse pero bajo algunas restricciones como el pago de una cantidad de dinero por un tiempo determinado. Por otro lado, también se subraya la facilidad que se les da a personas de las comunidades vecinas que quieren comprar tierras- por ejemplo el caso de los yernos- siempre y cuando renuncien a su comunidad y se establezcan en Huayllay Chico empadronándose como comuneros.

La cuarta modalidad para el acceso es **al partir**, es decir trabajando las tierras de otras personas. Esto puede darse a través de un contrato de trabajo al partir o bien mediante el alquiler de tierras. Son muy pocos los casos de alquiler que hemos encontrado, la mayoría, más bien, opta por el trabajo al partir. Como en el caso anterior, la migración también favorece este tipo de trabajo que se da sobre todo entre gente de la comunidad que recibe el encargo de un comunero que vive fuera de la comunidad para que trabaje sus chacras a cambio de que le entregue parte de la producción que saque en cada campaña. También es frecuente el caso de personas mayores, hombres y mujeres, viudas por ejemplo, que debido a que cuentan con menos fuerza, contratan al partir a un joven comunero, que a su vez, tienen pocas tierras debido a que a su edad aun no recibe mucha herencia ni cuenta con la plata para comprarse sus propias chacras.

La quinta modalidad es el **préstamo** que se da al interior de las familias. Esto se da con frecuencia cuando el comunero es joven y aun no ha obtenido sus propias tierras, entonces sus padres o algún otro familiar le da en préstamo una parcela. El beneficio en

este caso es íntegro para el comunero y con el paso del tiempo podría convertirse en su propiedad a través de la compra o de la herencia de ser el caso.

### **4.3. La familia, la mujer y el acceso a la tierra**

La relación de la mujer y el acceso a la tierra en Huayllay Chico es, como en otras comunidades más limitada que la del hombre. Esta diferencia está vinculada principalmente al aun limitado poder que la mujer tiene al interior de la organización comunal, como instancia política, y dentro de las familias. Como señalamos anteriormente, un hombre y mujer pueden inscribirse como comuneros, empadronarse, votar en las elecciones y ser elegido como autoridad. Formalmente, la comunidad en su reglamento interno cumple con esta norma.

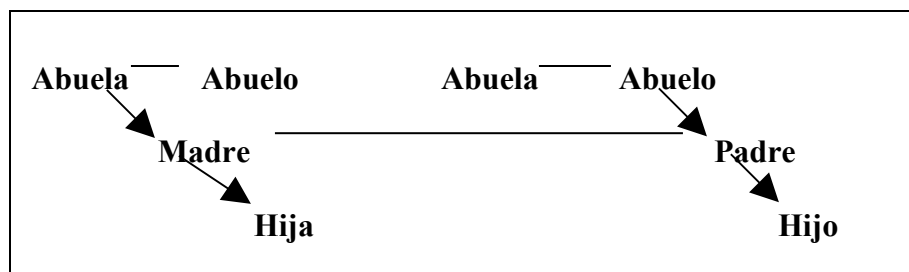
Sin embargo, existe una ambigüedad en la definición de los comuneros activos, incluso en el testimonio de los comuneros, que incorpora a la mujer formalmente como comunera activa, pero que luego la coloca en un segundo plano al explicar las condiciones de esta incorporación. Los testimonios subrayan la importancia de la pareja –ya sea matrimonial o en convivencia- para acceder a los derechos de ser comuneros. De la misma manera, el estatuto de la comunidad refiere que uno de los requisitos para ser comunero es ser jefe de familia o mayor de edad y en el caso de los comuneros asimilados, haber constituido un “hogar permanente”. El empadronamiento, por ello, se hace por familia y el pago de un sol se cuenta por los dos.

En la práctica, la titularidad de la representación de la familia frente a la comunidad, la tiene el hombre como comunero activo, mientras que la mujer cumple el papel de ser su reemplazo en su ausencia. Así, comuneros activos son sólo los hombres, y las viudas debido a que ellas son jefe de familia. En ese sentido, la preeminencia de la mujer en el espacio público está limitada, por un lado, por el poder que ella tiene dentro de la familia, al no ser considerada en la práctica como jefe de ésta-salvo en el caso de viudez- y por otro, por estar mediada por el vínculo familiar ante todo.

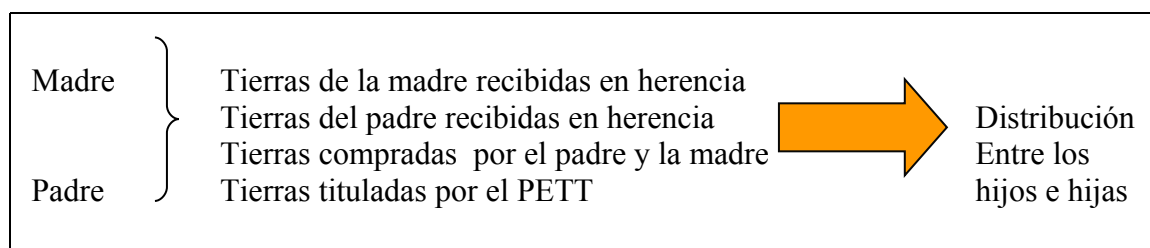
Hombre y mujer solteros mayores de dieciocho años pueden empadronarse, pero sólo el hombre puede llegar a ser un comunero activo independiente. Como hemos visto en los otros casos, la mujer soltera se encuentra aun bajo la dependencia de sus padres y tienen en ellos la representación frente a la comunidad.

Por estas condiciones la mujer está en desventaja en los repartos anuales que la comunidad realiza. Sin embargo, no sucede lo mismo con el resto de tierras que la familia tiene bajo su control. La distribución al interior de las familias busca ser equitativa entre hombres y mujeres, quizás la salvedad más importante que los padres señalan al pensar en lo que heredaran a sus hijos, es que priorizarán a los que se queden en la comunidad con ellos. La herencia está determinada por la expectativa de futuro que tanto los jóvenes tiene para sí mismos como por los proyectos que sus padres tienen para ellos, que muchas veces están lejanos de la agricultura.

Encontramos algunas referencias a una costumbre más antigua para organizar la herencia de la tierra, que consistía en la persistencia de la herencia matrilineal y patrilineal en una misma familia, es decir que los padres heredaban siempre a los hijos hombres sus tierras, y las mujeres a las hijas. Esto significaba que se podía diferenciar al interior de las familias la tenencia de la tierra, entre aquellas que la madre había recibido de sus antepasadas y las tierras que el padre había recibido de sus ancestros hombres. Esta modalidad es vista ahora por los comuneros como anacrónica.

**Diagrama 1****Antigua forma de herencia de la tierra al interior de la familia**

En la actualidad se pueden identificar las tierras que han venido de la línea materna y las tierras que vienen de la línea paterna pero sin diferenciar el género. Las tierras que han sido compradas por la familia se asumen como una posesión de ambos miembros de la pareja.

**Diagrama 2****Actual forma de herencia de la tierra al interior de la familia**

Por otro lado, el matrimonio sigue siendo una forma de acceder a tierras. Los comuneros jóvenes sin tierras, ven en el matrimonio una manera de acceder a recursos, sobre todo cuando no han tenido herencia y no tienen dinero para comprar tierras. Los yernos, deben formar un hogar permanente en la comunidad de la esposa y renunciar a su comunidad madre, pero no renuncian a las tierras que puedan tener en ella.

A continuación presentamos tres casos de situaciones distintas que afrontan las mujeres de Huayllay Chico en relación a la tenencia de la tierra.

**El caso de Rosa Mendoza**

Rosa tiene 27 años y es esposa de Carlos Santos, que tiene la misma edad, desde hace 13 años. Ella nació en Tauricay y desde hace 5 vive en Huayllay Chico. Tiene 8 hermanos, los tres varones mayores se fueron a Lima a estudiar. Un tiempo Carlos se iba cada años a trabajar en la cosecha de café a la selva, en ese tiempo ella tenía que dejar a su niño donde se abuelita en Tauricay para que la ayude a mantenerlo. Pero ahora él ya no viaja y están todos juntos.

Su madre tiene tierras en Tauricay y les va a dejar a ella y a sus hermanos cuando mamá muera 2 chacras por hijo, cada una de 1 yugada. Tiene una chacra hace 3 años en Tauricay que se la dio su mamá porque ahí hay agua de riego, pero es como prestado les ha dado, porque esa chacra va a ser de su hermano que está en Lima.

El reparto será una chacra con riego y otro sin riego para cada uno. Su mamá ha decidido cómo repartir y será igualito le va a tocar a hombres y mujeres. En Tauricay las chacras son más grandes que en Huayllay Chico. El papá de su esposo todavía no les ha dejado tierras. Tampoco han comprado tierras, él es el que decide sobre la compra de tierras. Pero todo le cuenta a ella. La comunidad no les dio parcelas de yanama esa vez que vino el PETT, porque en ese tiempo Carlos no estaba en la comunidad. Cuenta Rosa que la mayoría ha recibido hasta para sus hijos, peor que ellos no se quejaron.

El papá político, de juramento, del papá de Carlos les vendió la casa donde viven a S/400 y les dio la chacra del estadio. Además ellos se encargan de cuidarle la casa al padrino, que se encuentra en Lima actualmente. Han querido comprar, un señor les tierras pero se había hecho pasar por el dueño, pero luego apareció el dueño y lo dejaron ahí. Para dejarles herencia tendría que comprar poco a poco para poder darles. De todas formas les tendría que dejar tierras.

### **El caso de Paulina Marcañaupa Ñahuincopa**

Paulina tiene 44 años, nació en la comunidad de Chahuarma del distrito de Lircay. No tiene estudios pero aprendió un poco en el programa de alfabetización. Es una persona activa, años atrás fue una de las fundadoras del vaso de leche y en la actualidad es vocal de la comunidad. Llegó a Huayllay Chico con su pareja el señor Hilario Durand que era de esta comunidad. Con él tuvo una hija. Hace cuatro años su Hilario falleció. Como no estaban casados y sólo convivían, la comunidad no permitió que las tierras de Hilario quedaran a su nombre, si no más bien a nombre de su hija. Tres chacras quedaron a nombre de su hija, una de ellas es una de las parcelas que el PETT tituló donde siembra maíz, en otra de ellas siembra hortalizas que dan durante todo el año, en otra siembra frutales y maíz, y en otra siembra eucaliptos. Mayormente se dedica a la venta de frutas y hortalizas en las ferias sabatinas de Lircay. Ella misma trabaja sus tierras pero para algunas labores contra peones. *“la mujer sola no puede trabajar al partir, necesita peones y no tiene plata, por eso”.*

### **El caso de Alicia Marcas Paraguay**

Alicia tiene 19 años. Nació en Huayllay Chico. Ella convive con su pareja que es de Huañucclla que es una zona alta de Huayllay Chico. El año pasado se fue con él a trabajar a la selva en la chacra que tiene su esposo en San Martín de Pangoa donde siembran café. Regresó a la comunidad porque salió embarazada y tenía que venir a dar a luz, actualmente tiene 7 meses. Su pareja no se ha inscrito como comunero de Huayllay a Chico, ella dice que “para qué se va inscribir él”. Ella tampoco se ha inscrito, dice que no lo hizo porque no había sacado aun su documento, pero lo cierto es que, como ella dice, no piensa hacerlo porque igual se irá a la selva luego de dar a luz. Y no le interesa mucho inscribirse.

No tiene tierras propias. Podría obtener tierras de dos formas: la primera, si su padre o su madre le dejan tierra, pero aún no han hablado sobre eso porque además sus hermanos son pequeños aún. No tiene seguridad de que sus padres le den tierras. La otra forma es comprando. Esa forma es más segura “Aquí vende la gente, los que están en Lima vienen y venden”. La única tierra que tiene ella y su esposo es la de la selva. Ella piensa que ya no va a regresar a Huayllay Chico, y si volviera entonces tendría que comprar. Su expectativa ahora es quedarse en la selva con su pareja. Ella se dedica a las tareas de la casa mientras él se dedica a la chacra.

## 5. Los derechos sobre la tierra: apropiación familiar y control comunal

En este punto trataremos el tema del grado de apropiación de la tierra que los comuneros de Huayllay Chico tienen sobre la tierra. Entendemos el grado de apropiación como aquel que cumple en diferente medida con los atributos de *uso*, *usufructo* y *disposición*. Anteriormente señalamos que las tierras de la comunidad de Huayllay Chico podían clasificarse en 4 tipos: según zonas de producción (riego, secano, pastos), según forma de usufructo (familiar, colectiva, comunal), según dueño (privadas, tierras de la comunidad), según si se trata de tierras antiguas o tierras nuevas adjudicadas después reforma agraria, según el origen de la parcela familiar (tierras tomadas y tierras entregadas por la comunidad). Como un punto particular describiremos como funcionan las tierras de los ex medianos hacendados que vendieron sus propiedades y que hemos llamado privadas.

El grado de apropiación que los comuneros tienen de sus tierras dependerá del tipo de tierras del que se trate, que como hemos visto puede ser muy variada. Como se ha señalado en el informe de la comunidad 1, “el control comunal sobre la tierra tenderá a aumentar en tanto disminuya el grado de apropiación sobre la tierra”. Ahora bien, para entender de qué manera se dan las tres formas de usufructo es necesario vincularlas a las zonas de producción. De manera esquemática, se puede decir que las tierras bajo riego en su totalidad son usufructuadas sólo por las familias, al igual que una parte de las tierras de secano. Para el caso de las tierras de secano y pastos de la parte alta la delimitación es más difusa, ya que el usufructo familiar, en la zona de secano se mezcla con el comunal, y en las zonas de pastos, con el uso colectivo. Veremos esto con detalle a continuación.

### 5.1. Tierras de riego y secano: uso familiar

Partiremos de la distinción entre tierras tomadas y tierras entregadas por la comunidad que se ubican en la zona intermedia y baja de la comunidad.

En primer lugar, las tierras de riego y secano ubicadas en la zona baja e intermedia de la comunidad corresponden a las *tierras tomadas* por las familias fundadoras de la comunidad. En ellas, los comuneros tienen la libertad de usar estas tierras según sus necesidades. Tienen plena libertad para decidir qué producto sembrar, qué técnicas implementar-aunque casi todos usan solamente guano de corral- puede decidir sobre el destino de su producción, construirse una vivienda y cercar o no sus parcelas. También tienen libertad para vender, arrendar y heredar sus parcelas.

Estas tierras que han sido heredadas generación tras generación son consideradas por los comuneros como “propias” por ser su posesión desde *la época de los antiguos*. Esta percepción es compartida por todos los comuneros y también por las autoridades de la comunidad que consideran que no se puede “tocar” esas tierras. La legitimidad de este tipo de “propiedad” está dada por el tiempo, pero también por documentos que prueban dicha “propiedad”. Este equilibrio está dado también por la confianza. Algunos comuneros señalaban para argumentar que esas tierras le pertenecían, razones como “*todos saben que esa tierra que era de mi abuelo*”. En los caso de compra venta, este elemento cobra aún mayor relevancia, porque muchas veces la referencia a los antiguos poseedores y aludir a la historia de la comunidad, sirve de garantía para probar que una parcela el “pertenece a un comunero”.

Sin embargo, existen algunas restricciones que se extienden también a estas tierras. Una de ellas tiene que ver con la autorización de para comprar y vender. Las autoridades señalan que para vender al interior de la comunidad se debe contar con un permiso de la

directiva comunal, algunos señalan incluso que se debe tener la autorización de la asamblea. En las actas que hemos revisado de los últimos 25 años, sólo hemos encontrado tres referencias a venta de terrenos. Lo cierto es que en la práctica las autoridades comunales no dan autorización para la compra o venta, ni son las que otorgan documentos de posesión, ya que son otras instancias como veremos después, a las que acuden los comuneros para realizar las transferencias de terrenos.

Otra restricción importante, es la prohibición de vender tierras a gente de fuera de la comunidad. Este tema no tuvo consenso entre los entrevistados, sin embargo, la mayoría señaló que no se podía vender a gente de fuera. A pesar de eso, existe flexibilidad en la norma interna y en la interpretación que los comuneros tienen de esta. La prohibición se fundamenta en la defensa del territorio y en que en años pasados, las familias antiguas vendieron tierras a los vecinos de Lircay, sin que pasaran a pertenecer a la comunidad, lo cual ha representado un problema porque son personas que viven dentro de la comunidad sin aportar a ésta. En realidad la prohibición puede flexibilizarse en situaciones de conflictos vinculadas a la defensa del territorio, como veremos también en el análisis de las tierras de pastos y secano.

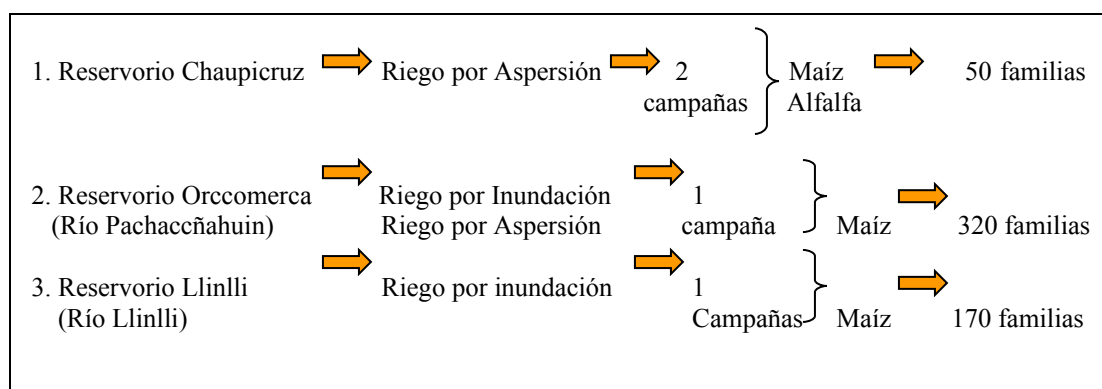
En segundo lugar, tenemos las tierras entregadas por la comunidad que son de uso exclusivo de las familias, ubicadas en el predio de Yanama. Son parcelas que miden aproximadamente  $\frac{1}{2}$  yugada que son sólo de secano. El modo de uso es igual al de las tierras *tomadas*, la diferencia se encuentra en que los comuneros que accedieron a este reparto obtuvieron un título individual de propiedad otorgado por la comunidad que les otorga un grado mayor de posesión en relación al resto de tierras que poseen las familias. Ellos reconocen el valor de ese título a diferencia de los otros documentos que respaldan sus otras parcelas. Sin embargo, el problema de estas tierras es que son muy vulnerables a la helada y por ello los comuneros no invierten mucho en éstas y no son consideradas dentro de las mejores tierras que poseen.

En ese sentido, estas tierras gozan de un grado mayor de apropiación, debido a que pueden ser transferidas sin ninguna restricción de la comunidad. Sin embargo, no se ha dado ningún caso de venta de alguna de estas parcelas a gente de fuera de la comunidad

Si bien existe una zona determinada que se beneficia del riego, debido al patrón disperso de las parcelas familiares, son la mayoría de familias las que pueden hacer uso de éstas, ya se en parcelas propias o en las de terceros. Existe una distinción entre número de beneficiarios según tipo de riego y la ubicación del mismo.

## Esquema 2

### Control del agua, beneficiarios según riego y ubicación.



El riego por inundación existe *desde los abuelos*, mientras que el riego por aspersión es una nueva modalidad introducida por un proyecto de la ONG SICRA. La comunidad lleva un control del uso de las aguas que salen de dos manantiales principalmente, el Llinlli y el Pachacñahuin. El control se hace a través del comité de regantes que existe desde el año 2000 se encarga del empadronamiento de los comuneros que desean utilizar el agua. Cada comunero escoge el día en el que utilizará el riego y tiene que hacer el pago de S/1.00 en el caso del riego por aspersión, y de S/0.30 en el caso del riego por inundación que es más barato debido a que gasta menos agua.

En el mes de agosto, se realiza la limpieza de los reservorios y el canal, en la que todos los comuneros deben participar, aun los que no se ven beneficiados participan porque parte del dinero que se obtiene se destina al fondo de la organización comunal.

## **5.2. Tierras de secano: uso familiar y comunal**

### *a) Tierras comunales en la zona baja:*

Son las parcelas que se encuentran en el predio de Yanama y que tienen un *uso comunal*, donde se realizan faenas convocadas por la comunidad para la siembra y cosecha de maíz. En otra parcela, la comunidad tiene sembrados eucaliptos donde también se realizan trabajos comunales. Los años anteriores a la parcelación, las tierras de uso comunal correspondían a la totalidad del predio Yanama y se realizan faenas frecuentes para la producción de maíz, cuya venta iba en beneficio de la comunidad. Con la parcelación, el área de uso comunal se redujo y dio paso a una forma más privada de uso por parte de las familias comuneras. Actualmente la comunidad sigue administrando el área de tierra comunal que queda y las faenas que ahí se realizan son de carácter *obligatorio* y el maíz es íntegramente para la comunidad.

### *b) Tierras comunales en la zona alta:*

Estas corresponden a tierras comunales de secano que se trabajan de forma rotativa, donde interviene usos comunales y familiares. La rotación de tierras se realiza en las zonas altas de la comunidad para el cultivo de papa nativa, cebada, trigo, olluco, y mashua principalmente. La comunidad cuenta con 13 sectores cada uno de los cuales es trabajado un año para luego descansar. Una tierra puede descansar hasta 13 años, tiempo en el cual, la rotación regresa a su punto inicial. La decisión sobre donde sembrar, qué sembrar y las fechas en que se llevará acabo el trabajo se deciden en asamblea comunal.

Esta forma de trabajo es muy antigua y ha conservado características tradicionales hasta la fecha. La comunidad llama a este trabajo el “Yupanaco” que quiere decir *competencia*, y consiste en que los comuneros compiten por ver quién termina primero de hacer el “chacmeo” o el volteado de la tierra. En ese momento, el comunero demuestra su resistencia y velocidad. El Yupanaco era el espacio donde anteriormente se elegía a los alcaldes varas, campos y alguaciles, a la manera que en otros lugares se hacía en la limpia de acequias. Cuentan también que antes se invitaba a comuneros de otras comunidades para participar en la jornada a manera de campeonato. Actualmente ya no se invita a gente de fuera, y algunos testimonios hablan de que la costumbre ha ido decayendo y su Yupanaco ya no es tan conocido como el que se realiza hasta el día de hoy en otras comunidades vecinas.

Cada año luego de elegir el lugar donde se hará el Yupanaco, los comuneros acuden de manera voluntaria a dicho lugar, que aproximadamente mide 5ha. Al inicio de la jornada,

cada comunero realiza el chacmeo en forma de *uso comunal* – y competencia- en un pedazo de parcela. Ese pedazo será sembrado para la comunidad y algunos de los surcos, por costumbre, serán entregados a las autoridades como forma de agradecimiento. Terminado el chacmeo, se inicia el uso familiar, es decir aquel que será revertido en beneficio de la familia comunera. Para explicar el uso familiar en estas tierras es necesario hacerlo teniendo en cuenta las diferencias de tierras según el origen, para ello usaremos la clasificación que distinguía al interior de las familias entre *tierras tomadas* y *tierras entregadas por la comunidad*.

Podemos identificar tres tipos de tierra con distinto grado de apropiación, que entran en juego durante la rotación: las tierras tomadas, las tierras en posesión y las tierras designadas, estas dos últimas corresponden a tierras entregadas por la comunidad. Veamos una por una.

- 1) *Tierras tomadas*: Como lo hemos dicho anteriormente estas son tierras que fueron tomadas por los antiguos pobladores de Huayllay Chico y que han sido heredadas al interior de las familias. Los comuneros se refieren a éstas como “parcelas con testamento”. Esta denominación se refiere a la existencia de un documento que le da al comunero un sentido mayor de “propiedad” sobre su parcela. Este carácter en teoría, le permite al comunero hacer un uso pleno de estas parcelas, cercarlas, heredarlas e incluso venderlas al interior de la comunidad, sin que la comunidad ejerza alguna presión “cuando hay testamento la comunidad no puede ya”. Sin embargo, aun cuando estos derechos pueden ser reconocidos, los comuneros se ajustan al sistema de rotación y deciden el uso de estas tierras en asambleas. Debido a que estas tierras en época de descanso pueden ser usadas como pastos, no les conviene a las familias sembrar fuera de la rotación porque sus sembríos se verían afectados por los animales. Como vemos aquí se encuentra restringido por la comunidad el derecho de uso.
- 2) *Tierras en posesión*: Son las tierras que fueron entregadas por la comunidad años atrás y que algunos comuneros han ido posesionando y heredado por algunas generaciones. Estas parcelas tiene un uso similar al de las tierras tomadas, con las restricciones que el sistema de rotación impone. La diferencia fundamental es que estas tierras no pueden ser vendidas al interior de la comunidad, ya que son consideradas por los comuneros como “propiedad de la comunidad”, y por ello sus posesionarios no cuentan con documentos. En teoría, para posesionar un terreno en esta zona, se debe pedir autorización a la comunidad en asamblea, sin embargo esto no sucede siempre, y se ha dado casos de personas que han empezado a posesionar tomando tierras libres de la comunidad. En este caso, el derecho de uso y de disposición son los más limitados, siendo el usufructo el que se da en un grado mayor.
- 3) *Tierras designadas*: Son las tierras que la comunidad designa a los comuneros voluntarios cada año para hacer el Yupanaco. Dicha parcela mide aproximadamente 1 yugada, sin embargo, si un comunero quiere trabajar para sí más parcelas puede hacerlo libremente y debe ser empadronado por la comunidad. El uso familiar de estas tierras designadas sólo dura una campaña agrícola, tiempo después del cual, la parcela vuelve a la comunidad. No pueden ser vendidas ni heredadas.

El acceso a las tierras variará según el sector que se escoja para hacer el Yupanaco. En 8 de los sectores la mayoría de las parcelas cuentan con testamento o hay posesionarios. Si se escoge una de estas, ya no se da la designación de tierras y sólo trabajan aquellos que tienen tierras ahí de las otras dos modalidades. En ese caso, la comunidad cumple con pasar lista y llevar el registro de quienes están trabajando. Esta situación excluye a quienes no tienen tierra en ese lugar, mayormente a los jóvenes, por lo que el momento



de decisión sobre el lugar donde se hará el Yupanaco es un momento determinante de puja entre los comuneros que no quieren verse excluidos y que exigen se amplíe el lugar a sectores libres, y aquellos que privilegian los lugares donde son poseedores o tienen testamento.

Esta zona no está exenta de conflictos debido a la presión sobre la tierra y que expresan la existencia de relaciones de poder basadas principalmente en la “propiedad” antigua de la tierra. En las actas de las asambleas, hemos encontrado discusiones durante el momento de decidir dónde hacer el yupanaco, donde se planteaba la necesidad de que todos recibieran por igual, que “todos debían merecer” por ser tierras de la comunidad.

Se han presentado casos en los que la comunidad ha tratado de sacar a persona que se han posesionado de parcelas de manera arbitraria y que a pesar de la presión de la comunidad, el comunero se ha rehusado a salir. En casos como este los principales afectados son los jóvenes: *“los menores de edad no tenemos chacra mayormente” “los señores de edad no nos dejaron hacer nuestro chacmeo<sup>100</sup> diciendo es mi chacra”.*<sup>101</sup> La comunidad en vez de obligar a que esa persona salga de la parcela, dispuso en asamblea comunal que estas personas que actúen de esa forma paguen 50 soles. En efecto, existe un grado de ambigüedad en la facultad que tiene la comunidad para disponer de estas tierras, es decir obligar al comunero a devolverlas. En todo caso, esta es una situación que no ha producido, salvo incidentes como el que hemos señalado líneas arriba.

Una situación que obliga a un tratamiento distinto de estas tierras y a romper el sistema de rotación por sectores, son los conflictos que se dan entre comunidades vecinas. En estos casos, los sectores que se encuentran en los linderos en litigio<sup>102</sup>, empiezan a ser usados de manera permanente con el fin de que no se produzcan invasiones ya sea de animales o de gente de las otras comunidades. Sólo en estos casos la comunidad deja de ejercer control y las tierras son usadas de manera libre por los comuneros, sin previa autorización ni designación de tierras. Actualmente existen tres sectores que tienen estas características. Como vemos distintas circunstancias han ido privilegiando un mayor uso familiar sobre el uso comunal en estas tierras.

En resumen, en la zona baja, existen tierras de secano en una extensión reducida de uso exclusivamente comunal donde se realizan faenas de manera obligatoria. En ellas no existe apropiación familiar y el control comunal es total. En la zona alta encontramos tierras de secano de tierras con origen distinto -tomadas y entregadas por la comunidad- que se encuentran bajo un sistema de rotación comunal en sectores. El control comunal se expresa principalmente en las restricciones que impone para el uso de dichas tierras, que en los tres tipos vemos que es más reducido, salvo el caso en el caso de las tierras tomadas que tienen un grado mayor. El usufructo a pesar de ser tierras comunales, es predominantemente familiar ya que sólo una pequeña parte de la producción de estas parcelas se trabaja para la comunidad. El derecho a disposición, por otro lado, es mucho mayor en el caso de las tierras tomadas, mientras que en las de posesión es un grado menor y en las tierras designadas es nulo.

<sup>100</sup> El chacmeo es el volteado de la tierra dentro de una parcela que ha estado en descanso.

<sup>101</sup> Tomado de las actas de asambleas de la comunidad.

<sup>102</sup> El sector de Balcón por ejemplo.

### 5.3. Tierras de pastos: uso familiar y colectivo

El área de pastos representa un área significativa dentro de la comunidad, y se encuentra en la zona más alta. Esta zona puede ser usada por todos los comuneros de manera libre para pastear sus animales. Estas tierras son consideradas “de la comunidad”, su uso es predominantemente colectivo. Sin embargo existe un nivel de apropiación familiar que se expresa en la existencia de las estancias. Las estancias son viviendas temporales de uso familiar que se utilizan para llevar a los animales a pastear por temporadas más largas.

Su uso se da la interior de la familia extensa, es decir que los hijos llevan a pastear sus animales a esos lugares o se los dan a sus padres para que se ocupen del pastoreo, dependiendo de como se distribuya el trabajo al interior de la familia. Lo común es que sean las mujeres las que se ocupen del ganado, algunas son contratadas como pastoras y llevan los animales de otros a las estancias o a las zonas de pastos. Otra actividad que se realiza en estas tierras es la venta de guano que se acumula en los corrales, a aquellos que no cuentan como muchos animales.

En estas tierras también existe la particularidad del uso familiar. Las estancias son espacios que los comuneros poseionan y que son usadas por ellos para su beneficio familiar, también desde la época antigua. Los comuneros se consideran poseedores de éstas pero reconocen que la propietaria es la comunidad. Por ello, las estancias también han sido heredadas de generación en generación ya que, como señala un testimonio, “*es para siempre nunca la devuelven*”.

Los comuneros que deseen hacerse una estancia, o que quieran tierras para cultivar en esta zona, pueden hacerlo pidiendo autorización a la comunidad para ser posesionarios. Actualmente, la estancia más grande es Laria donde hay 15 personas viviendo.

Se dio el caso de que personas de fuera de la comunidad – en este caso 5 familias de Ayacucho- solicitaron a la comunidad tierras para instalarse en la comunidad. La comunidad en asamblea decidió vender tierras que se encuentran en uno de los límites que se encuentran en litigio y que era tierra libre de pastos que los de la comunidad vecina estaban aprovechando con sus animales. La salida fue que estas familias se instalaran en ese lugar para proteger el territorio comunal. En este caso se aprobó una venta a personas de fuera, con la condición de que se empadronaran y presentaran una carta de renuncia a su comunidad natal, así como una constancia de buen comportamiento que el teniente gobernador debe certificar.

Como vemos, las normas no son tan rígidas y prevalecen intereses superiores que se superponen a algunas costumbres, como la protección del territorio. En efecto, lo importante no es que no se pueda vender a gente de fuera, sino, el hecho de que aquellos que quieran vivir dentro de la comunidad se empadronen y aporten a la comunidad que los está recibiendo.

Es así que si bien las tierras de pastos tienen mayoritariamente un uso colectivo, podemos encontrar también un grado mediano de apropiación familiar principalmente en las estancias por el uso y la disposición sobre las tierras, a través de la herencia, que algunas familias antiguas han mantenido por años, o como hemos visto, a través de la compra o por solicitud a la comunidad para ser posesionarios. Laria, por ejemplo, podría tender a convertirse en un poblado (un barrio) para el cultivo de productos de altura y con tierras de pastoreo, donde predominaría la apropiación comunal.

Un tipo de control importante que realiza la comunidad que está relacionado con el uso de los pastos, es el que se refiere a los animales. A inicios de cada año en asamblea

comunal, se decide “evitar” los animales, que significa llevar a los animales a los “echaderos” que son las zonas de pastos, para que no malogren la siembra. Los comuneros acuerdan un plazo de 15 días a partir de los cuales los animales deben estar fuera de las áreas sembradas y si no lo hacen deben pagar una multa.

Existe una norma en la comunidad que señala “no deben acaparar los de afuera gratuitamente”, que se refiere al uso que personas de las comunidades vecinas pueden hacer de las tierras de la comunidad llevando sus animales a pastear a las estancias. En esos casos, se les cobra un aporte voluntario que es entregado a la comunidad.

Mediante sus autoridades, la comunidad se encarga de vigilar que no se dañen los sembríos y de sancionar a los animales dañeros encerrándolos en el coso. Las multas para los dueños de los animales dañeros se establecen en el “cosage” que se decide en asamblea y no es más que un listado donde figura cuánto se debe pagar según el animal que haya hecho daño.

#### **5.4. Tierras antiguas y tierras nuevas**

La división entre tierras nuevas y antiguas, en el caso de esta comunidad, nos es útil para observar las diferencias de los tipos de usufructo que hay entre unas y otras. Recordemos que las tierras nuevas ocupan un espacio pequeño en relación a las tierras antiguas que son la gran mayoría.

Hemos elaborado un diagrama que nos ayuda a observar los distintos grados de apropiación según los diferentes tipos de tierras que hemos visto en este acápite:

En Huayllay Chico encontramos dos zonas claramente diferenciadas del resto de la comunidad. A estas zonas las hemos llamado “tierras privadas” y son los terrenos que fueron vendidos por los medianos hacendados que estaba ahí instalados y que vendieron durante la época de la reforma agraria. Sus dueños no son comuneros y no tienen casi vínculos con la organización comunal. Viven de manera independiente, como en islotes privados en medio del territorio comunal. La zona de La Paz fue comprada por la familia Zorrilla. Esta familia es una de las más importantes de Lircay política y económicamente. La señora Luisa Monge de Zorrilla, era profesora en Huayllay Chico, conforme pasaron los años, la señora Monge falleció y las tierras quedaron en manos de sus hijos. Ellos sin embargo, se ocuparon en otros oficios, principalmente de negocios y en la política, como es el caso de Julián Zorrilla que fuera alcalde de la provincia no muchos años atrás. Las tierras de La Paz quedaron abandonadas. En la actualidad, Cico Zorrilla, profesor en Lircay, y su familia, son los que usan algunas chacras para la siembra de maíz, pero no en grandes extensiones.

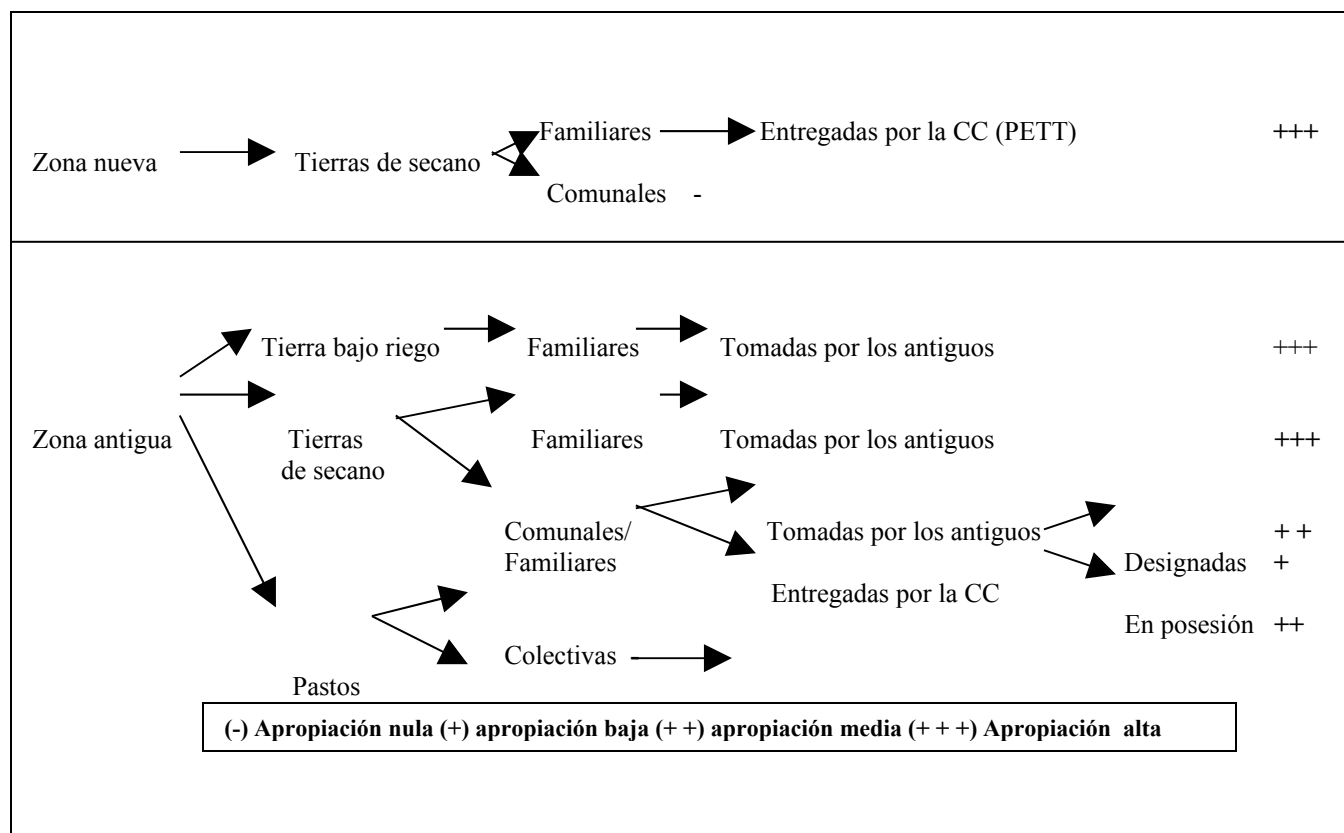
Por otro lado, está la zona de Pachas que fue comprada por Porfirio Marcas. Cuando Filiberto Vidalón puso en venta sus tierras, se las ofreció primero a las autoridades de la comunidad de Huayllay Chico, pero no contaban con el dinero. En vista que la comunidad estaba imposibilitada de comprarlas, Porfirio Marcas, nacido en Lircay, lo hizo, mediante un notario en Lircay. En total tiene bajo su propiedad 8 hectáreas. El tampoco es comunero. Sin embargo, ha habido momentos en los que ha tenido que colaborar con la comunidad, como en la época de la violencia política, cuando fue obligado a participar en las rondas que se formaron en la comunidad en esa época. Posteriormente, más que colaborar con la comunidad prefería hacerlo con las autoridades de Lircay.

Estas zonas tienen un funcionamiento autónomo y la comunidad no ejerce ningún tipo de presión sobre estos propietarios aun cuando utilizan los recursos de la comunidad (tierra y

agua). Se les considera como privados, y no forman parte ni sus dueños, ni sus tierras de la administración comunal.

**Diagrama 3**

**Grados de apropiación según los diferentes tipos de tierras**



## 6. Derechos plurales y dinámicos de propiedad

### 6.1. La propiedad comunal

La legislación peruana les otorga a las comunidades campesinas la propiedad de la tierra. Sin embargo, según los criterios de uso, disfrute y disposición que hemos utilizado para definir el grado de apropiación, se puede ver con claridad que la comunidad no ejerce una propiedad plena de las tierras comprendidas entre sus límites.

En el siguiente cuadro podemos observar que es en las tierras de secano y de pastos donde la comunidad tiene mayores derechos. Sin embargo, si tomamos en cuenta que dentro de las tierras de secano, el porcentaje de tierras de uso comunal es mucho menor al familiar (sólo cuentan con dos parcelas en la zona baja y de las tierras de la parte alta sólo una parte de las parcelas trabajadas es destinada a la comunidad), la apropiación es también menor, en términos de disfrute y extensión del territorio usado comunalmente.

Cuadro 8

## Derechos sobre la tierra según tipo de tierra

Derechos sobre la tierra		Tipos de tierras		
		Riego y secano tomadas por antiguos	Secano	Pastos
Uso	Uso agrícola: decisión sobre qué sembrar, cuándo y donde.	X	✓	X
	Uso de técnicas e insumos no tradicionales	X	X	X
	Siembra de pastos	X	X	X
	Cerco de terrenos	X	X	X
	Construcción de inmuebles	X	X	X
Disfrute	Gozar de la cosecha, de los productos ganaderos, etc.	X	✓	X
	Cobro por pastear a foráneos			✓
Disposición	Herencia	--	--	--
	Venta	X	✓	✓
	Alquiler/Trabajo a partir	X	X	X
	Entrega a comuneros	X	✓	✓

En cuanto al *uso*, como la mayoría de tierras son usadas bajo el sistema de rotación, la comunidad es la que decide qué sembrar, cuándo y dónde. Junto con eso, el derecho más fuerte que tiene la comunidad sobre las tierras de secano es el de disposición, ya que la comunidad puede designar tierras libres o en descanso a los comuneros para el trabajo rotativo, y también, si lo cree necesario puede vender o otorgar tierras en posesión en casos excepcionales. Si tenemos en cuenta que la mayoría de sectores son de parcelas con testamento o están en posesión, la extensión de tierras de las cuales la comunidad puede disponer para vender o entregar, es menor y no son la de mejor calidad.

En el caso de las tierras de pastos, si bien los comuneros le atribuyen a la comunidad la propiedad de estas zonas, este hecho se limita a que la comunidad es la única que puede disponer de estas tierras, vendiéndolas o entregándolas a los comuneros. Su injerencia en estas tierras está vinculada a que son tierras que se encuentran en los límites de la comunidad que la organización comunal debe resguardar en defensa del territorio. Sin embargo, como hemos visto, aquí también hay un uso y un disfrute colectivo y en cierto grado familiar, en las estancias. La comunidad controla en cierta medida el uso de los animales y puede decidir a donde enviarlos para proteger las zonas de sembrío.

Por otro lado, como se puede ver en el cuadro, en las tierras de riego y secano, que son tierras tomadas por los antiguos, la comunidad no tiene ningún tipo de derecho. Estas tierras funcionan de manera privada, como veremos más adelante dentro de las familias. Así, podemos decir que la propiedad de la comunidad campesina sobre sus tierras no es plena, y que más bien, el poder de la comunidad no está tanto en el control sobre las tierras sino sobre el territorio. No hemos desarrollado en este documento con detalle, el conjunto de funciones de representación política y funciones sociales que la comunidad realiza, ni tampoco el tema de la identidad, pero es importante señalar, el fuerte vínculo que existe entre el territorio e identidad comunal, y que ese vínculo es un elemento que moviliza a los comuneros a preservar la comunidad y a actuar como lo hacen, los niveles de gobierno reconocidos plenamente por el Estado.

## 6.2. Familias comuneras y derechos diferenciados sobre la tierra

A lo largo del texto hemos visto las diferencias que existen entre los derechos que las familias y la comunidad como organización, tienen sobre dos grandes clasificaciones de tierras que han sido ejes del análisis: las tierras entregadas por la comunidad y las tierras tomadas por los antiguos. Sin embargo, las diferencias entre comuneros es también una variable para entender los diferentes paquetes de derechos que existen en Huayllay Chico.

En el siguiente cuadro se presenta el modo de apropiación de los comuneros y no comuneros en las tierras tomadas por los antiguos.

**Cuadro 9**  
**Paquetes de derechos en parcelas familiares:**  
**Tierras entregadas por la comunidad**

Derechos sobre la tierra		Tipo de comunero				Mujer	No comunero
		Pasivos	Activantes	Profesionales	Residentes		
Acceso	Por herencia	X	✓	✓	✓	✓	✓
	Por compra	X	✓	✓	✓	✓	✓
	Por entrega comunal	X	X	X	X	X	X
	Por alquiler / al partir	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Por préstamo						✓
Uso	Uso agrícola	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Uso de técnicas e insumos no tradicionales	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Siembra de pastos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cerco de terrenos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Construcción de inmuebles	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Disfrute	Aprovechar de la cosecha, de los productos ganaderos, etc	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Herencia	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Disposición	Venta	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Alquiler/Trabajo a partir	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Entrega a comuneros	--	--	--	--	--	--
Posibilidad de pérdida de tierra		X	X	X	X	X	X

Podemos ver que en ellas, los distintos tipos de comuneros tienen un grado de apropiación similar. Incluso las mujeres logran tener un conjunto de derechos igual de plenos que el de los comuneros activos (hombres y viudas). Para matizar esta afirmación, es importante agregar la variable familiar en las decisiones sobre la tierra: el hombre y la mujer que han formado una familia, como vimos anteriormente, deciden en conjunto si vender o comprar una parcela y también qué sembrar.

El origen de la parcela, es una variable importante para ver el grado de apropiación. En este caso, las tierras que tiene su origen en la toma hecha por los antiguos, le da a quienes las poseen un grado de apropiación alto. Es decir, las familias que tengan este tipo de tierras tendrán más derechos sobre las mismas, que aquellas que sólo tienen en las tierras. Sin embargo, el problema que aquí se presenta es el del acceso, si bien existe el derecho, hay otras condiciones que lo dificultan. Como hemos visto al inicio del texto, existe una gran diferencia en el acceso a las tierras. Algunas familias pueden llegar hasta tener 17 parcelas mientras que otros 3, y en los últimos escalones se encuentran las mujeres y las viudas. A los jóvenes por su parte también resulta difícil acceder a sus propias parcelas. Algunos de ellos trabajan las tierras de sus padres, en préstamo o trabajan en tierras de terceros al partir, hasta el momento en que puedan tener dinero para comprar sus propias parcelas. La compra es el mecanismo más efectivo en la actualidad, debido a que la herencia es una condición que se da después. El préstamo dentro de la familia, ayuda a resolver el problema de la carencia de las tierras propias, al igual que la migración temporal a la selva para trabajar como peón en la cosecha de café, sin embargo, las condiciones son de por sí adversas para un grupo de comuneros.

Por otro lado, dentro de los no comuneros, los pobladores de Tauricay-un barrio distante de la comunidad- mantienen un funcionamiento paralelo al del resto de la comunidad de Huayllay Chico, y de sus autoridades. En ese sentido, tienen una dinámica propia en cuanto a la tenencia de sus tierras las cuales tiene un origen principalmente en la compra-venta y funcionan con un nivel de apropiación familiar importante.

Otra variable muy importante para entender los derechos de propiedad en Huayllay Chico es la de zonas de producción. Es así, que no todas las tierras tomadas gozan del mismo grado de apropiación. Las tierras tomadas por los antiguos que se encuentran en la parte alta de secano, como ya hemos señalado antes, se encuentran restringidas por el sistema de rotación que la comunidad lleva a cabo. Como vemos en el siguiente cuadro los comuneros activos ven limitados principalmente sus derechos de uso sobre estas tierras, a diferencia de lo que pasa en las zonas de riego y secano.

**Cuadro 10**

**Tierras tomadas por los antiguos en la zona alta con testamento**

Derechos sobre la tierra		Tipo de comunero				Mujer
		Pasivos	Activantes	Profesionales	Residentes	
Acceso	Por herencia	X	✓	✓	✓	✓
	Por compra	X	X	X	✓	X
	Por entrega comunal	X	X	X	X	X
	Por alquiler / al partir	✓	X	X	X	X
	Por préstamo					
Uso	Uso agrícola	✓	✓	✓	✓	✓

	Uso de técnicas e insumos no tradicionales	X	✓	✓	✓	✓
	Decisión sobre que sembrar cuando y donde	X	X	X	X	X
	Siembra de pastos	X	X	✓	✓	X
	Cerco de terrenos	X	✓	✓	✓	✓
	Construcción de inmuebles	X	✓	✓	✓	✓
Disfrute	Aprovechar de la cosecha, de los productos ganaderos, etc	✓	✓	✓	✓	✓
Disposición	Herencia	X	✓	✓	✓	✓
	Venta	X	✓	✓	✓	✓
	Alquiler/Trabajo a partir	X	✓	✓	✓	✓
	Entrega a comuneros	--	--	--	--	--
<i>Posibilidad de pérdida de tierra</i>		X	X	X	X	X

En el caso de las tierras entregadas por la comunidad, existen grandes diferencias entre los dos tipos de tierras que la comunidad ha entregado. Las que fueron entregadas en la repartición que se hizo mediante el PETT, son claramente de un nivel mayor por parte de las familias, incluso, frente a las otras parcelas familiares que tienen su origen en las tierras tomadas por los antiguos, éstas tienen un nivel mayor por contar con un título individual. En las otras, los comuneros tienen un grado de apropiación más restringido debido al control que la comunidad tiene sobre las tierras de rotación.

En el primer grupo sólo los comuneros activantes se beneficiaron con la entrega que se hizo en el año 1997. Las mujeres no fueron las recepcionistas de estas parcelas ya que estas fueron recibidas por el jefe de familia que es el comunero activantes, no obstante, como el usufructo es familiar y las decisiones sobre la disposición de la tierra se toman al interior de la familia, la mujer accede a derechos sobre estas tierras tituladas. No obstante, ser comunero activante no fue la única condición que intervino en el reparto de estas tierras. Un elemento importante que trasciende los paquetes de derechos que hemos presentado, es el poder. Los que accedieron a mayor cantidad de parcelas fueron las autoridades que habían gestionado la titulación y que tenían cargos en la directiva comunal. El presidente de aquel entonces fue el más beneficiado. Este privilegio fue cuestionado por varios comuneros, que hasta la fecha piden que haga una nueva repartición más justa. Las familias más notables y antiguas (Ichpas, Marcas, Hilario) fueron las más beneficiadas. Por el contrario, los ex peones de la hacienda y sus



herederos fueron excluidos de este reparto, al igual que los pobladores de Tauricay, debido a la relación distante que han tenido a lo largo de la historia.

En el segundo grupo de tierras designadas en zona de rotación, el único derecho que los comuneros activantes tienen es el de usufructo, junto con la mujer que se beneficia porque el beneficio es familiar, todos los demás derechos los tiene la comunidad.

**Cuadro 11**  
**Paquetes de derechos en parcelas familiares: Tierras entregadas por la comunidad**

		Tierras entregadas (PETT)		Tierras designadas (Rotación)				Mujer	No comuneros
		Tipo de comunero		Tipo de comunero					
		Activantes	Mujeres	Activantes	Profesionales	Pasivos	Residentes		
Derechos sobre la tierra		Activantes	Mujeres	Activantes	Profesionales	Pasivos	Residentes		
Acceso	Por herencia	✓	X	X	X	X	X	X	X
	Por compra	X	X	X	X	X	X	X	X
	Por entrega comunal	✓	X	✓	X	X	X	X	X
	Por alquiler / al partir	✓	✓	X	X	X	X	X	X
	Por préstamo		✓			X	X		X
Uso	Uso agrícola	✓	✓	X	X		X	X	X
	Uso de técnicas e insumos no tradicionales	✓	✓	X	X	X	X	X	X
	Siembra de pastos	✓	✓	X	X	X	X	X	X
	Cerco de terrenos	✓	✓	X	X	X	X	X	X
	Construcción de inmuebles	✓	✓	X	X	X	X	X	X
Disfrute	Gozar de la cosecha, de los productos ganaderos, etc.	✓	✓	✓	X	X	X	✓	X
Disposición	Herencia	✓	X	X	X	X	X	X	X
	Venta	✓	✓	X	X	X	X	X	X
	Alquiler/Trabajo a partir	✓	✓	X	X	X	X	X	X
	Entrega a comuneros	--	--	--	--	--	--	--	--
Posibilidad de pérdida de tierra		X	--	X	X	X	X	X	X

## 7. Conflictos por la tenencia de la tierra

Empezamos a contar la historia de Huayllay Chico señalando la importancia que tiene para las comunidades la lucha por la defensa del territorio. Con el pasar de los años, los

conflictos de linderos fueron resolviéndose y la comunidad quedó en relativa calma. Las afectaciones de los territorios de frontera sin embargo, siempre han sido susceptibles de invasiones de familias de las comunidades vecinas que ingresan al territorio comunal y por ejemplo utilizan los pastos. A estas zonas, como hemos mencionado anteriormente, la comunidad les da un tratamiento especial, cobra por las pasaderas de animales, pide colaboraciones a quienes la utilizan, otorga tierras a familias que viene de fuera sin tierras para que ocupen -y en ese sentido proteja- los territorios en litigio.

Proteger el territorio es un objetivo importante para la comunidad. Esto, no tiene que ver solamente con defenderla de la invasión de otras comunidades, sino también con preservar que su propio territorio no se desmiembre por conflictos internos. Los desmembramientos suelen estar relacionados con la ubicación de los asentamientos poblados al interior de la comunidad, cuyo patrón de población es casi siempre disperso. Aquellos que están en la periferia del centro poblado principal, tienden a tener un funcionamiento más autónomo con respecto al conjunto y se plantean la separación de la comunidad para formar una propia como una alternativa que les puede traer mayores beneficios.

En Huayllay Chico encontramos una situación de tensión con el barrio de Tauricay. Este poblado, se encuentra en el límite con la comunidad campesina de San Juan de Dios, en la parte alta del camino a Lircay. Está compuesto por 38 jefes de familia, de los cuales 4 tienen casa en Lircay y 4 viven en San Juan Bautista. Cuando el pueblo se formó hace varios años, los límites de la comunidad ya se habían establecidos. El nuevo poblado fue creciendo ocupando también parte de la comunidad vecina, con familias de troncos distintos a los de Huayllay Chico (Mendoza, Huayras, Martínez, Rojas, Lizana). Los antiguos, vendieron tierras a estas nuevas familias que llegaban a instalarse en esa zona, y así fueron abarcando más tierras dentro de la comunidad. Las palabras del teniente gobernador de Tauricay expresan el nivel de apropiación que los pobladores de ese lugar tiene con respecto a las tierras que tienen: *“Este no es terreno comunal, todo es comprado, en cambio en Huayllay Chico todo es terreno comunal”*.

Desde hace varios años, los hombres de Tauricay no se empadronan ni participan en las actividades que convoca la comunidad, no participan del Yupanaco ni trabajan en las tierras comunales de Yanama. Algunos incluso están empadronados en la otra comunidad y tienen como máxima autoridad a un teniente gobernador que eligen ellos mismos en asamblea. La intención de los pobladores de Tauricay según los comuneros de Huayllay Chico es independizarse de la comunidad. Si bien esta no es una alternativa que los de Tauricay estén viabilizando, es una posibilidad que han evaluado, incluso, llegaron a elegir a un presidente local, como sucede en otros lugares. Si embargo, el territorio que controlan es reducido y el número de gente con el que cuentan también es limitado como para hacer realidad esa empresa.

La tensión entre ambos poblados se expresa en el conflicto por el uso de algunos recursos de la comunidad como la tierra y el agua. La organización comunal de Huayllay Chico ha prohibido que se venda tierras a los comuneros de Tauricay, esto busca evitar que se produzca una mayor apropiación de tierras y también, busca proteger esas tierras para el uso de los comuneros jóvenes de Huayllay. Se han suscitado algunos problemas entre comuneros de Huayllay Chico y pobladores de Tauricay debido a que estos últimos han aprovechado el abandono de tierras que existe en la comunidad por parte de los comuneros residentes, usurpando parcelas en descanso. La cantidad de tierras que están en descanso debido a que muchos comuneros se han ido a vivir fuera de la comunidad, puede representar una variable de seguridad sobre el control del territorio pro parte de la comunidad. Con respecto al agua, los de Tauricay no están empadronados en el padrón de riego que administra la junta de regantes de Huayllay chico, históricamente ellos han

usado el manantial de Putacca. El conflicto se produjo por el uso de este manantial que los de Huayllay Chico querían agarrar para ellos, sosteniendo que “pertenecía a su terreno”. El conflicto terminó cuando a pesar de que los de Tauricay pagaron S/2500, el ministerio le dio la licencia a los de Huayllay Chico.

Los comuneros de Huayllay Chico buscan fortalecer el vínculo con los pobladores de Tauricay e involucrarlos en los proyectos de la comunidad, a fin de que la población que vive ahí se integre al conjunto de pobladores y no tiendan a la dispersión. Actualmente, por ello, han hecho un acta de asamblea en la que los de Tauricay se comprometen a empadronarse. La historia de la formación de este barrio formada por familias distintas a las originarias de Huayllay Chico, hizo que estos pobladores funcionaran de manera independiente en el uso de sus recursos en relación a la comunidad, y también con una administración política relativamente independiente de la organización comunal, de tal manera que existe un sentimiento en ambas partes, de que Tauricay no pertenece a la comunidad.

La atención puesta por las autoridades de Huayllay Chico hacia los pobladores de Tauricay, se debe al proyecto que tienen en marcha para convertirse en una Municipalidad de Centro Poblado. El camino de la municipalización implica retener a la gente y mantener territorio. En una comunidad con un alto porcentaje de migración esto se vuelve un gran reto. Uno de los temas cruciales por ello, es que Tauricay se convierta en un anexo de la comunidad. En palabras del gestor de esta iniciativa, *“la creación de anexos expresa que un pueblo está organizado y que el pueblo está creciendo”*. De ahí la importancia del empadronamiento. Una propuesta que el gestor de esta iniciativa de municipalización tiene, es lotizar las tierras de altura que limitan con otras comunidades y donarlas o venderlas a las personas que vienen de otras comunidades -previa renuncia y empadronamiento- y formar así un nuevo poblado que pueda convertirse en un anexo más. De esa manera ganarían población y también una nueva circunscripción en el ámbito comunal.

El otro tema complejo que tienen que abordar es el de los residentes en Lima. Para lograr ser municipalidad tienen que tener un mínimo de 1000 habitantes y sólo podrían lograrlo con la inscripción de los residentes, que votan en Lima, en la jurisdicción de Lircay. Al igual que en el caso de los de Tauricay, la comunidad se puso más estricta en el establecimiento de obligaciones y de normas con los pobladores de ese barrio, en este caso, la comunidad también ha apelado a hacer explícitas las obligaciones de los comuneros residentes que en otros momentos dejan pasar.

Durante la titulación de los predios en la parte urbana del pueblo que ha realizado COFPRI hace poco tiempo, retornaron varios residentes para llevar a cabo el proceso. En ese momento se hizo evidente que había varias personas que no estaban empadronadas en Lima como residentes y que no colaboraban con la comunidad. Las autoridades llamaron la atención sobre esto sosteniendo que no era posible que mantuvieran sus casas en la comunidad y que no colaboraran ni con la asociación de residentes ni con la comunidad. En palabras del gestor: *“los comuneros que residen en otra ciudad aportan con una colaboración para su comunidad natal que es acá, entonces la comunidad conserva su vivienda, su parcela, pero si en caso no colabora, ya determina una asamblea general y ese terreno pasa a manos de la comunidad y la administración de la comunidad ya sabe que hacer con ese terreno”*. Esta norma que en otros momentos no se aplica, ni funciona, ni es reconocida por los comuneros, entra a tallar cuando la comunidad se plantea un objetivo de interés superior para el conjunto.

En este caso, empadronarse como electores de Huayllay Chico, representa el aporte que los residentes están obligados a hacer para con la comunidad, y no cumplir con el

aporte significa perder sus posesiones dentro de la comunidad. Esto que suena tan determinante nunca ha sido aplicado en la comunidad. Resulta difícil que esto suceda, incluso en este caso. Probablemente junto con el grado de apropiación que estos comuneros, entraría en juego en este caso la variable del valor que le dan estos comuneros a las tierras que tienen en la comunidad, en relación con los otros bienes que poseen fuera de ésta.

La preservación del ámbito comunal es una lucha que ahora se da en otros sentidos. Tiene que ver con mantener a la población y acumular servicios y complejidad en el territorio. El poder de la comunidad radica justamente en mantener el control sobre esos aspectos. Un ejemplo más de esto, es el esfuerzo que hace la comunidad por mantener su escuela funcionando a pesar de la gran deserción de alumnos que optan por irse a estudiar a las escuelas de los distritos vecinos que están muy cerca y son consideradas mejores. Si tiene un número muy bajo de alumnos, la escuela podría ser cerrada y con ello perderían más puntos para convertirse en municipalidad. Por ello, la comunidad se está planteando comprometer a los padres de familia, mediante acta de asamblea comunal, que inscriban obligatoriamente a sus hijos en la escuela de la comunidad.

## 8. Seguridad de la tierra y titulación

Nos aproximaremos al tema de la seguridad sobre la tierra, separando las amenazas internas de las amenazas externas:

De acuerdo a lo visto hasta ahora, podemos hablar de dos niveles en los cuales se presenta el tema de la seguridad que los comuneros tienen sobre sus tierras. El primero es a nivel de las tierras familiares - básicamente nos referimos a las tierras tomadas por los antiguos - que han sido transferidas en distintas modalidades al interior de la familia o a otras familias de la comunidad. El segundo nivel vincula a la organización comunal con las familias, principalmente en relación a las tierras que los comuneros tienen en posesión en la parte alta.

El primer nivel es el más complejo y dinámico, ya que son las tierras que tienen mayor movilidad al interior de la comunidad debido a que pueden venderse y comprarse. Veamos con detalle lo que sucede con las tierras que han sido transferidas de esa manera.

La seguridad que el comunero tenga sobre la tierra que está comprando dependerá en primer lugar de quién sea la persona a la cual le compra, lo que determinará también la forma como se decida formalizar el trato. Aquí entran en juego, las relaciones de parentesco y compadrazgo y los grados de confianza que se hayan construido en el tiempo. Las relaciones de compra-venta se establecen con frecuencia con familiares hasta de segundo grado (tíos) con quienes la transferencia se realiza sin la mediación de alguna autoridad y sin la necesidad de un documento, así, el trato se lleva a cabo basado principalmente en la confianza en la persona y teniendo la certeza de que las tierras efectivamente le pertenecen a ella porque se es conocedor de su historia familiar. El siguiente testimonio grafica este sentimiento:

*“...mi tío no tenía documento. (...) por palabra no más ha sido (la compra), sin recibo, porque nos conocemos.”<sup>103</sup>*

Esto mismo pasa con personas que si bien no son familiares, también son de confianza, y pueden ser padrinos o vecinos de pueblo a quienes se conoce bien. El grado de

<sup>103</sup> Félix Emilio Marcañaupa

inseguridad aparece en estos casos cuando los familiares de esa persona que vendió se oponen a la compra, por ello es importante que la familia del que vende esté de acuerdo con la venta que se ha realizado, y el que compra tenga seguridad de eso. Veamos el siguiente testimonio:

*“no me hizo documento, fue sólo de palabra, ella es de confianza, está ahora en Lima y me ha dicho que me dará el documento el otro año, los hijos de la señora saben que me ha vendido y no me la van a quitar.”<sup>104</sup>*

*“...como la señora es de acá, todos saben que (la tierra) era de ella, cuando hicimos el documento hubo testigos, pero la señora no me mostró su documento de propiedad porque lo tenía en Lima.”<sup>105</sup>*

Otro caso de conflictos que se puede presentar en la familia es cuando la persona que está cuidando la propiedad de un familiar que ya no vive en la comunidad, decide venderla sin consultarle. En estos casos el enfrentamiento puede darse dentro de la misma familia que buscará formalizar la propiedad a través de un documento a favor de alguna de las partes, con la intervención de un notario o un juez de paz. En estas situaciones se rompe la base de confianza y se pasa a una relación contractual mediada por terceros. Para algunos, el documento sólo es necesario cuando se da este tipo de problema *“algunas familias son inconscientes y pelean y tienen que hacer documento.”<sup>106</sup>*

Como vemos es importante tener seguridad sobre el origen de la parcela que uno está comprando para no exponerse a posibles conflictos. Un problema frecuente se ha dado cuando un comunero se hace pasar por el dueño de un terreno y lo vende (incluso puede presentar un documento falso), y posteriormente aparece el verdadero dueño que se ve en la situación de tener que recuperar su tierra que otro ha comprado pensando que todo estaba en regla.

Este problema se da sobre todo debido a la cantidad de tierras que se encuentran en descanso, o en trabajo al partir o abandonadas por sus dueños que se han ido a vivir fuera de la comunidad, y que otros que viven en ella empiezan a usar y a apropiarse, hasta llegar a disponer de éstas mediante la venta:

*“La comunidad no controla, no recoge la tierra que no está siendo usada. Sólo ve que los que son de fuera no se cojan las tierras abandonadas, entre nosotros nos dejamos”*

Como vemos en el testimonio anterior, la comunidad es permisiva frente al hecho de que los comuneros se cojan las tierras que no están siendo usadas. Al no regularse esto, las autoridades de la comunidad recién interviene cuando el problema ya se ha producido, actuando como mediadores para dar constancia sobre quién es el verdadero dueño de la tierra, apelando sobre todo a la historia de posesión a la familia y acudiendo a testigos o vecinos de la comunidad, que puedan dar fe sobre la propiedad en años pasados. Para algunos, contar con un padrón de parcelas resolvería el problema que se produce con las tierras abandonadas, donde los principales afectados son los comuneros residentes que corren el riesgo de perder sus tierras. Sin embargo, estas situaciones pueden darse por años en perfecto equilibrio y el conflicto sólo se activará cuando el afectado regrese a la comunidad y busque recuperar su posesión.

Así, la seguridad que un comunero tenga sobre la tierra que ha comprado está atravesada por estas situaciones. Dependiendo de la confianza en el vínculo con la persona que se

<sup>104</sup> Félix Emilio Marcañaupa

<sup>105</sup> Marcos Marcas

<sup>106</sup> Marcelo Marcas

haya el trato mayor será al seguridad sobre la misma. Cuando hay un conflicto latente, la existencia de un documento reduce la inseguridad y se convierte en un instrumento para probar la propiedad. Para los más antiguos, hacer un trato con un juez expresa que hay un conflicto o una relación problemática entre las partes: *“Cuando otra persona envidia tiene que hacer con juez, cuando no hay envidia hace así no más”*. *“Cada uno conocemos abuelo y abuelas y nadie puede envidiar”*. Esto pasa sobre todo con las tierras que han sido heredadas al interior de la familia y que luego se ponen en venta. Estas tierras no suelen tener documentos y la seguridad sobre las mismas es grande. La garantía ahí está dada en la confianza y apela a la memoria colectiva dentro de la comunidad, en donde todos conocen las historias familiares y saben quién es quien y que tiene cada quien.

Los documentos que pueden respaldar una propiedad son de diferente tipo y los comuneros le otorgan distinto valor, en orden de importancia son los siguientes:

1. Título individual dado por el PETT
2. Documento notarial
3. Documento de Juez de paz
4. Recibo simple.

Aquellos que obtuvieron su título individual a través del PETT en Yanama, son concientes que ese documento es distinto y que vale más que todos los otros, y por tanto, tienen mayor seguridad de no perder esas parcelas. En relación a los otros documentos, cuanto menor sea la confianza hacia con quien se hace el negocio y se busque prevenir situaciones de conflicto, se optará por el notario y luego por el juez de paz. Los recibos simples son utilizados cuando la relación de compra-venta tiene un grado mayor de confianza, cercano sobre todo al vínculo de parentesco.

El segundo nivel donde el comunero puede ver amenazadas sus tierras dentro de la comunidad, es en los casos en el que éstas estén bajo un grado de control por parte de la comunidad. Nos referimos específicamente a las tierras que los comuneros tienen en posesión en la parte alta.

Para aquellos que son posesionarios en la parte alta de la comunidad, existe la amenaza de perder sus tierras por una injerencia de la organización comunal. Aunque esto nunca ha pasado, los comuneros lo ven como una posibilidad que podría presentarse, por ejemplo, si es que empiezan a escasear las tierras si aumenta la población. En estos casos, el documento representa una diferencia significativa. Como dijimos anteriormente, en la zona alta hay comuneros que tomaron tierras en los tiempos antiguos, y que tienen documentos que llaman “testamento” que aparentemente garantiza la propiedad familiar de esas tierras. Por el contrario, los posesionarios al no ser propietarios de la tierra no tienen documento.

La comunidad no apela al hecho de que ella es la dueña de las tierras, según lo que la ley del Estado dice, por el contrario, como señala un testimonio, *las autoridades siempre se niegan a tocar lo “privado”*. Y lo privado, tanto para las autoridades como para las familias es lo que es de las familias. En el discurso se establece una diferencia entre los privados y los posesionarios: *para ser “propietario” tiene que ser mediante compra-venta. Cuando la compra-venta es entre familias, o es por herencia, entonces es posesionario. Para ser privado tiene que tener memoria descriptiva registrada. Los de Yanama son privado*<sup>107s</sup>. Otro testimonio señala una idea similar: *“un posesionario es el que no tiene documento y un privado es el que sí tiene documento”*<sup>108</sup>

<sup>107</sup> Teodoro Marcas

<sup>108</sup> Leonardo Ichpas Marcas

Como hemos visto en el acápite de conflicto, hay situaciones excepcionales en las que la comunidad actúa como colectivo por un interés colectivo, y en esos casos apela o utiliza normas que en otros momentos no ponen en funcionamiento. Es ese campo de incertidumbre en el que se mueve la seguridad que un comunero tiene sobre estas tierras. Puede nunca presentarse una situación de confrontación o exigencia por parte de la comunidad, pero la posibilidad existe porque el dueño último de estas tierras es la comunidad, y en ese sentido la posesión se vuelve insegura.

Hay un sentimiento de inseguridad relativamente nuevo, que está relacionado con la percepción que los comuneros tienen actualmente con respecto los cambios que las políticas del gobierno puedan producir en la tenencia de la tierra dentro de las comunidades.

En algunos testimonios encontramos que los comuneros consideraban el regreso de la hacienda como una posibilidad, y que esto podía significar perder sus tierras. Frases como *"...si vuelve la vida de hacendado se cogerían la tierra de descanso por más que tengan documento. Pueden volver porque están diciendo que los campesinos desperdician terreno, hacen descansar y no trabajan bien"*.<sup>109</sup> Otro testimonio es más directo: *"el Alan ha dicho que le va a regresar a los hacendados sus tierras."*<sup>110</sup>

En estos testimonios, se evidencia que los comuneros reconocen que son vulnerables a los cambios que los gobiernos pueden provocar en la tenencia de la tierra, por un lado, y por otro, parece haber en la actualidad, una percepción en la cual ellos no saldrán favorecidos con los cambios que el gobierno implemente.

Huayllay Chico es una comunidad que ha vivido la experiencia de obtener un título individual. Como mencionamos anteriormente, este es el documento que más valor tiene para los comuneros que tienen parcelas en Yanama. ¿Qué significado tiene una posesión de este tipo en un ámbito que conserva un título de propiedad comunal? Hemos señalado antes que en estas tierras las familias tienen un nivel de apropiación mayor. Sin embargo, hay un grado de control que la comunidad tiene sobre la disponibilidad de estas tierras que las pone al mismo nivel que el resto, y es la prohibición de la venta a gente de fuera. Es en ese punto donde se pone en evidencia la dimensión comunal que se superpone a los paquetes de derecho que hemos presentado antes.

En teoría, los dueños de estas parcelas pueden disponer de ellas libremente, con los derechos que les otorga un título como el que tienen. Sin embargo, no se ha dado el caso que las hayan vendido a foráneos. *"Ningún foráneo ha solicitado comprar tierras a la comunidad, cuando tienes título puedes vender a alguien de fuera pero sería observado por la comunidad"*.<sup>111</sup> Al estar dentro de la comunidad, los comuneros le dan a estas tierras el mismo tratamiento que al resto de sus parcelas y en ese sentido extienden hasta éstas las restricciones que la comunidad establece.

Como decíamos líneas más arriba al referirnos a la potestad que la comunidad tiene -según su estatuto y en el discurso de sus autoridades también- de quitarles sus tierras a los comuneros en situaciones excepcionales, en este caso también entra en juego un campo de incertidumbre que puede hacer que frente a alguna situación excepcional, se apele a derechos que no han sido usados. Así, en este caso, la posibilidad de que los dueños de estas parcelas quieran en algún momento venderlas a gente de fuera de la comunidad puede presentarse, y en ese caso, la comunidad también se vería obligada a

---

<sup>109</sup> Teodoro Marcas

<sup>110</sup> Josefina Jurado

<sup>111</sup> Félix Emilio Marcañaupa.

argumentar a su favor, y habría que ver si finalmente prevalece la palabra de la organización comunal, o el interés individual.

En los testimonios que hemos recogido, al comparar los documentos que los comuneros tienen con la posibilidad de tener títulos individuales, éstos respondían que el título tenía más garantía, que la tierra valía más, y que con él nadie podría quitarles sus tierras, en cambio los documentos tienen menos valor: *“sí me gustaría tener un título individual. Éste está registrado mediante registros públicos mientras que el testamento es mediante familia y con la autoridad competente. El título pesa más porque está registrado”*.<sup>112</sup>

Sin embargo, si bien frente a la pregunta directa de si les gustaría o no tener un título la mayoría señalaba que sí, también se señalaron algunos problemas que esta situación causaría. El primer tema es el de pago de impuestos. Los comuneros asocian el tener el título con una serie de gastos que hoy no tienen porque al ser comunidad está exonerados. En efecto, este tema nos lleva a plantear la pregunta de ¿qué pasaría con la comunidad si todo se titulara individualmente? ¿Qué pasaría con el título comunal? Un testimonio grafica lo que puede ser una respuesta a estas preguntas:

*“Si todos tuviéramos título individual, el título comunal caducaría y ya no habría organización. Debe mantenerse la organización comunal porque es lo más importante para el pueblo. El pueblo se organiza a través de la autoridad. Por ejemplo en cada hogar padre y madre son autoridades, sino cómo viviría la gente”*.<sup>113</sup>

*“Es importante la directiva comunal para caminar bien”*.<sup>114</sup>

Si bien ésta no es una reflexión que podamos decir que es representativa de lo que piensan los comuneros de Huayllay Chico, sí nos da elementos para el análisis. La autoridad es un componente fundamental para lograr la marcha del conjunto y para mantener el orden social. ¿La organización comunal desaparecería si todo se volviera individual? No necesariamente. Si bien esta pregunta implica una serie de factores que no estamos tomando en cuenta, nos parece interesante formularla para imaginar situaciones que los mismos comuneros imaginan posibles. La historia no ha mostrado que las poblaciones rurales han preservado las figuras legales que les han sido útiles, a pesar de que éstas ya hayan desaparecido de la legislación actual, como es el caso del agente municipal<sup>115</sup>.

Otro punto es el de la caducidad del título comunal. Para los comuneros, este título tiene valor en tanto sirve para hacer respetar el territorio frente a otras comunidades. Es decir, que es un instrumento cuyo valor radica en que garantiza la dimensión territorial de la comunidad y permite su defensa. *“El título de la comunidad es importante para tener el domino autónomo del territorio.”*<sup>116</sup>

En general, los comuneros están tranquilos con respecto a sus tierras, no se vive una situación de inseguridad extendida sobre las tierras, como hemos visto, los casos mas frecuentes son internos y tienen que ver con la forma de transferir la tierra, y menos con la pérdida o usurpación de la tierra. Los comuneros están tranquilos con los documentos que respaldan sus tierras, aun cuando reconozcan que un título podrá otorgarles más seguridad.

<sup>112</sup> Teodoro Marcas.

<sup>113</sup> Félix Emilio Marcañaupa.

<sup>114</sup> Marcos Marcas.

<sup>115</sup> O lo que podría pasar con el teniente gobernador cuya existencia se puso en debate hace poco tiempo en el contexto de la anulación de las prefecturas.

<sup>116</sup> Teodoro Marcas.



## **9. Presencia de asociaciones e instituciones en la comunidad y tenencia de la tierra.**

Desde setiembre de 2002 hasta el año 2006, la institución SICRA con sede en Lircay, llevó a cabo el proyecto PRODECO –Proyecto de Mejoramiento de la Competitividad Agropecuaria para Reducir la pobreza llevado en conjunto con DESCO y PROAN- en la comunidad de Huayllay Chico. Este consistía en brindar un conjuntote actividades orientadas al fortalecimiento de las capacidades de producción de los agricultores a través el uso de tecnologías tradicionales propias de las comunidades. Entre las acciones que implementaron en el lugar, se encontraba la entrega de semillas para la siembra de pastos mejorados, brindar asesoría técnica, la construcción de un reservorio y el levantamiento de viveros y el trabajo en andenes.

La estrategia de entrada de la institución se realiza a través de la organización comunal. La institución presenta el proyecto en una asamblea comunal y hace una convocatoria abierta para que todos los comuneros que deseen participar lo hagan. La participación es voluntaria y se organiza en base a grupos de socios. En este caso, se formaron dos grupos de aproximadamente 20 personas cada uno.

En esta estrategia el grupo beneficiario no es la comunidad sino las familias. La institución considera que para que el proyecto funcione los beneficiarios directos deben ser aquellos que dan su fuerza de trabajo en las actividades y estos son los propios comuneros que se inscriben como socios. Experiencias anteriores de trabajo con la comunidad en su conjunto, han resultado menos efectivas y eficientes que esta fórmula que hoy utilizan. En efecto, son los comuneros los que ponen su tiempo, su fuerza de trabajo en faenas que cada uno de los grupos convoca para el trabajo agrícola con las semillas dadas por la ONG, y ponen además sus chacras. Así, el trabajo colectivo se realiza dentro de los grupos en faenas hechas en ayni para el barbecho de las tierras familiares y las semillas se entregan individualmente a cada socio. No trabajan en tierras comunales, el único caso en el que han tenido que comprar terreno ha sido para la construcción del reservorio, en donde intervino la comunidad para efectuar dicha compra a un comunero residente en Lima.

De esta manera, la institución crea sus propias normas y obligaciones para un grupo de pobladores que decidieron libremente participar. La institución parte de una constatación de la realidad donde la economía comunera efectivamente funciona en base a las tierras familiares cuyo beneficio revierte en ellas mismas, y no en el trabajo comunal. Es interesante observar cómo al interior de los grupos se trata sí de reproducir práctica colectivas y tradicionales mediante el ayni, que funcionan aun a nivel de la comunidad. Se trata de recuperar una práctica comunal para el funcionamiento de pequeños grupos de base familiar que se interrelacionan entre sí, pero no con la comunidad como organización en su conjunto.

El beneficio de algunos, aunque la convocatoria haya sido voluntaria y amplia, es visto por aquellos que no participan con “envidia” y sospecha de que se están enriqueciendo, y que sólo algunos se benefician. Es interesante este punto porque la percepción sobre el beneficio individual o colectivo a partir de la presencia de agentes externos que trabajan en la comunidad ha ido cambiando. Mientras la tradicional faena comunal consistía en el trabajo de todos los comuneros en tierras de la comunidad para el usufructo de ésta, o en la limpieza de canales y calles que todos en la comunidad utilizan, con los años, las faenas cambiaron y empezaron a ser utilizadas por las instituciones del Estado y privadas que ejecutaban proyectos, utilizando la mano de obra no calificada de la comunidad, a

cambio del beneficio colectivo que la obra traía. En algunos casos se introdujo pequeñas retribuciones a cambio del trabajo, que deformaban la idea del aporte que los comuneros están obligados a hacer para la comunidad.

Si bien la búsqueda de beneficios para el conjunto sobrevive, con los años los comuneros han buscado también que este vaya de la mano con un beneficio personal, de ahí, que se plantee, en algunas comunidades, que se presupueste la mano de obra no calificada y se les pague un sueldo por participar en una obra. Esto no ha sucedido en Huayllay Chico, pero sí ha pasado que en la actualidad predominan las actividades vinculadas a agentes externos (estatales y municipalidad sobre todo), sobre aquellas que la comunidad autónomamente organiza. En estas actividades, la organización comunal funciona como el ente articulador -y en otro sentido como el principal gestor- entre la institución que interviene y los comuneros.

## **ANEXO 5**

### **Comunidad Campesina Choclococha Yanacocha Chilcapite**

#### **Metodología de la investigación**

La metodología de investigación para el presente informe fue la del estudio de caso, con recojo de información esencialmente cualitativa. El área de estudio se circunscribió a la comunidad campesina de Choclococha-Yanacocha-Chilcapite, ubicada en el distrito de Daniel Hernández, provincia de Tayacaja y departamento de Huancavelica

El periodo de tiempo trabajado fue de 15 días y la mayor parte del tiempo estuvo dedicado al trabajo de campo dentro de la comunidad. Nos instalamos en el anexo Choclococha de la comunidad de Choclococha-Yanacocha-Chilcapite, desde el cual nos movilizamos hacia los distintos anexos de la comunidad, sin embargo, en algunos casos pernoctamos en el anexo de Chilcapite.

El grueso de la información fue recabada a través de entrevistas a profundidad registradas en cuadernos de campo y en algunos pocos casos en audio. En el cuadro N° 1 se muestran los grupos de actores entrevistados. Debido a que en esta comunidad nos encontramos con la particularidad de que estaba compuesta por tres poblados, hemos intentado abarcar un espectro amplio de actores que nos de información particular de cada uno de ellos.

**Cuadro 1**

**Entrevistas realizadas**

<b>Tipo de informantes</b>	<b>N° de entrevistas</b>
Autoridades y líderes de la comunidad: Presidente de la comunidad de CYC, agente municipal de Yanacocha, teniente gobernador de Choclococha, teniente gobernador de Chilcapite, presidente de Chilcapite, juez de paz de Choclococha, juez de paz de Chilcapite.	8
Familias comuneras.	17
Representantes de instituciones de la CC (Comités de vaso de leche, promotor de asociación de productores)	6
Representantes de instituciones externas con presencia en la comunidad (iglesia evangélica, ONG, escuela, puesto de salud)	9
Alcaldes (distrital y de centro poblado menor)	2
<b>Total</b>	<b>42</b>

En el caso de las autoridades, entrevistamos a los principales representantes de cada uno de los poblados, así como al alcalde del distrito de Pomacocha que vivía en la comunidad. El grupo principal de entrevistas realizadas corresponde a las dirigidas a las familias comuneras. Éstas fueron distribuidas entre los tres anexos, considerando el número de familias que habita en cada uno, es así que para el caso de Choclococha, que es el poblado más grande, se realizaron más entrevistas que en los otros dos lugares, como se puede observar en el cuadro 2. Otros dos criterios fueron la edad y la cantidad de tierras que cada familia poseía.

**Cuadro 2**

**Entrevistas familiares según criterios de selección**

<b>Criterios de selección</b>			<b>Nombre del jefe de hogar</b>	<b>Barrio</b>
<b>Edad</b>	<b>Poder</b>	<b>Situación familiar</b>		
18 – 30	–	Casado/conviviente	Rigoberto Quispe Sullca	Choclococha
			Saúl Quispe Salvatierra	Choclococha

			William Ochoa Sordomes	Choclococha
	+			Yanacocha
	-		Silvio Barrientos Cornejo	
			Pastor Cuellar Pacheco	Chilcapite
31-50			Moisés Cornejo Rojas	Choclococha
	+	Casado/conviviente	Joaquín Echevarría Aucapiña	Yanacocha
			Pelayo Torre Ccasihue	Chilcapite
			Teodolfo Manuelo Marayano	Chilcapite
			Ignacio Montano Zúñiga	Yanacocha
			Alberto Montes Prado	Choclococha
51 a más	-		Antonio Pacheco Peña	Chilcapite
			Celestino Cuellar Pérez	Choclococha
	+	Casado/conviviente	Víctor Calderón Tito	Choclococha
			Mauro Tinoco Romero	Choclococha
		Madre soltera	Jessica Rojas Carrasco	Choclococha
		Viuda	Alejandra Cabrera Riveros	Choclococha

Tuvimos acceso a la mayoría de la documentación de la organización comunal, como actas de asamblea, padrones, oficios, mapas, testamentos de posesión de tierras y solicitudes de los comuneros a la comunidad. El alcalde del centro poblado también nos permitió acceder a las actas del comité multisectorial que funciona en el centro poblado de Choclococha. En el PETT de Huancavelica recogimos información sobre el proceso de titulación de la comunidad. Por otro lado, las ONG que nos apoyaron en el trabajo nos brindaron algunos documentos también importantes.

**Cuadro 3**  
**Información secundaria recogida en campo**

<b>Tipo de información</b>	<b>Fuente</b>
Padrón de comuneros CYC 2003	Documento de la CC
Padrón de comuneros y elecciones comunales CYC 2006	
Actas del comité multisectorial de Choclococha Noviembre 2005-abril 2007	Documento de la CC
Actas de la CYC de abril 1999 - junio 2007	Documento de la CC
Acta del teniente de la Comunidad de Yanacocha febrero 2006-mayo 2007	Documento de la CC
Acta de Chilcapite de febrero 2005 -mayo 2007	Documento de la CC
Actas de CYC de julio de 1968-agosto de 1979	Documento de la CC
Plan estratégico de desarrollo concertado distrital de Pomacocha 2003-2015	DESCO
Plano de la CYC del MINAG	PETT MINAG
Memorias descriptivas de la comunidad y actas de colindancia	PETT- MINAG
Cartas de oficios de las instituciones públicas a la comunidad	Documento de la CC
Constancias de posesión	Documento de la CC
Solicitudes de comuneros de parcelas en predios libres dirigidas a la CC.	Documento de la CC

El contacto con la ONG San Javier fue de gran ayuda para el ingreso a la comunidad. Los vínculos de confianza que ellos tienen con parte de los comuneros hicieron posible que nuestra presencia no fuera tan extraña. Creemos que si bien esto pudo representar un sesgo en algún momento, más fue lo que ganamos que lo que se puso en riesgo, ya que además de la confianza obtenida, los propios entrevistados no dejaron de dar su opinión, a veces crítica, sobre el rol de dicha institución.

## 1. Presentación

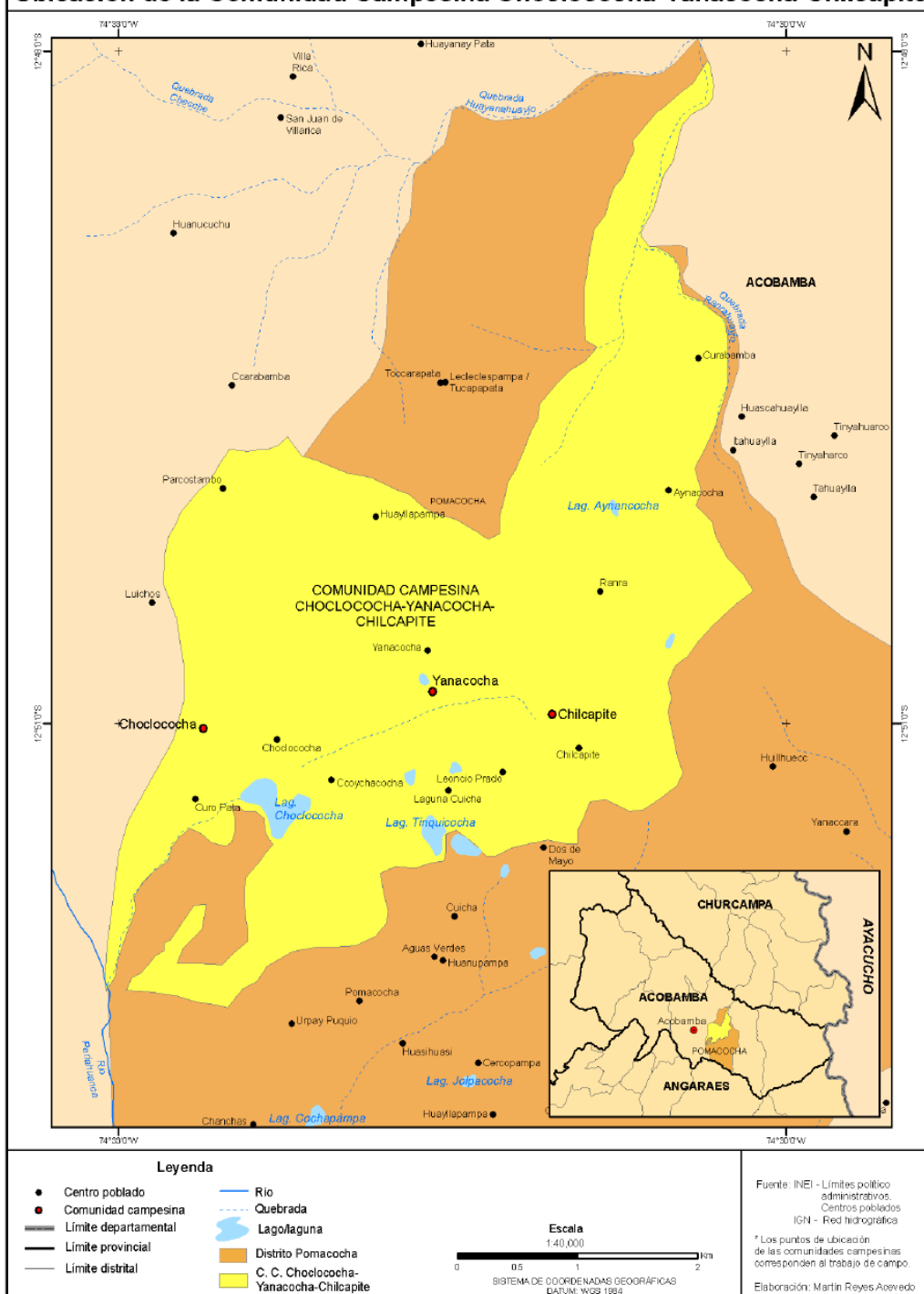
La comunidad de Choclococha-Yanacocha-Chilcapite fue reconocida en el año 1966, bajo resolución suprema n° 247. Como su nombre lo señala de forma explícita, la comunidad está conformada de tres poblados estrechamente vinculados entre sí, tanto por su historia como por su organización. Estos tres poblados decidieron reconocerse como una sola comunidad para tener mayor seguridad sobre sus tierras. Sin embargo, como veremos más adelante, con el pasar de los años la unión inicial empezó a resquebrajarse generando grandes conflictos de distinto tipo. En adelante, cuando nos refiramos a la comunidad en su conjunto, diremos simplemente *la comunidad* o de forma abreviada, la comunidad de CYC. En cuanto a las tres unidades que la componen, nos referiremos a ellas por su nombre o como *poblados* o *anexos*.

La comunidad se ubica en el distrito de Pomacocha, provincia de Acobamba, departamento de Huancavelica. Su territorio se extiende entre los 2700 y los 3810 msnm. Limita por el norte con la comunidad campesina San Juan de Villarrica, por el este con la comunidad de Tinyahuarco Ccasancca, por el sur con la capital del distrito de Pomacocha y por el Oeste con el río Parihuanca y con los anexos que se encuentran a sus orillas (Pariahuanca y Sacha Orcco).

Al llegar al poblado de Choclococha, el paisaje que salta a la vista es el de una extensa pampa verde situada en el medio de un centro urbano. Explican los habitantes, no sin congoja, que se trata del espacio que ocupaba hasta hace pocos años la Laguna de Choclococha, hoy desaparecida por la extrema sequedad de la zona. Por el mismo poblado pasa la pista afirmada que comunica la provincia de Acobamba en Huancavelica, con la provincia de Huanta en Ayacucho. Los poblados de Yanacocha y Chilcapite se encuentran a 5 y 10 minutos en auto de Choclococha, sin embargo, no se encuentran al pie de la pista sino que es necesario tomar pequeñas desviaciones de trochas carrozables para llegar a ellas.

Mapa 1

## Ubicación de la Comunidad Campesina Choclococha-Yanacocha-Chilcapite



La población de los tres sectores se encuentra distribuida en aproximadamente 345 familias comuneras en el poblado de Choclococha, 100 en Yanacocha y 70 en Chilcapite. Cabe señalar, que no todas las familias ni habitantes se encuentran registrados como comuneros (especialmente para el sector de Choclococha). Esto significa que el número total de familias de los tres poblados puede ser mayor a que la que se registra como población comunera.

En la comunidad, la electricidad fue llegando a todos sus barrios a lo largo de la década del 90 y el agua potable en la década del 80. No obstante, actualmente las redes de agua potable de los tres poblados se encuentran en condiciones desastrosas y la mayor parte de los pobladores sólo tiene acceso al recurso durante media hora al día. Ningún poblado cuenta con servicio de desagüe y alcantarillado.

La escuela más antigua de la comunidad es la que se encuentra en Yanacocha, construida por los comuneros de los tres poblados a principios de los 70. Actualmente, los tres tienen educación inicial y escuela, y sólo Choclococha cuenta desde 1980 con educación secundaria. En cuanto a los servicios de salud, en Yanacocha existe desde 1978 un puesto de salud, en Choclococha existe desde 1988 y en Chilcapite no cuentan con ningún servicio.

En cuanto a las comunicaciones, Yanacocha y Choclococha cuentan con un teléfono monedero cada uno. No hay acceso a internet en la comunidad ni tampoco llegan las líneas de telefonía móvil.

La comunidad CYC cuenta, como todas las comunidades, con una junta directiva y con una asamblea comunal. No obstante, actualmente las autoridades de la directiva -elegidas cada dos años por el conjunto de la comunidad- son poco activas, y la mayor parte del trabajo recae sobre la figura del presidente. La inoperancia de parte de la directiva ha generado su paulatino debilitamiento en el conjunto de la comunidad. Un dato importante es que las autoridades de CYC suelen pertenecer al anexo de Choclococha ya que éste cuenta con mayor población y sus líderes obtienen, por tanto, una mayor votación. Por tal razón, Choclococha no cuenta con autoridades locales y se le suele confundir con la comunidad madre, cuando en teoría los tres anexos se encuentran bajo la misma condición

Los anexos de Yanacocha y de Chilcapite cuentan con autoridades propias las cuales son llamadas *locales* y son elegidas cada año. De esta forma, Yanacocha cuenta con un agente municipal y un teniente gobernador, y Chilcapite, con un presidente local, un agente municipal, un teniente gobernador y un juez de paz. Al igual que en el caso de las autoridades comunales, las autoridades locales de ambos anexos, consideran que han ido perdiendo poder con el pasar de los años y que los comuneros con cada vez mayor frecuencia se rehúsan a asumir los cargos comunales.

La principal actividad económica de la comunidad es la agricultura, siendo los principales productos el maíz y la alverja y, en segunda instancia, las habas. Otros productos como la papa, el frejol y la cebada son cultivados en muy pequeña escala. A pesar de que la comunidad se encuentra en un antiguo camino de arrieros, las familias no se dedican a la actividad ganadera. Algunas familias comuneras, en cambio, realizan trabajos eventuales en la ciudad de Acobamba o trabajan como jornaleros en la selva de Junín.

La articulación con el mercado, en relación con el estándar de comunidades de la sierra del país es importante para la economía familiar. En el siguiente cuadro, mostramos para las 17 familias entrevistadas los principales cultivos y su nivel de comercialización y de autoconsumo.



**Cuadro 4****Destino de la producción por cultivo**

<b>Producto/ Destino</b>	<b>Venta</b>	<b>Trueque</b>	<b>Autoconsumo</b>	<b>Semilla</b>
<b>Alverja</b>	85%	0%	4%	4%
<b>Papa*</b>	60%	0%	32%	8%
<b>Maíz</b>	58%	0%	9%	6%
<b>Haba</b>	50%	0%	10%	10%
<b>Cebada</b>	24%	6%	31%	16%
<b>Frejol</b>	20%	0%	0%	6%

Como vemos, casi la totalidad del cultivo de alverja es destinado a la venta y para el caso de la papa, el maíz y las habas, más del mitad de la producción también es comercializada. Las familias conocen bien el circuito comercial de la zona, aunque la mayor parte vende su producción a los mismos acopiadores de la comunidad o a los intermediarios de Acobamba. Cabe señalar que a pesar de que el porcentaje de comercialización de la papa es importante, resulta un producto poco trabajado en la zona; sólo 3 de las 17 familias entrevistadas cultivaron papa en la campaña 2006-2007. En términos de ingresos por la venta de la producción agrícola, tomamos los tres principales cultivos y observamos en el siguiente cuadro la importancia del maíz en primer lugar, seguido de la alverja y de las habas.

**Cuadro 5****Ingreso promedio familiar por cultivo  
(campaña agrícola 2006-2007)**

<b>Cultivos</b>	<b>Ingreso promedio S/.</b>
Maíz	1310
Alverja	833
Haba	528

Como será retomado más adelante, en los últimos años ha habido un incremento de la presencia de ONG en la zona. Estas promueven, entre otros, proyectos orientados a incrementar la producción agrícola y la comercialización de la misma. Esto ha propiciado la conformación de asociaciones de productores de cultivos específicos (alverja, para el caso de la comunidad CYC), así como la articulación con otros mercados, como el mercado mayorista de Lima. No obstante aún se trata de un proceso incipiente y la comercialización en los mercados de la capital se encuentra a cargo de la misma ONG y no de las familias comuneras.

Los ingresos familiares provienen esencialmente de la actividad agrícola. En el siguiente cuadro mostramos los ingresos promedio familiares por la comercialización de la producción en la última campaña agrícola (2006-2007) y por la venta de ganado de un año (julio 2006 – junio 2007).

**Cuadro 6****Ingreso familiar por comercialización de producción agropecuaria**

<b>Comunidad</b>	<b>Ingresos agropecuarios familiares</b>		
	<b>venta de producción agrícola</b> <b>S/.</b>	<b>venta de ganado</b> <b>S/.</b>	<b>Total</b> <b>S/.</b>
<b>CYC</b>	1,965	606	2,571

Es importante señalar que de las 17 familias entrevistadas, 5 se dedican también a actividades no agrícolas muy diversas entre sí: Chofer, acopiador de arveja, herrero, secretario de notaría y regidor de la municipalidad distrital. Otros de forma muy esporádica realizan otras actividades en la ciudad en el arreglo de pistas y trochas o en la venta ambulante de comida.

## 2. Historia de la comunidad de Choclococha-Yanacocha-Chilcapite

### 2.1. El asentamiento de los poblados

Desde su mismo nombre, la comunidad de Choclococha Yanacocha Chilcapite nos remite a tres espacios que en algún momento estuvieron separados y que por distintas circunstancias terminaron volviéndose una sola comunidad. En el año 1847, la provincia de Angaraes estaba conformada por los distritos de Lircay, Julcamarca y Acobamba. Éste último, anteriormente perteneciente a la provincia de Huancavelica, pasó a convertirse en la capital de dicha provincia. Durante el gobierno del presidente Prado, en el año 1943, se inicia un proceso de distritalización al interior de la provincia de Angaraes produciéndose así la separación de Acobamba y su creación como nueva provincia. En su interior distintos poblados alcanzaron la categoría de distritos, entre los cuales se encontraba Pomacocha.

La capital del nuevo distrito llevaría el mismo nombre y los poblados aledaños serían sus anexos<sup>117</sup>. Yanacocha era uno de ellos. Choclococha y Chilcapite en ese tiempo eran poblados más pequeños, no tenían la categoría de anexos y eran sólo poblaciones contiguas unas a otras. Las tres eran poblaciones formadas por familias que se habían ido asentando con el tiempo en esos territorios y que no habían constituido en el pasado una comunidad de indios. Su ubicación, en el medio de un camino de arrieros que vinculaba Acobamba con Huanta, hizo de estos lugares el destino de comerciantes que transitaban por esas rutas y paraban allí por temporadas; algunos tenían hijos y terminaron asentándose ahí<sup>118</sup>.

Hasta mediados del siglo veinte, la estructura de poder en Yanacocha estaba integrada por el alcalde vara, el campo mayor, el campo menor y un alguacil. Ellos cumplían funciones religiosas y a la vez ejercían autoridad e imponían el orden en el territorio. Junto a estos, también estaban el teniente gobernador y el agente municipal<sup>119</sup>. Los testimonios recogidos señalan la existencia de estas autoridades tradicionales solamente en el poblado de Yanacocha, pero cuya injerencia se extendía a los tres poblados. Esto puede explicarse porque era ahí donde se encontraba la iglesia católica y donde se llevaban a cabo, por tanto, las fiestas patronales y el cambio de autoridades varas dentro de una ceremonia que consistía en la limpieza de las acequias.

Cuentan que en Yanacocha una de las familias más antiguas y fundadora del pueblo fue la familia Manuelo. En esos tiempos había pocas casas y sólo tres o cuatro propietarios. Polinario Manuelo Álvaro era uno de ellos y tenía muchas tierras bajo su dominio: *era como terrateniente* dicen los entrevistados. No había muchas tierras libres y la gente que iba llegando a poblar el lugar tenía que comprarle tierras a él. De esa manera se fue dividiendo el territorio.

<sup>117</sup> Los anexos eran Huillhuecc, Yanaccara, Cusicancha, Ayahuasán y Yanacocha. Fuente: archivo digital de leyes del Congreso de la República.

<sup>118</sup> Parte de esta información proviene de la narración de las historias de vida de algunos de nuestros entrevistados mayores de cincuenta años, que señalan que sus padres fueron algunos de los fundadores de estos poblados que se dedicaban al comercio.

<sup>119</sup> No hay claridad en los testimonios recogidos sobre el momento en el que desaparecieron las autoridades varas ni sobre la convivencia que hubo entre éstas y los tenientes gobernadores y agentes municipales. Lo que sí señalan los testimonios es que hubo un momento en el que los tres poblados tuvieron sus propias autoridades: teniente gobernador y agente municipal.

En Choclococha, las familias más antiguas a partir de las cuales se empieza a contar la historia del pueblo son los Tito y los Pérez principalmente, y los Rodríguez y Velásquez. Ellos habían concentrado la propiedad de la tierra en el lugar. En ese entonces, las tierras en su mayoría eran libres y los que llegaban se iban cogiendo espacios de dimensiones considerables (15 hectáreas aproximadamente en una sola parcela). Las tierras libres permitían la crianza de animales e, incluso, cuentan que en tiempos antiguos en esa zona se criaban llamas. Sin embargo, los conflictos entre familias no tardaron en llegar. Como señala Celestino Cuéllar: *“Octavio Tito le quitó a Pérez. La familia Tito no tenían tierra y por eso le quitaban a los Pérez, a demás los Tito eran muchos y no tenían suficiente tierras”*.

La llegada de más pobladores, así como la presencia de tinterillos acobambinos en la zona, conllevaron a una serie de conflictos por la tierra al interior del poblado de Choclococha. Los primeros pobladores no contaban con documentos que demostraran su propiedad. Aún así, las tierras circulaban mediante el trueque de parcelas por productos con gente de otras localidades que llegaba a la zona. Este trueque, sin embargo, era sólo una entrega temporal de la tierra, a manera de alquiler.

Aparentemente, hubo un momento de mayor presión por la tierra que pudo haber servido de contexto para motivar la formalización de la propiedad a través de la elaboración de testamentos por parte de tinterillos venidos de Acobamba. Algunos testimonios señalan que *“era desordenado en esa época, se quitaban las chacras entre ellos, había pleitos”*<sup>120</sup>. Otros dicen que los que habían recibido tierras mediante el trueque (a manera de alquiler) luego no querían devolverla a sus dueños: *“Como no tenían papeles, cuando la familia moría no dejaban papel y por eso se peleaban. Eso pasaba con la gente antigua, se quitaban las tierras. Luego, los usurpadores de tierras murieron y los hijos de los verdaderos dueños han reclamado y algunos han logrado recuperar”*<sup>121</sup>.

Otro testimonio señala que los tinterillos fueron los causantes de los problemas porque elaboraron documentos a personas que no eran verdaderos dueños de las tierras, gestionando papeles falsos. Se cuenta incluso que varios tinterillos fueron encarcelados debido a esas prácticas. Sin embargo, no tenemos total claridad sobre la causa de los conflictos que se dieron entre familias, principalmente en Choclococha<sup>122</sup>.

Más allá de los detalles, lo cierto es que hubo un momento de conflicto por la tierra que podríamos situar aproximadamente a inicios del siglo XX a partir del recuerdo de las familias entrevistadas. Es interesante notar que en este caso, a diferencia de los otros estudiados, las primeras tierras que los pobladores antiguos se *cogieron* libremente, atravesaron por situaciones de conflicto y que también se caracterizaron por haber circulado dentro de una población que tenía gran movilidad debido a la constante llegada de nuevos habitantes que la ubicación de los poblados facilitaba. Efectivamente, esto puede explicarse por el hecho de que ésta no fue *una comunidad de indios*. En las que lo fueron, los relatos sobre la época de *los antiguos* nos hablan más bien de conflictos intercomunales que tenían como objetivo la defensa de su territorio frente a sus vecinos. Aquí, en cambio, la propiedad siempre fue individual, y por tanto la lucha por la tierra fue desde los inicios entre propiedades familiares. De esa manera se fue configurando la propiedad de la tierra en este territorio, cuyo origen privado y familiar será el rasgo que marcará el modo de relación entre los pobladores y la comunidad que años más tarde formarían.

<sup>120</sup> Testimonio de Mariano Pucllas (90 años).

<sup>121</sup> Testimonio de Celestino Cuellar (82 años).

<sup>122</sup> Los testimonios recogidos sobre el particular corresponden a Choclococha, sin embargo se dice también que los tinterillos hicieron testamento también en Chilcapite y Yanacocha.

## 2.2. La formación de la comunidad

En distintos momentos, los pobladores de este lugar se plantearon la necesidad de ascender formalmente a distintas categorías políticas que los ubicara en mejor posición frente al Estado. En primer lugar, algunos de ellos se embarcaron en la empresa de lograr la distritalización de Pomacocha en los años cuarenta. El objetivo era que así estos lugares pudieran ser considerados anexos y que tuvieran sus propias autoridades (teniente y agente municipal) y ser por tanto menos dependientes de otras instancias. La distritalización, sin embargo, era insuficiente y la capital del distrito les resultaba demasiado lejana como para resolver el problema del acceso a recursos.

En los años sesenta, algunos líderes de Choclococha y Yanacocha vieron que convertirse en comunidad era una alternativa para asegurarse ciertos derechos y beneficios. La opción era conveniente en un contexto en el cual el Estado promovía la formalización de estos territorios. Por otro lado, existía un problema real que enfrentar ya que las tierras libres que usaban de manera común empezaban a peligrar por la invasión de foráneos. De este modo, convertirse en comunidad ayudaba a resolver ese problema además de representar un progreso en la escalada política: *“En vista de que estaban conformando un pueblo, los hijos vieron que tenían la necesidad de cambiar y ver las diferencias que uno vive, teníamos que forjar y proyectarnos para el cambio y el progreso. Entonces, desde 1960 hemos tratado de ser reconocidos como comunidad, antes éramos tierras realengas que pagaban tributo a los españoles”*<sup>123</sup>.

Para lograr ser comunidad tenían que cumplir con un número determinado de habitantes y por ello los tres anexos decidieron unirse. El emprendimiento de estos líderes que gestionaron el proceso para ser comunidad, se plasmó en el documento de reconocimiento que recibieron en 1968. A partir de ese momento los tres pueblos pasaron a ser una sola comunidad bajo la administración de una directiva, según la nueva organización que la legislación les obligaba a tener.

Sin embargo, esta unión mantuvo la relativa autonomía que cada uno de los tres pueblos había tenido históricamente. Esto estaba vinculado a la tenencia de la tierra, como lo explica el alcalde de Choclococha: *“La comunidad está mal organizada acá, porque cada uno tenía su terreno pero cuando lo han hecho comunidad, ya los propietarios dependen de la comunidad, nosotros incluso teníamos escritura pública notarial. Ahora es muy tarde ya, recién se han dado cuenta de eso”*. A pesar de los conflictos que se dieron con la presencia de los tinterillos, les permitió a los pobladores contar con un documento. Así, la nueva organización significó la convivencia de esquemas comunales y privados en tensión que otorgan una particularidad interesante a este caso.

## 2.3. Reforma agraria: la adjudicación de predios

Colindantes con el territorio de la comunidad, había dos haciendas. Una de ellas era de la familia Vivanco, propietaria del predio Choclococha, y la otra de la Familia Chávez, dueña del predio Chanchas. Las tierras de estas haciendas eran trabajadas por peones que vivían en esos territorios. En algunos testimonios hemos encontrado referencia a abusos ejercidos por estos señores a los comuneros de CYC a quienes obligaban a trabajar y a pagar impuestos:

---

<sup>123</sup> Testimonio de Mauro Tinoco

*“...ellos (los hacendados) tenían un documento de la realeza y los trataban como esclavos, en 1958 me acuerdo que venían los hacendados a obligarlos a participar en el trabajo sin paga alguna y si no participaban pagaban tributo en animales y alimentos.”<sup>124</sup>*

Durante el proceso de reforma agraria, ambas haciendas fueron afectadas. Aproximadamente en 1977, se inicia el proceso de adjudicación de tierras de los predios afectados en beneficio de las comunidades campesinas. El presidente de la comunidad en ese entonces, Víctor Calderón, se encargó de llevar el trámite y de dirigir la lucha por obtener para la comunidad esos predios. Se produjo un enfrentamiento entre los comuneros y los peones de las ex haciendas que apoyaron a sus patrones a cambio de verse beneficiados con un pedazo de tierra. Luego de estos sucesos, Víctor Calderón fue encarcelado acusado de homicidio. Prosiguió un juicio en el cual la comunidad apoyó a su presidente solventando los gastos que esto implicaba. Finalmente los predios le fueron adjudicados a la comunidad y pasaron a ser tierras comunales cuyo uso debía revertir en beneficio de toda la colectividad.

Al impulso de gestionar su reconocimiento como comunidad siguió entonces la lucha por obtener los predios de los ex hacendados. Hasta fines de los años 70 continuaron los trámites para lograr formalizar los predios cedidos por reforma agraria, hasta lograr una resolución de adjudicación en el año 1979. A esto seguiría el inicio de un proceso de municipalización en el que no todos saldrían favorecidos.

## **2.4. Municipalización**

Conforme pasaron los años, la ubicación de los poblados determinó el distinto desarrollo que cada uno de ellos fue alcanzado. Choclococha, ubicada al pie de la carretera, se fue poblando rápidamente, mientras Yanacocha, ubicada en una zona más alta en un desvío de la carretera, fue perdiendo protagonismo. Pronto, la disputa por lograr centralidad política se volvería una razón de tensión entre ambos poblados, uno apoyado en el poder que le otorgaba ser el pueblo más antiguo, y el otro, en el nuevo poder que su crecimiento le permitía.

En la plaza de Yanacocha hay un consejo municipal con un escudo donde se puede leer: *Municipalidad del Centro Poblado de Yanacocha*. A inicios de los años ochenta, algunos líderes de ese lugar decidieron iniciar un proceso de distritalización donde Yanacocha sería la capital. Iniciaron las gestiones y en el camino se encontraron con que Choclococha también había iniciado ese proceso. El enfrentamiento surgió. La historia cuenta que una persona de Yanacocha robó el expediente de distritalización de Choclococha, a lo que le siguieron denuncias de un lado y del otro. Finalmente el proceso se truncó y ninguno obtuvo su reconocimiento como distrito.

La percepción era que al ser distrito podrían acceder a otros recursos que siendo sólo comunidad les eran ajenos. En una comunidad con poca historia de funcionamiento colectivo, la escalada hacia la distritalización fue rápida. Aunque no lo consiguieron, en medio del camino apareció una nueva opción que estaba siendo promovida en esos años: convertirse en centro poblado. Eso era más fácil de conseguir ya que se necesitaba tener menos habitantes que para ser distrito. Sólo Choclococha lo consiguió debido a que había logrado un mayor proceso de urbanización y contaba con más población. En principio, ambos caminos tienen objetivos distintos, pero tienen en común el vínculo con el Estado y el acceso a la administración de recursos, por un lado la tierra y por el otro los servicios públicos.

---

<sup>124</sup> Testimonio de Mauro Tinoco

De nada le sirvió a Yanacocha el nuevo local que hoy utilizan para reuniones diversas. Choclococha se había convertido en el nuevo centro político, tanto así, que algunos la confunden con la *comunidad madre*. Los de Yanacocha y los de Chilcapite los ven con cierto recelo señalando por ejemplo que *“Toda la vida hemos estado en pelea, ellos nomás querían centralizar, agarrarse. Nada para Yanacocha o Chilcapite”*.<sup>125</sup> De esa manera el espacio se hizo más complejo con la existencia de una Municipalidad de Centro Poblado (MCP) dentro del territorio comunal, cuya injerencia no incluía a los otros dos poblados.

Así, Choclococha por sí sola fue obteniendo mayor protagonismo dentro del distrito. Tanto así que el actual alcalde distrital fue justo un periodo anterior alcalde de la MCP de Choclococha, de otro lado, ésta es hasta la fecha la única MCP del distrito. Chilcapite y Yanacocha aún guardan la idea de convertirse algún día en centro poblado o, quizás, en distrito, pero por ahora su reducida población no se los permite. En la actualidad, el proceso de municipalización le plantea dilemas y tensiones a la organización comunal, que se evidenciarán en este trabajo en la manera de conducir la tenencia de la tierra, y de concebir la vigencia de dicha organización.

## 2.5. Violencia

La provincia de Acobamba, en Huancavelica, fue una zona fuertemente golpeada por la violencia política. Igualmente lo fue la provincia de Huanta, en Ayacucho. La comunidad de CYC se encuentra al pie de la carretera que comunica ambos lugares, y constituía entonces un corredor importante de las movilizaciones tanto de militares como terroristas. A pesar de ello, sorprende que en la comunidad de CYC no haya habido mayor intervención de ninguno de los dos grupos.

Las familias entrevistadas recuerdan con claridad dos eventos vinculados a la violencia: i. La destrucción del teléfono público de Choclococha, y ii. El intento de las bases militares de Marcas y Acobamba. –muy cercanas a las comunidad- de organizar a la población en una ronda campesina. El impacto del segundo evento fue mucho mayor en la población que el primero, ya que considerar su participación directa en el conflicto generaba mucho temor. No obstante, los intentos de los grupos militares no tuvieron éxito en CYC ya que los hombres se escondieron para evitar la conformación de la ronda: *“La base militar ‘Escorpión’ de Acobamba determina salir con la gente en rondas y fija a Choclococha para llevarnos. Enterados de esa intención, un día antes todos los hombres se escaparon, se amanecieron en los cerros, varios se fueron al pueblo o a otros lugares...”*<sup>126</sup>

La comunidad sólo fue entonces un corredor de la violencia, en donde no hubo enfrentamientos ni destitución o enjuiciamiento de las autoridades comunales. A pesar ello, sí es importante considerar los impactos indirectos sobre la comunidad. El contexto de violencia generó miedo en la población y, con ello, la partida de algunas familias que contaban con mayores posibilidades de insertarse en las ciudades (mejor economía, mayor nivel educativo, redes sociales fuera de la comunidad, etc.) La importancia cuantitativa de esta migración no fue tan grande como la importancia cualitativa: Fueron muy pocas familias las que migraron, pero a su vez, fueron precisamente aquellas que tenían un liderazgo importante en la comunidad.

De esta forma, las autoridades centrales de la comunidad que, por reconocimiento general, habían desarrollado un buen papel en la directiva ya no se encuentran presentes

<sup>125</sup> Testimonio de Adriano (comunero de Yanacocha).

<sup>126</sup> Alcalde del distrito de Pomacocha, nacido en Choclococha, hasta la actualidad reside en la misma comunidad junto con su familia.

desde hace un par de décadas. Actualmente, esta ausencia podría reflejarse en el escaso reconocimiento y liderazgo que ejercen las autoridades comunales, pero también se plasma con claridad en el discurso de las familias: *“Antes éramos más organizados. Eso ha bajado porque las anteriores autoridades trabajaban mejor. Ellos ya se han ido...”* (Teodolfo, 36).

### 3. Clasificación de la tierra de la comunidad

La comunidad de CYC tiene una extensión aproximada de 1856 hectáreas, de las cuales 1053 son terrenos cultivables, 747 son pastos naturales y las 56 hectáreas restantes son terrenos rocosos o desnudos. Los trabajos de demarcación de linderos con los vecinos de la comunidad se realizaron en su mayor parte entre los años 1983 y 1984, y el título de propiedad fue obtenido, por resolución de la Dirección Regional Agraria de Huancavelica, en 1985.

La comunidad no cuenta actualmente con riachuelos que la atraviesen, con puquiales de agua, ni con ningún sistema de riego. Las tierras de cultivo son enteramente de secano, por lo cual sólo se realiza una campaña agrícola al año. Los pastos se encuentran en las zonas más altas y más alejadas de la comunidad, repartidos en sus más de 30 kilómetros de perímetro, por lo cual los comuneros consideran que en la comunidad prácticamente no hay pastos.

Como hemos señalado, el territorio de la comunidad se extiende entre los 2700 y los 3810 m.s.n.m. Los poblados de Choclococha, Yanacocha y Chilcapite se ubican en puntos altitudinales intermedios del territorio, entre los 3378 m.s.n.m. y 3444 m.s.n.m.

A pesar de las diferencias altitudinales, las familias señalan que en todo el territorio de tierras agrícolas es posible sembrar maíz, así como cereales como las habas, el frejol y las alverjas con buenos resultados. De esta forma, por su aptitud productiva, así como por las técnicas de trabajo utilizadas, sólo podemos distinguir en CYC dos **zonas de producción** muy diferenciadas: la zona de agricultura de secano (2700 – 3800 m.s.n.m.) y la zona de pastos naturales (3700-3800 m.s.n.m.), siendo la segunda muy marginal en uso y extensión, en comparación con la primera.

No obstante, otras formas de clasificar las tierras de CYC son posibles. Una segunda clasificación puede hacerse según el **origen de las tierras**, lo cual determinará derechos diferenciados en cada zona, por parte de las familias comuneras. Según esta clasificación encontramos dos tipos de tierras: aquéllas que han sido trabajadas y traspasadas entre las familias comuneras desde tiempos anteriores al reconocimiento legal de la comunidad, y aquellas que les fueron adjudicadas durante el proceso de reforma agraria, a principios de la década del 80. La distinción entre las tierras pre y post reforma agraria se encuentra muy clara entre las familias comuneras. Las segundas están conformadas de dos predios de nombres Chanchas y Choclococha y cuentan con linderos que los dividen del resto del territorio comunal. Es importante señalar que en estos dos predios aún existen tierras que no han sido parceladas y que constituyen un espacio importante de tierras libres de la comunidad.

Una tercera clasificación, aunque superpuesta a la anterior, es según **el tipo de acceso** de las parcelas familiares. Dos formas centrales deben ser mencionadas: Las tierras distribuidas por la organización comunal y las tierras obtenidas bajo otros medios. En el primer caso, las tierras distribuidas coinciden con aquellas adjudicadas por reforma agraria y, en el segundo caso, se trata de las tierras que las familias poseen desde tiempo anteriores a la adjudicación.



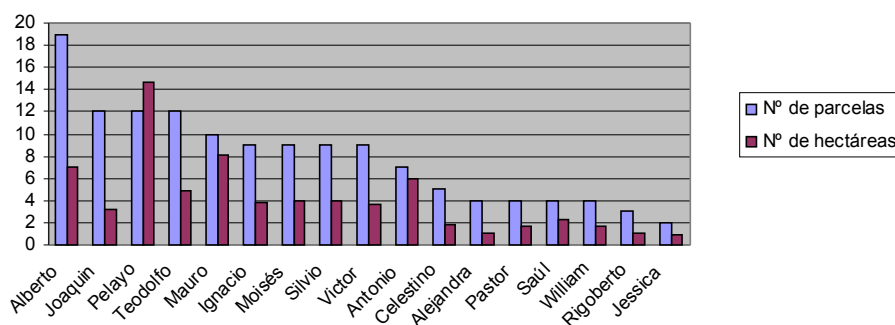
Finalmente, una última clasificación de la propiedad comunal –la más clásica al interior de las comunidades del país- es la que la divide según **el tipo de usufructo**. Existen, de esta forma, tierras familiares (o individuales), tierras colectivas (varias familias) y tierras comunales (usadas siempre respondiendo al interés y beneficio del conjunto de la comunidad). En CYC las tierras familiares ocupan casi la totalidad del territorio agrícola de la comunidad y son siempre tierras de uso agrícola. Las tierras colectivas son aquellas de pastos naturales, ubicados en las zonas más altas y alejadas de la comunidad y escasamente utilizadas por la población. Finalmente, se encuentran las tierras comunales, en su mayoría de uso agrícola y de corta extensión. Cada sector posee sus propias tierras comunales, las cuales son administradas por sus propias autoridades y para su propio beneficio. En el caso de Chilcapite, las tierras comunales están conformadas por 1 Ha de pastos y 2.75 Ha de terreno de uso agrícola (actualmente con sembríos de habas y eucaliptos), y en Yanacocha, solo por 0.75 Ha de eucaliptos y un pequeño terreno libre de no más de media hectárea. En Choclococha, las tierras comunales están constituidas por las tierras aún no parceladas o libres de la comunidad, ubicadas en los predios cedidos por reforma agraria. A pesar de que no se sabe con exactitud el número de hectáreas libres de Choclococha, las autoridades afirman que éstas se han ido reduciendo con los años debido a la distribución anual de parcelas a las nuevas familias comuneras

#### **4. Los derechos sobre la tierra: el acceso**

En CYC, cada comunero tiene un promedio de siete parcelas, a las que se suma una más de propiedad de terceros -que es trabajada temporalmente ya sea bajo forma de alquiler o al partir- sumando un total de ocho parcelas. Estas parcelas, todas juntas, alcanzan a su vez un promedio de 4 hectáreas de extensión. A diferencia de lo que sucede en otras comunidades, en CYC los comuneros trabajan todas sus parcelas en cada campaña. Su buena aptitud productiva y la utilización generalizada de fertilizantes les permiten dar uso a sus parcelas año tras año sin descanso. Así, sólo dos de nuestros 17 entrevistados tenían dos parcelas sin sembrar cada uno y, en ambos casos, debido a que no contaban con los medios de producción necesarios para trabajarlas.

Las entrevistas realizadas nos muestran que al interior de la comunidad existen importantes diferencias en cuanto al acceso a la tierra, considerando tanto el número de parcelas, como de hectáreas que cada familia posee. El siguiente gráfico expresa esta situación:

**Gráfico 1**  
**Nº de parcelas y de hectáreas por comunero**



Como es posible observar en el gráfico, de nuestros entrevistados, algunos poseen 18 parcelas y 15 hectáreas de tierra mientras que otros pueden tener solo dos parcelas y menos de una hectárea. En todos los casos, sin embargo, se trata de comuneros inscritos en el padrón comunal y activos en sus funciones para con la comunidad. Cabe preguntarse entonces, ¿qué elementos establecen las diferencias internas? Como veremos más adelante –y a diferencia de lo que sucede en los otros dos estudios- las diferencias no se encuentran tanto en función de los derechos que se distribuyen y negocian con la comunidad, como en función del poder económico de las familias y de su posibilidad de comprar parcelas a otros comuneros.

En lo que sigue haremos una revisión de las distintas formas de acceso a la tierra por parte de los comuneros de CYC.

#### 4.1. La entrega y designación de tierras

La distribución de tierras en CYC es realizada por las autoridades comunales cuando un comunero lo solicita formalmente, a través de un documento que entrega al presidente de la comunidad. La distribución de tierras se realiza al inicio de cada campaña agrícola y, según las normas internas, se puede entregar sólo una parcela de 0.25 hectáreas a cada persona que lo solicite. Las parcelas entregadas provienen exclusivamente de los predios Chanchas y Choclococha, ambos adjudicados a la comunidad por reforma agraria y únicos espacios que aún poseen tierras libres en la comunidad.

Ahora bien, no todos se encuentran en la misma posición para solicitar parcelas a la comunidad y, por tanto, tampoco los mismos derechos de acceso a la tierra. Para describir esto es necesario hacerlo considerando los distintos tipos de pobladores y comuneros de CYC.

La clasificación más evidente y más gruesa es la que divide a los pobladores de CYC en comuneros y no comuneros. Al interior de la categoría de comunero existen 3 tipos diferenciados: comuneros *activos*, comuneros *jubilados* y comuneros *residentes*. Esta clasificación, si bien puede encontrarse en muchas comunidades, puede tener distintos matices al interior de cada una de ellas, haciendo diferencias importantes en cuanto a los derechos de acceso a la tierra.

En CYC, pueden ser comuneros todos aquellos que, llegando a la mayoría de edad, hayan nacido en la comunidad o ser pareja de una mujer de padres comuneros. No obstante, la categoría de comunero no se obtiene de manera automática sino que es necesario inscribirse –voluntariamente– en el padrón comunal. Una vez inscritos en el padrón, los comuneros contraen una serie de responsabilidades con la comunidad, que deben cumplir para poder seguir manteniendo su nueva condición. El comunero es, entonces, un comunero *activo*. En CYC, los derechos y responsabilidades centrales de los comuneros activos son asistir a las asambleas, participar en las faenas, cumplir con eventuales cuotas, elegir a las autoridades comunales y asumir los cargos de ser elegidos autoridad. A cambio de ello, la comunidad le otorga al comunero el derecho de solicitar y recibir una parcela para su usufructo, pero también –lo cual puede ser incluso más importante– le otorga respaldo y seguridad para trabajar las parcelas que ya poseía anteriormente.

A la categoría de **comunero activo**, se superpone la condición de *verno*. Los yernos pueden ser comuneros activos y poseen, por tanto, los mismos derechos que aquellos nacidos en la comunidad. No obstante, sobre ellos recae una limitación inicial: para poder inscribirse en el padrón comunal –y con ello ser comuneros activos– debe pasar un tiempo prudencial en el que demuestren su *capacidad* de ser comunero, esto es, la medida en la que pueden cumplir con los deberes del comunero, su buena conducta, su liderazgo, etc. Esta etapa de “prueba” para los yernos no ha sido calificada en CYC con ningún apelativo en particular, ni tampoco se encuentra definido el número de meses o años que deben transcurrir hasta poder ser recibido como comunero en CYC. Lo que sí está claro es que hasta no haber superado esta etapa el yerno no podrá recibir parcelas de la comunidad. En otras comunidades, aunque con algunas variantes, se les identifica como comuneros honorarios<sup>127</sup>; para este caso, en adelante les llamaremos *yernos aspirantes*.

Los **comuneros jubilados** son aquellos que por su avanzada edad pueden eximirse de las obligaciones del comunero activo, sin perder los derechos que ya veía poseyendo. No hay una edad fija para ello pero según las autoridades de los tres sectores suele oscilar entre los 60 y los 70 años. De esta forma, los *jubilados* pueden solicitar y recibir una parcela de la comunidad, aunque normalmente llegada a esa edad a todos se les entregó ya una parcela.

Finalmente, los **comuneros residentes** son aquellos que migraron hacia otras localidades (usualmente a la capital de provincia o a la ciudad de Lima) pero que mantienen un vínculo con la comunidad. Este vínculo suele expresarse en una compensación monetaria por su ausencia en asambleas y faenas comunales o, más informalmente, en donaciones para la organización de las fiestas comunales (por ejemplo, pago de la banda de música, de la cerveza, de los fuegos artificiales, etc.). El mantenimiento de este vínculo con la comunidad le otorga derecho a mantener la parcela entregada por la comunidad y a beneficiarse del respaldo comunal en caso de problemas con sus demás parcelas: *“Los que se van ya no son comuneros porque ya no colaboran, venden sus tierras, pero hay otros que sí colaboran y mantienen sus tierras”*. Normalmente, el comunero residente pone en alquiler sus parcelas o las trabaja al partir con algún familiar o vecino de la comunidad, y visita la comunidad luego de la cosecha para recabar los beneficios que esta le haya otorgado. De otro lado, para la comunidad, el aporte monetario de los residentes puede ser muy significativo, razón por la cual el sistema es mantenido e, incluso, los residentes muy respetados por el colectivo.

---

<sup>127</sup> En Marcopata los comuneros honorarios son los jóvenes –yernos o no– que aún estando inscritos en el padrón comunal no reciben tierras de la comunidad por encontrarse en un periodo de prueba.

Hasta aquí hemos visto las distintas formas en las que uno puede ser comunero en CYC. Ahora bien, un sector de la población de CYC<sup>128</sup> no es considerada comunera, debido a que por decisión propia han preferido no inscribirse en el padrón comunal. Ello supone no involucrarse en las actividades de la comunidad y no tener las responsabilidades de los comuneros activos (faenas, participación en asambleas, pago de cuotas, etc.), así como tampoco gozar del derecho comunero de recibir parcelas de la comunidad y otros beneficios.

Cada vez en mayor número, los jóvenes de CYC dejan de inscribirse como comuneros porque consideran que las responsabilidades son muy grandes frente a los beneficios que reciben a cambio. Como hemos señalado, el beneficio material más importante es la entrega de una parcela de un cuarto de hectárea, lo cual puede ser insignificante para jóvenes que migran cada vez más hacia otras localidades, que tienen mayor vínculo con la dinámica urbana y que se dedican también a actividades no agrícolas. No obstante, el hecho de no ser comunero imposibilita toda forma de participación política en CYC, esto es, elegir y ser elegido autoridad, así como participar de la toma de decisiones para cualquier obra, proyecto o gestión que decida llevar a cabo la comunidad.

Llegado a este punto es necesario hacer algunas observaciones importantes sobre la producción de normas en CYC. Al describir las categorías de comuneros hemos hecho referencia a normas vinculadas a la forma en la que los pobladores de CYC pueden tener acceso a la tierra. Sin embargo, en buena parte de los casos las normas no están estrictamente delimitadas. Así, no hay claridad acerca del periodo de prueba para los yernos aspirantes, tampoco la edad del jubilado ni el monto a pagar por parte de los residentes. En este contexto en el que las normas parecen ser flexibles, el rol de la autoridad en la determinación de las mismas resulta fundamental. Cada presidente, según su propio parecer, establece distintos parámetros sobre los cuales se discutirá cada caso. Así, por ejemplo, para el ex presidente de la comunidad el periodo que debía transcurrir para que el yerno pueda ser comunero era solo de un año, para un yerno entrevistado fueron tres años, mientras que para el actual presidente de la comunidad, los yernos deben esperar cinco años: *“Tienen que vivir en la comunidad durante 5 años para padronarse. Eso dice la ley. Tiene que estar colaborando, servir como comunero. Cuando tú vienes no puedes actuar como comunero de frente”* (Presidente CYC).

A pesar de las diferencias, pudimos notar que ello no ha resultado un problema para las autoridades ni para los comuneros. En efecto, el hecho de que algunas normas no estén claramente definidas permite también tomar decisiones en función de casos particulares, siendo evaluados –cuando el caso lo amerita– por la asamblea general. Así por ejemplo, un comunero que se encuentra enfermo a los 60 años podría jubilarse antes que otro que esté saludable a la misma edad. Este sistema permite a su vez que haya mayor participación e influencia de las familias comuneras que asistan en las asambleas comunales.

No obstante, la indeterminación de algunas normas comunales y el peso de cada autoridad para su definición nos ayuda a observar un elemento importante: La comunidad de CYC como organización no posee la fortaleza suficiente como para establecer normas duraderas y reconocidas por el colectivo. En CYC –incluso más allá de la producción de normas– el dinamismo y la legitimidad de la organización comunal dependen más bien de la capacidad y del liderazgo de sus autoridades.

<sup>128</sup> Es difícil estimar el número de familias no comuneras ya que (a diferencia de las comuneras) no existe un registro de ellas. De las entrevistas realizadas sabemos, sin embargo, que casi la totalidad de familias de Yanacocha y Chilcapite sí se encuentran inscritas como comuneras. En Choclococha, en cambio, el índice de familias no comuneras sería mayor.

Retomando el tema de entrega de tierras por parte de la comunidad como forma de acceso a la tierra es necesario hacer una distinción adicional: Si bien las categorías de comuneros funcionan para los tres sectores de la comunidad del mismo modo, la entrega de tierras solía beneficiar sólo a los comuneros del sector Choclococha y no así a los de Yanacocha y Chilcapite. Los comuneros consideran que estos dos últimos sectores no tienen derecho a solicitar parcelas, ya que las tierras libres desde las cuales se distribuyen las parcelas han sido siempre consideradas parte del sector Choclococha. De otro lado, los sectores de Yanacocha y Chilcapite no poseen tierras libres para repartir a sus comuneros, por lo cual la modalidad de distribución de parcelas como forma de acceso se aplica casi de forma exclusiva para los comuneros del sector Choclococha.

Recién durante el presente año, dos comuneros de Yanacocha que tuvieron acceso a información sobre la legislación nacional sobre tierras comunales, se ampararon en ella para solicitar parcelas a la comunidad. Las autoridades de la comunidad le hicieron entrega de las parcelas sin mayores problemas, sin embargo, este hecho aún no ha sido difundido en la comunidad, sino más bien, tratado con mucha discreción.

#### **4.2. Otras formas de acceso a la tierra**

Una segunda forma de acceso a la tierra es la **herencia**, habiendo dos modalidades según el origen de la parcela, es decir, según si son parcelas del sector adjudicado por reforma agraria o si se trata de las tierras trabajadas de forma anterior a dicho proceso. Como veremos en este informe, esta distinción es importante en la medida en que las condiciones para la herencia son distintas. De cualquier forma, la herencia es el segundo mecanismo de acceso más común en CYC, ya que los hijos heredan las tierras naturalmente, sin necesidad de hacer mayores trámites, avisar a las autoridades ni firmar ningún documento.

Una tercera forma de acceso es la **compra** de parcelas. El flujo de compra-venta de tierras es en CYC especialmente alto frente a otras comunidades campesinas. Existe, sin embargo, una restricción en la venta de parcelas: las parcelas adjudicadas por reforma agraria -y por tanto, entregadas por la comunidad- no pueden ser vendidas. No obstante, debido a que cada comunero posee un máximo de una parcela entregada por la comunidad, dicha restricción no disminuye de forma significativa el mercado interno de compra-venta de tierras. La compra -venta se realiza entre las dos partes interesadas, quienes llegan a un arreglo sobre el precio. Posteriormente, buscan acreditar la transacción a través de dos mecanismos: la entrega de un documento por parte de las autoridades comunales o la firma de un contrato certificado notarialmente.

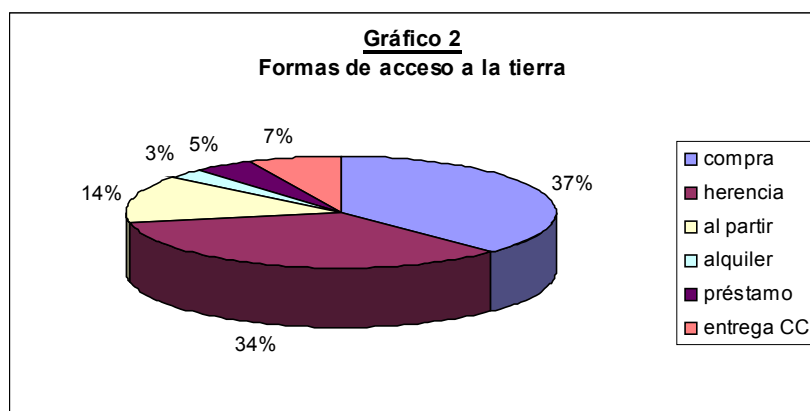
Una cuarta forma de acceso a la tierra es el **alquiler**. En CYC, el mercado de alquiler de parcelas no se encuentra tan extendido. Los arrendadores son normalmente comuneros activos que no necesitan o no pueden hacerse cargo de todas sus parcelas, pero en mayor medida son comuneros residentes que mantienen sus tierras y obtienen de esta forma un ingreso anual. El arreglo entre los interesados suele hacerse sólo entre las dos partes y de forma oral.

Más común que el alquiler, resulta la modalidad de acceso **al partir**. Este sistema consiste en que el propietario de la tierra entrega su parcela a un comunero *socio* con quien llegará a un acuerdo de trabajo no basado en intercambios monetarios. El acuerdo suele basarse en que tanto propietario como socio invertirán lo mismo en la producción de la tierra (incluyendo la valorización de la parcela) y en que llegada la cosecha, el comunero socio entregará al propietario la mitad de la producción obtenida. Con mucha

frecuencia los propietarios de las parcelas que se trabajan al partir son comuneros residentes y los trabajadores son familiares.

Finalmente, una última modalidad común entre familiares cercanos es el **préstamo**. El préstamo de parcelas suele darse entre padres e hijos cuando estos últimos tienen una necesidad importante, o entre otros familiares (hermanos, sobrinos, primos) cuando los propietarios de la tierra se encuentran en calidad de comuneros residentes y no pueden trabajar sus tierras. Cabe señalar que el hecho de que existan personas trabajando las parcelas evita posibles invasiones por parte de terceros.

En el siguiente gráfico mostramos la distribución de la forma de acceso a la tierra por parte de los comuneros de CYC. Así, de un total de 132 parcelas (de 17 entrevistados), observamos que la compra de tierras (37%) y la herencia (34%) constituyen los mecanismos centrales. Cabe señalar, sin embargo que si sumamos las modalidades en las que están involucrados los comuneros residentes (al partir, alquiler y préstamo), alcanzamos un nada despreciable 22%.



#### 4.3. La familia, la mujer y el acceso a la tierra

En los tres anexos, las mujeres pueden inscribirse en el padrón comunal pero ello no les otorga necesariamente los deberes y derechos de un comunero activo. Las mujeres sólo se inscriben para reemplazar a sus esposos comuneros temporalmente ausentes y no poseen -de estar ellos presentes- los derechos y obligaciones de un comunero activo. De otro lado, en el discurso, las mujeres a pesar de estar inscritas no son consideradas comuneras por las autoridades. La sola excepción establecida para esta norma es el caso de las viudas, a quien el esposo fallecido transfiere derechos y deberes comunales.

Cabe señalar que en cuanto a la situación de las mujeres existen algunas diferencias a nivel de anexo y de comunidad. Como señalamos inicialmente, a pesar de que los tres anexos conforman una sola comunidad y cuentan con una junta directiva común, los dos anexos más pequeños (Chilcapite y Yanacocha) cuentan con sus propias autoridades, organizan sus propias asambleas y poseen padrones comunales independientes. A nivel de la comunidad, las normas son más flexibles y es posible encontrar excepciones de mujeres consideradas comuneras y, más aún, poseer cargos en CYC, aunque menores. En Yanacocha y Chilcapite, en cambio, el discurso de las autoridades es más rígido. Así, por ejemplo, para el presidente de CYC las madres solteras pueden ser comuneras, para el agente de Yanacocha las madres solteras no son consideradas comuneras y en

Chilcapite las autoridades señalaron que no había madres solteras por lo cual no tenían una respuesta sobre el caso.

Ahora bien, ¿de qué forma esto afecta el acceso a la tierra de las mujeres? En la medida en que existe la modalidad de distribución de tierras a comuneros activos por parte de la organización comunal, las mujeres ven restringido su derecho de poseer este tipo de parcelas. Está claro que en tanto parte de una familia, las mujeres se beneficiarán de las parcelas de sus parejas hombres, no obstante de separarse su hogar, éstas continuarán en posesión del comunero activo.

Cabe recordar, sin embargo, que esta modalidad de acceso a la tierra (distribución de la comunidad) es poco significativa en relación con los otros mecanismos existentes. Así, bajo otros medios las mujeres sí cuentan con los mismos derechos que los hombres para obtener parcelas: alquilar, comprar, trabajar al partir o recibirlas en préstamo. En cuanto a la herencia de tierras, las parcelas de los padres suelen ser distribuidas entre los hijos hombres y mujeres en la misma proporción.

No podemos terminar este tema sin señalar que en lo que las mujeres encuentran gravemente reducidos sus derechos es en la posibilidad de participar en las decisiones de la vida comunal, en el derecho de elegir a sus autoridades y de ser elegidas. En efecto, las funciones que se le atribuyen a una mujer están limitadas básicamente al cuidado de los hijos y a la alimentación familiar. El ex presidente de CYC y actual agente municipal de Yanacocha señala: *“Las mujeres no se inscriben porque ellas tienen su propia organización, el Club de Madres”*.

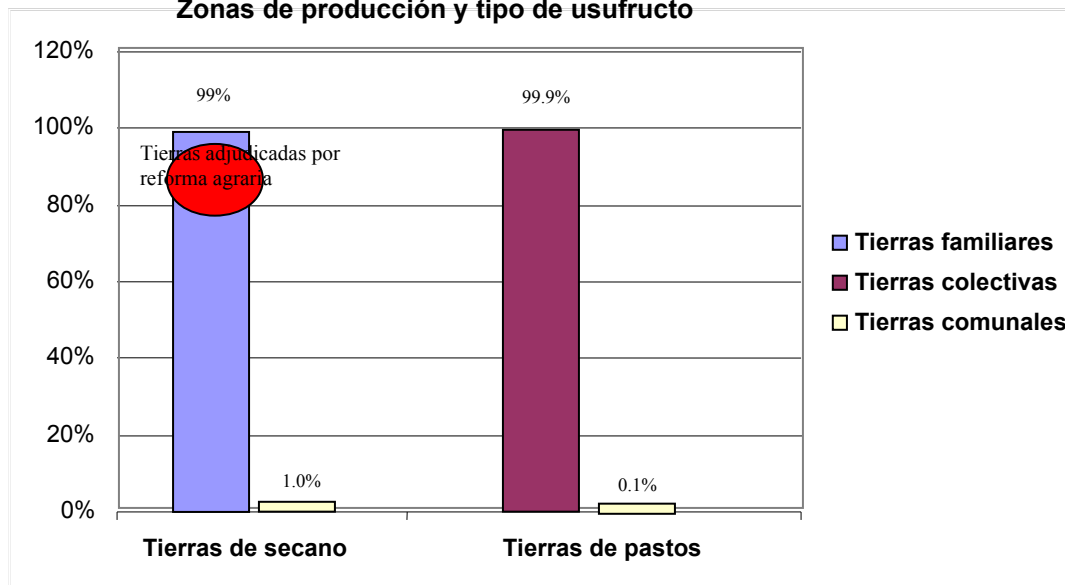
## **5. Los derechos sobre la tierra: apropiación familiar y control comunal**

Para la presente investigación, hemos definido el concepto de apropiación de la tierra como “el conjunto de prácticas, reglas y normas de uso y aprovechamiento de la tierra...”. Dichas prácticas pueden subdividirse en formas de *uso*, *usufructo* y *disposición*, tomando los tres atributos que definen a la propiedad según el derecho romano. En lo que sigue, consideraremos el modo en que una familia cumple o no plenamente con cada uno de estos tres atributos, para identificar los distintos grados de apropiación de la tierra que tienen las familias de CYC frente al control comunal sobre los recursos.

Ahora bien, estos distintos grados de apropiación se encuentran en gran medida en función de los distintos tipos de tierras que existen y que hemos descrito en la sección III de este informe. Según dicha clasificación, encontramos en Choclococha cuatro formas de clasificar las tierras: zonas de producción (agricultura de secano o pastos), origen (pre o post reforma agraria), acceso (distribuidas por la comunidad o obtenidas por otros medios) y usufructo (familiares, colectivas y comunales). Estas distintas variables para clasificar la tierra se cruzan entre sí, siendo posibles muchas combinaciones de tipos de tierras. A su vez, cada combinación determinará distintos derechos y grados de apropiación familiar. Iremos, en lo que sigue, observando las particularidades de cada combinación.

En el siguiente gráfico mostramos la forma en la que se cruzan las tierras según forma de usufructo y zonas de producción.

**Gráfico 3**  
**Zonas de producción y tipo de usufructo**



Como podemos observar, las tierras de agricultura de secano son casi en su totalidad de usufructo familiar y las tierras de pastos son casi en su totalidad colectivas. No obstante, en ambos casos, se mantiene una mínima porción de uso comunal.

Si añadimos al cruce anterior, la variable que se refiere al origen de la parcela, tenemos que las tierras entregadas por reforma agraria formarían parte de las tierras familiares (barra azul), representando un porcentaje de 19% (círculo rojo). Como ya hemos señalado, estas mismas tierras coinciden enteramente con aquellas que son entregadas por la comunidad. Finalmente, las tierras pre existentes al proceso de reforma serían todas las restantes.

### 5.1. Tierras de secano: uso familiar

Las tierras de secano en CYC están divididas en una innumerable cantidad de parcelas familiares. Ahora bien, como hemos podido notar en el gráfico 3, existen dos tipos de tierras familiares, cuya distinción determinará distintos grados de apropiación familiar de la tierra: las adjudicadas por reforma agraria y las pre-existentes a este periodo.

**a. Las tierras post-reforma agraria.** La característica central de estas tierras y que las hace diferentes a todas las otras tierras de la comunidad es que constituyen la única porción del territorio comunal que aún no ha sido plenamente ocupada y desde la que se distribuyen tierras a los comuneros que lo solicitan. Así sobre estas tierras se depositan importantes normas producidas por la comunidad, orientadas a la regulación del recurso.

Las tierras post reforma agraria están conformadas por dos predios de 111 y 88 hectáreas, de nombres Choclococha y Chanchas, respectivamente. Buena parte de los comuneros del sector Choclococha solicitaron desde tiempos de su adjudicación a la comunidad parcelas para el usufructo familiar. Se priorizó la repartición de las tierras del predio Choclococha ya que el predio Chanchas se encontraba a dos horas de camino desde el centro poblado, quedando hasta la actualidad tierras libres para repartir en este segundo sector. De esta forma, desde hace alrededor de 20 años existen familias que



poseen y trabajan estas tierras, habiendo incluso dejado en herencia las parcelas a una primera generación.

Las familias que poseen estas parcelas tienen amplios derechos de uso, es decir, toman decisiones de forma autónoma sobre el manejo productivo, sobre el calendario agrícola, sobre el tipo de sembrío (productos agrícolas, especies arbóreas e incluso pastos cultivados), sobre el levantamiento de cercos, etc. La única restricción al uso de estas tierras es la construcción de inmuebles, ya que ello expresa una mayor estabilidad sobre las tierras y, como veremos, existe la posibilidad de que las parcelas regresen al poder de la comunidad. Los derechos de usufructo son igualmente amplios, esto es, las familias pueden sacar provecho económico de las tierras a través de las actividades que en sus parcelas realicen o a través del alquiler de las mismas sin ninguna consulta o restricción comunal. No obstante, existe una condición importante: El poseedor de la parcela debe mantener su status de comunero y cumplir, por tanto, con las obligaciones establecidas por la comunidad, de lo contrario corre el riesgo de perder su parcela, la cual regresaría a la comunidad para ser repartida a otro comunero. Así, por ejemplo, si un comunero decide irse de la comunidad para residir fuera deberá para mantener su parcela continuar “colaborando” con la comunidad, esto es, convertirse en comunero residente.

A pesar de la condición anterior, los derechos de uso y usufructo son bastante amplios y los comuneros suelen sentirse seguros de su posesión. Sin embargo, estos derechos se ven contrarestados frente al tercer atributo: la disposición de la tierra. En efecto, las familias no pueden transferir estas tierras a través de la venta bajo ninguna condición y la herencia se ve limitada por una importante regulación comunal: un comunero sólo puede dejar en herencia su parcela si es que sus hijos –normalmente los beneficiados- son, a su vez, comuneros activos y cumplen con las obligaciones comunales. De este modo, de ser heredadas, los hijos reciben con la tierra los mismos derechos y obligaciones que sus padres tenían sobre ella. Así, observamos que prevalece para definir el conjunto de derechos de las familias sobre estas tierras es su origen: adjudicación por reforma agraria.

Hasta el momento podemos decir que sobre estas tierras existe un grado de apropiación familiar medio, con una presencia importante de los atributos de uso y usufructo, pero muy disminuida del de disposición. Es importante agregar a lo anterior la consideración que en el discurso tienen comuneros y autoridades sobre este tipo de tierras: las parcelas de los predios adjudicados por reforma agraria no son “propias” sino “de la comunidad”. Así, se considera que la comunidad las distribuye otorgándolas en forma de préstamo indefinido, pero bajo ciertas condiciones: ser comunero activo y colaborar con la comunidad.

Un elemento importante que debemos recalcar sobre la “colaboración” de los comuneros para con la comunidad por ser exclusiva de los usufructuarios de las tierras de reforma agraria es la de la cuota por parcela. Además de los deberes de todo comunero activo, los usufructuarios beneficiados por una parcela de este sector deben pagar un monto anual a la organización comunal. Los comuneros se refieren a este pago como una contribución a la comunidad pero con mayor frecuencia como el alquiler de su parcela a la comunidad.

Nosotros hemos optado por diferenciar esta modalidad de acceso a la tierra de la del alquiler, ya que en los casos de alquiler identificados los periodos de tenencia suelen ser cortos, no estar sujetos a condiciones sobre el estatus del comunero, ni es posible la herencia. Esto es, en las tierras alquiladas el grado de apropiación de las familias es mucho menor que en las tierras distribuidas por las comunidad. De otro lado, si consideramos los montos por los que deben pagar los comuneros por sus parcelas, éstos

están muy lejos de lo que se paga por el alquiler de tierras de la misma extensión. Las cuotas aportadas a la comunidad no son fijas sino que son definidas por asamblea general, año tras año, antes del inicio de la campaña agrícola y se encuentran en función de las necesidades de la comunidad. Así, si la comunidad prevé la construcción de una obra para la que se necesitará un presupuesto importante, el alquiler será mayor que en años en los que se realicen menos inversiones. Los montos suelen variar entre S/. 10 y 20 nuevos soles por parcela de 0.25 hectáreas. En el alquiler tradicional, en cambio, suelen ser de S/. 84 nuevos soles en promedio por la misma extensión.

A pesar de que no se trata del alquiler tradicional de tierras es importante observar que el uso de este término alude a una percepción sobre el uso de las tierras basada en una relación más contractual y monetaria que en una de cooperación y reciprocidad comunal. En efecto, de las entrevistas realizadas pudimos observar que los comuneros prefieren vincularse de esta forma con la comunidad, sobreponiendo la importancia del pago monetario de la cuota mensual –que además por su monto resulta irrisorio- sobre otro tipo de contribuciones comunales como la participación en faenas, el asumir cargos comunales, entre otros. Así, es menos probable que un comunero ponga en riesgo su parcela de pagar su cuota anual que de asistir a las asambleas comunales.

La constatación anterior nos conduce a pensar que las familias no se sienten muy comprometidas con la organización comunal y con las obligaciones colectivas que supone la convivencia comunal. Pero este asunto se torna más importante si consideramos que es sólo sobre este tipo de tierras –las cuales ya poco representan sobre la totalidad de tierras de uso agrícola- que la organización comunal posee un control considerable frente a los altos niveles de apropiación familiar sobre el resto del territorio comunal. De otro lado, el control comunal sobre la tierra es uno de los elementos centrales –sino el principal- que otorga poder a la comunidad para regular otros aspectos de la vida comunal.

Queremos, para terminar con este tipo de tierras, volver a señalar que sólo son beneficiarios de éstas los comuneros que viven en el sector Choclococha, mas no así aquellos de Yanacocha y Chilcapite. De este modo, todos los derechos antes señalados se aplican para los primeros, estando los segundos desprovistos de derechos y por tanto, no contando con ningún nivel de apropiación sobre estas tierras. La excepción a esta regla la constituyen dos comuneros de Yanacocha quienes, como veremos más adelante, lograron tener acceso a una parcela de este sector, no obstante, a uno de ellos se le otorgó la tierra bajo la forma tradicional de alquiler, a S/. 100 nuevos soles por una yugada.

**b. La tierras pre-reforma agraria.** Las tierras anteriores a reforma agraria son todas aquellas que fueron reconocidas como propiedad de CYC en el momento de su reconocimiento como comunidad a fines de la década del 60 y están conformadas tanto por tierras de pastos como de uso agrícola. En este punto nos ocuparemos, sin embargo, sólo de las de uso agrícola.

Sobre las tierras pre-reforma agraria las familias comuneras poseen más derechos en todos sus atributos y, por tanto, mayor grado de apropiación sobre la tierra. Este grupo de tierras es, de otro lado, el más importante para las familias ya que a él pertenece la gran mayoría de sus parcelas. Las familias comuneras poseen éstas parcelas desde tiempos anteriores al reconocimiento de la comunidad y han sido heredadas de generación en generación, pero sobre todo traspasadas por venta a otros comuneros hasta la actualidad.

Las familias comuneras tienen plenos derechos de uso y de usufructo sobre estas tierras, sin necesidad de retribución alguna a la comunidad, incluso siendo usadas en actividades distintas a las agrícolas. De otro lado, tanto hombres como mujeres pueden poseer y usufructuar estas tierras bajo las mismas condiciones, e incluso comuneros y no comuneros tienen los mismos derechos. En cuanto al atributo de disposición de estas tierras, las familias también cuentan con amplios derechos individuales. Así, cualquiera puede vender o comprar estas tierras o dejarlas en herencia aún si los hijos han dejado de ser comuneros. Para los comuneros éstas son “tierras privadas”, a diferencia de las parcelas del sector adjudicado por reforma agraria que son consideradas más bien “comunales” y que no pueden ser vendidas.

El 100% de los poseedores de estas tierras tiene algún documento que certifica su pertenencia. Con frecuencia se trata de un contrato de compra-venta firmado por notario. Aquellas tierras que han sido heredadas de generación en generación suelen poseer, en cambio, certificados de posesión otorgados por el presidente de CYC. Cualquiera de estos documentos es válido para defender la parcela en caso de conflicto.

Existe, sin embargo, una condición importante si es que el comprador o heredero de la tierra no es comunero de CYC -y por tanto, no asume las responsabilidades de todo comunero. Para que pueda mantener sus tierras sin tener problemas en la comunidad, el nuevo poseedor de la tierra deberá contribuir de algún modo con la organización comunal. Así, al igual que los comuneros residentes, los no comuneros pagan a la comunidad un monto que justifica el aprovechamiento de sus tierras. A pesar de que esto es casi un consenso, no se trata de una norma que esté muy clara ni menos se ha fijado un monto a cobrar. Así, algunas autoridades han amenazado a los poseedores de botarlos de la comunidad, mientras otros sostienen que los poseedores deben dar “su voluntad”. Finalmente, en la práctica sólo algunos poseedores no comuneros contribuyen con la comunidad, pero difícilmente la organización comunal logra quitarles sus parcelas ya que, en último término se considera que son “suyas”.

En el último año, sin embargo, el acercamiento de las autoridades comunales a la legislación de tierras, a través del contacto con organizaciones como Defensoría del Pueblo y el PETT está generando fuertes rumores acerca de la imposibilidad de vender parcelas a personas ajenas a la comunidad. De igual modo, empieza a ponerse en duda la validez de los “títulos”, esto es, de los certificados de posesión comunal o de los documentos notariales. No obstante, la confusión generada es muy grande y, por tanto, los discursos muy diversos. Se trata aún de un proceso reciente, por lo cual no hay aún impactos importantes sobre la tenencia de la tierra en CYC.

## **5.2. Tierras de secano: uso comunal**

Las tierras comunales de secano son aprovechadas en CYC de dos formas distintas: i. el trabajo conjunto en faenas comunales o ii. el alquiler de las tierras a terceros. Los beneficios obtenidos son utilizados para realizar obras de infraestructura, para solventar los gastos que cada año deben hacer las autoridades en diversas gestiones o para la organización de la fiesta anual de la comunidad.

Actualmente el sector Yanacocha sólo posee 0.75 Ha de sembríos de eucaliptos, fruto del trabajo comunal. En Chilcapite se trabajan 2.75 Ha para el sembrío de cereales en faenas colectivas y se alquila 1 Ha de pastos a una asociación de productores. Finalmente, en Choclococha, actualmente sólo se alquilan dos parcelas de 0.25 hectáreas. Una gran diferencia entre Choclococha y los otros dos sectores es que aún cuenta con terrenos libres de los que puede disponer en cualquier momento. En el sector Choclococha, hasta

hace alrededor de 6 años atrás, las autoridades comunales habían designado seis hectáreas de uno de los predios adjudicados por reforma agraria para el trabajo en faenas comunales, de lo cual obtenían importantes beneficios. No obstante, problemas por una mala administración del dinero obtenido de la venta de la producción generaron serios conflictos comunales y se decidió en asamblea que no se trabajaría más bajo esta modalidad. Desde entonces las tierras libres son esporádicamente alquiladas a terceros o distribuidas a nuevas familias comuneras, disminuyendo -en el segundo caso- las tierras comunales y ampliándose las familiares. No obstante, explica el actual presidente de CYC, que para la próxima campaña agrícola convocará una asamblea para retornar al sistema de faenas.

Sobre las tierras comunales trabajadas en faenas colectivas el nivel de apropiación por parte de las familias es nulo. Los comuneros no pueden usar individualmente estas tierras y su uso está restringido a las decisiones de la organización comunal. Del mismo modo, tampoco se benefician de forma directa de sus frutos: la producción y su destino son administrados por la organización comunal. Finalmente, en cuanto a la capacidad de transferencia de las tierras, los comuneros no cuentan con ningún tipo de derecho. De esta manera, la carga de derechos sobre las tierras comunales recae sobre la organización comunal, poseyendo esta un control total de las mismas.

En los últimos tres años, una forma particular de uso de las tierras comunales que trasciende a las formas tradicionales de tenencia empezó a generarse en la comunidad: el alquiler a colectivos. Esta combinación de tipos de tierras se crea con la aparición de las asociaciones de productores, conformadas por las propias familias de CYC, con frecuencia, bajo la asesoría e impulso de alguna ONG. Dichas asociaciones agrupan entre 15 y 20 familias y suelen usufructuar las tierras libres de la comunidad o alquilar a otros comuneros. El trabajo de la tierra es colectivo y las ganancias son distribuidas entre todas las familias, dejando si es necesario un porcentaje para gastos de la asociación (obtención de semillas, trámites para su formalización, entre otros).

En CYC, existen seis asociaciones de productores: tres de Choclococha, dos de Yanacocha y una de Chilcapite. De ellas, cuatro tienen parcelas colectivas, y las dos restantes trabajan de forma individual sacando provecho de la asociación sólo para el acopio conjunto de la producción y la obtención de mejores precios en el mercado. En el siguiente cuadro mostramos las asociaciones que existen y sus principales características.

Cuadro 7

## Asociaciones de productores en CYC: Características centrales

	Choclococha			Yanacocha		Chilcapite
	Nueva Esperanza	Los Huilcas	Santiago de Tucumano	Inversiones Yanacocha	Aguas Negras	Ángeles de Curabamba
Fecha de creación	2005	2004	2006	2006	2003	2006
Formalización	En trámite	En trámite	Personería jurídica	En trámite	En trámite	Sí
Nº de socios	13	16	21	14		18
Apoyo de ONG	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tierras colectivas	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí
Extensión (Ha)	0.25	10	0.25	-	-	1
Arreglo por el uso de tierras	Tierras libres comunales. Al segundo año de siembra pagarán S/.150	Tierras libres comunales. No pagan nada a la comunidad.	Terreno alquilado a otro comunero.	-	-	Pastales comunales. Han pagado S/. 100 y S/. 50 por año.

En el cuadro anterior podemos observar que la asociación Nueva Esperanza paga a la comunidad por el uso de las tierras libres de secano. Como en el caso de las tierras comunales trabajadas en faenas colectivas, el dinero es destinado a cubrir las necesidades de la organización comunal del sector. Por su parte, la asociación tiene la libertad de usar y sacar provecho de la parcela sin necesidad de consultar a la comunidad, con la restricción de que se mantenga el uso agrícola de las tierras. Las decisiones productivas son pues tomadas en asambleas entre las autoridades de la asociación y sus asociados. En cuanto a la transferencia de las tierras, la asociación no posee ninguna facultad, es decir, no puede venderlas o heredarlas bajo ninguna condición.

En efecto, podría considerarse que las tierras de las asociaciones son tierras colectivas en tanto se trata de un grupo de familias comuneras organizadas el que le da uso en última instancia. Sin embargo, considerando que es la comunidad la que tiene el poder de decidir sobre las tierras y que el uso por parte de la asociación puede ser temporal y dependiente del pago de un alquiler, preferimos clasificarlas como comunales. Existe pues un *meta uso*, en el que la comunidad se encuentra por encima de la asociación y la asociación por encima de las familias. El nivel de apropiación de las familias asociadas es, en definitiva, bajo.

En el caso de la asociación Los Huilcas observamos del cuadro anterior que ésta no paga a la comunidad por el uso de una importante extensión de terreno. Adicionalmente, ha levantado en el perímetro que lo rodea un cerco que lo divide físicamente del resto del predio en el que se ubica. Esto ha generado divisiones y conflictos al interior de la comunidad y las autoridades comunales han exigido a la asociación en numerosas ocasiones que haga el pago respectivo. La asociación sin embargo, integrada por algunos líderes importantes de la comunidad, se resiste a pagar.

### 5.3 Tierras de pastos: uso colectivo y uso comunal

Como hemos señalado anteriormente, a pesar de constituir el 40% de la totalidad del territorio comunal, en CYC los pastos naturales son escasamente utilizados y no proveen ingresos importantes a las familias comuneras. Quizás por esta razón, la comunidad no se ha interesado en establecer un sistema de control de animales, de cuotas ni de rotación de pastales. Se trata más bien de un área de uso libre y colectivo. Cualquier poblador de CYC puede utilizarlas para llevar alimentar a sus animales y obtener el beneficio que ello otorgue.

De este modo, las familias poseen derechos de uso y de usufructo de los pastos, mas ambos atributos se encuentran seriamente restringidos: Ninguna familia puede dar un uso distinto al de pastoreo a esta área (como construir una casa, levantar un cerco, sembrar cultivos de altura u otros.), con lo cual el usufructo queda también restringido. De otro lado, las familias no cuentan con ningún derecho de disposición, esto es, no pueden vender, heredar o alquilar los pastos bajo ninguna circunstancia. Por tal razón consideramos que el grado de apropiación familiar de las tierras de pastos es bajo, mientras que el control comunal sobre ellas es, en contraposición, alto.

La combinación entre tierras de pastos y uso comunal se restringe a un solo caso: el alquiler de pastos a una asociación de productores. Los pastos, considerados comúnmente como terrenos de escaso valor y utilizados de forma marginal por el colectivo, entran en valor cuando se crea un interés específico sobre ellos y, más aún, con posibilidades interesantes de usufructo. Es entonces que la organización comunal asume mayor control sobre los pastales, estableciendo nuevas condiciones para su uso: el pago de un monto anual de dinero.

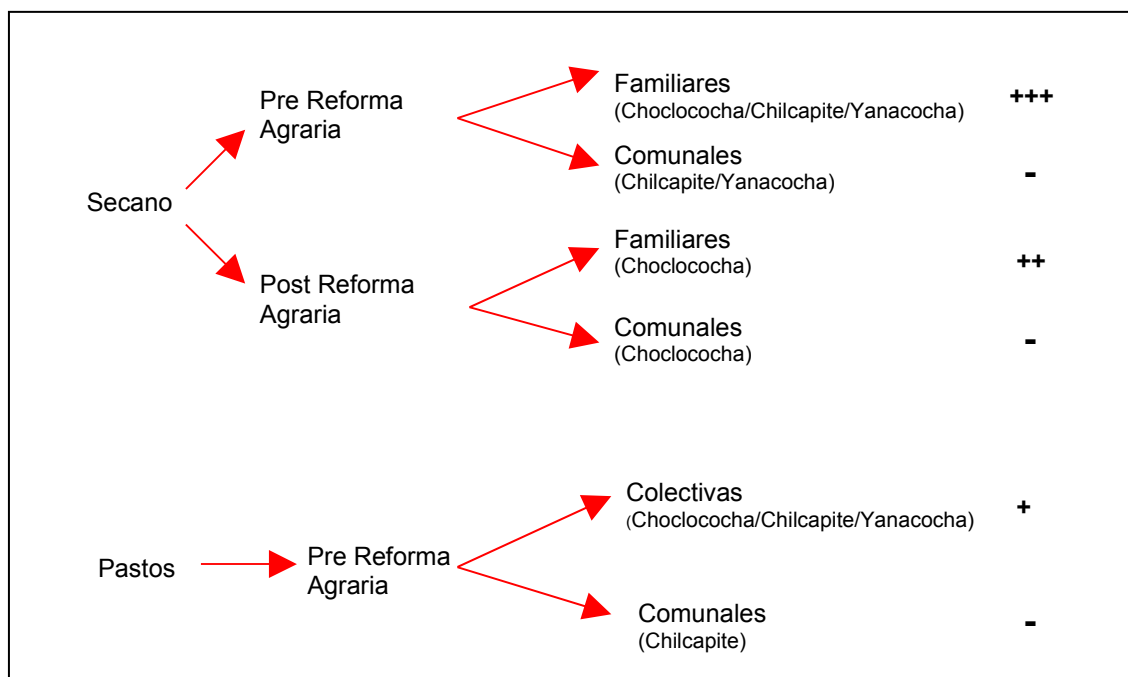
En efecto, como podemos ver en el cuadro 7, la asociación Ángeles de Curabamba ha alquilado a la organización local de Chilcapite una hectárea de pastos, que era un antiguo echadero de animales. En ella, las familias integrantes han sembrado tunales y, recientemente, tara. No obstante, su objetivo es comprar vacas e incorporar la crianza de ganado vacuno como una de sus actividades centrales.

Al igual que el caso de las tierras comunales de secano, se trata de un segundo nivel de uso de las tierras de pastos, en donde los derechos de las familias comuneras sobre la tierra se encuentran mediados por dos instituciones de niveles superiores: la comunidad y la asociación. En este caso, el nivel de apropiación de las familias es reducido, ya que las decisiones acerca del uso de las tierras y del beneficio obtenido dependen del colectivo y, en última instancia de la comunidad. Del mismo modo, las parcelas no pueden ser traspasadas bajo ninguna circunstancia.

En el siguiente diagrama mostramos la forma en la que entran en relación los distintos tipos de tierras descritos en el presente informe, indicando con los símbolos -, +, ++ y +++ si el grado de apropiación de las familias es nulo, bajo, medio o alto, respectivamente.

Diagrama 1

## Grados de apropiación según tipos de tierra



## 6. Derechos plurales y dinámicos

## 6.1. La propiedad comunal

Hasta el momento hemos identificado los derechos de las familias comuneras para el acceso a la tierra, así como las distintas formas que tienen de vincularse y apropiarse de la tierra de la comunidad. Del mismo modo, hemos puesto en evidencia el grado y las formas de control que tiene la comunidad sobre esas mismas tierras. Ahora bien, luego de hacer un balance sobre lo visto, es posible decir que el conjunto de normas que dan vida a este complejo sistema de tenencia no puede ser explicado por el concepto de propiedad proveniente del derecho occidental. Según este último, el derecho de propiedad es el más completo que puede tenerse sobre una cosa, no obstante en CYC la comunidad – propietaria formal de las tierras- sólo ejerce pleno control de las tierras que hemos denominado comunales, valga decir, alrededor del 1% de la superficie agropecuaria de la comunidad.

Para poder comprender el sistema de tenencia comunal es necesario identificar los distintos tipos de tierras, sus diferentes valoraciones y usos, pero también los distintos tipos de actores y los derechos que cada uno posee sobre ellas. Por tal razón resultan más útiles conceptos como el de “paquetes de derechos”, que tiene sus raíces en las teorías del pluralismo jurídico. Según este concepto existen múltiples derechos que se conjugan sobre un mismo espacio o recurso. En el siguiente cuadro podemos observar los derechos que posee la comunidad según tipos de tierras.

Cuadro 8

## Paquete de derechos comunales según tipos de tierras

Derechos sobre la tierra		Tipos de tierras			
		Secano - Familiares		Pastos - Colectivos	Secano y pastos -Comunales
		Pre reforma agraria	Post reforma agraria		
Uso	Uso agrícola: decisión sobre qué sembrar, cuándo y donde.	X	X	X	√
	Uso de técnicas e insumos no tradicionales	X	X	X	√
	Siembra de pastos	X	X	X	√
	Cerco de terrenos	X	X	X	√
	Construcción de inmuebles	X	X	X	√
Disfrute	Aprovechar de la cosecha, de los productos ganaderos, etc.	X	X	X	√
	Cobro por pastear a foráneos	-	-	√	-
Disposición	Herencia	-	-	-	√
	Venta	X	X	X	√
	Alquiler/Trabajo a partir	X	√	√	√
	Entrega a comuneros	X	√	√	√

De esta forma, la comunidad posee derechos distribuidos de forma dispar según el tipo de tierras del que se trate, conformando un paquete que entrará en juego con aquellos de las familias y distintos actores de la comunidad. Así, los derechos sobre la propiedad comunal no son exclusividad de la comunidad o de las familias sino que se comparten y distribuyen entre todos. No obstante, la comunidad cumple al menos otros dos roles fundamentales vinculados a la tenencia de la tierra y que no son considerados al contemplar la concepción tradicional de propiedad: i. Otorga seguridad de la tierra a las posesiones familiares, ii. Resuelve numerosos conflictos por tierras tanto internos como externos. Estas dos atribuciones son, en cambio, muy valoradas por las familias comuneras a quienes la comunidad termina representando cuando hay que defender la tierra.

Bajo esta misma línea, resulta interesante observar que a pesar de que en CYC la mayor parte de las tierras de secano son de alta apropiación familiar, de que las parcelas cuentan con *títulos* individuales y de que las familias consideran que sus parcelas son privadas siempre existe el reconocimiento de que éstas son parte de un territorio común que la comunidad, como organización, tiene la obligación de controlar y defender. Esto también se expresa cuando los comuneros no cumplen con sus deberes comunales y la comunidad los presiona bajo el supuesto de que no se puede aprovechar las tierras sin colaborar con la comunidad. Aunque en la práctica la comunidad nunca ha arrebatado a un comunero de su parcela, el mecanismo de presión tanto por parte de las autoridades como de las familias vecinas surte efecto.



La importancia de la comunidad para con las tierras no se restringe entonces a los tres atributos que describen a la propiedad según el derecho romano sino que gira hacia funciones que corresponden más al control de un territorio. De otro lado, la idea de que existe una relación importante entre la organización comunal y el control de las tierras de CYC se expresa con claridad en el discurso de nuestros entrevistados cuando indagamos acerca de la diferencia entre la comunidad y la municipalidad de centro poblado: *“la municipalidad ve de las calles, la limpieza, y la comunidad ve todas las tierras, de acá para adentro”* (Víctor, antiguo líder de la comunidad).

## 6.2. Familias comuneras y derechos diferenciados sobre la tierra

Como hemos visto, no es posible hablar de *el derecho* de las familias sobre la tierra, sin generalizar y perder la riqueza del sistema de tenencia. Para explicar esto de forma más gráfica hemos elaborado dos cuadros en los que desagregamos los derechos de acceso, uso, disfrute y disposición de las tierras familiares, cruzándolos con los distintos actores de la comunidad. En el primer cuadro nos ocupamos de las tierras adjudicadas por reforma agraria y en el segundo de aquellas anteriores a esta. De ellos es posible notar la forma en la que los derechos se encuentran distribuidos y, de la comparación de los dos, se evidencia la importancia del tipo de tierras para la definición de los mismos.

**Cuadro 9**

### Paquetes de derechos familiares: Las tierras adjudicadas por RA

Derechos sobre la tierra		Tipos de actores					
		Yerno	Tipo de comunero			Mujer (no comunera)	No-comunero
			Activo	Residente	Jubilado		
<b>Acceso</b>	Por herencia	X	?	?	-	X	X
	Por compra	X	X	X	X	X	X
	Por entrega comunal	X	?	X	X	X	X
	Por alquiler/ al partir	?	?	?	?	?	?
	Por préstamo	?	?	?	?	?	?
<b>Uso</b>	Uso agrícola	?	?	?	?	?	?
	de insumos y técnicas no tradicionales	X	?	?	?	X	X
	Siembra de pastos	X	?	?	?	X	X
	Cerco de terrenos	X	?	?	?	X	X
	Contrucción de inmuebles	X	X	X	X	X	X
<b>Disfrute</b>	Gozar de la cosecha, de los productos ganaderos, etc.	?	?	?	?	?	?
<b>Disposición</b>	Herencia	X	?	?	?	X	X
	Venta	X	X	X	X	X	X
	Alquiler /trabajo al partir	X	?	?	?	X	X
<b>Posibilidad de pérdida de tierra</b>		-	?	?	X	-	-

Como podemos notar del cuadro anterior, los que poseen paquetes de derechos menos densos sobre estas tierras son las mujeres, los yernos y los no-comuneros. Estos tres tipos de actores solo tienen acceso a la tierra a través de la posesión de otros, lo cual limita, a su vez, la posibilidad de decidir libremente sobre su uso, disfrute y disposición. Por su parte, los comuneros poseen amplios derechos de uso y disfrute, viéndose sólo restringido su derecho a la disposición en la venta de parcelas. Una variable importante adicional es la que se refiere a la posibilidad de pérdida de la parcela y que resulta un

indicador de la seguridad de la tierra de las familias. Sobre ello debemos señalar que sólo el comunero jubilado posee plenas garantías de que su parcela no retornará al seno de la comunidad.

En CYC, a excepción del caso de los comuneros jubilados, la edad no es un factor importante de diferenciación de derechos sobre la tierra. Desde que el joven poblador de CYC se inscribe en el padrón comunal obtiene la categoría de comunero activo y es merecedor de una parcela. Lo que sí hace una diferencia es, precisamente, poseer o no el status de comunero, y quienes encuentran trabas para ello son los foráneos (yernos) y las mujeres. Al lado de ellos se encuentran los no-comuneros, que por decisión propia deciden no inscribirse en la comunidad. De este modo, podemos señalar que existen dos elementos que definen derechos diferenciados sobre la tierra: i. El género, ii. La procedencia y iii. La inscripción en la comunidad.

Las diferencias anteriores en los derechos sobre la tierra se diluyen cuando observamos lo que sucede en el cuadro XX. En efecto, en las tierras cuyo origen es anterior y distinto al de las tierras adjudicadas por reforma agraria los comuneros poseen derechos más uniformes.

**Cuadro 10**

**Paquetes de derechos familiares: las tierras anteriores a Reforma agraria**

Derechos sobre la tierra		Tipos de actores					
		Yerno	Comuneros			Mujer (no-comunera)	No-comunero
			Activo	Residente	Jubilado		
<b>Acceso</b>	Por herencia	X	?	?	?	?	?
	Por compra	?	?	?	?	?	?
	Por entrega comunal	X	X	X	X	X	X
	Por alquiler/ al partir	?	?	?	?	?	?
	Por préstamo	?	?	?	?	?	?
<b>Uso</b>	Uso agrícola	?	?	?	?	?	?
	Uso de insumos y técnicas no tradicionales	?	?	?	?	?	?
	Siembra de pastos	?	?	?	?	?	?
	Cerco de terrenos	?	?	?	?	?	?
	Contrucción de inmuebles	?	?	?	?	?	?
<b>Disfrute</b>	Gozar de la cosecha, de los productos ganaderos, etc.	?	?	?	?	?	?
<b>Disposición</b>	Herencia	?	?	?	?	?	?
	Venta	?	?	?	?	?	?
	Alquiler /trabajo al partir	?	?	?	?	?	?
	Entrega a comuneros	X	X	X	X	X	X
<b>Posibilidad de pérdida de tierra</b>		X	X	X	X	X	X

El cuadro 10 nos muestra que comuneros, yernos, mujeres y no comuneros poseen las mismas atribuciones sobre estas tierras, a lo que se añade que el conjunto de derechos que poseen es sumamente amplio. Hemos visto en el cuadro XX el modo en el que intervienen las características de los actores para la definición de los derechos. Con la introducción de este segundo cuadro, observamos que adicionalmente debe considerarse el tipo de tierras del que se trate. En efecto, lo que prima para definir los derechos sobre las parcelas familiares es el origen de las mismas, existiendo mayor diversidad y uniformidad de derechos en las tierras anteriores a la reforma agraria, que en aquellas adjudicadas por esta. Debemos observar, de otro lado, que en este tipo de tierras la organización comunal ha perdido prácticamente toda capacidad de control. De esta forma, podemos decir que en lo que respecta a las parcelas familiares, los derechos son más

amplios y más uniformes entre los actores cuando la organización comunal tiene menos control sobre las mismas.

Un factor adicional que también debe considerarse para comprender la definición de derechos sobre la tierra es el de las zonas de producción. Para la comunidad de CYC hemos identificado sólo dos zonas de producción: las tierras de secano y las tierras de pastos. El tipo de uso -familiar y colectivo, respectivamente- que prima en cada caso, nos indica grados de apropiación muy diferenciados, teniendo las familias mayores derechos sobre las de secano que sobre las de pastos. Tradicionalmente, en CYC las familias han tendido a apropiarse con mayor fuerza de las tierras de secano debido a que a los pastizales se les atribuía un escaso valor productivo. Por esta misma razón, la organización comunal no ha producido normas ni formas de regulación específicas para las tierras de pastos. Una excepción reveladora es la del anexo de Chilcapite, en donde una asociación de productores puso en valor una zona de pastos antes marginal para la comunidad. La reacción inmediata de la organización comunal fue convertir el uso colectivo en uso comunal, cobrando a la asociación un monto por el uso de la hectárea de pastos. En este cambio, los derechos de las familias se vieron modificados hacia un menor grado de apropiación.

Si bien en los modelos anteriores hemos revisado -entre otros- los derechos de acceso a la tierra, éstos no explican del todo las diferencias en el número de parcelas y de hectáreas que cada comunero posee. Como hemos visto anteriormente, en CYC entre comuneros activos puede haber importantes diferencias en cuanto a la posesión de parcelas. Al contrario de lo que sucede en otras comunidades, estas diferencias internas no son ocultadas ni por las autoridades ni por el colectivo, sino que son reconocidas en el discurso general de la población. Ello puede resultar contradictorio si consideramos que la concepción tradicional de la comunidad señala que existe en su interior equidad de derechos y que, legalmente, la tierra pertenece a todos los comuneros por igual en tanto propiedad colectiva. En efecto, aunque con distintos matices, buena parte de las autoridades y líderes de CYC quiere disolver la comunidad y acabar con lo que queda de control comunal sobre las tierras y la vida de los comuneros. Sobre todo esto trataremos en el siguiente punto.

### **6.3. Diferenciación, organización y poder en la comunidad**

Considerar los orígenes así como las diferentes etapas de la historia de la comunidad de CYC resulta fundamental para comprender mejor la forma actual de tenencia de la tierra. Haciendo una breve revisión de su historia notamos que ésta, desde tiempos de su formación, ha estado marcada por el conflicto, pero no entre la comunidad y agentes externos sino al interior mismo de su población. Como hemos visto en un principio, durante su formación y reconocimiento hubo muchos problemas entre las familias por el acaparamiento y la titularidad de la tierra, a lo que siguieron las tensiones de convertirse en una organización colectiva sin mayores recursos colectivos que controlar. Finalmente, en las últimas dos décadas, se sumaron las luchas entre Yanacocha y Choclococha por el control político del territorio a través de la municipalización. La única lucha colectiva fue la que se llevó a cabo para la adjudicación de tierras en tiempos de reforma agraria, en la que sin embargo, sólo Choclococha participó.

En efecto, los orígenes de la comunidad de CYC no están ni en una *comunidad de indios* ni en la defensa colectiva de una población por la propiedad de la tierra y por el control de un territorio común. No existía entonces, como en otras comunidades campesinas, un vínculo identitario o afectivo con la tierra y el territorio de la comunidad. Más bien, podemos decir que la organización comunal se sobrepuso a un esquema de trabajo y de

apropiación individuales de la tierra, que a pesar de los esfuerzos de sus líderes nunca pudo dominar.

De esta forma, la organización comunal no tuvo la capacidad de generar e imponer a las familias normas definidas sobre la tenencia de la tierra. Sobre lo único que la comunidad tenía poder era sobre los pastizales abandonados. Al no existir un mecanismo de regulación, las familias de CYC dispusieron entonces de las tierras tomando decisiones individuales para comprarlas o venderlas. Así, bajo este sistema, la acumulación de tierras por parte algunas familias era posible mientras unas tuvieran mejores condiciones económicas que otras. En efecto, éste sistema más propio de las relaciones de mercado y de la propiedad privada ha continuado operando en la comunidad de CYC hasta la fecha en casi toda la extensión de tierras agrícolas. A ello se suma que al carecer la historia de formación de la comunidad de un grupo de notables o de líderes comunales que defendieran la propiedad de la tierra, tampoco ha existido en CYC un grupo de poder que produzca diferencias en el acceso a la tierra.

El inicio de la reforma agraria, sin embargo, generó dos cambios importantes en la comunidad. El primero fue que la adjudicación de predios creaba por primera vez un importante terreno de uso agrícola, nunca antes utilizado por las familias de CYC y que pasaba al control directo de la organización comunal. De esta manera, la comunidad de Choclococha debió desarrollar rápidamente una serie de normas y de mecanismos de control antes inexistentes. Surgieron de ello, las faenas agrícolas colectivas, la distribución de una parcela por familia, el manejo de un padrón de parceleros, la estipulación de cuotas anuales, entre otras normas. Podemos decir entonces que la cara más colectiva de la comunidad en cuanto al control de sus recursos productivos surgió no de una tradición originada en las etapas de formación comunal sino, posteriormente, como parte de un cambio importante en la política agraria del país y, por tanto, de la introducción de medidas externas a la comunidad.

El segundo cambio producido en tiempos de la reforma agraria fue que se creaba una diferencia importante al interior de la comunidad entre quienes participaron del proceso de adjudicación de tierras y quienes no lo hicieron. En el proceso de adjudicación de tierras, como hemos visto anteriormente, hubo un enfrentamiento y un juicio con los ex trabajadores de las haciendas afectadas. En ello, a pesar de que la adjudicación sería para el conjunto de la comunidad, sólo participaron las familias de Choclococha. La abstención de Yanacocha y Chilcapite en el la lucha por la tierra produjo a su vez su exclusión del proceso redistributivo de las tierras nuevas. Así las normas comunales más significativas sobre la regulación de recursos sólo afectaron a un sector de la población, acentuándose con ello las diferencias entre los tres poblados.

A pesar de las diferencias y de los recelos provocados, las familias de Yanacocha y Chilcapite nunca hicieron reclamos a Choclococha por el uso de los predios adjudicados. En el discurso, la tierra es de quien ha luchado por ella y no se discute al respecto. No obstante, esta forma de conducción implícitamente aceptada por el conjunto de las familias de CYC entra una vez más en contradicción con la legislación nacional. En efecto, según las leyes del Estado las tierras se adjudicaron a la comunidad como organización y, por tanto, éstas deberían beneficiar al conjunto de las familias por igual.

Las diferencias generadas por la Reforma Agraria se tradujeron entonces en diferencias en el acceso a la tierra, en donde las familias de Choclococha se vieron más beneficiadas que aquellas de los otros dos anexos. A ello hay que añadir que al interior de Choclococha se generó una diferencia adicional, aunque de bajo impacto en el conjunto de la comunidad: Las dos autoridades que asumieron el rol más activo en la lucha por la tierra se beneficiaron más que el resto de comuneros en el momento de la distribución de

tierras. Ellos recibieron no una sino dos parcelas y, además, se encuentran exonerados de pagar las cuotas que la comunidad exige a todas las familias usufructuarias de estas tierras.

De este modo, es mucho después de su conformación que la comunidad tiene una experiencia de lucha colectiva por la tierra en la que se generan normas comunales, algunos liderazgos, así como diferencias internas que definirían distintas formas de acceso a la tierra. No obstante, muchas de las normas producidas se encuentran poco definidas en la comunidad, lo que se expresa en el discurso general de autoridades y familias. Por ejemplo, las autoridades entrevistadas difícilmente coinciden en elementos como el periodo de prueba para los yernos, la edad de los jubilados, la participación de las mujeres en la organización comunal, la posibilidad de vender parcelas a personas foráneas, la contribución de los honorarios, el pago de multas por ausencias a faenas, etc. Lo que existen más que normas precisas son consensos generales sobre los cuales las autoridades —y en algunos casos la asamblea— toman decisiones que pueden ser variables en función de cada caso o del contexto particular por el que atravesase la comunidad.

A la indeterminación de algunas normas, se suma el paulatino debilitamiento de la organización comunal. Debido a la conflictiva historia de origen de CYC y a los recelos internos entre los anexos, la organización comunal nunca contó con la solidez y con el respeto con los que cuenta en otras comunidades campesinas. No obstante, en tiempos de la reforma agraria ésta adquirió un nuevo poder y sus líderes eran respetados por el conjunto de familias<sup>129</sup>. Sin embargo, con el pasar de los años, buena parte de las autoridades de tiempos de reforma fueron migrando hacia las ciudades, así como sus descendientes, ya sea como consecuencia de la violencia política o en busca de mejores condiciones de vida. Los nuevos líderes de CYC no contaban con el mismo liderazgo ni con la misma legitimidad que los anteriores por lo cual la organización comunal volvía a debilitarse: *“Cuando mi mamá era joven la gente asistía a las asambleas, sino había castigo, les quitaban sus herramientas si no iban. El señor Víctor Calderón<sup>130</sup> era buena autoridad, el hacían caso (...) Había incluso carceleta, ahora no”*. (Róger, 17 años).

Ahora bien, en una comunidad en la que la organización colectiva tenía poca relevancia, las familias comuneras le atribuyeron gran importancia a la distritalización —o, al menos, a convertirse en centro poblado— y ser parte de la estructura formal del Estado. Aunque solo Choclococha logró llegar a ser centro poblado se crearon en la comunidad nuevas autoridades y una nueva institución que le restaba a la organización comunal aún más legitimidad. Según el actual fiscal de CYC, *“La comunidad se está deshaciendo (...) Choclococha es un centro poblado y ya no quiere ser comunidad. Hace 10 años empezó a decaer la comunidad cuando Choclococha se hizo centro poblado. Casi de adorno está la directiva (de la comunidad)”*.

Pero el hecho que terminó con la confianza de la organización fue un conflicto en el manejo de los recursos colectivos: buena parte del dinero obtenido de la producción de las faenas comunales y de la venta de un tractor de propiedad comunal se perdió en manos de la dirigencia central. Este hecho hizo que los comuneros descuidaran en mayor medida sus obligaciones más básicas, como asistir a las asambleas y participar en las faenas comunales. Según uno de nuestros entrevistados: *“Antes la organización comunal*

<sup>129</sup> Incluso durante esos años, el anexo de Yanacocha solicitó ayuda a las autoridades y a las familias de los dos otros poblados para tomar las tierras de una hacienda colindante. Las autoridades comunales tomaron partido de la lucha pero no tuvieron éxito. Actualmente, los comuneros de Yanacocha se quejan de no haber recibido todo el apoyo por parte de la población.

<sup>130</sup> Líder de tiempos de la adjudicación de tierras.

*era más fuerte. Ahora la gente es más relajada, más morosa. Es que hay lobos rapases que hacen trabajar a la gente y a veces la plata se meten al bolsillo... malas autoridades. Viendo eso, la gente ya no quiere colaborar nada*" (Adriano, 53) De otro lado, las autoridades no tuvieron el poder suficiente como para penalizar las ausencias de los comuneros a las actividades comunales.

En síntesis, podemos decir que la historia de formación de la comunidad de CYC definió una forma de tenencia que priorizó lo individual sobre lo colectivo, en donde la escasa regulación comunal configuró accesos diferenciados a la tierra basados principalmente en las posibilidades económicas de las familias asentadas y, con ello, de su capacidad para comprar mayores cantidades de tierra. Que las medidas externas adoptadas por el Estado generaron en la comunidad un nuevo escenario en el que lo colectivo empezaba a ganar terreno, no obstante, algunos procesos socio-políticos –también externos- como la migración, la violencia, la municipalización y problemas derivados de la inexperiencia en la gestión comunal terminaron haciendo primar los comportamientos individuales. Que en un contexto de debilidad de la organización comunal resultó más difícil llegar a establecer normas específicas de control comunal que a deliberaciones particulares, por lo cual las normas vigentes constituyen un marco para la negociación de derechos sobre el acceso, uso y disposición de la tierra de los distintos actores comunales. Que en vista de la inexistencia de normas muy definidas y de la debilidad de la organización comunal, la figura del presidente de la comunidad y su capacidad de liderazgo cobran más importancia para la definición de normas y el control de la directiva comunal sobre las familias comuneras. Los derechos así, no pueden ser ni estáticos, ni homogéneos, sino que varían en función de contextos tanto internos como externos, en un campo de fuerzas en el que el dinamismo es la característica central.

Antes de pasar al siguiente punto es importante recalcar que, como señaláramos anteriormente, a pesar de la debilidad actual de la organización comunal existen algunas funciones atribuidas a la comunidad que resultan fundamentales para la colectividad. Según uno de nuestros entrevistados, *"cuando eres comunero activo tienes derecho a defenderte"* (Pastor, 35). Lo que señala Pastor tiene relación con la seguridad que otorga la comunidad sobre las tierras que las familias comuneras poseen y sobre la posibilidad de defenderse con éxito y con el apoyo de la comunidad en caso de conflicto ya sea con otros comuneros o con terceros. Es interesante notar que cuando hay conflictos importantes por tierras las familias de Yanacocha y de Chilcapite acuden al presidente de CYC, a pesar de tener sus propias autoridades locales encargadas del orden y de la justicia (teniente gobernador, juez de paz). De igual modo, quien entrega las constancias de posesión de parcelas del sector anterior a la reforma agraria son las autoridades de la directiva comunal. De esto modo, a pesar del predominio familiar sobre el manejo de las tierras se reconoce a la comunidad como la encargada de velar por todas las tierras que se encuentran bajo su jurisdicción y de resolver los eventuales conflictos sobre la tenencia.

## **7. Conflictos por la tenencia de la tierra**

El sinnúmero de conflictos que identificamos en CYC quizás se explique en buena medida debido al origen conflictivo de la comunidad. La mayoría de conflictos son internos y por los linderos, entre las distintas familias; por la posesión no bien definida de algunas parcelas, al interior de una misma familia; por invasión de terrenos libres de la comunidad, por parte de familias, etc. Los conflictos externos, ya sea por invasión de o hacia terceros por parte de CYC, en cambio, han desaparecido en los últimos años. En lo que sigue daremos algunas de las características centrales de cada tipo de conflicto, incidiendo en el papel de la comunidad en cada uno de ellos.

### *Conflictos por linderos*

En las entrevistas realizadas notamos que prácticamente todos los entrevistados habían tenido algún conflicto por linderos alguna vez. Los conflictos por linderos se dan cuando un comunero se apropia de alguna porción de la parcela de su vecino. En estos casos las familias acuden al presidente de la comunidad y al juez de paz de CYC, ya sean del sector Choclococha, de Yanacocha o de Chilcapite. En algunos casos, en Yanacocha el problema es atendido por el teniente gobernador, pero si éste no se resuelve rápidamente se convoca al presidente de la comunidad. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios que se utilizan para apoyar a uno u otro comunero involucrado? El primer elemento suele ser solicitar los documentos que certifican la posesión de sus tierras: “*Les pedimos documento legal: escritura pública o certificado de posesión de la CC*” (Teniente gobernador de Yanacocha). Es interesante recalcar el uso de la palabra legal para referirse a documentos como los señalados anteriormente, ya que según la legislación estatal, lo único legal al interior de la comunidad es el título de propiedad comunal. Un segundo elemento, si los documentos no bastan para resolver el problema es convocar a algún comunero *antiguo* que conozca los verdaderos *linderos* de las parcelas en pugna. Un tercer elemento que cuenta de forma paralela a los dos anteriores y que posee un peso importante en el conflicto es si los comuneros involucrados se encuentran o no inscritos en el padrón comunal. Como hemos señalado, buena parte de los habitantes de CYC no son comuneros y, por tanto, no participan de la vida comunal. Así, en caso de conflicto, la comunidad tomará partido por el comunero ejerciendo presión sobre el no comunero no sólo por la porción de tierra en cuestión, sino también objetando su derecho a residir en la comunidad y a usufructuar tierras ubicadas dentro de su territorio sin *colaborar* con la comunidad. Finalmente, si ninguna de las vías anteriores da resultado, un cuarto elemento es acudir a instancias externas a la comunidad, así con alguna frecuencia los casos son llevados a la gobernación o a la fiscalía de la provincia.

En caso de enfrentamiento entre un comunero y un no-comunero con intervención de la comunidad se confrontan las dos realidades que coexisten en ella: la del derecho individual y casi *privado* de propiedad y la del control de la comunidad sobre sus tierras y su territorio. En estos casos el desenlace puede complicarse con la intervención de instituciones públicas de justicia externas a la comunidad convocadas por el no-comunero para su defensa, las que pueden sobreponerse al poder de la comunidad. No obstante, si las autoridades públicas se ajustan a lo que dicta la legislación, tendrán que apoyar a la comunidad en tanto propietaria legal de las tierras. Ello, sin embargo, no es tan simple, ni se da siempre así, como vemos en el caso que sigue.

Mientras realizamos trabajo de campo un no-comunero había tomado como parte de sus tierras el camino que utilizaba Alejandra, comunera viuda de CYC, para llegar a su parcela impidiendo el paso y el tránsito de sus animales. Luego de un enfrentamiento violento entre los hijos de Alejandra y el no comunero, Alejandra decide acudir a las autoridades comunales. El presidente manda al teniente gobernador a solucionar el problema quien cita a ambas partes sobre el terreno. Ante la inasistencia del no-comunero, el teniente decide abrir nuevamente el camino con la ayuda de otras autoridades. Posteriormente, el no-comunero descubre lo sucedido y denuncia ante la gobernación provincial a las autoridades comunales por desempeñar funciones que no les corresponden y a Alejandra por invadir su parcela. La policía los cita y toma declaraciones a las partes y ahora, señala Alejandra, “*nos ha mandado papel*”. No obstante, Alejandra no comprende bien el significado de la notificación que le han hecho ni tampoco sabe a quién acudir para pedir ayuda especializada.

La situación descrita es de suma complejidad debido a diversos factores: i. Nadie sabe a ciencia cierta cuáles son las funciones que sí les corresponden a las autoridades de CYC

en este conflicto, ii. No se atiende el problema de fondo: la propiedad y el derecho de uso de las tierras en cuestión, iii. No se tiene claridad acerca de qué documentos y qué derechos sobre la tierra debe considerarse, iii. Se produce un enfrentamiento desigual en tanto el no-comunero posee más recursos, mayor educación y puede defenderse mejor de las autoridades y de la comunera viuda. Según cuentan las autoridades y Alejandra, en el momento de rendir testimonios, se sintieron en desventaja frente al no-comunero: *“El gobernador grita y no me deja hablar (...) Me están haciendo esto porque estoy sola (viuda), quizás el otro señor le estará pagando”* (Alejandra, 42). *“El gobernador me ha citado a entrevista pero ni ha apuntado, sólo manifestación verbal ha sido. Más caso le hizo al otro señor. También hemos ido a la comisaría, igualito, ni siquiera han hecho un escrito”* (Teniente gobernador de Choclococha).

#### *Posesión indefinida*

La posesión indefinida de parcelas es común al interior de una misma familia y suele darse a partir de la herencia de las tierras. El conflicto se genera entre hermanos y, con frecuencia, entre cuñados que defienden la propiedad de sus parejas. Aunque de menor gravedad que los conflictos por linderos, este tipo de conflicto también es atendido por las autoridades comunales.

Este tipo de conflicto se duplica e intensifica, sin embargo, cuando las tierras en conflicto son vendidas a terceros por una de las partes y, luego de unos años, los hermanos reclaman la propiedad a los nuevos propietarios. Se confrontan entonces dos títulos, el de compra-venta firmada por notario con aquél que posean los iniciales propietarios, usualmente, un documento de posesión de las autoridades comunales. En la comunidad, ninguno tiene mayor validez que el otro, la resolución del conflicto dependerá de algún acuerdo entre las partes en lo que las autoridades como mediadoras cumplen un rol fundamental.

#### *Invasión de terrenos libres*

Este caso es recurrente cuando la comunidad no ha dado uso a los terrenos libres de aptitud agrícola. En este tipo de conflicto quienes se enfrentan son la organización comunal y las familias de CYC, usualmente no-comuneras. En el momento de nuestro trabajo de campo había algunos conflictos en curso. En Yanacocha, *“una señora viuda ambiciosa que tiene tres-cuatro hectáreas ha entrado al terreno comunal que es de 1 Ha en total porque está al lado de su parcela. Le hemos llamado la atención y no aparece en faena, nada”* (Teniente gobernador de Yanacocha). El presidente de CYC señala que el anexo ha convocado a las autoridades comunales para resolver el conflicto, ya que en último término se trata de tierras que se encuentran bajo la jurisdicción comunal *“La directiva comunal tiene que resolver porque yo estoy a cargo de todo el territorio de la CC”* (Presidente de CYC).

En Choclococha, sin embargo, se lleva a cabo el conflicto más grande: La toma de tierras por parte de las familias de la Asociación Los Huilcas. Ellos han cercado parte de las tierras del predio Chanchas en el que trabajan con algún apoyo de la ONG San Javier. Esto causa malestar entre las familias que usufructúan los predios adjudicados por Reforma a cambio de una contribución monetaria a la comunidad. Uno de nuestros entrevistados señala: *“Ahora están usufructuando, ahora queremos invadirlos porque ni siquiera aportan. Por esa cantidad de hectáreas deberían aportar bastante y no pagan nada”* (Alberto, 48). A pesar de los descontentos, es difícil exigirle un pago a los Huilcas considerando que su fundador y líder es Víctor Calderón, el principal gestor de la adjudicación de tierras por reforma agraria.

Es interesante remarcar que para los comuneros y autoridades de CYC, la exigencia a quienes invaden las tierras es más la regularización de su situación que el desalojo de los



terrenos tomados. Esto es, que cumplan al igual que los demás con las obligaciones de todos los comuneros que se apropian de las tierras libres para darles un uso familiar. Otro aspecto que queremos recalcar porque reafirma el papel de la comunidad como responsable del orden en materia de tierras, es que a pesar de los recelos entre Yanacocha y Choclococha, se apela a las autoridades centrales –provenientes de Choclococha- para resolver un problema que afecta a la organización local de Yanacocha.

#### *Conflictos externos por tierras*

Según la información recogida, no existen desde hace varios años atrás conflictos externos en CYC. Esto puede explicarse debido a que en el momento de la titulación de la propiedad comunal se revisaron y firmaron actas de colindancia con todos los vecinos, con lo cual cualquier conflicto habría sido superado. Queremos mencionar, sin embargo, que de las entrevistas realizadas identificamos un conflicto importante en el año 84, en el que los comuneros de Chilcapite apoyados por las autoridades de CYC ingresaron a las tierras de una hacienda colindante, impulsados por el proceso de reforma agraria y por la adjudicación de los predios Chanchas y Choclococha. Hubo un juicio de por medio, pero finalmente no tuvieron éxito.

De otro lado, hace tres años atrás, comuneros del anexo de Capacchán cruzaron sus linderos invadiendo tierras también de Chilcapite. El problema, sin embargo, se resolvió rápidamente entre las autoridades de CYC y las del anexo vecino. En estos casos, en los que los linderos mismos de la comunidad se ponen en cuestión, a nadie le cabe duda de que se trata de conflictos que deben ser atendidos por la organización comunal.

Luego de haber hecho esta breve revisión acerca de los conflictos por tierras, queremos remarcar un hecho importante. La gran mayoría de conflictos por tierras de la comunidad se da en las tierras de secano de mayor apropiación familiar. En efecto, la indefinición de linderos y de titularidad de las parcelas no es un problema en las tierras adjudicadas por reforma agraria y distribuidas por la comunidad. Esto se explica en tanto la comunidad es la única encargada de administrarlas, llevando un registro escrito en la que consta con claridad el número de hectáreas, parcelas y comuneros usufructuarios. De otro lado, es la comunidad la que tiene la última palabra y la que toma las decisiones sobre estas tierras, por lo cual difícilmente habría interferencia o necesidad de instituciones externas a la comunidad. Podemos decir entonces, que la tendencia es que a mayor control comunal menores conflictos por tierras. Finalmente, queremos recalcar que es en los conflictos en donde es posible notar un vínculo importante entre la organización comunal y las tierras tanto familiares como colectivas, y se evidencia también el reconocimiento general de los comuneros sobre la vigencia de una función comunal vinculada estrechamente con la seguridad de la tierra. La percepción de los comuneros en cuanto a la seguridad de sus tierras cuenta, sin embargo, con una complejidad particular ya que debe relativizarse en función del tipo de tierras del que se trate. Sobre ello trataremos en el siguiente punto.

### **8. Seguridad de la tierra y titulación individual**

En el punto anterior hemos desarrollado los conflictos que existen sobre las tierras tanto familiares como comunales. Para las familias comuneras estos conflictos constituyen las amenazas que ponen en juego la seguridad de sus parcelas. Los problemas por linderos pueden ocurrir en cualquier momento, mientras que aquellos por la aparición de dos (o más) poseionarios sobre una misma parcela suelen aparecer cuando ha habido una transacción de por medio. En ambos casos, hemos visto también que estos conflictos aparecen en las tierras de mayor apropiación familiar –pre reforma agraria- y que –aún así- la organización comunal cumple un papel importante para mediar y resolver los conflictos. En ese sentido, la comunidad otorga seguridad a los comuneros sobre sus

parcelas y mantiene el orden en el territorio comunal. Podríamos catalogar dichos conflictos como amenazas internas a la seguridad de la tierra de los comuneros, no obstante, existe una amenaza interna adicional pero que corresponde a las parcelas familiares del sector adjudicado por reforma agraria. En este caso la amenaza es la propia organización comunal.

En efecto, la diferencia que existe en los niveles de apropiación familiar de los sectores pre y post reforma agraria se expresa también en la percepción de las familias acerca de la seguridad de sus parcelas. A pesar de la cantidad ingente de conflictos por linderos en el sector pre reforma agraria, las familias consideran que su tierra es segura, ya que para ellos se trata de tierra privada de la que son legítimos propietarios. De estas parcelas, las familias cuentan -en el 100% de los casos- con *títulos* que sustentan su posesión, lo cual no evita los conflictos pero sí es pieza fundamental para defenderse en caso se presente alguno. Los títulos son especialmente importantes para efectuar las transacciones de tierras: a diferencia de otras comunidades, no hay compra-venta sin título de por medio, ya sea éste un certificado de alguna autoridad comunal o algún contrato notarial entre las partes.

Del otro lado, para las familias comuneras las tierras del sector adjudicado por reforma agraria, son menos *seguras* ya que en última instancia es la comunidad la que cuenta con los derechos de disposición de la misma. En este caso, ellos no se consideran propietarios de las tierras que usufructúan, ni las conciben como privadas, se trata más bien de las tierras *de la comunidad*. De este modo, de no cumplir con las obligaciones del comunero o con el pago de las cuotas anuales, la organización comunal podría exigir que las parcelas regresen a la comunidad para ser repartidas a otras familias. En la práctica, sin embargo, la organización comunal nunca ha desposeído a un comunero de su parcela. El riesgo mayor, sin embargo, se da cuando el comunero migra hacia otras zonas y deja de colaborar con la comunidad. Esto es concebido como una amenaza para los comuneros, quienes desearían tener los mismos niveles de apropiación que en el sector pre-reforma agraria. Este mayor grado de apropiación familiar se expresa, como hemos visto, en la posesión de *títulos*, por lo cual todos los entrevistados desearían también tener títulos sobre las parcelas de este sector. A pesar de lo anterior, en el discurso general, los comuneros se sienten tranquilos con sus parcelas y consideran que las posibilidades de perderlas son prácticamente nulas. A ello se suma que, a pesar de la ausencia de *títulos* familiares, en este sector no suele haber ni conflictos por linderos ni confusiones por la titularidad de la tierra.

Ya hemos señalado que en CYC sólo existen *títulos individuales* para las tierras previas a la reforma agraria y que centralmente son de dos tipos: los certificados de posesión elaborados por las autoridades comunales y los notariales. Tradicionalmente se ha considerado que aquellos firmados por notario tienen mayor validez que aquéllos firmados por la comunidad. Esto se explica porque se considera que en estas tierras la comunidad no tiene ninguna ingerencia y, por tanto, quien debe certificar la *propiedad* es un abogado que tiende el puente con la *legalidad*. No obstante, ambos títulos se consideran válidos en el momento de hacer transacciones de tierras. Ahora bien, buena parte de las familias comuneras no sabe que sus documentos no son títulos de propiedad válidos para el Estado. Los que sí manejan esa información son sólo algunos líderes comunales y aquellos comuneros que al intentar inscribir sus *títulos* en los Registros Públicos les explicaron que carecían de validez: “Yo quería hacer registrar individualmente pero he ido a registrar a Acobamba y me dijeron que no se podía porque era comunidad” (Alberto, 48). De otro lado, a pesar de que la adscripción de sus tierras a un territorio común de la comunidad de CYC está muy clara, sólo algunos saben que ello implica que la comunidad posee un título que la hace única propietaria legal de todas las tierras.

En los últimos años, sin embargo, ha habido un cambio importante en la comunidad. La llegada de instituciones públicas como el PETT, COFOPRI y la Defensoría del Pueblo ha dado a conocer la existencia de leyes del Estado que afectan a las comunidades y a sus tierras. La Defensoría del Pueblo, incluso, realizó un taller con las autoridades comunales en donde se dejó en claro los derechos de la comunidad sobre la tierra. Luego de este taller, las autoridades transmitieron en asamblea general a los comuneros algunos datos de la nueva información obtenida. Esto ha generado confusión en la comunidad, poniéndose en duda parte de la forma tradicional de tenencia de la tierra y en discusión la conveniencia misma de la existencia de la organización comunal. En lo que sigue señalamos algunos ejemplos de este impacto.

Frente a la constatación de que la comunidad tiene legalmente más poder sobre las tierras del que tiene en la práctica, algunos comuneros empiezan a desestimar los títulos de compra-venta firmados por notario y a otorgarle más valor a aquellos que son elaborados por la comunidad: *“El documento de la directiva comunal es el más valioso porque esta es una comunidad, según la ley esto tiene más validez”*<sup>131</sup> (Antonio, 50).

No obstante, no todos comprenden este cambio del mismo modo: *“Ahorita la comunidad hace más certificados de posesión de compra-venta. Pero no debe ser documento de posesión cuando es compra-venta, porque eso no es posesión”* (Alberto, 48). La confusión de Alberto se comprende si consideramos que las tierras de compra-venta -esto es, las que existen con anterioridad a la reforma agraria- se consideran propiedad privada y, por tanto, para los comuneros se ubican en el ámbito extra-comunal. De otro lado, la palabra *posesión* se distingue de *propiedad* por denotar un menor grado de apropiación y una relación con la comunidad. Así, la entrega de certificados de posesión sobre las tierras *privadas* resulta una evidente contradicción.

A lo anterior se añade que los comuneros le han restado valor a sus títulos –cualquiera sea su tipo- ya que existe otro que puede situarse en un escalón por encima de ellos: el título individual estatal. Para algunos comuneros, el título estatal no ejerce una diferencia fundamental en términos de derechos sobre la tierra ya que, como hemos visto, las parcelas del sector pre-reforma agraria pueden ser incluso vendidas, no obstante, los comuneros lo prefieren porque consideran que éste les otorgará un grado mayor de seguridad sobre sus tierras. Se trata pues del último documento que puede obtenerse para demostrar la propiedad de la tierra: *“Sí me gustaría titular mis parcelas para tener más seguridad, pero ahora sí está seguro porque tengo el documento que me ha dejado mi padre”* (Teodolfo, 36). Esta mayor seguridad sobre las parcelas es importante especialmente para evitar las amenazas que surgen en las transacciones de tierras: *“Sí me gustaría (tener título individual) para que no me quiten, porque a veces hay casos que tú compras y luego otros dueños aparecen”* (Rigoberto, 24).

Otro grupo de comuneros, sin embargo, ha comprendido de la nueva información transmitida que no es posible vender parcelas en la comunidad. En efecto, las autoridades han alertado que la venta no es legal, no obstante, no ha desarrollado normas internas al respecto. De este modo, a pesar de que la práctica de compra-venta de parcelas se continúa realizando con la misma intensidad se ha generado mucha inseguridad y confusión sobre lo que se puede y no hacer en relación con las transacciones de tierras. Las siguientes citas ejemplifican esta situación:

<sup>131</sup> A modo de observación: La legislación de comunidades y tierras no indica nada en cuanto a la mayor o menor validez de los documentos internos. Lo que sí está claro es que ninguno tiene validez formal.

*“A mi parecer estaría bien (tener título individual) porque por no tener ahora no puedes vender bien, estás que dudas” (Alberto, 48).*

*“Si estuviéramos como dice la ley no podríamos vender nada sin pedir permiso, pero acá sí podemos vender normal sin pedir permiso” (Antonio, 50).*

*“Los que vienen de fuera y compran (parcelas) es porque colaboran con la comunidad. Ya saben también que hay una ley, la comunidad les hace una notificación, los hacen llamar para que asistan a las faenas, y si no quieren, ya la comunidad ve conforme a ley”. (Ignacio, 48).*

*“Dicen que ahora ya no se permite vender a gente de fuera, el año pasado escuché eso. Antes vendían a quien querían...” (Jessica, 30).*

*“Sí es posible vender las parcelas a cualquiera, la comunidad no se opone, pero últimamente el presidente está prohibiendo para vender. Ha dicho que de 1920 en adelante aunque hayan comprado con notario no tiene validez porque todo es de la comunidad” (Saúl, 28).*

*“La ley de tierras dice que la tierra es para quien la trabaja” (Víctor, 66).*

Como podemos notar de las citas anteriores la confusión generada es grande y cada comunero maneja un discurso distinto. A ello se suma que las interpretaciones de la legislación<sup>132</sup> son también erradas. Lo que sí es seguro es que para estos comuneros la diferencia entre sus títulos y los del Estado sí representan una diferencia importante en el grado de apropiación de las tierras y en sus derechos sobre estas: el título individual formal permite, pues, la venta de parcelas familiares de forma formal y reconocida por el Estado. Esta constatación entre algunos comuneros se ha incrementado el reclamo por obtener el título individual estatal.

Lo que se pone en juego frente a la titulación individual es la capacidad de control de la comunidad sobre las tierras familiares. Ahora bien, en tanto el rol de la comunidad está estrechamente vinculado a esta función, lo que se pone en juego en último término es la permanencia de la comunidad. En efecto, la mayor parte de los comuneros considera que de titularse individualmente, la comunidad dejaría de existir. Al respecto, encontramos dos tipos de declaraciones. Una buena parte de los entrevistados desearía la disolución de la comunidad y con ello obtener plena libertad de disposición de las parcelas así como “liberarse” de los deberes comunales:

*“Deberían dar título individual, en ese caso la comunidad ya sería propiedad privada, porque ahora siendo comunidad somos objeto de sus antojos...” (Mauro, 64).*

*“Si todos se titulan, se liberarían de ser comuneros” (Alberto, 48)*

*“La ley no se aplica acá, porque si se aplicara, correría sangre fría. Ese nombre de comunidad por eso debe desaparecer. De nombre nomás somos comunidad, si cada uno tenemos nuestra parcela con el sudor de nuestra frente” (Ignacio, 48).*

<sup>132</sup> En el caso de Ignacio, no hay una ley que indique nada en cuanto a los deberes y derechos de los compradores externos de tierras comunales. En el caso de Saúl, no hay ninguna ley que distinga entre las tierras adquiridas antes de 1920 para definir la propiedad individual o comunal. En el caso de Víctor, hay una confusión con las consignas de Reforma Agraria; la Ley de Tierras, más bien, promueve el libre mercado de tierras.

Del otro lado, existen opiniones que ponen en valor otras atribuciones de la organización comunal.

*“Si todos tuvieran título ya no habría comunidad y ya no habría mejoramiento, cada uno por su lado sería. Eso no sería bueno, es mejor estar organizado (...) Se necesitan las autoridades y poder hacer faenas. Si tuvieran título de propiedad no se preocuparían en hacer faenas ni asambleas”* (Pastor, 35)

*“Si nos titulamos (individualmente) ya no seríamos comunidad, pero sí sería bueno que siga la comunidad porque por medio de ella nos beneficiamos con predios de la reforma agraria”* (Teodolfo, 36)

Como podemos notar de las citas anteriores, para algunos comuneros mantener la comunidad y sus autoridades es importante aún si la organización comunal pierde la titularidad de las tierras. Para este grupo de comuneros, la comunidad es valorada porque organiza las faenas comunales pero, sobre todo, porque puede realizar gestiones diversas con instituciones externas (proyectos del sector público, municipalidades, ONG) para el provecho colectivo. Así, la comunidad es importante para los comuneros mientras cumpla un papel de catalizadora de beneficios externos y de representación frente a las instituciones del Estado:

*“La comunidad sirve para hacer actividades, eso se decide en reuniones, eso es importante. Ahora, por ejemplo, la comunidad está viendo el problema del agua potable”* (Rigoberto, 24)

*“La organización comunal sirve para que nos den algún apoyo o préstamos. La comunidad nos da certificado de pobreza para tener créditos”* (Ignacio, 48)

No obstante, la importancia de la comunidad para el cumplimiento de estas funciones también puede ponerse en cuestión con la existencia de una Municipalidad de Centro Poblado que cuenta cada vez con mayores atribuciones: *“Si se titulan individualmente, la autoridad comunal ya no tiene razón de ser. Ya la autoridad municipal se encargaría de las funciones”* (Alcalde de la MCP). En el siguiente punto retomamos este aspecto.

## **9. Presencia de asociaciones e instituciones en la comunidad y tenencia de la tierra**

Una de las características de CYC es su convivencia con una serie de organizaciones de diversa índole, lo que se expresa de alguna forma en el dinamismo de sus familias y en su articulación a ámbitos externos a la comunidad.

Existen en la comunidad tanto organizaciones internas (conformadas por las mismas familias comuneras), como organizaciones externas. Entre las internas podemos mencionar a las asociaciones de productores, las juntas de administración del agua potable (una por anexo), el club deportivo de Choclococha, los wawawasis, los clubs de madres y los comedores populares. A ellos habría que añadir los comités que se forman eventualmente en la comunidad para llevar a cabo gestiones particulares y que se consideran parte de la estructura organizativa de la comunidad. Entre las externas se encuentran las ONG que trabajan o han trabajado en la zona, entre ellas, Desco, San Javier, Manuela Ramos, Care y Cáritas. Finalmente, existen las organizaciones públicas como los centros educativos, los puestos de salud y la Municipalidad de Centro Poblado (MCP).

Ahora bien, ¿cuál es la influencia de estas organizaciones sobre la tenencia y los derechos sobre la tierra? De este abanico de organizaciones, nos ocuparemos solamente de las asociaciones de productores, de las ONG con proyectos productivos y de la Municipalidad de Centro Poblado, ya que consideramos que son las que pueden ejercer alguna influencia sobre el funcionamiento de la comunidad y repercutir sobre el control de su organización sobre los recursos productivos.

### *Las asociaciones de productores y la llegada de las ONG*

Las ONG empezaron a intervenir con mayor incidencia en la provincia de Acobamba a principios del nuevo milenio. Los comuneros de CYC recuerdan como la primera ONG en desarrollar proyectos productivos a desco, la cual desde el año 2002 desarrolla actividades de capacitación en el proceso productivo, asesoría técnica a parcelas, créditos a comuneros en semillas y fertilizantes, entre otras actividades. Care ingresa en el año 2002 con proyectos productivos y de formación de líderes locales. Posteriormente, en el año 2005, y con mayor fuerza que los otros dos llega San Javier con proyectos productivos muy similares a los de desco.

La particularidad de este tipo de proyectos es que trabajan con grupos de familias comuneras y no con las comunidades como conjunto. No obstante la primera comunicación es a la directiva comunal, quienes convocan una reunión en la que la ONG hace una presentación de sus proyectos. En dicha reunión se empadrona a los que deseen participar, luego de lo cual las familias forman grupos de trabajo. El objetivo es que éstos se conviertan en asociaciones de productores que puedan acopiar la producción de todo el grupo y venderla en mayores cantidades y a mejor precio. Ello requiere establecer contactos con los mercados locales y desarrollar cadenas productivas de forma estable.

Desde el momento en que se forman los grupos, las ONG no coordinan ninguna actividad adicional con la comunidad. Para los técnicos del Desco, trabajar a nivel comunal es inmanejable por el número de comuneros, pero sobre todo porque no todos asumen el mismo compromiso para cumplir con las tareas, asistir a las capacitaciones, pagar las cuotas de los créditos, etc. Según los técnicos de San Javier, normalmente los que participan poseen mayor liderazgo en la comunidad, son aquéllos que poseen mayor educación y especialmente una experiencia de migración. Del otro lado, quienes no participan serían, según comentan, “*más conformistas*”. De nuestras entrevistas encontramos que las familias que no participan –como aquellas que se han retirado de los proyectos- tienen temor a no poder cumplir con el pago de los créditos de las ONG ya sea por la caída de los precios o por la pérdida de la producción a causa de mal clima. Estas familias son, a su vez, aquellas que dependen en mayor medida de la actividad agrícola y que de tener una mala campaña agrícola no tendrían otras fuentes de recursos para cumplir con los créditos otorgados.

De este modo, con la llegada de las ONG empiezan a generarse nuevos procesos organizativos en la comunidad, los cuales operan de forma paralela a la organización comunal. Como hemos visto en el cuadro 7, en CYC ya existen 6 asociaciones de productores, todas formadas en los últimos tres años. A pesar de que se trata de un proceso aún incipiente, existen algunos elementos relevantes que debemos mencionar.

Las asociaciones cuentan con su propia junta directiva, con su propia asamblea y sus propios estatutos. Se trata así de una organización que genera nuevas reglas internas y nuevas formas de trabajo en la comunidad. De este modo, cuatro de las seis asociaciones cuenta con terrenos colectivos que son administrados y trabajados entre todas las familias. De otro lado, sus estatutos suelen contemplar multas para quienes no asistan a

las asambleas y sobre todo a las faenas colectivas. A pesar de lo anterior, la mayor parte del trabajo se realiza de forma individual (cada familia en su propia parcela) y la asociación funciona luego de la cosecha para la venta de la producción. De este modo, observamos que las asociaciones suelen replicar la forma organizativa de la comunidad pero a muy pequeña escala. Una de las diferencias, sin embargo, es que las familias se encuentran más comprometidas con la participación en actividades, que asisten de forma más regular a las reuniones y faenas colectivas y, sobre todo, que las normas internas se encuentran más definidas y son más constantes que a nivel de la comunidad.

Como vemos, las asociaciones podrían reemplazar paulatinamente a la comunidad para la regulación del trabajo colectivo de algunas familias. Sin embargo, éstas aún son muy dependientes del apoyo de las ONG y nada garantiza que se mantendrán de finalizados los proyectos. Un indicador de la escasa autonomía de las asociaciones es que cuando los comuneros no desean recibir el crédito de las ONG (por temor a no poder pagarlo o por considerarlo innecesario) dejan de participar en la asociación, al menos durante ese año.

Un elemento interesante es que según señalan los técnicos, los grupos con mayor éxito son aquellos en los que se encuentra involucrado el conjunto de la comunidad. Ello, sin embargo, es solo posible en comunidades pequeñas. Consideramos que en estos casos el trabajo funciona mejor porque las autoridades comunales están también comprometidas con el proyecto y ejercen presión adicional para el buen cumplimiento de las tareas colectivas. De otro lado, señalan los técnicos que las parcelas que tienen mejores resultados en términos productivos son precisamente aquellas trabajadas por el conjunto de las familias.

Finalmente queremos agregar que a pesar de que asociaciones y comunidad parecen funcionar de forma independiente, ello no quiere decir que no haya encuentros entre ellos. Las asociaciones suelen trabajar en las tierras libres de la comunidad con quien llegan a algún acuerdo (usualmente el pago de una renta por campaña). No obstante, también se pueden producir algunos conflictos internos. Como hemos visto, la asociación los Huilcas tiene un conflicto con la organización comunal por haberse apropiado de tierras de la comunidad sin dar ninguna retribución a cambio. En efecto, se produce un malestar, en donde las familias que no participan sienten que las diferencias en el interior de la comunidad se acentúan siendo unos más beneficiados que otros. De otro lado, resulta revelador que ninguna de las tres instituciones que trabaja proyectos productivos en la zona sepa que CYC es una sola comunidad con una organización central y que tampoco hayan notado que en ella existen conflictos entre las familias, entre ellas y la comunidad y, sobre todo, entre las asociaciones y los demás.

#### *La municipalidad de centro poblado de Choclococha (MCP)*

En tanto la MCP no interviene en la comunidad con la administración de las tierras comunales podría pensarse que no tiene ninguna ingerencia sobre estas. En efecto, no tiene ninguna ingerencia directa, mas sí de forma indirecta a través de su influencia sobre la organización comunal. Ya hemos descrito anteriormente lo que se esconde detrás de la formación del centro poblado de Choclococha: los conflictos por una distritalización fallida, una larga rivalidad con el anexo de Yanacocha, el distanciamiento de Choclococha con los otros dos anexos, etc. Pero lo más importante es que se desarrolló en Choclococha una nueva forma de administrar el territorio, en la que las decisiones dejaron de tomarse exclusivamente en el ámbito comunal. A pesar de que las relaciones MCP-centro urbano y comunidad-tierras están claramente definidas, existía una serie de funciones que la comunidad se encargaba de realizar y que ahora son compartidas entre ambas instituciones: las gestiones con las ONG, las relaciones con proyectos del sector público,

la coordinación con los centros educativos y de salud, etc. Actualmente, lo que se ha formado para atender todas estas cuestiones es un Comité Multisectorial convocado por la MCP, por lo cual la comunidad pierde ciertas atribuciones administrativas reduciéndose aún más su poder en la comunidad. Un elemento importante de este nuevo espacio es que los no-comuneros, antes prohibidos de participar en las asambleas y en la actividad política de la comunidad, ahora ven abierta una nueva alternativa de participación.

De otro lado, como señaláramos en un principio, el anexo de Choclococha no cuenta con autoridades locales porque las autoridades comunales de CYC suelen proceder de allí. Por esta razón con quien coordina la municipalidad de Choclococha para cualquier gestión es con la autoridad comunal central (el presidente de CYC). De esta forma, la imagen de que las autoridades comunales de CYC solo se ocupan de Choclococha se acentúa en gran medida. Actualmente, la rivalidad entre Choclococha, Yanacocha y Chilcapite se encuentra al punto de que sus autoridades desean desmembrarse para formar una comunidad independiente entre Yanacocha y Chilcapite.

Como vemos entonces, la municipalización de Choclococha constituye un elemento adicional para la pérdida de legitimidad de la organización comunal, tanto porque comparte funciones que antes dependían solo de ella como porque Yanacocha y Chilcapite perciben que ésta -cada vez más- representa sólo al anexo de Choclococha. A pesar de lo anterior, sobre lo que la organización comunal continúa poseyendo un dominio importante es sobre las tierras colectivas y sobre las parcelas familiares del sector cedido por reforma agraria. De ahí que ante la posibilidad de parcelar todo el territorio comunal, la comunidad corre el riesgo de desaparecer.